CARLOS ANDRES TORRES SALAS (FIRMA)
Firmado digitalmente por CARLOS ANDRES TORRES SALAS (FIRMA)
Fecha: 2018.12.18 10:49:39 -06'00'

COSTA RICA GOBIERNO DEL BICENTENARIO 2018 - 2022

LA GACETA Diario Oficial

Imprenta Nacional Costa Rica

Año CXL | San José, Costa Rica, martes 18 de diciembre del 2018 | 366 páginas

ALCANCE Nº 214

PODER LEGISLATIVO

PROYECTOS

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Imprenta Nacional
La Uruca, San José, C. R.

PODER LEGISLATIVO

PROYECTOS

APROBACIÓN DEL CONVENIO MARCO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA ALIANZA SOLAR INTERNACIONAL

Expediente N.º 20.780

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El presente instrumento jurídico fue suscrito por nuestra Embajadora de Costa Rica, en la India, señora Mariela Cruz Álvarez, en representación de la República de Costa Rica, en Nueva Delhi, India, el primero de setiembre del 2017, cuyo acto de firma fue confirmado mediante Decreto número 40813-RREE, de 17 de noviembre de 2017, publicado en el Alcance número 13 de La Gaceta número 12, 23 de enero de 2018.

Cabe destacar, que el principal objetivo de la Alianza Solar Internacional (ISA siglas en inglés), es el abordaje de los retos comunes, por cada uno de los países miembros, para ampliar el uso de energía solar, según su conveniencia, así como contribuir en los esfuerzos que se vienen realizando en materia de escalamiento en la aplicación de tecnologías solares para la generación de energía a nivel nacional en el sector público y privado.

Asimismo, la misión y visión de la Alianza Solar Internacional es proporcionar una plataforma para la cooperación entre los países ubicados entre los trópicos de Cáncer y de Capricornio, como oportunidad para transformar su riqueza en recursos solares, en una mayor calidad de vida para sus pueblos, donde la comunidad global, incluidas las organizaciones bilaterales y multilaterales, las empresas, la industria y las partes interesadas pueden hacer una contribución positiva al objetivo de aumentar la utilización de energía solar para satisfacer las necesidades energéticas de los países miembros de una manera segura, conveniente, asequible, equitativa y sostenible. Se crea esta ante la ausencia de una agencia internacional especializada que promocione, difunda y despliegue específicamente la energía solar y busque complementar y crear sinergias con otros organismos existentes.

También la Alianza Solar Internacional trabajará con los países miembros en la identificación de oportunidades nacionales y las necesidades especiales de energía de cada país para acelerar el desarrollo y el despliegue de las tecnologías de energía solar, cuyo potencial permanece en gran medida sin explotar, lo cual contribuiría a reducir la dependencia de los combustibles fósiles al aumentar la participación de la energía solar en la matriz energética.

En este sentido, la membresía de Costa Rica en la Alianza Solar Internacional es conforme con el modelo nacional desarrollado sobre la base del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (artículo 50 de la Constitución Política).

Nuestro país desde hace más de 60 años estableció una ruta clara en materia de energía eléctrica basada en fuentes renovables, esto ha sido el resultado de una política pública clara y consistente a lo largo de los años.

Históricamente, el tema ambiental ha sido un pilar fundamental de la sociedad costarricense. Es así como en el año 2007 Costa Rica asumió el compromiso mundial de alcanzar la Carbono Neutralidad en el 2021 y más recientemente en su Contribución Nacional reafirmó dicha aspiración como parte de sus acciones voluntarias pre 2020 y se comprometió ante la comunidad internacional alcanzar para el año 2030 un máximo absoluto de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de 9.374.000 TCO2eq netas, con una trayectoria propuesta de emisiones per cápita de 1.73 toneladas netas per cápita para el 2030; 1.19 toneladas netas per cápita al 2050 y -0,27 toneladas netas per cápita al 2100. Este límite es consistente con la trayectoria global necesaria para cumplir la meta de 2°C. El compromiso nacional implica una reducción de emisiones de GEI de 44%, comparado con un escenario Business As Usual (BAU), y representa una reducción de emisiones de GEI de 25% contrapuesto con las emisiones de 2012. Para lograr su meta, Costa Rica tendrá que reducir 170.500 toneladas de GEI año con año, hasta el 2030.

Cabe mencionar, que también se cuenta con una política energética de largo plazo, a saber: el VI Plan Nacional de energía 2015-2030 que tiene como orientación central el desarrollo energético sostenible y bajo en emisiones de GEI, para lo que establece objetivos asociados con planes de acción que buscan fortalecer la seguridad energética y la mitigación al cambio climático. Esta política está alineada con el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante” que establece como lineamientos de política energética el fomento de las acciones frente al cambio climático global, mediante, entre otros, el cambio tecnológico, procesos de innovación, investigación y conocimiento, como una vía para el bienestar y la seguridad humana y la competitividad nacional, así como un suministro de energía por medio de una matriz energética que asegure una oferta óptima y continua de electricidad y combustible.

Desde el 2014, el Estado costarricense ha logrado generar casi la totalidad de la energía eléctrica mediante el uso de energías renovables, como resultado de una planificación de largo plazo, en el marco de una política pública dirigida a incentivar la utilización de las fuentes renovables que el país posee; hidroelectricidad, geotermia, eólica, biomasa, solar, entre otros, en aras de evitar la dependencia externa a los hidrocarburos, los efectos ambientales nocivos y las emisiones de GEI. Sin embargo, las posibilidades del país para satisfacer una demanda eléctrica creciente con las fuentes y proyectos tradicionales, están expuestas a retos relacionados con el entorno socioambiental y a restricciones legales.

Igualmente, nuestro país, por su posición geográfica tiene un atractivo potencial para el tipo de tecnologías que quieren ser impulsadas en el marco de este convenio. Diversas investigaciones establecen que la energía solar constituye una fuente renovable con un gran potencial a nivel nacional. Estudios realizados por el Instituto Costarricense de Electricidad en el 2014 indican que un 23,5% del territorio nacional presenta condiciones apropiadas para desarrollos fotovoltaicos mayores de 5 MW. Por lo tanto, el área aprovechable fotovoltaica resulta ser muy amplia. Los resultados indican un potencial solar técnico fotovoltaico de 557 749 MW, y una energía promedio anual de 656 195 GWh/año para todo el país.

Asimismo, el VII Plan Nacional de Energía 2015-2030 establece como ejes estratégicos la sostenibilidad de la matriz eléctrica y la generación distribuida, donde la fuente solar representa una excelente oportunidad, dada su disponibilidad durante la mayor parte del año y el rápido desarrollo tecnológico asociado. Desde hace algún tiempo, el país ha hecho esfuerzos de aprovechamiento de la energía solar mediante la instalación de paneles fotovoltaicos en zonas aisladas que no cuentan con acceso a líneas de distribución, mediante el programa de electrificación rural.

Existen también experiencias de plantas solares conectadas a la red y además recientemente, se creó el marco regulatorio que habilita la generación distribuida, propiciando así la instalación de opciones fotovoltaicas. A la fecha, en el marco de la generación distribuida se han instalado 13,8 MW, las plantas solares aportan 6 MW y el programa de electrificación rural contabiliza 0,6 MW, aportando calidad de vida a los pobladores. El VII Plan Nacional de Energía establece el desarrollo de un proyecto piloto con capacidad del orden de los 5 MW, que ya está siendo gestionado. De igual manera, el país ha venido trabajando para la promoción del calentamiento de agua con tecnologías solares. Estos esfuerzos están lejos de aprovechar el potencial que tiene el país.

A pesar de que la Ley de Regulación del Uso Racional de la Energía (Ley URE N.° 7447) promulgada en diciembre de 1994, otorga incentivos para equipos utilizados en el aprovechamiento de la energía solar, su desarrollo aún es incipiente en el país. Existen muchas áreas de acción y oportunidades para poder impulsar la energía solar: estudios específicos de potenciales nacionales para generación eléctrica y para el desarrollo de proyectos, creación de capacidades y capacitación de los usuarios de estas tecnologías y, finalmente, acuerdos de financiación adecuados para hacer que las nuevas tecnologías sean asequibles, entre otros.

Si se realiza un esfuerzo concertado y coordinado para compartir experiencias de otros países similares y concentrarse en encontrar soluciones que estén diseñadas para ser aplicadas localmente, tomando en cuenta las condiciones del entorno sin dejar de ser asequibles, se podría lograr el despliegue de la tecnología a gran escala. Un mayor despliegue de las tecnologías solares beneficiará a Costa Rica en términos de la generación de oportunidades de empleo directo e indirecto y un incremento en la eco competitividad asociada principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas que cada vez tienen un mayor protagonismo en la actividad

económica. Adicionalmente, le facilitaría al país su transición hacia el transporte eléctrico basado en fuentes renovables.

Las cinco áreas de enfoque propuestas como clave para la Alianza Solar Internacional son coincidentes con las orientaciones establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante” en cuanto a que la política energética debe fomentar las acciones frente al cambio climático global, mediante el cambio tecnológico, así como las líneas de trabajo esbozadas en el VII Plan Nacional de Energía 2015-2030 (PNE) en cuanto al desarrollo de las energías renovables no convencionales

Finalmente, cabe destacar que no hay un sistema de cuotas para los Estados miembros establecidos en este Convenio marco, únicamente se hace referencia a contribuciones voluntarias de sus miembros en su artículo 8.

En virtud de lo anterior, sometemos a conocimiento de la Asamblea Legislativa el proyecto de ley adjunto, referido a la “APROBACIÓN DEL CONVENIO MARCO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA ALIANZA SOLAR INTERNACIONAL”, para su respectiva aprobación legislativa.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

APROBACIÓN DEL CONVENIO MARCO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA ALIANZA SOLAR INTERNACIONAL

ARTÍCULO ÚNICO- Apruébese en cada una de sus partes el “CONVENIO MARCO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA ALIANZA SOLAR INTERNACIONAL”, suscrito por la República de Costa Rica, en Nueva Delhi, India, el primero de setiembre de 2017, cuyo texto es el siguiente:

Para la República de Costa Rica

Convenio Marco para el establecimiento de la Alianza Solar Internacional (ISA en inglés)

Las Partes del presente Convenio,

Considerando la Declaración de París sobre la Alianza Solar Internacional del 30 de noviembre de 2015 y la ambición común de emprender esfuerzos conjuntos para reducir el costo de financiamiento y el costo de la tecnología, movilizar más de mil millardos de US dólares en inversiones necesarias para 2030 para un despliegue masivo de la energía solar, y allanar el camino para futuras tecnologías adaptadas a sus necesidades,

Reconociendo que la energía solar proporciona una oportunidad sin precedentes a los países ricos en recursos solares, los que se encuentran total o parcialmente entre los trópicos de cáncer y capricornio, para traer prosperidad, seguridad energética y desarrollo sostenible para sus pueblos,

Reconociendo además los obstáculos comunes y específicos que todavía impiden un incremento rápido y masivo de la energía solar en estos países,

Afirmando que estos obstáculos pueden resolverse si los países ricos en recursos solares actúan de manera coordinada, con fuerte impulso político y determinación, y que una mejor armonización y agregación de la demanda de financiamiento, tecnología, innovación o fortalecimiento de capacidades en los diferentes países, entre otros proporcionará un robusto medio para disminuir costos, aumentar la calidad y llevar energía solar confiable y asequible a todos,

Unidos en el deseo de establecer un mecanismo eficaz de coordinación y toma de decisiones entre ellos,

Han convenido en lo siguiente:

Artículo I
Objetivo

Las partes establecen una Alianza Solar Internacional (en adelante la ISA) a través de la cual se abordarán colectivamente los retos comunes clave a la proyección del incremento de energía solar en consonancia con sus necesidades.

Artículo II
Principios rectores

I. Los miembros toman acciones coordinadas a través de programas y actividades sobre una base voluntaria, dirigida a una mejor armonización y

agregación de la demanda de financiamiento, tecnología, innovación, investigación y desarrollo, y fomento de la capacidad en aspectos solares.

2. En esta tarea, los Miembros cooperan estrechamente y se esfuerzan por establecer relaciones mutuamente beneficiosas con los organismos públicos pertinentes, partes interesadas públicas y privadas, y países no miembros.

3. Cada miembro comparte y actualiza, para aquellas aplicaciones de energía solar para las que busca los beneficios de la acción colectiva bajo la ISA, con base en un mapeo analítico común de aplicaciones de energía solar y recopilación de información relevante sobre: sus necesidades y objetivos; las medidas e iniciativas adoptadas o que han de tomarse para alcanzar estos objetivos; y los obstáculos en la cadena de valor y el proceso de diseminación. La Secretaría mantiene una base de datos de estas evaluaciones para poner de relieve las posibilidades de cooperación

4. El Miembro designa un Punto Focal Nacional para la ISA. Los Puntos Focales Nacionales constituyen una red permanente de corresponsales de la ISA en los países Miembros. Entre otros, interactúan entre ellos y también con las partes interesadas para identificar áreas de interés común, diseñar propuestas de Programas y hacer recomendaciones a la Secretaría sobre la implementación de los objetivos de la ISA.

Artículo III
Programas y otras actividades

I. Un Programa de la ISA consiste en un conjunto de acciones, proyectos y actividades que toman los Miembros de manera coordinada, con asistencia de la Secretaría, para avanzar en los objetivos y principios rectores descritos en el artículo I y II. Los Programas están diseñados de tal manera que aseguren un efecto a escala máximo y la participación del mayor número posible de Miembros. Estos incluyen objetivos mobilizables simples y mensurables.

2. Las propuestas de Programas son diseñadas a través de consultas abiertas entre todos los Puntos Focales Nacionales con la asistencia de la Secretaría y con base en la información compartida por los Miembros. Un Programa puede proponerlo cualquiera de los Miembros o grupo de Miembros, o por la Secretaría. La Secretaría asegura la coherencia entre todos los Programas de la ISA.

3. Las propuestas de Programas se circulan de la Secretaría a la Asamblea por medio de circulación digital, a través de la red de Puntos Focales Nacionales. Una propuesta de Programa se considera abierta a su adhesión por los Miembros dispuestos a unirse si es apoyado por al menos dos Miembros y no se plantean objeciones por más de dos países.

4. Una propuesta de Programa se adopta formalmente por los Miembros dispuestos a participar a través de una declaración conjunta. Todas las decisiones

sobre la implementación del Programa las toman los Miembros que participan en el Programa. Las llevan a cabo, con la orientación y asistencia de la Secretaría, Representantes de los países designados por cada Miembro.

5. El plan anual de trabajo da una reseña de los programas y otras actividades de la ISA. La Secretaría lo presenta a la Asamblea, que se asegura de que todos los Programas y actividades del plan de trabajo anual se encuentren dentro del objetivo general de la ISA.

Artículo IV
Asamblea

I. Por la presente las Partes establecen una Asamblea, en la cual cada Miembro es representado, para tomar decisiones sobre la implementación de acciones coordinadas para lograr su objetivo. La Asamblea se reúne anualmente a nivel Ministerial en la sede de la ISA. La Asamblea también podrá reunirse en circunstancias especiales.

2. Las sesiones de la Asamblea se llevan a cabo para conocer los Programas a nivel Ministerial y tomar decisiones con respecto a su aplicación ulterior, en cumplimiento del artículo III.4.

3. La Asamblea evalúa el efecto agregado de los programas y otras actividades bajo la ISA, en particular los términos de implementación de la energía solar, su rendimiento, confiabilidad, así como costos y escala de financiamiento. Con base en esta evaluación, los Miembros toman todas las decisiones necesarias con respecto a la ulterior aplicación del objetivo de la ISA.

4. La Asamblea toma todas las decisiones necesarias con respecto al funcionamiento de la ISA, incluyendo la selección del Director General y la aprobación del presupuesto operativo.

5. Cada Miembro dispondrá de un voto en la Asamblea. Los observadores y organismos asociados podrán participar sin derecho de voto. Las decisiones sobre cuestiones de procedimiento se adoptarán por mayoría simple de los Miembros presentes y votantes. Las decisiones sobre cuestiones de fondo se adoptarán por mayoría de dos tercios de los Miembros presentes y votantes. Las decisiones sobre programas específicos las toman los Miembros participantes en dicho Programa.

6. Todas las decisiones tomadas por el Comité Directivo Internacional de la ISA, establecido por la Declaración de París sobre la ISA del 30 de noviembre de 2015, son sometidas a la Asamblea para su aprobación en su primera reunión.

Artículo V.
Secretaría

I. Las partes establecen una Secretaría para ayudarles en su trabajo colectivo bajo este Convenio. La Secretaría se compondrá de un Director General, quien será su funcionario ejecutivo principal, y del personal que pueda ser necesario.

2. El Director General será designado por la Asamblea y responderá ante ella; será seleccionado por un período de cuatro años que podrá prorrogarse una sola vez.

3. El Director General es responsable ante la Asamblea por el nombramiento del personal, así como la organización y funcionamiento de la Secretaría y la movilización de recursos.

4. La Secretaría prepara materiales para la Asamblea y lleva a cabo las decisiones que le encomiende la Asamblea. Se asegura de que se adopten medidas apropiadas para seguir las decisiones de la Asamblea y coordinar las acciones de los Miembros en la implementación de dichas decisiones. La Secretaría, entre otras cosas, se encargará de:

a) asistir a los Puntos Focales Nacionales en la preparación de las propuestas y recomendaciones de Programas presentadas a la Asamblea;

b) proporcionar orientación y apoyo a los Miembros en la implementación de cada Programa, incluyendo la recaudación de fondos;

c) actuar en nombre de la Asamblea, o en nombre de un grupo de Miembros que participen en un Programa en particular, cuando lo soliciten, y, en particular, establecer contactos con las partes interesadas pertinentes;

d) establecer y operar todos los medios de comunicación, instrumentos y actividades transversales necesarios para el funcionamiento de la ISA y sus programas, según hayan sido aprobados por la Asamblea.

Artículo VI
Presupuesto y recursos financieros

1. Los costos operativos de la Secretaría y la Asamblea, y todos los costos relacionados para apoyar las funciones y actividades transversales, forman el presupuesto de la ISA. Se cubren por:

a) Las contribuciones voluntarias de sus Miembros, Países Asociados, las Naciones Unidas y sus agencias y otros países;
b) Contribuciones voluntarias del sector privado; En caso de un posible conflicto de interés, la Secretaría refiere el asunto a la Asamblea para que apruebe la aceptación de la contribución;

c) Los ingresos por generarse a partir de actividades específicas, aprobadas por la Asamblea.

2. La Secretaría hará propuestas ante la Asamblea para establecer y mejorar un fondo de la organización (Fondo de Corpus) que le generare ingresos para el presupuesto de la ISA, con una dotación inicial de 16 millones de dólares.

3. El Gobierno de la India contribuirá con 27 millones de dólares a la ISA para la creación del fondo de corpus, construcción de infraestructura y gastos recurrentes para cinco años, del 2016-17 al 2020-21. Además, las empresas del sector público del Gobierno de la India, es decir la Corporación de Energía Solar de la India (Solar Energy Corporation of India, SECI) y la Agencia India de Desarrollo de Energía Renovable Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA) han hecho una contribución de 1 millón de dólares cada una para crear el fondo de corpus de la ISA.

4. Los recursos financieros necesarios para la ejecución de un Programa específico, aparte de los costos administrativos comprendidos en el presupuesto general, son evaluados y movilizados por los países participantes en este programa, con el apoyo y la asistencia de la Secretaría.

5. Las actividades administrativas y financieras de la ISA que no sean Programas pueden subcontratarse a otras organizaciones, con arreglo a un acuerdo por separado que será aprobado por la Asamblea.

6. La Secretaría, con la aprobación de la Asamblea, designará a auditores externos para examinar las cuentas de la ISA.

Artículo VII
Estatus de país Miembro y Asociado

1. La membresía está abierto a los Estados ricos en recursos solares que se encuentran total o parcialmente entre los trópicos de cáncer y capricornio, y que son miembros de las Naciones Unidas. Dichos Estados serán Miembros de la ISA al firmar este Convenio Estatuto y haber depositado un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación.

2. Se podrá conceder estatus de País Asociado ante la Asamblea a aquellos países que no se encuentran fuera de los trópicos de cáncer y capricornio, son miembros de las Naciones Unidas, y están en la capacidad y disposición de contribuir a los objetivos y actividades estipuladas en este Convenio.

3. Los Países Asociados son elegibles de participar en los Programas de la ISA, con la aprobación de los Miembros que participen en dicho Programa.

Artículo VIII
Organismo Asociado

El estatus de Organismo Asociado podrá ser concedido por la Asamblea a las organizaciones que tengan potencial de ayudar a la ISA a lograr sus objetivos, incluyendo las organizaciones intergubernamentales regionales de integración económica constituidas por Estados soberanos donde al menos uno de ellos es Miembro de ISA

Artículo XIII
Firma y entrada en vigor

1. La ratificación, aceptación o aprobación de este Convenio Marco por los Estados signatarios será conforme a sus respectivos procedimientos constitucionales. El presente Convenio Marco entrará en vigor a los treinta días de la fecha en que se deposite el decimoquinto instrumento de ratificación, aceptación, o aprobación.

2. Para los Miembros que hayan depositado su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación después de la entrada en vigor del Convenio Marco, éste entrará en vigor para dicho país a los treinta días de la fecha de depósito del instrumento en cuestión.

3. Una vez establecida la ISA, el Comité Directivo Internacional de la ISA dejará de existir.

Artículo XIV
Depositario, registro y autenticación del texto

1. El Gobierno de la República de la India es el Depositario de el Convenio Marco.

2. Este Convenio Marco está registrada por el Depositario en virtud del Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.

3. El Depositario transmite copias certificadas del Convenio Marco a todas las partes.

4. Los originales del presente Convenio Marco, cuyos textos en hindi, inglés y francés son igualmente auténticos, se depositará en los archivos del Depositario.

EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, debidamente facultados a tal fin, suscriben este Convenio Marco.

REALIZADO en Nueva Delhi el viernes 1` de septiembre de 2017, en los idiomas hindi, inglés y francés, todos los cuales son igualmente auténticos.

DGPE-DT/149-17

DECRETO 40813-RREE

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Y EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Con fundamento en el artículo 140, incisos 3), 8), 12) y 20) y el artículo 146 de la Constitución Política.

CONSIDERANDO:

Artículo 1.- Que por considerarlo conveniente a los Altos Intereses de la Nación, de conformidad con los artículos 140, incisos 12) y 20), 146 de la Constitución Política y de conformidad con el artículo número 8 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969, aprobada mediante ley número 7615 del 24 de julio de 1996, el Gobierno de la República de Costa Rica ha tenido a bien confirmar de manera expresa el acto y la firma por parte de la señora Mariela Cruz Álvarez, Embajadora de Costa Rica en la India del “Framework Agreement on the establishment of the International Solar Alliance (ISA)”, hecho en Nueva Delhi, India, el primero de setiembre de 2017.

Artículo 2.- Rige a partir de esta fecha.

Dado en la Presidencia de la República, a los diecisiete días del mes de noviembre del dos mil diecisiete.

Luis Guillermo Solís Rivera

Manuel A. González Sanz
Ministro de Relaciones Exteriores y Culto

Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los diecinueve días del mes de marzo del dos mil dieciocho.

LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA

Manuel A. González Sanz
Ministro de Relaciones Exteriores y Culto

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior.

1 vez.—(IN2018295614).

REFORMA INTEGRAL A LA LEY DE DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICOS Y PRIVADOS, LEY N.° 8239 DE 2 ABRIL DE 2002

Expediente N.° 21.029

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Esta iniciativa de ley, tiene como antecedente el Expediente Nº 19309 que fue dictaminado de manera Unánime Afirmativa en la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos el día 28 de junio de 2016, pasando al Plenario para lo que corresponde. Sin embargo, a la luz de las resoluciones 12250-2015, 11658-2018 y 13570-2018 de la Sala Constitucional, que versan sobre el plazo de vigencia de los expedientes legislativos y las prórrogas posibles, mediante una moción de plazo cuatrienal, se determina que éste proyecto de ley, muy a pesar de lo avanzado que se encuentra en el trámite legislativo, se debe archivar.

En razón de lo anterior, se retoma la propuesta para que continúe su trámite bajo un nuevo número de expediente, pero con el soporte técnico de las respuestas recibidas e incorporadas en el dictamen del proyecto de ley así como con el informe interdisciplinario y las modificaciones de forma indicadas técnicamente sobre el supracitado expediente N° 19309.

El derecho a la salud es uno de los principios que se reconocen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), ratificada por Costa Rica y en otros instrumentos del derecho internacional, como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (ONU, 1948), la Convención del Consejo de Europa para la Salvaguardia de los Derechos del Hombre (1950), el Pacto Social de los Derechos Civiles y Políticos (1966) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966). En nuestro ordenamiento político, el derecho a la salud es una extensión del artículo 21 de la Constitución Política, que resguarda el derecho a la vida y tiene como corolario su atención en la garantía que establece el artículo 73 de la Constitución Política de Costa Rica.

En este campo, Costa Rica se ha mantenido a la vanguardia en el ámbito centroamericano y latinoamericano. El país se ha destacado, por estar dentro de las naciones con más alto índice de desarrollo humano, ocupando el lugar número cincuenta y siete de un total de 191 países según el último informe de la Organización Mundial de la Salud para el año 2012. En ese sentido, los derechos

y deberes de los pacientes tienen una gran relevancia en el marco de las relaciones clínico-asistenciales, desde el momento que constituyen el sustrato de las mismas.

No obstante, la Ley N° 8239 de 19 de abril de 2002, Ley de Derechos y Deberes de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud Públicos y Privados, que regula los derechos del paciente en los servicios de salud estatales y privados resulta insuficiente para el nuevo panorama de salud en nuestro país.

Actualmente, las disposiciones que regulan estos derechos son establecidas por el Ministerio de Salud o por las Autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social, lo que ha significado normativamente un avance en la atención y concreción de los derechos de los usuarios del sistema de salud en el país. No obstantes lo anterior, debe señalarse que la mayoría de las personas que son atendidas ven disminuidos sus derechos al recibir una atención deshumanizada en muchos casos en transgresión a la obligación del personal a cargo de los servicios de salud atender adecuadamente a los pacientes.

En este sentido, la presente iniciativa busca fortalecer el principio básico de respeto a la dignidad humana, a través de un conjunto de disciplinas relacionadas con la bioética, poniendo el acento en los principios de dignidad de la persona, de intimidad, de no discriminación y de respeto a la autonomía de la voluntad de los pacientes. De esta forma, se propone que la actividad de los actores indicados se dirija hacia la humanización de la asistencia sanitaria, mediante la atención personalizada, procurando el bienestar físico y psíquico, así como un trato adecuado de los pacientes y sus acompañantes, potenciando y respetando los derechos de los colectivos más vulnerables.

En lo relativo al principio de la dignidad de la persona, el proyecto de ley presentado busca fortalecer los derechos de los pacientes ante los centros de salud y pretende incorporar a la legislación actual reformas que garanticen un acceso a los servicios de salud más acorde a los Derechos Humanos de las personas menores de edad, de las personas con discapacidad y de los demás grupos vulnerables, posibilitando que su opinión sea tomada en cuenta en los tratamientos médicos en función de su capacidad intelectual y emocional. Adicionalmente, se busca asegurar que los centros de salud ubicados en los territorios indígenas, brinden una atención de salud con pertinencia cultural, lo cual se expresará en la aplicación de un modelo de salud intercultural validado ante las comunidades indígenas y a prohibir toda práctica discriminatoria en detrimento de los derechos de los usuarios de los servicios.

El proyecto de ley plantea prohibir las acciones discriminatorias que atenten contra los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud, así como la estipulación de mejores mecanismos y criterios para el manejo de información relativa a los pacientes en el marco de la defensa de los derechos a la intimidad y de no discriminación hacia las personas usuarias de los servicios de salud y sus familiares. Para estos efectos se hace especial énfasis en el derecho de acceso a la salud para las poblaciones en condición de vulnerabilidad.

En cuanto al principio de respeto a la autonomía de las personas, a través de la iniciativa se pretende reformar el régimen deberes de los usuarios de los servicios de salud y reforzar la legislación vigente relativa al consentimiento informado y al expediente de salud, en cuanto a la autonomía de la voluntad en la toma de decisiones sobre la salud de los pacientes y a los derechos relativos al manejo y acceso a la información sobre la documentación clínica de los pacientes. Actualmente, nuestra legislación no regula ninguno de esos dos aspectos en detrimento de los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud públicos y privados.

Igualmente, se plantea en concordancia con la Ley de Expediente Digital Único en Salud, N° 9162 del 26 de agosto de 2013, que el expediente médico (independientemente del carácter público o privado que se le asigne) sirva como principio de prueba por escrito de los actos médicos que se incorporen a su contenido, razón por la cual cobra importancia la firma o clave de seguridad para dejar constancia de las manifestaciones de voluntad de los médicos y demás profesionales de la salud frente a sus pacientes.

En ese sentido, creemos conveniente que el expediente digital único de salud, garantice ciertos aspectos vinculados a derechos de los usuarios de los servicios de salud:

1) Inviolabilidad e inalterabilidad de los datos que contiene.

Esto incluye tomar las medidas de seguridad pertinentes para impedir el ingreso de virus o hackers en el sistema, impidiendo la consulta, el borrado o modificación de datos ya incorporados por personas sin autorización.

2) Recuperación de los archivos.

El sistema debe contemplar la posibilidad de que los datos sean recopilados en una o más copias de seguridad (back up), que faciliten su transporte e incluso generar fácil y económicamente copias para el propio paciente.

3) Perdurabilidad de la información.

También deben asegurar la conservación del hardware que contiene al software, es decir que debe estar almacenado en un medio adecuado en el que no lo afecte la humedad, la temperatura, entre otras.

4) Continuidad temporal.

El programa informático no debe permitir que se altere la secuencia de llenado del expediente médico, es decir que no sea posible modificar la continuación temporal de los hechos y actos.

5) Garantía sobre la posibilidad de inspección por el ente correspondiente.

Así como se requiere el expediente médico manuscrito, es imprescindible que el sistema informático admita el acceso de las autoridades que ejercen controles por parte de la Administración pública, así como también por parte de la justicia.

6) Aseguramiento de la remisión del expediente médico al tribunal que la solicite y recaudos para su posible secuestro judicial.

El expediente médico suele ser indispensable como prueba en juicio, es por esto que también se debe contemplar la posibilidad de ser remitida al tribunal que la requiera. A diferencia de la realizada en soporte papel, la digitalizada evita las medidas anticipativas, como el secuestro judicial ya que se torna innecesario debido a que cada copia que se realiza tiene el mismo valor que la original.

7) El expediente médico informatizada como base de datos personales.

Los datos que deben recopilarse en el expediente médico son aquellos relevantes para el paciente específico al que se está tratando. En líneas generales la información a recoger incluye: características del paciente como edad, sexo, peso, altura; sucesos de la enfermedad actual, historia médica anterior, historia social; alergias, hábitos (alcohol, tabaco, ejercicio), dieta, datos sobre el cumplimiento de los tratamientos prescritos; pruebas de laboratorio, constantes vitales; y farmacoterapia que está recibiendo o que ha recibido.

8) Privacidad y confidencialidad.

La privacidad y confidencialidad de los datos es quizá uno de los desafíos más importantes en esta materia. Estimamos conveniente que las historias clínicas se guarden en una red cerrada en la que solamente se pueda acceder desde dentro de la institución médica y que únicamente se coloquen para ser accedidas por Internet las que deben ser transferidas a otra institución (solamente por el tiempo que dure la transferencia de datos y luego debe ser eliminada de ese lugar).

Para dar operatividad a las reformas planteadas, el proyecto de ley presentado también pretende dotar de mayores herramientas a las Contralorías de Salud y a las Juntas de Salud para poder fiscalizar el cumplimiento efectivo de la presente ley y de las demás disposiciones que regulen tanto la relación entre los usuarios y los centros de salud, como el funcionamiento efectivo de los sistema de salud de nuestro país.

Finalmente, con la presente iniciativa de ley se pretende refinar y dotar de mayores herramientas a las Contralorías de Salud y el derecho de los pacientes a fiscalizar el funcionamiento de los centros de salud, en cuanto a la calidad y al uso eficiente de los recursos; eliminar la posibilidad de que en hospitales desconcentrados se autodefinan sus propios contralores para garantizar una fiscalización más independiente; y posibilitar a las contralorías el ejercicio de una inspección del

funcionamiento de los centros de salud más profunda, de modo tal que actúe no solo a petición de los usuarios, sino que pueda realizar recomendaciones desde lo interno de los centros de salud.

Las reformas expuestas contribuirán decididamente a incrementar los niveles de cumplimiento de los derechos vinculados a los servicios de salud en nuestro país. Sin duda alguna, con su aprobación avanzaremos hacia mayores niveles de acceso efectivo y de calidad a la salud para nuestro pueblo.

En virtud de las consideraciones anteriores, se somete a conocimiento de la Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley, para su aprobación por parte de los señores diputados y las señoras diputadas.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

REFORMA INTEGRAL A LA LEY DE DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICOS Y PRIVADOS, LEY N.° 8239 DE 2 ABRIL DE 2002

ARTÍCULO ÚNICO- Se reforma integralmente la ley N.º 8239, de 2 de abril de 2002, Ley de Derechos y Deberes de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud Públicos y Privados , que en lo sucesivo se lea de la siguiente manera:

“LEY DE DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICOS Y PRIVADOS

ARTÍCULO 1- Objeto

La presente ley tiene por objeto tutelar los derechos y las obligaciones de las personas usuarias de todos los servicios de salud, públicos o privados, preventivos, curativos y de rehabilitación establecidos en el territorio nacional. Asimismo velar por la prestación de un servicio de salud moderno que tutele valores esenciales en cuanto a la autonomía de la voluntad, la información, la documentación clínica y la fiscalización de dichos servicios.

ARTÍCULO 2- Definiciones

Para los efectos de la presente ley se establecen las siguientes definiciones:

a) Persona usuaria: toda aquella persona natural o física sujeta a derechos y obligaciones, costarricense o extranjera, representante legal o asistente personal, que utilice los servicios de salud públicos y privados en el territorio nacional.

b) Personas con discapacidad: incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. En el caso de las personas menores de edad, en la medida en que esta ley les sea aplicable, se procurará siempre perseguir su interés superior.

c) Asistente personal: persona mayor de dieciocho años capacitada para brindarle a la persona con discapacidad servicios de apoyo en la realización de las actividades de la vida diaria, a cambio de una remuneración.

d) Agente de salud: todo aquel funcionario administrativo, técnico y profesional, que interviene en la prestación de servicios de salud dirigidos a las personas usuarias.

e) Información sanitaria: para los efectos de la presente ley, se entiende por información sanitaria aquella que, de manera clara, suficiente y adecuada a la capacidad de comprensión de la persona usuaria, le informe sobre:

i- Diagnóstico médico.
ii- Estudios clínicos de observación e intervención.
iii- Tratamientos quirúrgicos y farmacológicos.
iv- Evolución, riesgos, complicaciones o secuelas que los tratamientos deriven.

f) Expediente clínico: se considera expediente clínico el conjunto único de información y datos personales de la persona usuaria, que se lleva y custodia dentro de todo tipo de centros de salud, ya sea público o privado, en el que constan documentos escritos, gráficos, imagenológicos, electrónicos, en los cuales, los agentes de salud deberán hacer los registros, las anotaciones, las constancias y las certificaciones de los servicios de salud brindados a las personas usuarias, con apego a las disposiciones jurídicas aplicables.

g) Consentimiento informado: se entiende por consentimiento informado la declaración de voluntad expresa, específica, escrita y firmada o con la huella digital, de la persona usuaria o de su representante legal, en el que se confirma, voluntariamente, su autorización para recibir servicios de salud. Este deberá darse de manera específica a cada tratamiento o procedimiento clínico.

h) Servicios de salud: para lo dispuesto en esta ley, se entiende por servicios de salud: los procedimientos clínicos, quirúrgicos, farmacológicos y la prestación de asistencia sanitaria en el territorio nacional por los agentes de salud. Dicho servicio incluye lo referente al registro, la administración, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de los procedimientos médicos.

ARTÍCULO 2- Derechos

Las personas usuarias tienen frente a los agentes de salud los siguientes derechos:

a) Recibir información clara, concisa y oportuna, sobre sus derechos y deberes, así como sobre la forma correcta de ejercitarlos.

b) Recibir educación e información sanitaria que le ayude a tomar decisiones informadas sobre su salud personal y sobre los servicios de salud disponibles. Dicha educación deberá incluir información sobre los estilos de vida saludables y los métodos de prevención y detección anticipada de enfermedades. Los agentes de salud tienen la obligación de participar activamente en los esfuerzos educacionales. Se deberá hacer énfasis en concientizar que la responsabilidad de velar por su salud recae en cada persona.

c) Ser informadas del nombre, los apellidos, el grado profesional y el puesto que desempeña el agente de salud que les brinda atención.

d) Ser atendido sin dilación en situaciones de emergencia. El agente de salud solo podrá eximirse del deber de asistencia cuando se haya hecho cargo de la persona usuaria otro agente de salud competente.

e) Ser atendidas puntualmente de acuerdo con la cita recibida, salvo las situaciones justificadas de caso fortuito o fuerza mayor.

f) Recibir, sin distinción alguna, un trato digno en un ambiente limpio, seguro, cómodo, libre de discriminación y con respeto a sus convicciones personales, sus condiciones socioculturales, de sexo, identidad de género u orientación sexual, de pudor y a su intimidad, cualquiera que sea el padecimiento que presente. Este trato debe ser extensivo a los familiares, los asistentes personales o los acompañantes de la persona usuaria.

g) Vigilar que toda actividad necesaria para la prestación del servicio de salud, tendiente a obtener, clasificar, utilizar, administrar, custodiar y transmitir información y documentación clínica personal sea utilizada con estricto respeto por la dignidad humana y la autonomía de la voluntad.

h) Demandar que todo agente de salud que participe en la elaboración y manipulación de la documentación clínica, o que tenga acceso a su contenido, resguarden la intimidad y la confidencialidad de los datos ahí contenidos, salvo expresa disposición en contrario emanada de la autoridad judicial competente, ley o autorización del propio usuario o sus representantes.

i) Aceptar o rechazar la proposición para participar en estudios e investigación clínica.

j) Avalar o rechazar, mediante el consentimiento informado, la autorización a someterse a los diferentes procedimientos que conlleven la prestación de servicios de salud.

k) En caso de inconciencia de la persona usuaria o en la supuesta imposibilidad de dar o no el consentimiento informado a causa de su estado físico o psíquico, y que necesite una intervención médica, la decisión será tomada por su representante legal o, en su defecto, el asistente personal o la persona que conviva con la persona usuaria, después de haber escuchado y considerado su opinión en función de la capacidad intelectual de la persona, realizando si fuera necesario los ajustes razonables.

l) Exigir, en caso de ser menor de edad, a la persona que le represente legalmente y a los agentes de salud, que explique detalladamente la información sanitaria, así como las ventajas, los riesgos y las consecuencias de someterse a los diferentes servicios de salud. Para tales efectos, deberá escuchar y considerarse la opinión de la persona menor, en función de la edad y madurez de esta, realizando si fuera necesario los ajustes razonables;

m) Demandar a los centros que brinden servicios de salud y a los agentes de salud instrumentación escrita, clara y precisa del consentimiento informado. Para todos los efectos de la presente ley, deberán brindarle a las personas usuarias información sanitaria exacta y por escrito, así como un formulario en el que se exprese su autorización a recibir servicios de salud.

n) Disponer o prohibir la donación de sus órganos y revocar posteriormente su manifestación de voluntad, la que deberá quedar registrada en su expediente.

o) El usuario en estado terminal tendrá derecho a una atención terminal humana y a recibir toda la ayuda disponible para que muera lo más digna y aliviadamente posible.

p) Recibir la información sanitaria necesaria, vinculada a su salud, por escrito.

q) Tener acceso a su expediente clínico y que se le brinde copia; la entrega se realizará, en caso de expedientes digitales, dentro de los tres días hábiles de solicitada y cinco días hábiles en caso de solo existir expediente físico, salvo situaciones de emergencia sanitaria.

r) Recibir la compañía de familiares y amigos cercanos durante su hospitalización y con ocasión de prestaciones ambulatorias, de acuerdo con la reglamentación interna de cada establecimiento de salud, la que en ningún caso podrá restringir este derecho de la persona más allá de lo que requiera su beneficio clínico.

s) Recibir servicios de salud con pertinencia cultural, para lo cual los centros de salud deberán desarrollar un modelo de salud intercultural y ser validado ante las comunidades y etnias.

t) Hacer uso de sus efectos personales durante el internamiento, con sujeción a las reglas del establecimiento y siempre que con ello no se afecten los derechos de otros usuarios.

u) Presentar reclamos y recibir una pronta respuesta, ante las instancias correspondientes de los servicios de salud, cuando considere que se hayan lesionado sus derechos.

v) Recibir una cuenta con el detalle y la explicación de todos los gastos en que se ha incurrido en su tratamiento, en el caso de pacientes que acudan a centros de salud privados y aquellos que lo hagan en los servicios de salud del Estado y no se encuentren asegurados.

w) Fiscalizar el funcionamiento de los centros de salud, en cuanto a la calidad y el uso eficiente de los recursos, ya sea de manera individual o por medio de las juntas de salud y la Contraloría de Servicios de Salud. Para ello, los centros de salud deberán garantizar el acceso a la información pública.

x) Obtener información, de manera individual o por medio de las juntas de salud, y acceder a los informes y evaluaciones de la Contraloría de Servicios de su respectivo centro de salud.

y) Hacer que se respete el carácter confidencial de su historia clínica y de toda la información relativa a su enfermedad, salvo cuando, por ley especial, deba darse noticia a las autoridades sanitarias.

ARTÍCULO 3- Excepción al requerimiento del consentimiento informado

El agente de salud quedará eximido de requerir el consentimiento informado en las siguientes situaciones:

a) Cuando medie grave peligro para la salud pública.
b) Cuando medie una situación de emergencia, con grave peligro para la salud o la vida de la persona usuaria.

ARTÍCULO 4- Deberes

Las personas usuarias tienen frente a los agentes de salud los siguientes deberes:

a) Proporcionar la información más completa posible en relación con su estado de salud, enfermedades anteriores, hospitalizaciones, medicamentos y otras condiciones relacionadas con su salud.

b) Cumplir las instrucciones e indicaciones que les brinde, de forma adecuada, el personal de salud.

c) Respetar los derechos del personal y de los demás usuarios de los servicios de salud.

d) Tratar respetuosamente a los integrantes del equipo de salud, sean estos profesionales, técnicos o administrativos. El trato irrespetuoso, discriminatorio o los actos de violencia verbal o física en contra de los integrantes del equipo de salud, de las demás personas atendidas o de otras personas, dará derecho a la autoridad del establecimiento para requerir, cuando la situación lo amerite, la presencia de la fuerza pública para restringir el acceso al establecimiento de quienes afecten el normal desenvolvimiento de las actividades en él desarrolladas, sin perjuicio del derecho a perseguir las responsabilidades civiles o penales que correspondan por parte de las personas afectadas.

e) Acudir a sus citas médicas. Si por alguna razón no puede asistir a la cita, deberá notificar de previo a su proveedor del cuidado médico o al personal correspondiente de los servicios de salud.

f) Responsabilizarse por sus acciones u omisiones, cuando no siga las instrucciones de su proveedor del cuidado médico.

g) Contribuir solidariamente y de manera oportuna, cuando cuenten con los recursos necesarios, al financiamiento y el funcionamiento de los servicios de salud públicos.

h) Cuidar las instalaciones y el equipamiento para los fines de atención, respondiendo por los perjuicios según las reglas generales.

i) Asumir cualesquiera otras obligaciones que se establezcan en otras disposiciones legales.

ARTÍCULO 5- Creación de la Auditoría General de Servicios de Salud

Se crea la Auditoría General de Servicios de Salud, como órgano de desconcentración mínima del Ministerio de Salud. Su objetivo será asegurar que se cumplan las disposiciones de la presente ley y se promueva el mejoramiento continuo en la prestación de los servicios de salud.

El Ministerio de Salud deberá tomar las previsiones presupuestarias requeridas, a fin de que la Auditoría cuente con el personal y los recursos necesarios para la ejecución de sus objetivos y el desempeño de sus funciones.

Las instituciones y los establecimientos de salud, bajo la competencia de la Auditoría General de Servicios de Salud, deberán adoptar las previsiones presupuestarias y económicas necesarias con el propósito de atender efectiva y

eficientemente las medidas resultantes del ejercicio de las funciones encomendadas a dicha Auditoría. Será responsabilidad del respectivo jerarca, gerente o administrador el incumplimiento de las medidas que en definitiva se adopten.

ARTÍCULO 6- Dirección de la Auditoría General de Servicios de Salud

La Auditoría General de los Servicios de Salud será dirigida por el ministro de Salud, quien deberá nombrar a un auditor general, que será el responsable de la gestión del órgano desconcentrado.

El auditor general deberá colaborar con el ministro de Salud para que la Auditoría cumpla con las funciones para las cuales fue creada, coordinando las acciones necesarias con el Ministerio, las instituciones y las organizaciones o empresas bajo su competencia.

La designación y el nombramiento del auditor general le corresponderán al Ministerio de Salud, previa consulta al Consejo de la Auditoría General de los Servicios de Salud, creada en esta misma ley. Su nombramiento será por cuatro años y será un funcionario a tiempo completo y dedicación exclusiva, por lo que no podrá desempeñar otro cargo público ni ejercer profesiones liberales.

ARTÍCULO 7- Consejo de la Auditoría General de Servicios de Salud

La Auditoría General de los Servicios de Salud contará con un Consejo asesor integrado por siete miembros:

a) El viceministro de Salud.
b) El director de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica.
c) Dos representantes de los colegios profesionales del área de la salud.
d) El superintendente general de Servicios de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social.
e) Dos representantes de las juntas de salud.

El Consejo sesionará ordinariamente una vez al mes y, extraordinariamente, cuando sea convocado por el Ministro de Salud. Lo presidirá el viceministro de Salud.

El representante de los colegios profesionales y el de las juntas de salud serán nombrados por dos años y podrán ser reelectos.

ARTÍCULO 8- Causales de cese

El representante de los colegios profesionales y el de las juntas de salud serán cesados en sus cargos por cualquiera de las siguientes causas:

a) Renuncia.
b) Ausencia a más de tres sesiones, sin la autorización del Consejo.
c) Incapacidad sobreviniente por más de seis meses.
d) Negligencia o falta grave, debidamente comprobada, contra el ordenamiento jurídico en el cumplimiento de los deberes de su cargo.
e) Vencimiento del plazo por el que fueron electos.

ARTÍCULO 9- Funciones

Son funciones de la Auditoría General de Servicios de Salud las siguientes:

a) Proponer al Poder Ejecutivo programas para el mejoramiento de los servicios de salud, de conformidad con los principios y los objetivos de esta ley.
b) Emitir las normas técnicas y las disposiciones para regular el funcionamiento de las contralorías de servicios de salud.
c) Desarrollar estrategias apropiadas para solucionar las quejas de las personas usuarias.
d) Establecer, por medio de mecanismos adecuados, las principales deficiencias o violaciones a las disposiciones de esta ley y elaborar las recomendaciones y las sugerencias a los responsables de los servicios, para subsanarlas.
e) Asegurar la difusión y el conocimiento de los derechos y las responsabilidades de las personas usuarias.
f) Examinar y aprobar los informes semestrales sobre las denuncias recibidas y las resoluciones emitidas por cada una de las unidades locales.
g) Rendir un informe anual, ante el Ministerio de Salud, sobre sus actividades y remitir una copia a la Asamblea Legislativa.
h) Dar seguimiento a sus recomendaciones y resoluciones.
i) Ejercer las funciones que le correspondan de acuerdo con las leyes y los reglamentos aplicables.

ARTÍCULO 10- Contralorías de servicios de salud

Cada centro de salud, hospital, público o privado, y cada clínica, pública o privada, tendrá una Contraloría de Servicios de Salud, la cual deberá contar con los recursos necesarios para el cumplimiento adecuado de sus funciones. Como excepción, la Auditoría General de Servicios de Salud podrá disponer, por vía reglamentaria o disposición singular, los casos en que no se justifique la existencia de una Contraloría de Servicios de Salud.

Las contralorías ejercerán sus funciones con independencia funcional y de criterio, respecto del jerarca y los demás órganos de la administración activa. Por ello, no deberán realizar funciones ni actuaciones de administración activa, excepto las necesarias para cumplir con sus propias funciones.

El contralor de servicios será nombrado por tiempo indefinido y dependerá orgánicamente del jerarca unipersonal o colegiado correspondiente.

Las contralorías de servicios de salud se organizarán y funcionarán conforme a las normas y las disposiciones de la Auditoría General de Servicios de Salud.

ARTÍCULO 11- Contralorías de servicios de salud

Los directores de los centros de salud, descritos en el artículo anterior, que no posean una Contraloría de Servicios de Salud o que no cuenten con el permiso respectivo, dado por vía reglamentaria o disposición singular para no tenerlo, se expondrán a una multa de uno a cinco salarios base por cada mes de incumplimiento.

ARTÍCULO 12- Requisitos del contralor de servicios de salud

Para ocupar el cargo el contralor de servicios de salud deberá contar con los siguientes requisitos:

a) Ser costarricense en ejercicio de sus derechos civiles y políticos.
b) Ser graduado universitario, con título que lo acredite para el puesto.
c) Ser de reconocida honorabilidad.
d) Contar con más de cinco años de experiencia comprobada, en el ejercicio de su profesión.

ARTÍCULO 13- Funciones de las contralorías de servicios de salud

Corresponde, principalmente, a las contralorías de servicios de salud:

a) Contribuir activamente a la formación de una cultura institucional orientada a la persona usuaria.
b) Informar y orientar oportunamente a los pacientes sobre sus derechos y responsabilidades, así como sobre la organización, el funcionamiento, la prestación de los servicios y demás trámites administrativos que sean de su interés.
c) Llevar un registro de las reacciones de las personas usuarias frente a los servicios, que permita medir el grado de avance en el logro de los cometidos de mejoramiento continuo de la calidad.
d) Elaborar informes semestrales sobre las denuncias recibidas y las resoluciones emitidas.
e) Informar semestralmente sobre las labores del período; el informe será remitido tanto a la autoridad superior del establecimiento de que se trate como a la Auditoría General, para su consolidación.
f) Recibir las quejas o denuncias por violación a los derechos de las personas usuarias, para ser encausadas.
g) Realizar las investigaciones internas preliminares, de oficio o a solicitud de parte, sobre fallas en el servicio o violaciones a los derechos de las personas usuarias. Cuando el reclamo implique peligro para la salud de las personas usuarias, se procederá a la presentación de una reconsideración, *in situ*, del jerarca de la institución o del servicio.

h) Remitir el expediente de los casos probados y graves o las omisiones, para el procedimiento administrativo respectivo.
i) Cumplir las normas técnicas y las disposiciones emitidas por la Auditoría General de Servicios de Salud y las del ordenamiento jurídico.
j) Velar permanentemente por que se cumplan las disposiciones de la presente ley.

ARTÍCULO 14- Potestades de las contralorías de servicios de salud

Las contralorías de servicios de salud, para cumplir sus funciones, tendrán las siguientes potestades:

a) Libre acceso, en cualquier momento, a todos los libros, archivos y documentos de la entidad, así como a otras fuentes de información relacionadas con su actividad.
b) Solicitar a cualquier funcionario o empleado, de la forma, las condiciones y el plazo que estimen convenientes, los informes, los datos y los documentos necesarios para el cabal cumplimiento de sus funciones.
c) Solicitar a los funcionarios y los empleados, de cualquier nivel jerárquico, la colaboración, el asesoramiento y las facilidades que demande el ejercicio de la Contraloría de Servicios de Salud.
d) Cualesquiera otras necesarias para el cumplimiento de sus deberes, de acuerdo con el ordenamiento jurídico y las normas y disposiciones emitidas por la Auditoría General de Servicios de Salud.

ARTÍCULO 15- Presentación de reclamos

Cualquier persona usuaria que se considere agraviada o violentada en sus derechos podrá interponer los reclamos ante la Contraloría de Servicios de Salud respectiva sin discriminación alguna. Deberán ser presentados de inmediato o, a más tardar, dentro de los cinco días hábiles siguientes al hecho que los originó, salvo cuando el afectado se encuentre internado; en tal caso, el plazo comenzará a correr a partir de su egreso del centro de salud.

El reclamo o la denuncia podrá ser presentado por escrito o verbalmente, por el ofendido o por un tercero a solicitud de aquel, con los datos que permitan identificar al afectado, su domicilio para notificaciones, los hechos o las omisiones que motivan su reclamo, con indicación de las personas o dependencias involucradas y cualquier referencia a elementos de prueba. El afectado podrá pedir reserva de su identidad y la Contraloría deberá respetar este deseo, hasta que el acto procesal lo permita, en el tanto que, de no hacerlo, pueda afectarlo en cuanto a la continuidad y seguridad del servicio requerido.

Recibido el reclamo o la denuncia, la Contraloría procederá a realizar una investigación preliminar sumaria, con audiencia a las partes afectadas. Cuando la queja o la denuncia involucre la acción u omisión de un funcionario, se le dará audiencia a este para que presente su descargo.

La resolución deberá dictarse en un plazo máximo de ocho días hábiles, contados a partir de la presentación de la queja o del inicio del proceso, si es de oficio. Deberá ser notificada por escrito al reclamante, si es interpuesta por una persona usuaria.

ARTÍCULO 16- Resolución de denuncias o reclamos

La denuncia o el reclamo se desestimará cuando de la investigación preliminar no se determine una violación a los derechos de las personas usuarias.

Cuando la investigación determine que existe causal suficiente para un procedimiento administrativo, el expediente se remitirá al superior jerárquico para la apertura del procedimiento y la determinación de las posibles sanciones, de conformidad con el reglamento interno de la institución de que se trate y la legislación laboral vigente.

ARTÍCULO 17- Obligación de colaborar e informar

Para todos los efectos legales, la desatención injustificada de los requerimientos de colaboración e información, presentados por las contralorías locales, por parte de los funcionarios de la institución respectiva, se considerará falta grave.

ARTÍCULO 18- Acreditación de centros de salud privados

Los servicios de salud privados deberán contar con una acreditación que emitirá el Ministerio de Salud, el cual fijará los requisitos para tal efecto.

ARTÍCULO 19- Deber de coordinación

Las contralorías de servicios y la Superintendencia de Servicios de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) coordinarán sus actividades con la Auditoría General de Servicios de Salud. Esta última podrá requerir copia de las denuncias, las quejas, los reclamos o las gestiones que las primeras reciban de los usuarios, y se relacionen con los propósitos y fines de esta ley. Además, deberán seguir los lineamientos de dicha Auditoría, sin perjuicio de los mecanismos de tutela internos previstos por la institución.

TRANSITORIO ÚNICO- El Poder Ejecutivo deberá reglamentar esta ley en un plazo de seis meses a partir de su publicación.

Rige a partir de su publicación”

José María Villalta Flórez-Estrada
Diputado

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales.

1 vez.—(IN2018295619).

REFORMA INTEGRAL A LA LEY GENERAL DEL VIH

Expediente N.º 21.031

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El VIH y el sida son una epidemia que ha afectado por muchos años a todos los países del mundo. Como consta en distintas estadísticas de organismos internacionales, en los 30 años transcurridos desde que se declaró el primer caso de SIDA, esta enfermedad se ha convertido en la cuarta causa de muerte a nivel mundial. Más de 20 millones de personas han muerto en el mundo a causa del SIDA y actualmente hay unos 39 millones de personas que viven con el VIH. Cada año se producen 2.5 millones de nuevas infecciones en el mundo y 1.7 de muertes por sida.

Esto ha llevado a los distintos países a desarrollar tanto normativa como políticas públicas que permitan enfrentar esta epidemia, basados en el compromiso con los derechos humanos, eliminando la discriminación hacia las personas con VIH y sus allegados.

En el caso de Costa Rica, el Poder Ejecutivo presentó, en el 2014, el Expediente N° 19.243 Reforma integral a la Ley General del VIH, al reconocer la necesidad de contar con un cuerpo normativo moderno y ajustado a los avances científicos y sociales relacionados con esta epidemia.

Señalaba la exposición de motivos de este proyecto de ley:

"La respuesta de Costa Rica a la epidemia del VIH y sida inició permeada del ***estigma y la discriminación*** *hacia las personas que estaban infectadas, debido al alto grado de desconocimiento de la misma epidemia y de los factores sociales, culturales y de salud que giran alrededor de la epidemia. La Ley N.° 7771 de 29 de abril de 1998 "Ley General sobre el VIH SIDA" publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 96 de 20 de mayo de 1998, respondió a una realidad coyuntural sobre la epidemia. En ese momento histórico se desconocía mucho aun sobre la misma epidemia.* ***Muchos cambios tanto científicos como sociales han surgido desde entonces y han develado y actualizado la información no solo sobre las formas de transmisión y las estrategias de prevención sino los nuevos avances en el abordaje de los factores y desafíos en el apoyo social y cambios culturales que se requieren para detener y revertir la epidemia en Costa Rica.***

Dado el contexto histórico y la situación de la epidemia en el momento en que surge la Ley General sobre el VIH SIDA N.° 7771, ***su enfoque se centró principalmente en la atención de la enfermedad y de las personas con VIH y no en la promoción y la prevención****, además de que no contempló el impacto en personas jóvenes, mujeres y adultos mayores. Hoy se sabe que para reducir la tasa de infección, tiene más impacto la promoción de la salud sexual y la salud reproductiva y la prevención en poblaciones en más alto riesgo, dado que la epidemia se acentúa por factores como: edad, género, pobreza, etc. Esto se refleja en los datos que demuestran cómo ha variado el perfil de la epidemia en el país. El VIH está altamente relacionado con patrones socioculturales, entre ellos la violencia intrafamiliar y la drogodependencia, que impactan en la vida cotidiana de mujeres, hombres, adultos mayores y niñez; es por ello que la promoción de la salud y las acciones de prevención puede hacer una diferencia muy importante en la reducción de la tasa de infección en el país.*

Por tales ***razones es necesaria la actualización de la Ley General de VIH y sida de acuerdo con las nuevas tendencias en el mundo, los avances científicos y con las teorías de Derechos Humanos para buscar mayor efectividad en su aplicación.***

En relación con lo primero, existen compromisos internacionales que el país ha adquirido y debe respetar, como la Declaración política sobre el VIH/SIDA de 2011 (Asamblea de las Naciones Unidas: HLM 2011) y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) Objetivo número 6: Combatir el VIH SIDA, el paludismo y otras enfermedades. Cuyas metas son: 1. Haber detenido y comenzado a reducir la propagación del VIH SIDA en 2015 y 2. Lograr el acceso universal al tratamiento del VIH SIDA de todas las personas que lo necesiten.

También que entre otras acciones clave señala la necesidad de tomar las medidas necesarias para que las políticas y programas sobre salud sexual y reproductiva y VIH se basen en el compromiso con los derechos humanos, eliminando la discriminación hacia las personas con VIH y sus allegados.

En relación con lo segundo, es necesario fortalecer la prevención del VIH, reforzando los esfuerzos realizados, pero incrementando la promoción de estilos de vida saludable y la prevención temprana para reducir la carga en la atención del VIH. Esto, sin duda alguna, contribuirá a contener la expansión de la epidemia en el país.

Por otro lado, es imperativo fortalecer los derechos de todas las personas y en particular de las personas con VIH; así como precisar mejor las obligaciones de todas las partes involucradas: personas e instituciones. ***En este sentido se requiere reforzar los derechos, en aras del principio de solidaridad de la seguridad social, así como de abordar el VIH con un enfoque integral y no solo desde el enfoque médico asistencial, para reducir el estigma y la discriminación asociada al VIH.***

Como se indicó en líneas precedentes, la nueva ley tiene como propósito adaptar la legislación a las nuevas necesidades planteadas por la epidemia en Costa Rica. La Ley General de VIH SIDA actual data de 29 de abril de 1998, en virtud de que a la fecha se han dado cambios sustanciales en el comportamiento de la infección por VIH, lo que hace imperativo un abordaje del tema desde el enfoque de derechos humanos, el acceso universal a prevención, atención, cuidados y apoyo con el fin de:

1- Fortalecer el Conasida

2- Identificar y definir un mecanismo sostenible de financiamiento de la Política y del Plan Estratégico Nacional de VIH.

3- Mejorar las estrategias de promoción y prevención en VIH en el sistema de salud y en el Sistema de Educación.

4- Fortalecer los servicios de atención integral en salud libres de estigma y discriminación.

5- Garantizar los derechos laborales de las personas con VIH.

6- Fortalecer la garantía de los derechos de las personas con VIH.

7- Incorporar al texto de la ley un enfoque y una terminología acorde con las tendencias actuales de respeto a la dignidad de las personas.

8- Señalar las obligaciones del Estado con respecto al VIH."

La Asamblea Legislativa también reconoció la urgencia de reformar la Ley General del VIH, como se ve reflejado en el dictamen unánime afirmativo del Expediente N° 19.243, el 19 marzo de 2018. Sin embargo, este proyecto fue archivado por vencimiento del plazo cuatrienal, según el procedimiento legislativo y resoluciones de la Sala Constitucional; por lo que el esfuerzo, discusión y consensos alcanzados durante el periodo 2014-2018 se vieron temporalmente truncados.

A pesar de esto, es ampliamente reconocido a nivel nacional la necesidad de reformar integralmente esta ley. Es de esta forma que, el presente proyecto de ley recupera el texto que fue dictaminado en su momento por la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos y lo presenta nuevamente ante la corriente legislativa, para su discusión y necesaria aprobación. Debe reconocerse que el texto en cuestión fue objeto de amplias consultas, debates y del fortalecimiento de su articulado, gracias a un esfuerzo consciente y constante por parte de las legisladoras y legisladores del cuatrienio 2014-2018, por lo que se considera que esta es la vía más adecuada para contar con una Ley General del VIH moderna, que garantice una mejor promoción y prevención en VIH en el sistema de salud y en el Sistema de Educación y respetuosa de los derechos de las personas con VIH.

Por las razones expuestas, sometemos a consideración de las señoras diputadas y los señores diputados de la Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

REFORMA INTEGRAL A LA LEY GENERAL DEL VIH

ARTÍCULO ÚNICO- Refórmese integralmente la Ley N.° 7771, Ley General sobre el VIH SIDA del 29 de abril de 1998, que en lo sucesivo dirá:

Título I
Disposiciones Generales

Capítulo Único
Objetivo de la Ley, terminología legal y creación de CONASIDA

Artículo 1- Objeto. La presente ley tiene por objeto regular todas las acciones del Estado costarricense en lo conducente a promover y garantizar una respuesta integral a la epidemia del VIH y sida en los ámbitos público y privado del país.

La atención integral del VIH y sida será de interés público. Las instituciones públicas y privadas deberán asegurar mecanismos expeditos y accesibles para que todas las personas puedan ejercer sus derechos y deberes en relación con el VIH y sida.

Las acciones relacionadas con la prevención y educación de la salud y la atención integral del VIH y sida deberán garantizar el respeto de los derechos fundamentales de todas las personas, consagrados en la Constitución Política y en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos aplicables en la República.

Las normas contenidas en la presente ley serán vinculantes para los ámbitos público y privado.

Artículo 2- Definiciones**.** Para efectos de aplicación de la presente ley se utilizarán las siguientes definiciones:

a) Antirretrovirales: Medicamentos que actúan específicamente contra el VIH, inhibiendo su replicación o ciclo de vida.

b) Atención integral de la salud: Conjunto de políticas y acciones para la promoción de la salud, prevención, educación, atención, apoyo, orientación, tratamiento, rehabilitación e inclusión social, dentro del marco de los Derechos Humanos.

c) Consentimiento informado: Acuerdo que involucra al personal de salud y a la persona a la que atiende, y que conlleva una concatenación de actos en la relación entre ambas partes. Está constituido por dos elementos: proveer información en forma clara y coherente a la persona que recibe el servicio de salud y obtener el acuerdo o autorización de la persona que recibe el servicio. Su propósito es asegurar que a la persona se le haya informado acerca del proceso de salud y enfermedad, y que ésta haya autorizado que se realice determinado acto o procedimiento, lo cual viene a garantizar el principio de la autonomía de la voluntad de la persona, como uno de los pilares de la atención del VIH.

d) Contactos sexuales: Mujeres y hombres con las que la persona con VIH ha mantenido, mantiene o mantendrá relaciones sexuales.

e) Discriminación por VIH o sida: Toda distinción, exclusión o restricción basada en la condición de persona con VIH o sida, por acción o por omisión, que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos fundamentales de las personas con VIH o sida y sus familiares o personas cercanas, ya sea en el ámbito público o privado.

f) Enfoque de Derechos Humanos: Este enfoque coloca a las personas y su interrelación con el tejido social en el centro de la atención de la ley, con el fin de garantizar la dignidad humana y el interés público en la salud individual y colectiva.

g) Enfoque de diversidad: Se refiere al reconocimiento de las diferencias entre diversos grupos o sectores de la población y al respeto a esas diferencias, así como al respeto a sus derechos. Incluye la diversidad étnica-racial, la discapacidad, la edad, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, entre otras.

h) Enfoque de género: toma en consideración las relaciones de poder y la construcción social de roles diferenciados para hombres y mujeres. Reconoce las necesidades diferenciadas de las personas en relación a su género, y la subordinación y desventaja histórica que han tenido las mujeres, en su diversidad, para acceder a sus derechos y para que sus necesidades sean visibilizadas y atendidas. Implica incorporar estos aspectos en relación al abordaje del VIH.

i) Estado serológico: Término genérico que se refiere a la presencia o ausencia de anticuerpos en la sangre. Con frecuencia se refiere al estado de anticuerpos contra el VIH.

j) Estilos de vida saludables: Conjunto de conocimientos y decisiones personales que pueden alcanzarse, en la medida que se cuente con las oportunidades y condiciones sociales que permiten a las personas ejercer cierto grado de control para la construcción de su nivel de salud.

k) ITS: Infecciones de transmisión sexual

l) Personas cercanas: Personas con las que habitualmente se relacionan las personas con VIH y o sida.

m) Persona con VIH: Personas con un estado serológico positivo por VIH.

n) PEMAR: Población clave de riesgo de exposición al VIH: Es aquella parte de la población que tiene más probabilidad de estar expuesta al VIH o de transmitirlo por lo que su participación es fundamental de cara a obtener una respuesta de éxito frente al VIH; es decir, es clave en la epidemia y en la búsqueda de una respuesta para la misma.

ñ) Seropositivo: Término que describe la aparición de anticuerpos del VIH en el suero de la persona y que permite diagnosticar la infección mediante una prueba específica de laboratorio.

o) Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (sida): Es una enfermedad causada por el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana. El VIH destruye la capacidad del organismo para combatir la infección y la enfermedad, lo que al final puede llevar a la muerte. Los medicamentos antirretrovíricos o antirretrovirales hacen más lenta la reproducción vírica, y pueden mejorar mucho la calidad de vida, pero no eliminan la infección por el VIH.

p) VIH: Virus de la Inmunodeficiencia Humana. El VIH destruye e inhibe la capacidad del organismo para combatir la infección y la enfermedad, y en última instancia causa el sida.

q) Violencia contra las mujeres: es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres y se refiere a cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a las mujeres. Puede ocurrir tanto en el ámbito público como en el privado, e incluye la violencia que toma lugar en la familia y en relaciones de pareja (incluyendo exparejas), en la calle y la comunidad, en lugares de trabajo, instituciones públicas y establecimientos de salud, así como aquella perpetrada y tolerada por el Estado. Constituye un factor que vulnera a las niñas, adolescentes y mujeres adultas y adultas mayores ante el VIH.

r) Violencia sexual: Incluye la violación y otras conductas sexuales abusivas, incluyendo tocamientos indeseados y obligar a realizar, ver o escuchar actos con contenido sexual, así como la explotación sexual y la trata de personas con fines sexuales. Incluye el abuso sexual hacia personas menores de edad. Constituye un factor de riesgo para la transmisión del VIH que afecta de forma particular a las mujeres, incluyendo a las mujeres trans, y a personas menores de edad.

Artículo 3- Creación del Consejo Nacional de Atención Integral del VIH y el SIDA. Créase el Consejo Nacional de Atención Integral de VIH y el sida, en lo sucesivo CONASIDA, con representación interinstitucional y multisectorial como una instancia asesora adscrita al Ministerio de Salud, el cual será el ente rector en la

materia. CONASIDA apoyará las políticas públicas y los programas de acción relacionados con el VIH y el sida en el ámbito nacional. Toda la gestión administrativa será ejecutada por medio de la unidad organizativa, que definirá el o la jerarca ministerial.

Artículo 4- Integración de CONASIDA. El Conasida estará integrado por una persona representante, de las siguientes instituciones: Ministerio de Salud, Ministerio de Educación Pública, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Justicia y Paz, Caja Costarricense del Seguro Social, Patronato Nacional de la Infancia, Consejo Nacional De Rectores, Instituto Nacional de las Mujeres; y por una persona representante de las organizaciones de la Sociedad Civil que atienden asuntos relacionados con el VIH y sida; y dos representante de las organizaciones de las personas con VIH y sida, registradas ante el Conasida.

El CONASIDA será coordinado por el Ministerio de Salud, en tanto que su organización y funcionamiento será regulado mediante reglamento de dicho Ministerio.

Artículo 5- Financiamiento de CONASIDA. Para la debida implementación de esta ley, las instituciones públicas que integran el CONASIDA aportarán de manera equitativa los recursos necesarios para conformar el presupuesto institucional del Consejo, a ser implementado por el Ministerio de Salud. La asignación de tales recursos será definida en el Reglamento de la presente Ley.

No obstante, exclusivamente para realizar sus fines institucionales, el CONASIDA podrá recibir subvenciones, donaciones de personas físicas o jurídicas, así como de organizaciones nacionales o internacionales. Asimismo, podrá programar y presentar proyectos en el marco de sus facultades a organizaciones donantes nacionales e internacionales para el financiamiento de los mismos; adicionalmente, el programa o proyecto que corresponda podrá recibir financiamiento de fuentes nacionales e internacionales que le asignen las instituciones participantes del CONASIDA u otras instituciones públicas o privadas, mediante convenio, donación, directriz presidencial, decreto ejecutivo o Ley de la República.

Se autoriza al Ministerio de Salud, como órgano rector del CONASIDA, para que celebre convenios de cooperación y reciba donaciones de agencias de cooperación internacional y otras organizaciones, nacionales e internacionales. Asimismo, se autoriza al Ministerio de Salud para que administre fideicomisos cuyo fin sea dotar de contenido económico los proyectos institucionales sobre la materia que ejecute.

Autorizase a las instituciones centralizadas y descentralizadas y las empresas públicas del Estado, para que incluyan en sus presupuestos las partidas anuales que estimen convenientes o donen fondos, para contribuir con los proyectos aprobados por CONASIDA.
Se autoriza a las instituciones del Estado para que, dentro de su ámbito de competencias de Ley, colaboren y aporten recursos humanos, físicos y económicos, para la ejecución de esta ley y los programas correspondientes de CONASIDA.

Artículo 6- Derecho a la participación en los procesos de toma de decisiones. CONASIDA promoverá que las personas con VIH y Sida y cualquier organización de la sociedad civil interesada, participen en los diferentes espacios de toma de decisiones relacionados con políticas públicas, planes, programas y proyectos derivados que aborden la temática del VIH.

Título II
Derechos fundamentales de las personas con VIH y sida

Capítulo Único
Derechos y obligaciones de los sujetos destinatarios de esta Ley

Artículo 7- Derecho a la vida humana digna y a la libertad e igualdad responsables. Todas las personas tendrán derecho a vivir en un entorno libre de actitudes y prácticas estigmatizantes y discriminatorias, a contar con información científica exacta y actualizada que promueva la igualdad, la solidaridad, el respeto a las diferencias, la no discriminación por situaciones relacionadas con el VIH y sida y en general, por ningún motivo.

Asimismo, toda persona con VIH tiene los derechos y las obligaciones consagrados en la Constitución Política, los instrumentos internacionales sobre derechos fundamentales aplicables en la República, los estipulados en la Ley General de Salud, en esta ley y demás legislación conexa o relacionada con la materia.

La violación de cualquier derecho o garantía será denunciable ante las autoridades competentes, para reclamar las responsabilidades penales, civiles y administrativas del caso.

Artículo 8- Derecho a la información. Todas las personas tendrán derecho a contar con información científica y actualizada acerca de VIH y sida, en todos los ámbitos públicos y privados con el fin de contribuir a la prevención.

El Estado y sus instituciones deberán garantizar el ejercicio de este derecho a toda población clave de mayor riesgo (PEMAR) respondiendo a sus necesidades y particularidades.

Las personas con VIH y sida tienen derecho a contar con información comprensible, oportuna, precisa, clara, veraz y científica, acerca de su diagnóstico, tratamiento y pronóstico por parte de las personas profesionales en la materia.

Artículo 9- Derecho a la consejería. Toda persona tiene derecho a recibir consejería para obtener información, orientación, apoyo y acompañamiento psicosocial antes y después de la prueba del VIH, así como durante el tratamiento de la enfermedad, para la toma de las decisiones relacionadas con su salud sexual y reproductiva de manera corresponsable.

Artículo 10- Derecho al desarrollo. Las personas con VIH tendrán derecho al ejercicio de sus derechos y al desarrollo de todas sus potencialidades y actividades civiles, sociales, económicas, familiares, laborales, profesionales, educativas, afectivas, y sexuales y reproductivas.

Artículo 11- Derecho a la Atención Integral. Las personas con VIH y sida tienen derecho a la atención integral de su salud y a la prescripción y despacho oportuno de las intervenciones preventivas profilácticas y medicamentos antirretrovirales de calidad. También a todo tratamiento y avance científico y tecnológico oficialmente aprobado y con evidencia tendiente a mejorar su calidad de vida, o bien, que le garantice la atención de su salud y que responda a sus necesidades y características particulares según edad, género, orientación sexual e identidad de género, de acuerdo con la normativa vigente.

Las personas con VIH y sida tendrán derecho a intervenciones preventivas profilácticas según la valoración médica en cada caso particular y a todos aquellos otros que sean necesarios para su atención, de acuerdo con los más altos estándares de calidad y seguridad farmacológica que estén previstos en la normativa vigente.

Las personas con VIH y sida, tanto nacionales como extranjeras, que estén en condición de pobreza, pobreza extrema e indigencia médica, y aquellas que por alguna razón han sido cesadas de su trabajo y no tienen capacidad contributiva para seguir cotizando al Seguro de salud, tienen derecho a que se les continue brindando sin interrupción, la atención integral y el tratamiento a las personas con VIH, de conformidad con el artículo 162 de la Ley N.° 5395 del 30 de octubre de 1973 “Ley General de Salud.

Artículo 12- Derecho a la confidencialidad. Sin perjuicio del derecho fundamental de autodeterminación informativa y demás excepciones reguladas en la legislación vigente, la confidencialidad es un derecho fundamental de las personas con VIH y sida. Nadie podrá, pública ni privadamente, referirse al padecimiento de esta enfermedad, sin el consentimiento previo de la respectiva persona VIH y sida, **salvo los casos contemplados en esta Ley.**

El personal de salud que conozca la condición de una persona con VIH guardará la confidencialidad necesaria referente a los resultados de los diagnósticos, las consultas y la evolución de la enfermedad.

La persona con VIH tendrá derecho a comunicar su estado serológico a quien desee. Las autoridades sanitarias deberán brindarle el asesoramiento técnico y acompañamiento necesario para comunicar lo que corresponda a sus contactos sexuales, así como informarle lo procedente sobre sus eventuales responsabilidades en caso de transmisión.

Artículo 13- Confidencialidad laboral. La persona con VIH que así lo desee, podrá comunicar de su estado serológico a su empleador. A partir de la comunicación al

empleador, la persona no podrá ser despedida por su condición serológica ni cualquier otro motivo de discriminación en ese o cualquier otro sentido. El empleador que ha sido notificado conforme a esta norma, estará obligado a cumplir con la garantía del derecho a la confidencialidad y atención integral de la persona con VIH para lo cual, el trabajador que corresponda recibirá el apoyo de la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Consejo de Salud Ocupacional.

Artículo 14- Prohibición de discriminación o estigmatización. Se prohíbe toda distinción, exclusión o restricción basada en la condición serológica VIH positiva, por acción o por omisión, que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos fundamentales de las personas con VIH o sida, de sus familiares y sus personas cercanas.

A toda persona con VIH le asistirá el derecho de que no se interfiera en el desarrollo de sus actividades sociales, económicas, civiles, familiares, laborales, profesionales, educativas, afectivas, sexuales y reproductivas, bajo el consejo de personal médico calificado. Las excepciones establecidas en esta Ley no permitirán ningún tipo de discriminación o estigmatización.

Artículo 15- Derecho a la simplificación de trámites de denuncia. Actuando de conformidad con el principio de protección de la integridad y seguridad de la persona denunciante y el respeto a sus derechos humanos, todas las instancias públicas y privadas competentes deberán contar con procedimientos prontos, cumplidos, expeditos y oportunos para tramitar denuncias por discriminación en perjuicio de personas con VIH y sida o sus familiares y personas allegadas.

Título III
Promoción, Prevención y Atención

Capítulo I
Disposiciones comunes de Promoción, Prevención y Atención

Artículo 16- Acciones de prevención y de atención integral. El Estado destinará recursos para el desarrollo de programas de promoción de estilos de vida saludable, prevención y atención en relación con el VIH y sida, con especial atención a la población PEMAR; así como para la creación y el fortalecimiento de albergues para la atención de las personas con sida que requieran apoyo, según los lineamientos del Ministerio de Salud, en coordinación con el Patronato Nacional de la Infancia y el Instituto Nacional de la Mujer.

El Estado estará facultado para apoyar, de manera subsidiaria, a las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro y albergues privados sin fines de lucro, que se dediquen a atender integralmente a estas personas con VIH y sida.

Artículo 17- Papel de las organizaciones no gubernamentales. Las organizaciones no gubernamentales podrán prestar el apoyo a las autoridades de salud, con el fin

de garantizar mejores resultados en las acciones relacionadas con la prevención y atención del VIH y el sida. Estas deberán registrarse ante el Ministerio de Salud demostrando el desarrollo de actividades de promoción de la salud, prevención, atención y rehabilitación de personas con VIH. El Ministerio no podrá rechazar registro alguno, salvo si la o las organizaciones postulantes no se dedican a actividades de promoción de la salud, prevención, atención y rehabilitación de personas con VIH y sida.

Artículo 18- Financiamiento de programas y albergues. El Estado destinará recursos para el desarrollo de programas de promoción, prevención y atención del VIH y el sida por parte de las organizaciones de sociedad civil debidamente inscritas en el Ministerio de Salud. Igualmente, el Estado podrá destinar recursos para la creación y el fortalecimiento de albergues para la atención integral de las personas con VIH y sida que así lo requieran, siempre y cuando cumplan con los lineamientos técnicos y jurídicos del Ministerio de Salud. Estas organizaciones deberán respetar la orientación sexual, la identidad de género, la religión, la nacionalidad la edad, el origen étnico racial, o económico o cualquier otra condición de las personas usuarias de estas organizaciones y albergues; ninguna de esas condiciones podrá ser causal de expulsión o negación de los servicios.

Capítulo II
Prevención

Artículo 19- Derecho de acceso a las intervenciones preventivas profilácticas. Todas las personas tienen derecho al acceso oportuno al condón femenino y masculino de calidad en los servicios de salud, así como de los nuevos procedimientos en la materia aceptados por el Ministerio de Salud Pública. A ninguna persona se le negará este derecho, tanto en servicios públicos como privados. El Estado garantizará el estricto cumplimiento de estas disposiciones.

Las instituciones de salud pública facilitarán la dispensación gratuita de condones a las poblaciones en más alto riesgo para prevenir el VIH y otras infecciones de transmisión sexual.

Artículo 20- Derecho a la prueba de VIH. Todas las personas tendrán derecho al acceso a la prueba de VIH y a que ésta se les realice de manera oportuna en los servicios de salud públicos y privados, siguiendo las normas de calidad establecidas por el Ministerio de Salud, y contando con información previa, consejería y asesoramiento. La realización de dicha prueba de VIH tendrá carácter voluntario. Asimismo, será gratuita en los servicios de salud públicos.

Artículo 21- Derecho al consentimiento informado. Todas las personas tienen derecho a dar su consentimiento informado en forma objetiva y veraz para la realización de las pruebas de VIH, para la prescripción de tratamientos y medicamentos, y para la aplicación de procedimientos relacionados con la atención integral de su salud y sus efectos secundarios. Este consentimiento deberá constar en el expediente médico y tendrá carácter confidencial.

Artículo 22- Derecho a la prueba de VIH de las mujeres embarazadas y su pareja. Todas las mujeres embarazadas tienen derecho a la información clara y precisa para realizarse la prueba de diagnóstico de VIH, de manera eficiente y oportuna y con consentimiento informado para su realización, habiendo recibido previamente una consejería integral. Igualmente se le deberá ofrecer la prueba a su pareja, bajo las mismas condiciones.

Los servicios de salud públicos están obligados a crear las condiciones para el consentimiento informado y la realización de la prueba de VIH a las mujeres embarazadas, a comunicarles el resultado en tiempo oportuno y en caso necesario brindarles tratamiento de calidad, para proteger su derecho a la salud, así como la salud del producto en gestación.

Artículo 23- Excepciones al consentimiento. Ningún servicio de salud público o privado podrá realizar una prueba de VIH si la persona se opone, salvo en los siguientes casos excepcionales:

a) Cuando a una persona se le haya nombrado garante, aquel tomará la decisión de realizarse la prueba con la ayuda de esta salvaguarda.

b) Cuando se trate de la donación de productos biológicos humanos, incluida sangre, óvulos, hemoderivados, leche materna, semen, órganos y tejidos.

Los resultados de la prueba de VIH se utilizarán en forma confidencial y deberán ser inmediatamente informados a la persona a quien se le realizaron.

Artículo 24- Comunicación a la persona con VIH. El médico tratante o el personal de atención en salud que informe a una persona sobre su estado serológico en relación con el VIH, deberá hacerlo en un ambiente de respeto a su dignidad e integridad física y emocional, brindándole información clara, precisa y comprensible, y garantizando la confidencialidad del caso. Deberá informarle además sobre sus derechos y obligaciones contempladas en esta ley. Para estos efectos, la Caja Costarricense de Seguro Social y las instituciones privadas que brindan servicios de salud, en coordinación con el Ministerio de Salud, deberán capacitar a su personal, para que cumplan responsablemente sus funciones esenciales conforme a esta ley.

Cuando la persona con VIH no quiera o no pueda comunicar su estado seropositivo a sus contactos sexuales, el personal de atención en salud, público y privado, deberá realizar todas las gestiones, a fin de lograr dicha notificación a todos sus contactos sexuales, pasados y presentes. Esta notificación deberá realizarse de tal modo que respete la confidencialidad de las personas involucradas, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación de esta ley.

Artículo 25- Medidas universales de bioseguridad. Los bancos de productos biológicos humanos, los laboratorios y demás establecimientos de salud, deberán

contar con el personal, material y equipo adecuados, de conformidad con las recomendaciones sobre medidas universales de bioseguridad, difundidas por el Ministerio de Salud.

Las personas trabajadoras en servicios de atención de la salud, públicos o privados, en especial las personas profesionales en odontología, microbiología, enfermería, medicina y todas las que practiquen procedimientos faciales y capilares, acupuntura, tatuajes, “piercing”, o cualquier otro procedimiento quirúrgico o invasivo, deberán acatar las medidas de bioseguridad universal, así como otras disposiciones del Ministerio de Salud para el uso de equipos y el manejo tanto de instrumentos como de material humano y biológico.

El Ministerio de Salud es el responsable de regular y fiscalizar los establecimientos relacionados con las actividades mencionadas en este artículo.

Artículo 26- Información epidemiológica. El Ministerio de Salud estará en la obligación de mantener un sistema de información VIH y sida con los datos epidemiológicos en forma actualizada y desagregada, de manera sistemática, garantizando la confidencialidad de los casos, así como el uso y el acceso oportunos a la información y análisis de la epidemia de VIH y sida.

Artículo 27- Obligación de Reportar Resultados. Exclusivamente para fines epidemiológicos y estadísticos, los servicios de salud públicos y privados, deberán remitir al Ministerio de Salud los resultados confirmatorios de las pruebas positivas de VIH y los datos requeridos según el protocolo de vigilancia establecido. Para los fines indicados dicho Ministerio establecerá los formularios oficiales y los sistemas automatizados de información y deberá respetarse el carácter confidencial de la información de la persona con VIH y sida.

Artículo 28- Gratuidad de la donación. Toda donación de sangre, leche materna, óvulos, semen, órganos y tejidos humanos deberá ser gratuita. Queda prohibida la comercialización de estos productos. El Ministerio de Salud es responsable de establecer las regulaciones e implementar los controles correspondientes.

Artículo 29- Bancos de productos humanos. Los bancos de productos humanos, públicos y privados, deberán ejercer controles estrictos sobre la calidad y los procesos que apliquen, con el objeto de garantizar la inocuidad de la sangre y sus derivados, de la leche materna, el semen, óvulos y otros tejidos u órganos humanos, desde la recolección hasta la utilización, bajo la vigilancia y regulación del Ministerio de Salud, conforme a los mejores estándares posibles de la materia.
Para esos fines, todos los bancos de productos humanos deberán realizar, antes de utilizar los productos mencionados, las pruebas correspondientes para determinar la existencia de VIH, según los lineamientos que al respecto determinen las autoridades de salud.

Artículo 30- Control de los hemoderivados. Los fabricantes de hemoderivados y productos biológicos de origen humano estarán obligados a certificar que la prueba

exigida por el Ministerio de Salud fue realizada, para determinar que cada donante no es VIH-positivo y que los productos y la sangre empleada en el proceso, no están contaminadas con el VIH. Además, deberán acreditar que cuentan con las instalaciones, los equipos, las materias primas y el personal adecuado para realizar dichas pruebas, sin perjuicio del cumplimiento de otro tipo de controles y normas de calidad y de cualquier otra medida requerida por el Ministerio de Salud.

Artículo 31- Uso de sustitutos sanguíneos. Para evitar o prevenir la transmisión del VIH, las instituciones competentes de salud promoverán el uso de sustitutos sanguíneos, especialmente cristaloides y coloides o el mecanismo de la transfusión autóloga, cuando sea posible.

Capítulo III
Atención integral

Artículo 32- Obligatoriedad. Las personas trabajadoras de la salud, públicos y privados, deben prestar apoyo y atención integral a las personas usuarias con VIH y sida sin excepción, considerando sus necesidades y condiciones específicas de vulnerabilidad. Esta incluye la atención informada, oportuna, de calidad y libre de estigma y discriminación de la salud, incluyendo la sexual y reproductiva, de la violencia contra las mujeres y las necesidades específicas de asistencia social. Para ello deben deben realizarse las referencias pertinentes a servicios especializados de salud, a otras instituciones del Sistema Nacional de Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar y la Violencia contra las Mujeres, y a otras instituciones según su mandato y las necesidades de la persona atendida. Asimismo, están obligadas a brindar la atención que requieran las personas con VIH tomando en cuenta las medidas de bioseguridad aprobadas y disponibles.

Artículo 33- Albergues de atención. El Estado podrá destinar los recursos necesarios para la creación y el fortalecimiento de albergues para la atención integral de los pacientes que requieran apoyo, según los lineamientos del Ministerio de Salud. El Estado está facultado para apoyar, en iguales términos, los albergues privados sin fines de lucro, que se dediquen a atender a estos pacientes. Estas organizaciones deberán respetar la orientación sexual, la identidad de género, la religión, la edad, el origen étnico racial o económico o cualquier otra condición de las personas usuarias de estas organizaciones y albergues; ninguna de esas condiciones podrá ser causal de expulsión o negación de los servicios.

Capítulo IV
Investigación en materia de VIH-Sida

Artículo 34- Reglas en investigaciones. De conformidad con las reglas vigentes en la materia, las investigaciones relativas al VIH deberán respetar las consideraciones especiales de las personas con VIH, por esta razón el protocolo de investigación y los investigadores quedan sujetos a las disposiciones de esta ley, la Ley General de Salud, así como a cualquier otra normativa o disposición, nacional o internacional vigente en el país.

Ninguna persona con VIH podrá ser objeto de experimentos científicos, sin haber sido advertida de la condición experimental y de los riesgos de la misma, y sin que medie y se formalice su debido consentimiento informado previo, o el de quien legalmente esté autorizado para otorgarlo válidamente.

Artículo 35- Protocolos de Salud. La Caja Costarricense de Seguro Social, proveerá tratamiento antirretroviral de emergencia en los establecimientos públicos de salud, a las personas que hayan sido víctimas de violación sexual y accidentes laborales en las que han sido o podrían haber sido expuestas a riesgo de infección por el VIH, de acuerdo con el protocolo que al efecto se establezca. Igualmente deberá garantizar el acceso a la prueba y a que ésta se le realice de manera oportuna y brindará acompañamiento y apoyo a la persona mientras dure el tratamiento de emergencia.

En casos de accidentes laborales, las personas trabajadoras que se hayan visto expuestas al riesgo de infección por el VIH, la responsabilidad de proveer la terapia antirretroviral será del Instituto Nacional de Seguros.

El Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social deberán velar por el cumplimiento de estas disposiciones e incluir la distribución adecuada de agujas y jeringas esterilizadas y otros programas de inyección segura, de condones masculinos y condones femeninos, así como la terapia antirretroviral de emergencia dentro de las normas de atención integral del VIH en centros de salud públicos y privados.

Los establecimientos de salud estarán obligados a conocer dichos protocolos y a realizar las referencias de las personas usuarias a los establecimientos de salud correspondientes.

Artículo 36- Tratamientos. La Caja Costarricense de Seguro Social deberá investigar, desarrollar, importar, comprar y mantener en existencia y suministrar los tratamientos profilácticos y los medicamentos antirretrovirales, garantizando estándares de calidad, de manera oportuna, de acuerdo con las normas institucionales de seguridad farmacológica y con los respectivos protocolos de atención.

El tratamiento antirretroviral y todos aquellos otros que sean necesarios para la atención de las personas con VIH, no serán suspendidos por ninguna razón administrativa, presupuestaria, financiera, de planificación institucional o de otra índole material, con excepción del criterio médico.

Capítulo V
Educación y Capacitación

Artículo 37- Obligaciones de los centros de educación y centros penitenciarios. Se autoriza al Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y al Consejo Nacional de

Enseñanza Superior Universitaria Privada (CONESUP), para que verifiquen en el currículo de carreras formadoras de trabajadores de la salud y de las ciencias sociales, la inclusión de contenidos académicos y profesionales relacionados con la prevención, la atención, la consejería y en enfoque de derechos humanos relacionados con el VIH y sida.

Las instituciones de educación en general, así como la administración de los centros penales del Ministerio de Justicia, contribuirán con la prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, proveyendo información y cualesquiera otros mecanismos o soluciones viables que regule el Ministerio de Salud como ente rector en la materia.

Artículo 38- Ámbito de niñez y adolescencia. Todas las instituciones públicas y privadas que tengan dentro de sus competencias esenciales la protección, defensa o atención de población adolescente y joven, deberán incorporar de forma prioritaria la prevención del VIH en beneficio de esta población, dentro de sus políticas, programas y proyectos, incluyendo información actualizada sobre el condón como medio de prevención.

En particular, las instituciones educativas deberán incorporar en su currículo educativo temarios de educación integral de la sexualidad en el marco de la prevención del VIH.

Capítulo VI
Régimen Penitenciario

Artículo 39- Medidas preventivas en las cárceles. El Ministerio de Justicia, en coordinación con el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social, definirá e implementará las políticas públicas y demás actividades de prevención tendientes a disminuir el riesgo de transmisión del VIH, tanto para las personas privadas de libertad como para su pareja sexual, y para las personas funcionarias del sistema penitenciario. A efectos de la prevención del VIH proveerán condones masculinos y femeninos a la población penitenciaria, de acuerdo con sus condiciones y necesidades individuales o de pareja.

Artículo 40- Atención especializada en salud. Las personas privadas de libertad que requieran atención sanitaria especializada debido a complicaciones causadas por el VIH y sida que no puedan ser atendidas en el centro de reclusión respectivo, deberán recibir tratamiento ambulatorio, internamiento hospitalario o la solución que resulte necesaria e indispensable.

Artículo 41- Cuidado de la persona menor de edad institucionalizado. El Ministerio de Justicia, en coordinación con el Ministerio de Salud y el Patronato Nacional de la Infancia, desarrollarán programas educativos en materia de salud para atender las necesidades especiales de las personas menores de edad institucionalizadas, con el fin de introducir prácticas y estilos de vida saludables, que prevengan la transmisión del VIH u otras infecciones de transmisión sexual.

Las decisiones relacionadas con la notificación a los padres u otra persona responsable acerca del estado serológico VIH positivo de cada persona menor de edad institucionalizada, el consentimiento para tratarle y cualquier otro tipo de intervención necesaria, deberán ser consideradas y procesadas en la misma forma que para el resto de la sociedad, atendiendo especialmente el principio de respeto por el interés superior de las personas menores de edad, de conformidad con la presente ley, el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás legislación vigente sobre la materia.

Artículo 42- Prohibición del aislamiento. Prohíbase la segregación, el aislamiento y las restricciones arbitrarias en contra de las actividades laborales, deportivas, recreativas y de cualquier otra índole legítima, en perjuicio de las personas privadas de libertad con VIH.

Solamente se exceptúan de lo estipulado en el párrafo anterior, los siguientes supuestos:

a) Cuando la convivencia con otras personas privadas de libertad arriesgue la salud del paciente, siempre que medie el consentimiento previo de la persona afectada.

b) Cuando la persona privada de libertad haya sido amenazada con actos de abuso físico o sexual por parte de otra persona privada de libertad, o cuando sea tratada de manera discriminatoria o degradante, siempre que medie el consentimiento previo de la persona afectada.

c) Cuando se trate de una persona privada de libertad que deliberadamente intente o haya intentado infectar con el VIH u otras infecciones de transmisión sexual en perjuicio de otras personas.

Artículo 43- Ejecución de la pena. Las personas privadas de libertad en estado terminal por padecimiento de sida, podrán ser valoradas por el juez ejecutor de la pena para efectos de acceder a los derechos y beneficios humanitarios y de protección a la dignidad de la persona enferma terminal, regulados por el Código Procesal Penal y demás normativa pertinente.

Artículo 44- Reclamación por agravios. De conformidad con las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Personas Reclusas, las personas privadas de libertad con VIH, tienen el derecho de denunciar todo tipo de tratamiento institucional o penitenciario discriminatorio, cruel o degradante, o que incumpla las disposiciones tutelares de esta ley. La denuncia podrá presentarse de manera informal ante las instancias penitenciarias competentes, los organismos nacionales e internacionales, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura o la Defensoría de los Habitantes de la República, y deberá tramitarse y resolverse con prontitud y cumplidamente, sin perjuicio de las medidas cautelares que

correspondan en beneficio de la dignidad de la persona privada de libertad denunciante.

Capítulo VII
Disposiciones de interdicción de la discriminación en los ámbitos social, laboral, familiar, civil y privado

Artículo 45- No discriminación laboral. Queda prohibida toda discriminación laboral contra cualquier persona trabajadora con VIH o sida. En caso de desarrollar alguna enfermedad que le impida continuar con sus actividades habituales, recibirá el trato establecido en la legislación laboral vigente, conforme al enfoque de derechos humanos que le corresponda.

Ningún empleador, público o privado, nacional o extranjero, podrá, por sí mismo ni mediante otra persona, solicitar dictámenes ni certificaciones médicas sobre la condición serológica por VIH a las y los trabajadores para obtener un puesto laboral o conservarlo.

Artículo 46- Obligaciones del Ministerio de Trabajo, empleadores públicos y privados, y organizaciones sindicales o gremiales. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social regulará espacios laborales libres de todo estigma y discriminación por razones vinculadas al VIH/SIDA. También vigilará porque las instancias públicas o privadas no soliciten dictámenes ni certificaciones médicas sobre VIH/sida a los trabajadores con el fin de ejercer presiones indebidas o discriminación por tal condición en cuanto a obtener un puesto laboral o conservarlo.

Todos los empleadores incluirán en sus reglamentos internos de trabajo disposiciones que garanticen información para la prevención del VIH y el respeto por los derechos de las personas trabajadoras sin discriminación por VIH y sida, de acuerdo con la normativa laboral vigente.

Todas las organizaciones o agrupaciones sindicales podrán defender los derechos de las personas con VIH y sus allegados, así como coadyuvar en los esfuerzos por hacer efectivas las disposiciones comprendidas en la presente ley.

Artículo 47- Ámbito familiar. El ejercicio de los derechos y deberes que corresponden a padres o madres de familia, o responsables parentales, en relación con la autoridad parental, no podrán ir en menoscabo del interés superior de las personas menores de edad, en ninguna materia y especialmente en materia de salud sexual, salud reproductiva y prevención del VIH.

Artículo 48- Medios de comunicación. Los medios de comunicación colectiva contribuirán con el cumplimiento de los fines de esta ley, promoviendo o divulgando información útil y veraz que coadyuve a la creación de culturas o estilos de vida

saludables y que velen por el respeto de los derechos fundamentales de las personas VIH positivas y sida, y su no discriminación por tal motivo.

Artículo 49- Sector privado. Como parte de las políticas internas para las personas empleadas en los lugares de trabajo, así como en el marco de sus planes de responsabilidad social empresarial, las empresas deberán incluir actividades y programas destinados a la promoción de estilos de vida saludables, a la prevención del VIH y otras ITS, así como al respeto de los derechos de las personas con VIH y a su no estigmatización ni discriminación por esa condición.

Título IV
Reformas a otras leyes

Artículo 50- Reformas al Código de Trabajo. Refórmese el artículo 71 inciso f), del Código de Trabajo, Ley N.° 2, de 27 de agosto de 1943; además se adiciona al artículo 81 un inciso m), y al artículo 83 un inciso k). Los textos dirán:

Artículo 71-

[…]

f) Ningún patrono podrá solicitar pruebas de VIH/SIDA para efectos de contratación laboral o permanencia en el trabajo. Cuando requiera pruebas de salud podrá incluir exámenes hematológicos (pruebas de sangre) solamente en caso de que exista criterio médico que demuestre su necesidad y únicamente para efectos de protección de la salud de la persona trabajadora.

Artículo 81-

[…]

m) Cuando la persona trabajadora incurra en actos discriminatorios contra otra persona trabajadora, por razones de VIH/SIDA.

Artículo 83-

[…]

k) Cuando el patrono incurra en actos discriminatorios contra la persona trabajadora por razones de VIH/SIDA.

Artículo 51- Supletoriedad. Para lo no dispuesto en esta ley, tendrá valor supletorio la Ley General de Salud, N.° 5395, de 30 de octubre de 1973, así como la Ley Regulatoria de los Derechos y Deberes de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud Públicos y Privados, Ley N.º 8239 de 19 de abril de 2002 y sus reformas.

TRANSITORIO ÚNICO- El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente ley, dentro del término improrrogable de tres meses contados a partir de su publicación.

Rige a partir de su publicación.

Enrique Sánchez Carballo

José María Villalta Flórez-Estrada

Sylvia Patricia Villegas Álvarez

Paola Viviana Vega Rodríguez

Mario Castillo Méndez

Zoila Rosa Volio Pacheco

Nielsen Pérez Pérez

Laura Guido Pérez

Gustavo Alonso Viales Villegas

Víctor Manuel Morales Mora

Catalina Montero Gómez

Carolina Hidalgo Herrera

Wagner Alberto Jiménez Zúñiga

Silvia Vanessa Hernández Sánchez

Pedro Miguel Muñoz Fonseca

Pablo Heriberto Abarca Mora

Diputados y diputadas

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos.

1 vez.—(IN2018295623).

REFORMA Y ADICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS E INCISOS DE LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA, N.° 7586 DE 10 DE ABRIL DE 1996 Y SUS REFORMAS Y LA LEY DE ARMAS Y EXPLOSIVOS, N.° 7530 DE 10 DE JULIO DE 1995 Y SUS REFORMAS, PARA PREVENIR Y EVITAR EL USO DE ARMAS DE FUEGO EN SITUACIONES DE VIOLENCIA DOMÉSTICA Y PROTEGER LA VIDA DE LAS VÍCTIMAS

Expediente N.° 21.032

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El presente proyecto de ley pretende reformar la Ley contra la Violencia Doméstica, N° 7586 de 10 de abril de 1996, y la Ley de Armas y Explosivos, N° 7530 de 10 de julio de 1995, para prevenir y evitar el uso de armas de fuego en situaciones de violencia doméstica y proteger la vida de las víctimas, promoviendo para ello el decomiso de armas de personas que han incurrido en conductas de violencia doméstica.

Los homicidios cometidos contra mujeres por sus parejas, denominados femicidios, así como aquellos perpetrados por hombres en situaciones de violencia sexual o por ex parejas, llamados homicidios por condición de género, aumentaron significativamente en las últimas décadas. En dos investigaciones realizadas en Costa Rica sobre Femicidio (Carcedo, Ana. *"Femicidio en Costa Rica 1990-1999"*; San José, Costa Rica 2002; e Hidalgo Solís, Ana; *"Globalización del Femicidio: Trata y Explotación Sexual en Costa Rica"*, San José, Costa Rica, 2010) se registra el uso de armas de fuego y armas blancas como los métodos más empleados en la perpetración de femicidios. En definitiva, sin el uso de armas de fuego el perpetrador solo podría llevar a cabo la acción procurando la extrema proximidad con la víctima.

Las estadísticas confirman los estudios realizados y así, solamente durante el decenio comprendido entre los años 2007-2017, en Costa Rica se han cometido 113 femicidios según la definición de la *Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres* y 199 en el marco de la aplicación de la *Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer,* para **un total de 312 asesinatos de mujeres por su condición de mujer**. Lamentablemente, muchas de estas mujeres asesinadas habían realizado la denuncia por violencia y

parte de ellas contaba con algunas de las medidas de protección, establecidas en el artículo 3 de la Ley contra la Violencia Doméstica.

No obstante lo anterior, las medidas de protección indicadas en el artículo 3 inciso e) de la supracitada normativa, en lo referente a armas de fuego únicamente disponen: "*Decomisar las armas y los objetos que se utilicen para intimidar, en posesión de la presunta persona agresora y ordenar la cancelación de la portación de armas*." Lo anterior en primer término excluye del decomiso otras armas de fuego en posesión del presunto agresor que no hayan sido utilizadas para la intimidación denunciada.

Adicionalmente implica que, cuando se imponen medidas por violencia doméstica, el juez decomisa el arma de fuego y la envía a custodia a la Dirección General de Armamento, y cuando cesan las medidas, ordena a esa Dirección la devolución de la misma a la persona agresor, aunque esta tenga cancelado el permiso de portación. Asimismo, en los casos de decomiso administrativo de un arma de fuego por parte de la Fuerza Pública en violencia doméstica, el arma también se envía a la Dirección de Armamento, se procede a la cancelación del permiso de portación y lamentablemente se debe entregar el arma por tratarse de un "*bien*" y no mediar una resolución judicial de decomiso, situación que limita considerablemente la aplicación de las medidas de protección en casos de violencia doméstica, poniendo con ello en riesgo la vida de cientos de personas cada año.

En resumen, **cuando se presenta una denuncian de violencia doméstica la autoridades imponen una sanción pecuniaria por el permiso de portación, pero irónicamente el Estado costarricense le está entregando un arma de fuego al agresor en sus manos.**

Ante este escenario, el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) impulsó la firma de un Decreto (N° 41240-MP-MCM), una Directriz (N° 18-MP-MCM) y un Plan de Acciones Interinstitucionales, publicados en el Diario Oficial la Gaceta N° 177 del 26 de septiembre de 2018, que declaran de interés prioritario nacional la prevención y la atención de la violencia contra las mujeres, incluyendo en lo relativo al control de acceso a armas de fuego el compromiso expreso de impulsar la reforma al reglamento de decomiso y destrucción de armas, esto en aquellos casos que fueron utilizadas para cometer violencia intrafamiliar o cualquier forma de violencia contra las mujeres con el objetivo de que estas armas nunca se devuelvan a los ofensores.

El decomiso de armas previsto en la *Ley contra la Violencia Doméstica* mediante el artículo 3 inciso e), responde al cumplimiento de las obligaciones encomendadas en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida también como la Convención Belem do Pará, ratificado en nuestro país mediante la Ley Nº 7499, de 2 de mayo de 1995. Particularmente, se refleja en esta disposición la obligación de debida diligencia para prevenir la violencia contra las mujeres. Así las cosas, la Ley contra la Violencia Doméstica refleja el mandato de Belem do Pará desde su artículo primero donde establece

como fin que "*Esta Ley regulará la aplicación de las medidas necesarias para garantizar la vida, integridad y dignidad de las víctimas de violencia doméstica…".*

Otra atención merece la protección al derecho de las mujeres a vivir sin violencia. La Convención de Belém do Pará es el primer instrumento Internacional de Derechos Humanos que reconoció la violencia contra las mujeres como una violación de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales y la necesidad de eliminar la violencia contra las mujeres como condición indispensable para su desarrollo individual y su plena participación en todas las esferas de la vida.

Al confrontar el derecho a poseer y portar armas con el derecho a vivir sin violencia no hay duda de que el Estado debe orientar su protección a aquel que forma parte del conjunto de Derechos Humanos, el derecho a vivir sin violencia.

El deber de convencionalidad, derivado de la obligación de debida diligencia, obliga a los Estados parte a aplicar las disposiciones establecidas en los instrumentos internacionales suscritos por el país sin la posibilidad de alegar disposiciones de derecho interno contrarias a la Convención. En el caso particular de la Convención de Belém do Pará, mediante resolución N° 2313-95 de 9 de mayo de 1995, la Sala Constitucional fijó la jerarquía de los instrumentos internacionales de derechos humanos así:

> "*(…) en tratándose de instrumentos internacionales de Derechos Humanos vigentes en el país, no se aplica lo dispuesto por el artículo 7 de la Constitución Política, ya que el 48 Constitucional tiene norma especial para los que se refieren a derechos humanos, otorgándoles una fuerza normativa del propio nivel constitucional. Al punto de que, como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Sala, los instrumentos de Derechos Humanos vigentes en Costa Rica tienen no solamente un valor similar a la Constitución Política, sino que en la medida en que otorguen mayores derechos o garantías a las personas, priman por sobre la Constitución*."

La jurisprudencia constitucional ha dejado establecido que la portación de armas de fuego no es un derecho constitucional sino meramente legal, susceptible de ser regulado por el Estado y restringido, de conformidad con los límites establecidos en el artículo 28 de nuestra Constitución Política por medio de disposición legislativa como la que la presente ley propone. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ha reafirmado recientemente que el Estado costarricense puede y debe establecer los controles que considere pertinentes para el acceso y portación de armas de fuego, mediante en la Resolución Nº 2010-002479, del cinco de febrero de dos mil diez. De esta manera, los señores magistrados indicaron que:

> *"Costa Rica es un país con vocación pacifista y sin ejército, que promueve la utilización del diálogo y negociación como mecanismos de solución de controversias. Diversos estudios empíricos han demostrado que las sociedades cuyos habitantes portan una mayor cantidad de armas son sociedades donde se cometen más delitos violentos contra la vida e*

integridad física de las personas. De ahí que el Estado costarricense y diversos organismos internacionales se ocupen de promover y difundir campañas contra la utilización de armas y a favor del desarme y el desarrollo humano. El artículo 28 de la Constitución Política establece que las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley. ***En el caso de la utilización de armas, es claro que se está ante una actividad que sí es susceptible de causar daños a terceros, por lo que el Estado puede legítimamente regularla.*** *Es así como se reconoce el derecho de rango legal a portar y utilizar armas, con fines de seguridad y de defensa. Así lo reconoció la jurisprudencia de este Tribunal en sentencia número 1998-02645 de las quince horas treinta y tres minutos del veintiuno de abril de mil novecientos noventa y ocho, (…)*

De todo lo cual se desprende que no existe ningún derecho de rango constitucional a portar o tener armas*, y que aunque se reconoce el derecho de los particulares a defenderse de ataques ilegítimos -incluso utilizando armas para ello-, el Estado debe tener un estricto control acerca del tipo y cantidad de armas en manos de la sociedad civil y los requisitos para su portación."* (El resaltado no es del original).

El decomiso de armas previsto en el inciso e) del artículo 3 de la *Ley contra la Violencia Doméstica* debe analizarse en concordancia con las disposiciones con las que el Estado costarricense ha venido regulando la posesión y el uso de armas, en particular mediante la Ley de Armas y Explosivos. Con base en ello, ante denuncias de violencia doméstica, la presente iniciativa propone: 1) extender el decomiso de las armas involucradas en situaciones de violencia doméstica a cualesquiera otras armas de fuego que se encuentren en posesión de la presunta persona agresora, reconociendo que una persona que ha incurrido en una conducta de violencia doméstica no es apta para portar armas de fuego por el riesgo que esto implica para la vida de otras personas; 2) cancelar el permiso para portar toda arma de fuego cuando el portador incurra en conductas de violencia doméstica, resolviendo así las ambigüedades y contradicciones de la ley que han debilitado el decomiso de armas y facilitado el acceso a estas por parte de femicidas; 3) ordenar la destrucción de las armas cuando se ha demostrado una conducta de violencia doméstica y se ha cancelado el permiso de portación, previa notificación al interesado teniendo derecho a interponer los recursos ordinarios de revocatoria y en apelación en el plazo de tres días hábiles; y 4) armonizar las disposiciones de la Ley de Armas y Explosivos con la Ley de Violencia Doméstica, especialmente en lo relativo a las causales de cancelación de permisos para la portación de armas y los casos en se permite el decomiso de armas.

En virtud de las consideraciones expuestas, sometemos a conocimiento de la Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley para su estudio y aprobación por parte de los señores diputados y las señoras diputadas.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA Y ADICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS E INCISOS DE LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA, N.° 7586 DE 10 DE ABRIL DE 1996 Y SUS REFORMAS Y LA LEY DE ARMAS Y EXPLOSIVOS, N.° 7530 DE 10 DE JULIO DE 1995 Y SUS REFORMAS, PARA PREVENIR Y EVITAR EL USO DE ARMAS DE FUEGO EN SITUACIONES DE VIOLENCIA DOMÉSTICA Y PROTEGER LA VIDA DE LAS VÍCTIMAS

ARTÍCULO 1- Se reforma el inciso e) del artículo 3 y el inciso d) del artículo 20, y se adicionan dos nuevos artículos 20 bis y 20 ter a la Ley contra la Violencia Doméstica, N° 7586 de 10 de abril de 1996 y sus reformas. El texto dirá en adelante:

Artículo 3- Medidas de protección

Cuando se trate de situaciones de violencia doméstica, la autoridad competente ordenará cualquiera de las siguientes medidas de protección:

(…)

e) Decomisar las armas y los objetos que se utilicen para intimidar **o agredir, así como cualesquiera otras armas de fuego que se encuentren** en posesión de la presunta persona agresora y ordenar la cancelación de la portación de armas.

(…)

Artículo 20- Delimitación de competencias.

Las autoridades de policía tienen el deber de intervenir en las situaciones de violencia doméstica, de oficio o cuando sean requeridas por las víctimas o por terceras personas. En estos casos, deberán:

(…)

d) Decomisar las armas y los objetos utilizados para amenazar o agredir, **así como cualesquiera otras armas de fuego que se encuentren en posesión de la persona agresora** y ponerlos a la orden de la autoridad judicial respectiva. (…)

Artículo 20 bis- Cancelación de permisos de portación de armas

Cuando se trate de situaciones de violencia doméstica, se procederá al decomiso de todas las armas de fuego que posea la persona agresora y serán remitidas a la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública para su debida custodia.

La autoridad policial comunicará al Departamento de Control de Armas y Explosivos para que inicie el procedimiento administrativo tendiente a la cancelación de la inscripción del arma de fuego y su permiso de portación en caso de que se le hubiere otorgado.

Artículo 20 ter- Destrucción de armas de fuego

En caso de que el Departamento después del debido proceso, determine la procedencia de cancelar la inscripción y el permiso de portación de armas de fuego, en casos de violencia doméstica, lo notificará al interesado teniendo derecho a interponer los recursos ordinarios de revocatoria y en apelación en el plazo de tres días hábiles.

Firme la resolución de cancelación, el Departamento lo comunicará a la Dirección para que proceda con la destrucción de las armas de fuego correspondientes.

ARTÍCULO 2- Se adiciona un nuevo inciso i) al artículo 49, y se reforma el párrafo primero del artículo 84 de la Ley de Armas y Explosivos, N° 7530 de 10 de julio de 1995 y sus reformas, que en adelante dirán:

Artículo 49- Causas de cancelación del permiso.

Con respeto al debido proceso, el Departamento cancelará el permiso para portar armas, sin perjuicio de las sanciones penales que procedan, cuando:

(…)

i) **Los portadores de las armas incurran en conductas de violencia doméstica, de conformidad con la Ley contra la Violencia Doméstica, N° 7586 de 10 de abril de 1996 y sus reformas.**

(…)

Artículo 84- Comiso de armas

Las armas permitidas inscritas en el Departamento, solo podrán caer en comiso en favor del Estado, cuando con ellas se cometa un delito según lo dispuesto en el artículo 110 del Código Penal **o los portadores de armas incurran en una conducta de violencia de doméstica, según lo dispuesto en la Ley contra la**

Violencia Doméstica, N° 7586 de 10 de abril de 1996 y sus reformas. En estos casos, se cancelarán las inscripciones correspondientes.

(…)

Rige a partir de su publicación.

José María Villalta Flórez-Estrada

Nielsen Pérez Pérez

Ivonne Acuña Cabrera

Shirley Díaz Mejía

Paola Alexandra Valladares Rosado

Mileidy Alvarado Arias

Diputado y diputadas

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de la Mujer.

1 vez.—(2018295626)

ADICIÓN DE UN INCISO E) AL ARTÍCULO 17 DE LA LEY N.º 7935, LEY INTEGRAL PARA LA PERSONA ADULTA MAYOR

Expediente N.° 21.034

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El presente proyecto de ley pretende reformar el artículo 17 de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, con el fin de ampliar la gama de servicios y la atención a la población adulta mayor en todas las provincias de Costa Rica.

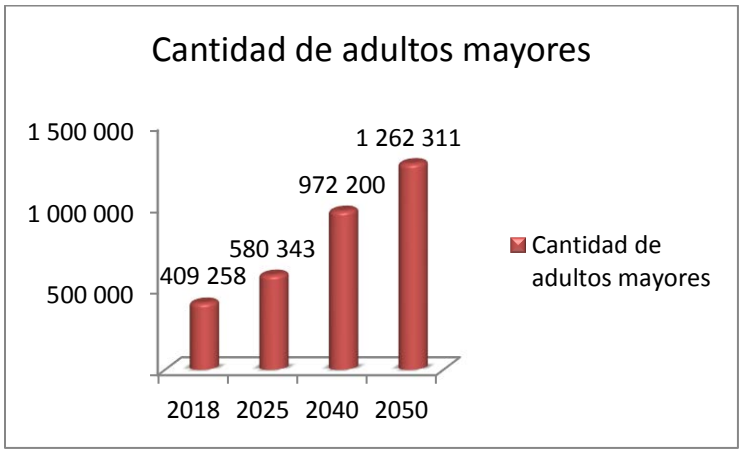
La vida y la salud, como valores supremos de las personas, están presentes y señalados como de obligada tutela por parte del Estado, no solo en la Constitución Política, sino también en los diversos instrumentos internacionales suscritos por el país, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y los Deberes del Hombre y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

La salud es un derecho humano, por lo que la sociedad debe inquirir los medios para garantizarla. La respuesta a las necesidades en salud es un importante componente del desarrollo social que, a la vez, se relaciona con la calidad de vida y el nivel de bienestar de la población, lo que incide de manera directa en el desarrollo de los pueblos.

Hoy, cuando la esperanza de vida del costarricense al nacer, en términos generales, es de diez años más (80,3) que en el siglo pasado, el país enfrenta grandes desafíos, sobre todo si se toma en cuenta que la cantidad de adultos mayores en el país va en aumento.

El envejecimiento de la población avanza a pasos de gigante; por ello, debemos prepararnos para una Costa Rica cada vez con más adultos mayores, a tal punto que en los próximos años esta población prácticamente se verá triplicada. El siguiente cuadro muestra un panorama claro.

Gráfico N.° 1
Proyección de cantidad de población adulta mayor de 65 años en adelante, Costa Rica 2018



Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEC, Estadísticas demográficas 2011-2050. Proyecciones nacionales. Población por años calendario, según sexo y grupos especiales de edades.

En las últimas décadas, en Costa Rica se ha experimentado un cambio en la pirámide poblacional a nivel nacional, en donde las tasas de natalidad y mortalidad han tenido un descenso y la esperanza de vida se ha acrecentado, lo que genera un aumento en la población de personas adultas mayores.

A partir del año 2035 el país debe preparase para un envejecimiento poblacional más marcado. Para entonces se espera que la mayor parte de la población se encuentre entre los 35 y 49 años, mientras que al 2045 el mayor porcentaje estaría entre las edades de 49 a 59 y el número de personas con edades de 75 o más sería un grupo notorio en la pirámide poblacional.

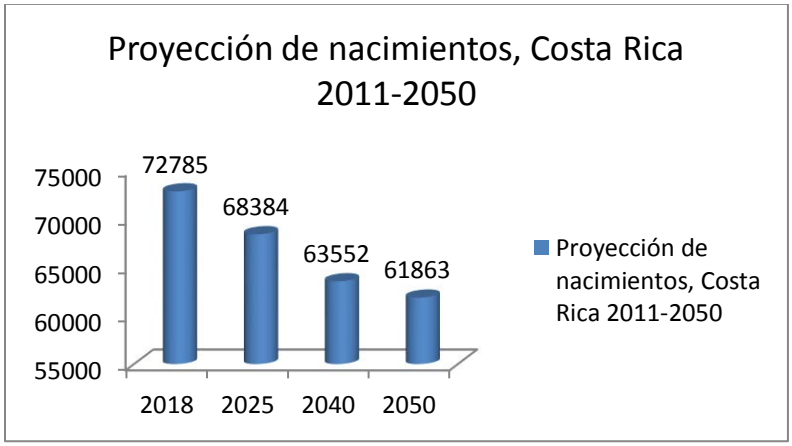
La rapidez del incremento del envejecimiento demográfico también alerta sobre la urgencia de satisfacer las necesidades en salud e incluir la atención de enfermedades crónicas emergentes, el Alzheimer y otras demencias (las cuales cusan distintos tipos de problemas físicos, sociales y psicológicos).

Por ello, es necesario extender la cobertura de los servicios de salud en la satisfacción de la demanda y, en consecuencia, es preciso encausar el enfoque tradicional de las acciones dirigidas a esta población hacia un enfoque más integral desde la promoción de la salud y la atención primaria en salud.

Lo anterior es producto de la convergencia de dos transformaciones importantes ocurridas en las últimas décadas; la primera es el aumento de la esperanza de vida que hace que cada vez más individuos lleguen a edades más avanzadas y la segunda es la disminución en la fecundidad que hace que haya relativamente menos personas en las edades más jóvenes.

Esos dos procesos han tenido lugar en nuestro país a un ritmo más acelerado que en los países más desarrollados, lo que se traduce en también un mucho más acelerado proceso de envejecimiento poblacional.

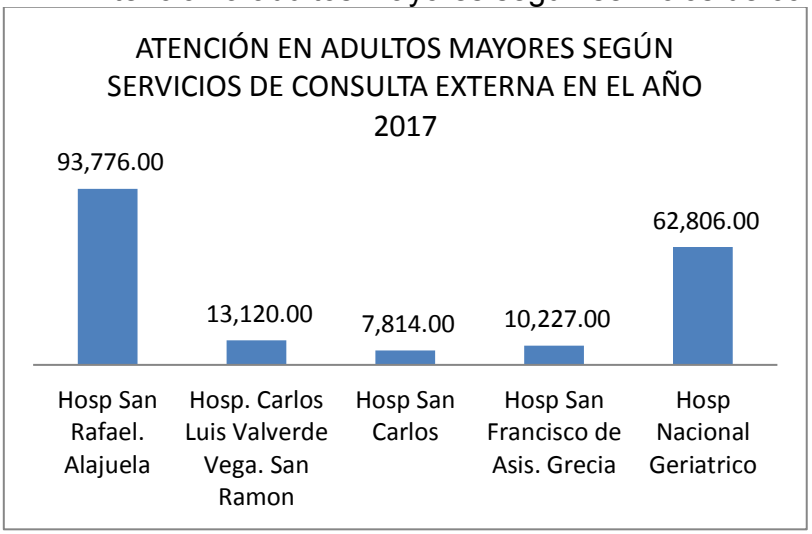
Gráfico N.° 2
Proyección de nacimientos para 2018, 2025, 2040 y 2050, Costa Rica



Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEC, Estadísticas demográficas 2011-2050. Proyecciones nacionales. Población por años calendario, según sexo y grupos especiales de edades.

También, es de destacar que la población adulta mayor es la que mantiene la mayor ocupación en cuanto a consulta externa y ocupación en camas. De hecho, las cifras de atención en consulta externa de adultos mayores en el Hospital San Rafael de Alajuela, ubicado en la provincia de Alajuela, cantón Central, son alarmantes, así se desprende del siguiente gráfico. El hospital de Alajuela atiende actualmente una población mayor que el mismo Hospital Nacional Geriátrico.

Gráfico N.° 3
Atención a adultos mayores según servicios de consulta externa, 2017



Fuente: Creación propia, datos suministrados por Conapán y centros hospitalarios.

Esta situación demanda además una estrategia operativa clara sobre el sistema de salud, el cual requerirá mejores hospitales, médicos geriatras, disponer de más medicamentos y, en general, aumentar la inversión per cápita en los adultos mayores.

Hoy el Hospital Geriátrico Nacional es insuficiente para responder adecuadamente a toda esta problemática; por ello, es urgente aumentar la oferta de servicios destinados a los adultos mayores y hacer todo lo posible para que reciban atención especializada cada vez más cerca de sus casas.

Dadas las necesidades urgentes en materia de salud y sobre todo en prevención y atención a la persona adulta mayor, es necesario avanzar en la creación de mecanismos de apoyos innovadores que favorezcan una calidad de vida óptima para la personas y retrasen la aparición de discapacidades o enfermedades.

Esto se logra al mejorar los entornos para maximizar la capacidad funcional en cada etapa de la vida y hacer posible la independencia y la productividad en la adultez.

Así las cosas, se hace necesario que Costa Rica avance en esa dirección, es decir, que brinde respuestas concretas y afirmativas a las necesidades de los problemas sociales.

En ese sentido, las unidades geriátricas especializadas propuestas en este proyecto de ley constituyen una de las aspiraciones por las que el Estado costarricense debería inclinarse de forma concreta.

También, es un deber de nosotros como diputadas y diputados prever las necesidades de la población costarricense y poder adelantarnos con respuestas oportunas y eficientes.

Considerando los razonamientos anteriores sobre la realidad de nuestro país, someto al conocimiento de todas las diputadas y diputados el siguiente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

ADICIÓN DE UN INCISO E) AL ARTÍCULO 17 DE LA LEY N.º 7935, LEY INTEGRAL PARA LA PERSONA ADULTA MAYOR

ARTÍCULO ÚNICO- Se adiciona un inciso e) al artículo 17 de la Ley N. º 7935, Ley Integral para la Persona Adulta Mayor. El texto es el siguiente:

Artículo 17- Deberes estatales

Para brindar servicios en favor de las personas adultas mayores corresponderán al Estado, por medio de sus instituciones, promover y desarrollar:

e) La creación de servicios y unidades geriátricas especializadas en la atención de la población adulta mayor en todo el país.

Rige a partir de su publicación.

Nidia Lorena Céspedes Cisneros
Diputada

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Asuntos de Discapacidad y de Adulto Mayor.

1 vez.—(IN2018295630).

LEY PARA FIJAR TOPES EQUITATIVOS A LAS PENSIONES DE LUJO, REDISEÑAR Y REDISTRIBUIR LOS RECURSOS DE LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOLIDARIA Y CREAR LA FIGURA DE LA JUBILACIÓN OBLIGATORIA EXCEPCIONAL

Expediente N.° 21.035

ASAMBLEA LEGISLTIVA:

Desde hace más de medio siglo, se crearon los primeros regímenes de pensiones en nuestro país. En los 90´s, se aprobaron otras leyes y todas las que existían hasta ese momento también sufrieron reformas durante esa misma década. Y, en los últimos cuatro años, se reformaron todas las leyes para crear las contribuciones solidarias a los regímenes de pensiones del Poder Judicial, JUPEMA y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sobre aquellos montos considerados como excesivos o de lujo, por estimar muy superior la pensión versus los aportes realizados durante la edad laboral, de conformidad con las reglas generales aplicables a la mayoría de las pensiones.

El beneficio social que representa recibir una pensión, cuando no deriva de una operación matemática de cuotas que vayan a justificarla, deja de ser social y justo para convertirse en un beneficio abusivo para un grupo elitista. Esas desigualdades en las asignaciones de las pensiones máximas amparadas a regímenes legales que favorecen a ciertos círculos de poder, ha provocado gran disconformidad en la población que observa como algunos burócratas obtuvieron y luego de fallecidos cedieron jugosas pensiones mientras otros esperan para recibirlas amparados a la ley que los beneficia y les permite servirse con cuchara grande.

No existe una justificación válida para que continúen pagándose pensiones de lujo en nuestro país dentro de un concepto de sostenibilidad global de los regímenes de pensiones, tomando en cuenta aspectos tales como: los parámetros utilizados para fijar la pensión máxima que reciben las personas que cotizan para el régimen de IVM de la CCSS, los porcentajes elevados de financiamiento por parte del Estado y los criterios de proporcionalidad e igualdad que deben respetarse a la hora de otorgar el beneficio social.

Esta pretendida uniformidad o equiparación tanto en los montos máximos de pensión como en las bases exentas de pago, quedarían establecidos en cada uno de los regímenes de pensiones, y el rediseño se fundamenta en los principios de orden, proporcionalidad, solidaridad y justicia tributarias, cobijados bajo la sombrilla

Constitucional que tutela el derecho a una justa distribución de la riqueza, según lo dispone el artículo 50 de la Carta Magna.
Las condiciones y requisitos para el acceso a los beneficios sociales de las pensiones se mantienen incólumes.

Esta iniciativa de ley establece que por encima de los ocho (8) salarios más bajos según la Administración Pública que se trate (sea Poder Judicial, Poder Ejecutivo, el Tribunal Supremo de Elecciones, Magisterio Nacional, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, etc.) se estarían aplicando los porcentajes de las deducciones por concepto de contribución solidaria. Es decir, que hasta ese monto estaría exenta la pensión o jubilación. Esto es una modificación que recae sobre todos los topes de pensiones y jubilaciones, presentes y futuras, establecidos en la legislación vigente.

Actualmente, los salarios utilizados por la legislación vigente para fijar esos topes exentos son de tres tipos: 1) el salario más bajo pagado en el Poder Judicial; 2) el salario más bajo pagado en la Administración Pública, según la escala de sueldos de la Administración Pública emitida por la Dirección General de Servicio Civil; y 3) el salario de un catedrático de la UCR más treinta anualidades y dedicación exclusiva.

Los salarios utilizados para fijar la base exenta ascienden, aproximadamente, a las sumas que se muestran en el siguiente cuadro:

Montos de pensión base exentas del pago de la contribución obligatoria solidaria según la legislación vigente.

Salario más bajo pagado en el Poder Judicial	**Salario más bajo pagado en la Administración Pública**	**Salario de un catedrático de la UCR + 30 anualidades + dedicación exclusiva**
Monto aproximado: ₡ 463.000	Monto aproximado : ₡ 274.800	----------
X 10	X 10	----------
Total base exenta: ₡ 4.630.000	Total base exenta: ₡ 2.740.800	Total base exenta: ₡ 3.917.961.65

Elaboración propia.

Lo que se refleja de los distintos regímenes especiales de pensiones es una enorme desigualdad en los beneficios de una pensión o jubilación.

Este proyecto no pretende unificar los regímenes de pensiones especiales que incluso han logrado superar los controles de Constitucionalidad, sino más bien está enfocado en dar un poco más de uniformidad en los beneficios y cargas, reduciendo las bases exentas de los montos de las pensiones para que puedan aplicárseles las tablas progresivas de la contribución solidaria, sin dejar de mencionar que la reducción del tope base exento propuesto sobrepasa los montos máximos de

pensión dispuestos por la Caja Costarricense del Seguro Social para el régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte.
Se establece así un límite máximo y único para todas pensiones del régimen contributivo y no contributivo que no supera al triple de la pensión máxima general que fija la CCSS para el régimen de IVM.

Las propuestas contenidas en este proyecto de ley para las bases exentas de la contribución solidaria son:

Propuesta de nuevos montos de pensión base exentas
del pago de la contribución obligatoria

Poder Judicial **Ley 7333**	**MTSS** **Leyes 7302 y 9383**	**Magisterio Nacional** **Ley 2248**
Monto aproximado: ₡ 463.000 X8	Monto aproximado : ₡ 274.800 X 8	Monto aproximado : ₡ 274.800 X 8
Total base exenta: ₡ 3.704.000	Total base exenta: ₡ 2.198.400	Total base exenta: ₡ 2.198.400

Elaboración propia.

Las medidas urgentes y necesarias que contempla esta iniciativa le permitiría contar al Poder Ejecutivo con recursos nuevos y constantes, ampliando la base de contribuyentes al bajar el tope exento de la pensión y recolectando ingresos durante el plazo de 10 años, para avanzar en el pago de la deuda interna y externa, en el camino hacia la superación de la crisis fiscal y de desempleo que amenaza la estabilidad económica y el desarrollo del país.

Durante ese plazo decenal, que se estima acoplado a un plan de desarrollo de mediano plazo o lo que vendría a ser igual a dos períodos presidenciales acumulados, más un par de años de la actual administración del Presidente Carlos Alvarado Quesada, se lograría impactar, efectivamente, en el pago oportuno de la deuda total del país buscando también que la Administración pueda planificar paralelamente el desarrollo sostenible que requiere el país.

Un ejemplo del impacto de la propuesta se puede observar en el siguiente cuadro:

RÉGIMEN ESPECIAL	PENSIÓN EN ₡	CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA ACTUAL (10)	PROPUESTA CON LA NUEVA BASE (8 SALARIOS)	DIFERENCIA
PODER JUDICIAL	4 500 000	EXENTA	278 600	278 600
	7 000 000	1 066 500	1 648 000	581 500
MINISTERIO DE TRABAJO	2 800 000	4000	210 560	206 560
	5 000 000	1 108 000	1 821 040	713 040

Ingresos nuevos totales:	₡ 1 779 700

Elaboración propia.

Esta propuesta permitirá que un grupo considerable de pensionados aporte a la contribución obligatoria y solidaria, que en este momento están exentas; y a futuro, con el reestablecimiento de la base exenta del pago de la contribución solidaria por debajo del tope máximo de pensión, acordado para todos los regímenes especiales, se logra dar contenido extendido en el tiempo, a la contribución solidaria.

Las leyes especiales de pensión que serán impactadas por este proyecto de ley, contemplan una modelo reductivo o extintivo para la contribución solidaria puesto que establecen lo siguiente: monto de pensión total máxima es igual a monto base para aplicar la contribución especial solidaria.

Por consiguiente, el resultado de esa operación posee, actualmente, un énfasis en las pensiones que están hoy y estarán por un tiempo, siendo pagadas. Estos montos de pensiones “extra lujo”, por supuesto que sobrepasan la base máxima impuesta, pero, a futuro, cuando se extingan esas pensiones, y sea de aplicación plena la normativa recién aprobada por la Asamblea Legislativa, entonces dejará de tener sentido la contribución solidaria pues ninguna pensión podrá estar por encima de los 10 salarios más bajos de la Administración Pública, del Poder Judicial o de un catedrático de la UCR con pluses, según se trate.

Las principales medidas de urgencia incorporadas en la iniciativa de ley, poseen carácter temporal en el tratamiento de los destinos de los recursos, por lo que al final del plazo dispuesto en esta iniciativa de ley, estarían retornando al destino establecidos en las normas afectadas, es decir, para el sostenimiento de los fondos de pensión y caja única, según corresponda.

A continuación, se presenta el siguiente cuadro comparativo que muestra la situación actual de las contribuciones solidarias.

Cuadro comparativo sobre legislación de las contribuciones solidarias para las pensiones según lo establecido en las Leyes 7333, 2248, 7302 y 9383.

Ley	% Contribución Solidaria	Destino de la contribución Solidaria	Monto máximo exento	Sector
Ley N° 7333, Ley Orgánica del Poder Judicial, del 5 de mayo de 1993 y sus reformas.	Artículo 236 bis. Contribución "***solidaria y redistributiva***" establecida solo por encima de los 10 salarios base más bajos. Escalerilla: 35% 40% 45% y 55% Máximo	Artículo 236 Bis. Párrafo final: "(…) Los recursos que se obtengan con la contribución especial, solidaria y redistributiva, establecida en la presente ley, ingresarán al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial."	**"Artículo 225.-** Ninguna jubilación podrá ser superior a diez veces el salario base del puesto más bajo pagado en el Poder Judicial, ni inferior a la tercera parte del salario base del puesto más bajo pagado en el Poder Judicial. El monto de las pensiones y las jubilaciones en curso de pago y las que se otorguen en el futuro se reajustará por variaciones en el índice de precios al consumidor (IPC), definido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)." **"Artículo 236 bis- Contribución especial, solidaria y redistributiva de los pensionados y jubilados.** Además de la cotización común establecida en el artículo anterior, los pensionados y los jubilados, cuyas prestaciones superen los montos que se fijarán, contribuirán de forma especial, solidaria y redistributiva, de acuerdo con la siguiente tabla: a) Sobre el exceso del tope establecido en el artículo 225 y hasta por el veinticinco por ciento (25%) de dicho tope, contribuirán con el treinta y cinco por ciento (35%) de tal exceso. b) Sobre el exceso del margen anterior y hasta por un veinticinco por ciento (25%) más, contribuirán con	Funcionarios del Poder Judicial.

			el cuarenta por ciento (40%) de tal exceso. c) Sobre el exceso del margen anterior y hasta por un veinticinco por ciento (25%) más, contribuirán con el cuarenta y cinco por ciento (45%) de tal exceso. d) Sobre el exceso del margen anterior y hasta por un veinticinco por ciento (25%) más, contribuirán con un cincuenta por ciento (50%) de tal exceso. e) Sobre el exceso del margen anterior contribuirán con un cincuenta y cinco por ciento (55%). En ningún caso, la suma de la contribución especial, solidaria y redistributiva y la totalidad de las deducciones que se apliquen por ley a todos los pensionados y jubilados del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, podrá representar más del cincuenta y cinco por ciento (55%) respecto de la totalidad del monto bruto de la pensión que por derecho le corresponda al beneficiario. Para los casos en los cuales esta suma supere el cincuenta y cinco por ciento (55%) respecto de la totalidad del monto bruto de la pensión, la contribución especial se reajustará de forma tal que la suma sea igual al cincuenta y cinco por ciento (55%) respecto de la totalidad del monto bruto de la pensión. Los recursos que se obtengan con la contribución especial, solidaria y redistributiva, establecida en la presente ley, ingresarán al Fondo de	

			Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.”	
Ley N° 2248, Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, del 5 de setiembre de 1958 y sus reformas.	“CAPITULO VI **Cotizaciones** **Artículo 71.- Contribución especial, solidaria y redistributiva de los pensionados y jubilados.** Además de la cotización común establecida en el artículo anterior, los pensionados y los jubilados cuyas prestaciones superen los montos que se fijarán, **contribuirán en forma especial, solidaria y redistributiva, de acuerdo con la siguiente tabla:** a) Sobre el exceso del tope establecido en el artículo 44, y hasta por el veinticinco por ciento (25%) de dicho tope, contribuirán con el veinticinco por ciento (25%) de tal exceso. b) Sobre el exceso del margen anterior y hasta por un veinticinco por ciento (25%) más, contribuirán con el treinta y cinco por ciento (35%) de tal exceso. c) Sobre el exceso del margen anterior y hasta por un veinticinco por ciento (25%) más, contribuirán con el cuarenta y cinco por ciento (45%) de tal exceso. d) Sobre el exceso del margen anterior y hasta por un veinticinco por ciento (25%) más, contribuirán con un cincuenta y cinco por ciento (55%) de tal exceso. e) Sobre el exceso del margen anterior y hasta por un veinticinco por ciento (25%) más, contribuirán con un sesenta y cinco por ciento (65%). f) Sobre el exceso del margen anterior contribuirán con un	**Hay un vacío legal: No se estableció en la ley ninguna disposición respecto al destino de esos recursos.**	**Artículo 44.-Montos máximos y mínimos de pensión**. Los derechos por vejez, invalidez o supervivencia que se otorguen **no superarán el monto equivalente al salario de un catedrático de la Universidad de Costa Rica, con la sola consideración de treinta anualidades y dedicación exclusiva.** -**Nota:** El salario aproximado de un catedrático de la UCR con los pluses indicados ronda aproximadamente los tres millones ochocientos cuarenta mil colones (₡3.917.961,65).	Funcionarios del Magisterio Nacional: **Sector Educativo.** **Artículo 1.- Campo de aplicación.** Esta Ley regula lo relativo a las pensiones y jubilaciones correspondientes a los funcionarios del Magisterio Nacional. El Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional está compuesto por los siguientes regímenes: **a)** El régimen de pensiones otorgadas al amparo de la Ley Nº 2248, de 5 de setiembre de 1958, y sus reformas, excepto la reforma integral realizada mediante la Ley Nº 7268, de 14 de noviembre de 1991. **b)** El régimen de pensiones otorgadas al amparo de la reforma introducida por la Ley Nº 7268, de 14 de noviembre de 1991. **c)** El Régimen de capitalización

	setenta y cinco por ciento (75%).”			colectiva de pensiones y jubilaciones, regulado en el título II de esta Ley. **d)** El Régimen transitorio de reparto, regulado en el título III de la presente Ley.” **Incluye las pensiones Universidades Públicas.**
Ley N° 7302, Creación del Régimen General de Pensiones con cargo al presupuesto Nacional, de otros regímenes especiales y reforma a la Ley 7092 del 21 de abril de 1998, y sus reformas, Ley de Impuesto sobre la renta, del 8 de junio de 1998 y sus reformas. **Ley Marco de contribuciones especiales de los regímenes**	**Artículo 11.-Párrafo final. (…)** En ningún caso, la totalidad de las deducciones que se apliquen a todos los pensionados y jubilados cubiertos por el presente artículo, incluida la contribución especial, solidaria y redistributiva correspondiente, podrá representar más del cincuenta y cinco por ciento (55%), respecto de la totalidad del monto de la pensión que por derecho le corresponda al beneficiario. Para los casos en los cuales esta suma supere el cincuenta y cinco por ciento (55%), respecto de la totalidad del monto bruto de la pensión, la contribución especial se reajustará de forma tal que la suma sea igual al cincuenta y cinco por ciento (55%), respecto de la totalidad del monto bruto de la pensión." **Ley Marco de contribuciones especiales de los regímenes de pensiones, Ley N°9383, del 29 de julio de 2016.** “**ARTÍCULO 3.- Contribución especial, solidaria y**	Caja Única del Estado. **“Artículo 11. (…)** **Los recursos que por concepto de cotizaciones se recauden ingresarán a la caja única del Estado; no obstante, el Poder Ejecutivo deberá garantizar que dichos recursos se asignen para el pago oportuno de los regímenes especiales de pensiones con cargo al presupuesto nacional. (…).”** **Ley 9383. ARTÍCULO 4.- Destino de los recursos.** “Los recursos que se obtengan	**“ARTÍCULO 6**.- La prestación económica a otorgar, al momento de la declaración de la jubilación o pensión de los regímenes contributivos regulados en la presente ley, no podrá exceder el monto máximo que genere la suma resultante de **diez veces el salario base más bajo pagado en la Administración Pública**, según la escala de sueldos de la Administración Pública emitida por la Dirección General de Servicio Civil.”	Funcionarios públicos del Poder Ejecutivo cobijados por los regímenes regulados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. **Ley 9383. Artículo 2. Párrafo final.** “(…) Esta ley no será aplicable a las personas cubiertas por el Régimen de

de pensiones, Ley N°9383, del 29 de julio de 2016.	**redistributiva de los pensionados** Además de la cotización a que se refiere el artículo 11 de la Ley N.° 7302, Creación del Régimen General de Pensiones con Cargo al Presupuesto Nacional, de Otros Regímenes Especiales y Reforma de la Ley N.° 7092, Ley del Impuesto sobre la Renta, de 21 de abril de 1988, y sus reformas, de 8 de julio de 1992, los pensionados y jubilados cubiertos por el artículo 2 de la presente ley, exceptuando al régimen del Magisterio Nacional, del Poder Judicial e Invalidez, Vejez y Muerte, cuyas prestaciones superen la suma resultante de diez veces el salario base más bajo pagado en la Administración Pública, según la escala de sueldos de la Administración Pública emitida por la Dirección General de Servicio Civil, contribuirán de forma especial, solidaria y redistributiva, según se detalla a continuación: a) Sobre el exceso del monto resultante de diez veces el salario base más bajo pagado en la Administración Pública, según la escala de sueldos de la Administración Pública emitida por la Dirección General de Servicio Civil y hasta por el veinticinco por ciento (25%) de dicha suma, contribuirán con el veinticinco por ciento **(25%)** de tal exceso. b) Sobre el exceso del margen anterior y hasta por un veinticinco por ciento (25%) más, contribuirán con el treinta y cinco por ciento (35%) de tal exceso. c) Sobre el exceso del margen anterior y hasta por un veinticinco por ciento (25%) más, contribuirán con el	con la contribución especial, solidaria y redistributiva, establecida en la presente ley, ingresarán a la caja única del Estado; no obstante, el Poder Ejecutivo deberá garantizar que dichos recursos se asignen para el pago oportuno de los regímenes especiales de pensiones con cargo al presupuesto nacional.”		Invalidez, Vejez y Muerte que administra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), ni a los regímenes de pensiones y jubilaciones del Magisterio Nacional ni al del Poder Judicial.”

	cuarenta y cinco por ciento (45%) de tal exceso. d) Sobre el exceso del margen anterior y hasta por un veinticinco por ciento (25%) más, contribuirán con un cincuenta y cinco por ciento (55%) de tal exceso. e) Sobre el exceso del margen anterior y hasta por un veinticinco por ciento (25%) más, contribuirán con un sesenta y cinco por ciento (65%). f) Sobre el exceso del margen anterior contribuirán con un setenta y cinco por ciento **(75%).** En ningún caso, la suma de la contribución especial, solidaria y redistributiva y la totalidad de las deducciones que se apliquen a todos los pensionados y jubilados cubiertos por la presente ley podrá representar más del cincuenta y cinco por ciento (55%) respecto de la totalidad del monto bruto de la pensión que por derecho le corresponda al beneficiario. Para los casos en los cuales esta suma supere el cincuenta y cinco por ciento (55%), respecto de la totalidad del monto bruto de la pensión, la contribución especial se reajustará de forma tal que la suma sea igual al cincuenta y cinco por ciento (55%) respecto de la totalidad del monto bruto de la pensión.”			
Proyecto de ley Xiomara Rodríguez Hernández.	Sobre el monto máximo exento que serían los ocho (8) salarios más bajos según cada régimen existente. La contribución solidaria se aplicaría sobre la totalidad del exceso de ese monto máximo exento, y se fijará, luego de aplicadas las deducciones de ley, de conformidad con las	Destino específico: pago de deuda interna y externa por un plazo de hasta 10 años.	El monto máximo exento general para todos los regímenes especiales de pensiones sería de ocho (8) salarios más bajos.	Todos los regímenes contributivos y no contributivos.

	tablas de contribución progresiva establecidas en cada ley hasta por un porcentaje máximo del cincuenta y cinco por ciento (55%) del monto bruto de la pensión.			

Elaboración propia.

Concretamente, y de conformidad con la información recopilada en el Oficio DE-0518-10-2018, del 11 de octubre de 2018, emitido por la Dirección Ejecutiva de JUPEMA, existen 42967 pensionados en el Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio. De esos, 752 superan el tope del catedrático universitario establecido en ₡3.917.961,65 establecido como monto legal mínimo exento de la aplicación de la contribución solidaria del artículo 71 de la Ley 2248. Solo a 530 pensiones de las 752 indicadas, se les aplica la contribución solidaria porque el resto (222) están "exoneradas".

El monto anual que se recauda por concepto de la contribución solidaria del artículo 71 de la Ley 2248 asciende a la suma de ₡2.453.648.914,68.

Lo que se recauda, actualmente, por concepto de la contribución solidaria, en los distintos regímenes de pensiones a partir de las bases exentas vigentes asciende a las siguientes sumas:

Montos recaudados por contribución solidaria

Régimen de pensiones	Monto total anual recaudado por contribución solidaria vigente, 2018.
JUPEMA	₡2.5 mil millones.
PODER JUDICIAL	₡11 mil millones.
GENERAL MTSS	No se obtuvo información.

Elaboración propia con información de la DNP y JUPEMA, 2018.

En lo que respecta a los rangos legales que se aplican, actualmente, a las pensiones por concepto de contribución solidaria de los pensionados y jubilados de JUPEMA, se adjunta la siguiente tabla ilustrativa:

Tabla de cotización de los pensionados y jubilados, conforme a la Ley N° 9104, reforma al artículo Nº 70 de la Ley Nº 7531.

De	3.917.961,70	Hasta	4.897.452,05	25%
De	4.897.452,10	Hasta	6.121.815,10	35%
De	6.121.815,15	Hasta	7.652.268,85	45%
De	7.652.268,90	Hasta	9.565.336,05	55%
De	9.565.336,10	Hasta	11.956.670,05	65%
De	11.956.670,10	a más		75%

Fuente: JUPEMA, 2018.

Uno de los criterios esenciales para considerar una pensión concebida como “de lujo” es no haber cotizado lo suficiente para ser merecedor del beneficio.

Otro criterio, es la inequidad existente entre los regímenes especiales y el régimen general del IVM de la CCSS, en el cual se ha definido un tope máximo de 1.5 millones de colones.

A continuación, se muestra un cuadro comparativo con los rangos de pensiones de JUPEMA y la DNP, empezando a partir del monto legal mínimo exento propuesto en este proyecto de ley para la aplicación de la contribución solidaria.

Rangos de pensiones de JUPEMA y DNP.

Rangos	JUPEMA	DNP
Pensiones menores a 2.200.000	39838	17308
Desde 2.200.001 hasta 2.500.000	760	314
Desde 2.500.001 hasta 3.000.000	808	324
Desde 3.000.001 hasta 3.500.000	500	65
Desde 3.500.001 hasta 4.000.000	356	52
Desde 4.000.001 hasta 4.500.000	206	26
Mayor a 4.500.001	499	178
	42967	18267

Fuente: DNP y JUPEMA, 2018.

Otra de las medidas especiales incluidas en este proyecto, es la figura del retiro obligatorio excepcional y temporal, que se conceptualiza como un instrumento de política fiscal y empleo, que le permitiría al Poder Ejecutivo vía decreto y fundamentado en una declaratoria de emergencia fiscal emitida por el Banco Central de Costa Rica, instar y gestionar de oficio, ante las autoridades del sector público, para que verifiquen y ordenen a todos los funcionarios públicos que hayan cumplido los requisitos legales para pensionarse o jubilarse, que procedan, obligatoriamente,

a acogerse al beneficio de la pensión o la jubilación, según las condiciones del régimen al que pertenezcan y en pro del interés público y las finanzas del Estado.

La aplicación de la medida dependería siempre de una declaratoria oficial del Banco Central y de la voluntad Presidencial, que en última instancia será la autoridad competente para establecer los mecanismos más ágiles con la finalidad de cumplir los objetivos de la medida de urgencia.

Con esto, se estaría promoviendo el empleo y la renovación de la fuerza laboral en el sector público, lo cual tendría un impacto positivo, a mediano y largo plazo, en el sostenimiento de los fondos de pensiones, al aumentar y rejuvenecer las aportaciones con nuevos contribuyentes que se unirían a los distintos regímenes.

Finalmente, se dispone que en caso de que las personas que reúnan los requisitos de ley para obtener el beneficio social de su vejez, vayan a ocupar un puesto de elección popular o los principales cargos de un Ministerio, estas quedarían excluidas por el plazo de su nombramiento.

Finalmente, se considera que no se estaría violentando la prohibición contra el derecho de acogerse a la jubilación establecida en el inciso c) del artículo 4 de la Ley 7302, *"Creación del Régimen General de Pensiones con cargo al presupuesto Nacional, de otros regímenes especiales y reforma a la Ley 7092 del 21 de abril de 1998, y sus reformas, Ley de Impuesto sobre la renta, del 8 de junio de 1998 y sus reformas"*, que impide cualquier tipo de intimación, discriminación, "o cualquier otra forma de presión u hostigamiento para que el trabajador se jubile en forma obligatoria por exclusivas razones de edad", en vista de que lo que el proyecto plantea se diferencia, justamente, en la fundamentación para emitir la medida de jubilación obligatoria, la cual estaría dada por motivos de urgencia fiscal y desempleo nacional y no por razones de edad.

Por lo anterior, someto a consideración de los Diputados la presente propuesta de ley para su análisis, consideración y votación.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

LEY PARA FIJAR TOPES EQUITATIVOS A LAS PENSIONES DE LUJO, REDISEÑAR Y REDISTRIBUIR LOS RECURSOS DE LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOLIDARIA Y CREAR LA FIGURA DE LA JUBILACIÓN OBLIGATORIA EXCEPCIONAL

ARTÍCULO 1- Objeto de la ley

Contribuir con el pago de la deuda interna y externa del país aplicando una redistribución temporal de los recursos que se obtengan de la contribución especial solidaria establecida sobre los regímenes de pensiones especiales contenidos en los artículos 3 de la Ley 9383 del 29 de julio de 2016, 236 bis de la Ley 7333 del 5 de mayo de 1993 y sus reformas, y en el artículo 71 de la Ley 2248 del 5 de setiembre de 1958 y sus reformas, que contemplan los regímenes del Poder Judicial y el Magisterio Nacional, respectivamente.

Crear nuevos mecanismos para definición de los topes de pensión máxima y para la aplicación excepcional de la jubilación forzosa por parte del Estado.

ARTÍCULO 2- Ámbito de aplicación

Esta ley se aplicará a los regímenes de pensiones establecidos en las siguientes leyes:

a) Todos los regímenes comprendidos en el artículo 2 de Ley 9383 del 29 de julio de 2016.

b) Ley N.° 7302, Creación del Régimen General de Pensiones con Cargo al Presupuesto Nacional, de Otros Regímenes Especiales y Reforma a la Ley N.° 7092, de 21 de abril de 1988, y sus Reformas, Ley del Impuesto sobre la Renta, de 8 de julio de 1992.

c) La Ley 2248 del 5 de setiembre de 1958 y sus reformas, Magisterio Nacional.

d) La Ley 7333 del 5 de mayo de 1993 y sus reformas, Poder Judicial.

Esta ley no será aplicable a las personas cubiertas por el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte que administra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

ARTÍCULO 3- Fines

Esta ley tendrá los siguientes fines:

a) Contribuir con el pago efectivo de la deuda interna y externa del país.
b) Otorgarle continuidad y aplicabilidad a la contribución solidaria como un aporte para lograr el sostenimiento de las pensiones.
c) Contribuir con la eliminación de las desigualdades en los beneficios sociales de las pensiones y jubilaciones así como en las cargas tributarias.
d) Renovar la plantilla de funcionarios públicos y dar sostenibilidad a los sistemas de pensiones mediante las nuevas aportaciones.

ARTÍCULO 4- Pensión máxima universal exenta de la contribución solidaria

Todas aquellas jubilaciones, pensiones unitarias o las multipensiones derivadas de los regímenes contributivo y no contributivo, salvo las complementarias que están reguladas en la Ley 7983, Ley de Protección al Trabajador, de 16 de febrero de 2000, conferidas a una misma persona por causas legales distintas, que superen un monto de pensión total igual a ocho (8) veces el salario base más bajo del régimen salarial público al que pertenezca, estarán sujetas a la contribución obligatoria y solidaria creada mediante las leyes indicadas en el artículo 2 de la presente ley, hasta por un porcentaje máximo del cincuenta y cinco por ciento (55%) del monto bruto de la pensión.

ARTÍCULO 5- Principio de contribución progresiva

La deducción de la contribución obligatoria y solidaria se aplicará cumpliendo con la escalerilla de contribución progresiva establecida en cada una de las leyes indicadas en el artículo 2 de la presente ley.

En ningún caso, la suma de la contribución solidaria y la totalidad de las deducciones que se apliquen a todos los pensionados y jubilados cubiertos por esta ley, podrá representar más del cincuenta y cinco por ciento (55%) respecto de la totalidad del monto bruto de la pensión o las pensiones, que por derecho le correspondan al beneficiario. Para los casos en los cuales esta suma supere el cincuenta y cinco por ciento (55%), respecto de la totalidad del monto bruto de la pensión o las pensiones, la contribución especial se reajustará de forma tal que la suma sea igual al cincuenta y cinco por ciento (55%) respecto de la totalidad del monto bruto de las pensiones.

ARTÍCULO 6- Destino de los recursos.

Los recursos que se obtengan por concepto de la contribución obligatoria y solidaria creada mediante las leyes citadas en el artículo 2 de esta ley, serán transferidos a un fondo especial que creará el Ministerio de Hacienda y estarán destinados, exclusivamente, al pago de deuda interna y externa del país.

Estos pagos deberán tomar en cuenta de forma conjunta los siguientes criterios técnicos de priorización de pagos:

a) Tasas de interés más altas.
b) Plazos más cortos de vencimiento de deudas.

ARTÍCULO 7- Temporalidad del cambio del destino.

El destino y aplicación de los recursos originados por la contribución obligatoria y solidaria será por el plazo de diez años contados a partir de la efectiva transferencia desde los distintos fondos de pensiones que administran y captan los recursos a la Caja Única del Estado, para aplicar y cumplir con el pago efectivo de la deuda interna y externa del país.

Cumplido ese plazo, los recursos volverán a ser destinados para el sostenimiento de los regímenes de pensiones tal y como lo establecen las leyes indicadas en esta ley.

ARTÍCULO 8- Regla para la pensión máxima general

Ninguna persona pensionada o jubilada, que reciba una pensión única o multipensiones, bajo cualquiera de los regímenes de pensiones contributivos y no contributivos del país, podrá devengar un monto total superior al triple del límite de la pensión máxima fijada para el régimen de pensiones por Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) por la Caja Costarricense del Seguro Social.

ARTÍCULO 9- Retiro obligatorio excepcional para pensión o jubilación

Por motivos de urgencia fiscal o tasa de desempleo notablemente elevada, justificadas por declaratoria del Banco Central y decretadas por el Poder Ejecutivo y a efectos de garantizar la sostenibilidad de los regímenes de pensiones contributivos y no contributivos, y favorecer la generación de empleo en el sector público, en la Administración Pública Central o Descentralizada, empresas públicas, bancos públicos y empresas de capital mixto, se deberán aplicar las siguientes reglas:

a) Todos los funcionarios públicos que cumplan con los requisitos de ley para pensionarse o jubilarse estarán obligados a gestionar su beneficio social ante la Administración Pública que lo requiera, para lo cual procederá de inmediato con el trámite respectivo, salvo que la persona se encuentre designada como Ministro de Estado o electa en un cargo de elección popular.

b) La medida podrá ser decretada por períodos entre uno y cinco años continuos.

c) Los procedimientos para dar cumplimiento a esta regla serán establecidos mediante el reglamento de retiro obligatorio que deberá emitir el órgano competente

de la Administración Pública respectiva, a partir de la promulgación del decreto indicado.

ARTÍCULO 10- Reforma y adición al artículo 71 de la Ley N° 2248 del 5 de setiembre de 1958 y sus reformas

Refórmese el inciso a) y adiciónese un párrafo final al artículo 71 de la Ley 2248 del 5 de setiembre de 1958 y sus reformas, para que en adelante se lean de la siguiente manera:

Artículo 71- Contribución especial, solidaria y redistributiva de los pensionados y jubilados.

(…)

a) **Sobre el exceso de 8 veces el salario base más bajo pagado en la Administración Pública, según la escala de sueldos de la Administración Pública emitida por la Dirección General de Servicio Civil**.
b)
c)
d)
e)
f)

El destino de los recursos que se recauden ingresarán a la Caja Única del Estado.

Transitorio I-

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de esta ley, el Poder Ejecutivo deberá en el plazo de los tres meses contados a partir de la entrada en vigencia de esta ley, estudiar, analizar y ejecutar la primera declaratoria de urgencia fiscal, debidamente justificada en las condiciones socioeconómicas y fiscales que afronta el país, para la implementación temporal del retiro obligatorio excepcional en todas las Administraciones Públicas donde resulte favorable para las finanzas del país.

Xiomara Priscilla Rodríguez Hernández

Carlos Luis Avendaño Calvo

Sylvia Patricia Villegas Álvarez

Dragos Dolanescu Valenciano

Wálter Muñoz Céspedes

Otto Roberto Vargas Víquez	Luis Antonio Aiza Campos
Eduardo Newton Cruickshank Smith	Jorge Luis Fonseca Fonseca
Carmen Irene Chan Mora	Víctor Morales Mora

Diputadas y diputados

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios.

1 vez.—(IN2018295634).

ADICIÓN DEL INCISO Q) AL ARTÍCULO 17 Y DEL INCISO J) AL ARTÍCULO 57 DE LA LEY N.° 7794, CÓDIGO MUNICIPAL, DE 30 DE ABRIL DE 1998, PARA LA EFECTIVA INTERACCIÓN DE LOS ALCALDES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITO

Expediente N.° 21.036

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Los concejos de distrito son órganos municipales de carácter consultivo e informativo destinados a la participación de los ciudadanos y las ciudadanas en los asuntos relacionados con sus distritos y garantizar la representación de los intereses de los diversos barrios de la ciudad; son el ente municipal más cercano a la ciudadanía, de ahí su importancia para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas que viven en cada distrito del país.

Lamentablemente, en muchas ocasiones la falta de articulación entre la alcaldía y los concejos hacen que su funcionamiento se vuelva improductivo y, por ende, el desarrollo que debería llegar a los pueblos se vuelve infructuoso.

El presente proyecto de ley pretende crear una norma que regule una reunión de trabajo, cada seis meses, entre el alcalde o la alcaldesa y los concejos de distrito, a fin de agilizar los emprendimientos en cada uno de los distritos y procurando que el bienestar de los ciudadanos sea una prioridad y realidad día con día.

Por lo citado anteriormente, presento a consideración de los señores diputados y las señoras diputadas la presente iniciativa de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

ADICIÓN DEL INCISO Q) AL ARTÍCULO 17 Y DEL INCISO J) AL ARTÍCULO 57 DE LA LEY N.° 7794, CÓDIGO MUNICIPAL, DE 30 DE ABRIL DE 1998, PARA LA EFECTIVA INTERACCIÓN DE LOS ALCALDES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITO

ARTÍCULO 1- Se adiciona el inciso q) al artículo 17 de la Ley N.° 7794, Código Municipal, de 30 de abril de 1998. El texto es el siguiente:

Artículo 17- Corresponden a la persona titular de la alcaldía las siguientes atribuciones y obligaciones:

[...]

q) Reunirse como mínimo una vez cada seis meses con los concejos de distrito, para planificar el trabajo semestral, en relación con los proyectos, las proyecciones, la construcción de los objetivos y las metas para el debido progreso en cada distrito, a fin de que sean incluidos en el presupuesto anual de la municipalidad.

ARTÍCULO 2- Se adiciona el inciso j) al artículo 57 de la Ley N.° 7794, Código Municipal, de 30 de abril de 1998. El texto es el siguiente:

Artículo 57- Los concejos de distrito tendrán las siguientes funciones:

[...]

j) Reunirse como mínimo una vez cada seis meses con el alcalde, para planificar el trabajo semestral, en relación con los proyectos, las proyecciones, la construcción de los objetivos y las metas para el debido progreso en cada distrito, a fin de que sean incluidos en el presupuesto anual de la municipalidad.

Rige a partir de su publicación.

Marolin Raquel Azofeifa Trejos

Harllan Hoepelman Páez

Carmen Irene Chan Mora

Xiomara Priscilla Rodríguez Hernández

Mileidy Alvarado Arias

Giovanni Alberto Gómez Obando

Floria María Segreda Sagot

Eduardo Newton Cruickshank Smith

Nidia Lorena Céspedes Cisneros

Ignacio Alberto Alpízar Castro

Otto Roberto Vargas Víquez

Diputada y diputados

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo.

1 vez.—(IN2018295637).

RESGUARDO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO Y LA NIÑA EN LOS PROCESOS DE ADOPCIÓN

Expediente N.º 21.037

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El presente proyecto de ley busca concretamente adicionar un párrafo segundo al artículo 100 del Código de Familia, Ley N.° 5476, de 5 de agosto de 1974 y sus reformas, con el objetivo de garantizar que la adopción de personas menores de edad se realice a partir de criterios técnicos y jurídicos, debidamente regulados, que consideren la idoneidad de los adoptantes y, primordialmente, la historia, requerimientos y necesidades de las personas menores de edad en todas las áreas de su desarrollo.

A manera de antecedente se debe señalar la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, firmada por Costa Rica el 26 de enero de 1990, la cual generó en Costa Rica un marco inédito de protección integral y especial a favor de las personas menores de edad.

Al respecto señala el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) que:

"Este marco, jurídico y social, nos llevó a proteger y garantizar el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de este numeroso grupo de seres humanos, reconociéndoles la titularidad sobre tales derechos y, definiendo las obligaciones que en esta materia debe asumir el Estado costarricense, al igual que todos los miembros de la sociedad y las familias que la conforman.

Desde el punto de vista jurídico y cultural, la Convención implicó un cambio sustancial en el modelo jerárquico y discrecional que caracterizaba las relaciones entre adultos y las personas menores de edad, partiendo de cuatro principios generales: la no discriminación (artículo 2), el interés superior del niño (artículo 3), el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo (artículo 6) y el derecho a opinar y participar libremente (artículo 12)"[1].

Es a partir de este momento que se realizó una adecuación de la legislación interna a los principios y preceptos de la Convención. A partir de este momento cambió el

1 PANI-PE-OF-1769-2018

paradigma de la adopción, dejando de considerarla una figura cuyo fin era satisfacer las necesidades "adoptivas" de los adultos, para entenderla y regularla como una figura subsidiara, de protección de las personas menores de edad, que debe responder al interés superior de los niños y las niñas.

Como señala el PANI, en este *"nuevo paradigma no existe un derecho de los adultos a que se les ubiquen niños y niñas en adopción, lo que existe es el derecho de los niños y niñas a la protección en familia, a través de la adopción, como parte de su proceso de protección y, en aplicación del interés superior, por lo que debe procurarse que sea la familia que mejor garantice su protección y su desarrollo integral"*[2].

Es a partir de procedimientos de análisis técnico de profesionales integrales que se busca garantizar una protección adecuada del interés superior de la persona menor de edad, ya que permiten "definir que los solicitantes no presenten factores de riesgo relacionados con la protección y crianza de los niños y niñas, y que posean los factores protectores necesarios para garantizar su desarrollo integral, tales como, capacidad de protección, flexibilidad, empatía, capacidad de contención, atención y afecto, capacidad para posponer las propias necesidades y deseos para asumir los de otro, control de impulsos, tolerancia a la frustración, entre otros"[3].

Es por lo anterior, y considerando que la adopción tiene como finalidad prioritaria, la protección de personas menores de edad a través de la garantía del derecho de tener la mejor familia, según su interés superior, determinado a través de criterios técnicos psicológicos, sociales y jurídicos de valoración de la idoneidad de los solicitantes, que someto a consideración de las señoras diputadas y los señores diputados de la Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley.

2 PANI-PE-OF-1769-2018
3 PANI-PE-OF-1769-2018

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

RESGUARDO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO Y LA NIÑA EN LOS PROCESOS DE ADOPCIÓN

ARTÍCULO ÚNICO- Adiciónase un párrafo segundo al artículo 100 del Código de Familia, Ley N.° 5476, del 5 de agosto de 1974 y sus reformas, para que se lea de la siguiente manera:

Artículo 100- Definición

[…]

Su procedencia y conveniencia se determinarán, a partir de criterios técnicos y jurídicos, debidamente regulados, que considerarán la idoneidad de los adoptantes y, primordialmente, la historia, requerimientos y necesidades de las personas menores de edad en todas las áreas de su desarrollo, atendiendo su interés superior y, tomando en cuenta, cuando resulte posible, su opinión.

Enrique Sánchez Carballo
Diputado

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos.

1 vez.—(IN2018295640).

AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN PARA QUE DONE UN TERRENO DE SU PROPIEDAD A LA ASOCIACIÓN ESTRELLAS DE ORO DE CONCEPCIÓN

Expediente N.º 21.038

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Este es un proyecto que merece una atención especial ya que trata de implementar las posibilidades reales de proteger los derechos humanos de uno de los sectores más vulnerables del país, como lo son las personas adultos mayores.

La Asociación Estrellas de Oro de Concepción, es una organización sin fines de lucro que se dedica al empoderamiento, desarrollo e independencia de las personas adultas mayores, realizando con esto una noble e importante labor para la sociedad costarricense.

Esta organización viene dando una serie de servicios fundamentales para el desarrollo de esta población en el cantón de La Unión; sin embargo, al ser una organización sin fines de lucro no cuenta con los recursos económicos suficientes para desarrollar sus objetivos de acuerdo a las necesidades reales de la población que atiende.

Desde hace más de quince años la Asociación ha demostrado que pueden realizar esfuerzos importantes de involucrar a las personas adultas mayores a procesos de recreación, deportes, educación e integración con otros miembros del Cantón de la Unión para garantizar una vida activa, inclusiva y saludable de sus miembros.

En virtud de lo anterior, es necesaria la donación del terreno inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la provincia de Cartago, bajo el sistema de folio real matrícula número tres - cero cero cero siete uno uno cinco tres - cero cero cero (N.° 3-00071153-000), a nombre de la Municipalidad de La Unión, para que la Asociación pueda construir un edificio propio que le permita seguir adelante con los objetivos de la organización y tan importantes servicios a la sociedad.

Actualmente, la Asociación cuenta con un convenio de uso y administración del inmueble con la Municipalidad de La Unión, por un plazo de cinco años, sin embargo, la organización mediante la figura de convenio, no puede ser sujeto de donación de recursos para invertir en la propiedad cedida, debido a que se encuentra a nombre de la Municipalidad.

La necesidad de contar con un edificio propio para la atención de sus objetivos, se ha vuelto imprescindible, y la adquisición de un terreno propio es el primer paso para permitir que la Asociación Estrellas de Oro de Concepción, continúe realizando la labor social que ha desarrollado oportuna y eficientemente desde su creación.

La organización no cuenta con recursos propios para realizar la adquisición supra citada, por lo que la donación del inmueble se convierte en una alternativa necesaria y viable para poder recibir recursos de las diferentes organizaciones estatales, y construir una edificación apta para atender a la población adulta mayor.

Como parte de las responsabilidades del Estado costarricense, se encuentra la obligación de velar por el bienestar social de la población, y tratándose en este caso particular de uno de los sectores sociales más vulnerables, es fundamental gestionar la autorización para que la Asociación cuente con las herramientas para salir adelante y desarrollar sus objetivos en beneficio de los adultos mayores.

Por lo mencionado anteriormente, la donación de esta propiedad es de vital importancia para que la Asociación pueda continuar con sus servicios a la comunidad; como diputados y diputadas de la República, estamos llamados a ser facilitadores para el desarrollo y la estabilidad de la sociedad costarricense, siendo esta acción una muestra de compromiso con los sectores más necesitados de nuestro país.

Dado el oficio MLU-SM-949-2018 del 19 de octubre del 2018 mediante el cual se trascribe el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de la Unión, en la Sesión Ordinaria N°2017 celebrada el jueves 18 de octubre del 2018 donde se acuerda aprobar en firme la moción presentada para donar la propiedad inscrita, constituye la voluntad del cuerpo colegiado en destinar ese terreno para el fin expuesto anteriormente.

En razón de lo anterior, también debemos instar a la descentralización de las instituciones públicas, de manera que puedan contar con las diferentes organizaciones comunales como facilitadoras para lograr una mejor calidad de vida en la población costarricense.

Bajo este concepto, la donación del terreno en mención, se convierte en una alternativa para que la Asociación sea un aliado más para el Estado costarricense y gobierno local, para que por medio de su trabajo, se pueda dar una mejor calidad de vida a la ciudadanía, y que la labor social que realiza, se maximice y se pueda desarrollar de una manera más integral y acorde a las necesidades.

Por las razones expuestas someto a consideración de las señoras diputadas y los señores diputados el presente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN PARA QUE DONE UN TERRENO DE SU PROPIEDAD A LA ASOCIACIÓN ESTRELLAS DE ORO DE CONCEPCIÓN

ARTÍCULO 1- Autorización

Se autoriza a la Municipalidad de La Unión, cédula jurídica número tres - cero uno cuatro - cero cuatro dos cero ocho tres (N.° 3-014-042083), para que done a la Asociación Estrellas de Oro de Concepción, cédula jurídica tres-cero cero dos- tres seis nueve cero seis nueve (3-002-369069), un bien inmueble de su propiedad, terreno inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la provincia de Cartago, bajo el sistema de folio real matrícula número tres - cero cero cero siete uno uno cinco tres - cero cero cero (N.° 3-00071153-000), en concordancia con el plano catastrado número C - cero siete cinco uno cinco cuatro cinco - dos cero cero uno (N.°C-0751545-2001).

El inmueble por donar se describe así: su naturaleza es terreno de solar (terreno apto para la edificación); está situado en el distrito 3°, San Juan; cantón de La Unión; mide trescientos ochenta y un metros con veintiséis decímetros cuadrados (381.26 m²) y colinda al norte con la finca propiedad de Panarica Balkan Sociedad Anónima; al sur con Rodolfo Mora Méndez; al este con la finca propiedad de Panarica Balkan Sociedad Anónima, al oeste, con calle pública con once metros y sesenta y nueve centímetros.

ARTÍCULO 2- Restricciones

Por un plazo de diez años, contado a partir de la publicación de esta ley, el beneficiario de esta donación no podrá traspasar, vender, arrendar ni gravar, de ninguna forma, el terreno donado.

ARTÍCULO 3- Limitaciones

El terreno mencionado será utilizado únicamente para construir un edificio para la Asociación Estrellas de Oro de Concepción, organización social sin fines de lucro.

En caso de que no se cumpla el objetivo de la donación, o si la Asociación llega a disolverse, el terreno señalado en el artículo 1 de la presente ley volverá a la propiedad de la Municipalidad de La Unión.

ARTÍCULO 4- Autorización a la Notaría del Estado

Se autoriza a la Notaría del Estado para que confeccione la respectiva escritura pública de donación a que se refiere la presente ley. Asimismo, se autoriza a la Procuraduría General de la República para que corrija los defectos que señale el Registro Nacional.

Rige a partir de su publicación.

Pablo Heriberto Abarca Mora

Xiomara Priscilla Rodríguez Hernández

Laura Guido Pérez

Paola Alexandra Valladares Rosado

Mario Castillo Méndez

Luis Fernando Chacón Monge

Sylvia Patricia Villegas Álvarez

Diputados y diputadas

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración.

1 vez.—(IN2018295644).

BENEMERITAZGO DE LAS LETRAS PATRIAS
A JOAQUIN GUTIÉRREZ MANGEL

Expediente N.º 21.040

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

En la historia cultural de nuestro país, uno de los más relevantes galardones lo constituye la declaratoria de Benemeritazgo de las Letras Patrias, que busca distinguir el aporte significativo de nuestros creadores al desarrollo de la literatura nacional e internacional. En este campo es de singular importancia el legado del escritor, ensayista y periodista don Joaquín Gutiérrez Mangel (1918- 2000). Nacido en la provincia de Limón, su obra artística cubre un periodo importante del siglo XX, dentro y fuera del país.

Gutiérrez Mangel, se inició como poeta, de singulares méritos, en 1937 y lentamente fue definiendo una obra narrativa, novela principalmente, y reportajes periodísticos en diversos lugares del mundo, atento siempre a lo que ocurría en la historia. Su obra narrativa es renovadora, incorporando a nuestra literatura las tendencias de vanguardia, tomando en cuenta la manera de pensar de nuestros habitantes, desde Guanacaste hasta Limón, lo cual le valió señalados galardones en ese campo. En el género de literatura para niños y jóvenes su aporte inicia una tendencia renovadora, a partir de los años cincuenta, la cual es tomada como modelo por los creadores más importantes de nuestro tiempo.

No solo destacó en la literatura, con obras como *Poesía* (1937), *Jicaral* (1938), *Cocorí* (1947), *Manglar* (1947, su primera novela), *Puerto Limón* (1950), *La hoja de aire* (1968), *Te conozco mascarita* (1972), *Murámonos Federico* (1973. Premio Editorial Costa Rica de Novela), *Volveremos* (1974), *Te acordás, hermano* (1978, Premio Casa de Las Américas), *Chinto Pinto* (1982), *Vietnam. Crónicas de guerra* (1988), *Crónicas de otro mundo* (1999) o *Los azules días* (1999), sino que fue reconocido mundialmente por la calidad de sus traducciones de obras de autores clásicos, como Shakespeare, y por su trabajo periodístico, tanto en la guerra de Vietnam, como en diarios de Chile, país donde vivió 25 años.

Como locutor, traductor, autor de reportajes y entrevistas, corresponsal de diarios latinoamericanos, tuvo el privilegio de vivir en diversos países del mundo y conocer a notables personalidades de su tiempo, de Pablo Neruda a Ho Chi Min.

Fue amigo personal de Neruda y de Salvador Allende, quien lo puso al mando de la editorial Quimantú (El Sol del Saber). Esta editorial fue el proyecto librero de mayor envergadura que ha conocido Chile.

Como profesor universitario y animador cultural fue figura que agrupó a los nuevos creadores e impulsó tendencias poéticas abiertas a todas las formas. La singular erudición de su cultura le permitió comprender el desarrollo de las ideas en todo el mundo, que se expresaron en diversos congresos y coloquios en los cuales puso en alto el nombre de nuestro país.

En razón de lo anterior, recibió numerosos galardones, a nivel nacional y latinoamericano, así como el Premio Nacional de Cultura “Magón”, en el año 1975.

La destacada labor académica, el brillante estilo literario y la profundidad humanística, son las principales razones por las cuales, en 1992, la Universidad de Costa Rica concedió el *Doctorado Honoris Causa* a este escritor costarricense (Acuerdo del Consejo Universitario de la sesión 3894, artículo 2, del 14 de octubre de 1992).

Sus obras forman parte del patrimonio nacional y por medio de ellas tuvo gran proyección internacional en países de Europa y América. Su personalidad, su dedicación y amor a las letras se convirtieron en gran ejemplo y le permitieron tener un lugar de honor en la Universidad.

Su nombre forma parte del prestigioso Diccionario de Literatura Universal, editado por la casa editorial Océano en 2004.

Hombre multifacético, fue un gran ajedrecista, llegando incluso a obtener el título de campeón nacional a los veinte años en 1938, volviendo a ostentarlo en 1939, 1943 y 1944. Forma parte de la Galería del Deporte de Costa Rica desde 1996.

En representación de la Confederación de Trabajadores integra la primera Junta Directora de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Joaquín Gutiérrez Mangel indagó la historia e identidad costarricenses, defendiendo valores como la independencia de pensamiento, la soberanía, la justicia y la solidaridad.

Joaquín Gutiérrez fue un hombre siempre comprometido con las causas en defensa de los derechos humanos y la emancipación de las clases trabajadoras. Su militancia política y social junto a Manuel Mora Valverde, Carlos Luis Fallas, Carmen Lyra, Luisa González y tantos hombres y mujeres de nuestra patria, que contribuyeron con su lucha y sacrificio a elevar las condiciones de vida y de trabajo de las mayorías, forma parte esencial de la vida de este gran escritor comprometido con su tiempo.

En el año 1999 el periódico La Nación convoca a una elección sobre los personajes más relevantes del siglo XX costarricense y es escogido como “el escritor del siglo”.

Esta iniciativa de ley, tiene como antecedente el Expediente Nº 16348, que fue archivado recientemente en virtud de las resoluciones 12250-2015, 11658-2018 y 13570-2018 de la Sala Constitucional, que versan sobre el plazo de vigencia de los expedientes legislativos y las prórrogas posibles, mediante una moción de plazo cuatrienal, se determina que éste proyecto de ley, se debe archivar.

En razón de lo anterior, se retoma la propuesta para que continúe su trámite bajo un nuevo número de expediente, acogiendo el interés de los escritores y artistas de Costa Rica, someto a la consideración de la Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de acuerdo legislativo, cuyo fin es declarar Benemérito de las Letras Patrias a Joaquín Gutiérrez Mangel.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
ACUERDA:

BENEMERITAZGO DE LAS LETRAS PATRIAS
A JOAQUÍN GUTIÉRREZ MANGEL

ARTÍCULO ÚNICO- Se declara Benemérito de las Letras Patrias a Joaquín Gutiérrez Mangel.

Rige a partir de su aprobación.

José María Villalta Flórez-Estrada
Diputado

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Honores.

1 vez.—(IN2018295646).

BENEMERITAZGO DE LAS LETRAS PATRIAS
A ISAAC FELIPE AZOFEIFA BOLAÑOS

Expediente N.º 21.041

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El profesor Isaac Felipe Azofeifa Bolaños fue un ilustre costarricense que se destacó como poeta, ensayista, educador y político.

El pensamiento y la acción de don Isaac Felipe deben ser mostrados a las nuevas generaciones de costarricenses como el testimonio de quien, a través de su larga y fecunda vida, fue leal siempre a sus principios humanísticos y de compromiso con los mejores destinos del pueblo costarricense.

En razón de lo anterior, retomo la iniciativa que ha sido presentada para consideración de la Asamblea Legislativa por los ex diputados José Manuel Núñez González, bajo el expediente No. 14.383 que fue archivada en el año 2006; y por José Merino del Río, bajo el expediente No. 16.718 que fue archivada en el año 2018.

Isaac Felipe Azofeifa, nació en Santo Domingo de Heredia, el 11 de abril de 1909, sobre lo cual dice uno de sus poemas:

> “Yo soy
> me llaman, soy, me digo
> Isaac Felipe
> Nacido en Santo Domingo
> una ciudad en medio del campo,
> una vieja ciudad fuera del tiempo,
> donde los años antes se metían por cosechas,
> y ahora solo están las campanas de las iglesias
> y las golondrinas,
> que desclavan la corona de Cristo
> cada día como antes.
>
> Ahí entonces hace mucho
> me nació el miedo de ser otra cosa
> que una simple criatura simple,
> y me dolía el vivir, como ahora.

Pero en aquel tiempo
la luz me confortaba largamente
la llaga de los nervios,
-Yo amo todavía la fresca claridad del verano-
y aunque el invierno pertinaz prolongaba sus lluvias,
me protegía su bandera verde sobre el campo.
De todos modos, yo soy la ciudad vivíamos
[cerca del cielo."

Fue hijo de un hogar campesino formado por Rubén Azofeifa y Dulcelina Bolaños que procrearon siete hijos.

Desde muy pequeño ayudaba a su padre en la recolección del café. Hizo su educación primaria en la Escuela Aurelio Montero y desde pequeño fue considerado como "el niño genio del pueblo" por su vocación para el estudio y principalmente para la lectura, que era su más codiciado pasatiempo. Por esta razón, el sacerdote Benito Sáenz lo animaba a leer y le prestaba libros y revistas para formarle el hábito. Isaac Felipe recordó su infancia y la dejó plasmada en estos versos:

"El corazón del mundo es este pueblo.
Aquí estuvo mi infancia.
Aquí sigo aprendiendo la furtiva
cacería del sueño
en la difusa luz del alba.
Se aclara mi oscuridad y vuelvo a ser el mismo
alumno de doña Ester, don Marcial, don Albino,
que enseñaban a ser buen ciudadano y buen hijo.
Aquí de nuevo está mi padre,
tan lejano, tan duro, tan en ruina. Quería
que yo fuese abogado
para que peleara por los pobres.
Pero el verso que leo me envuelve en niebla triste,
me suspende en el aire, me devora,
me deja en nervio vivo,
y debo de estar enfermo, pues me gusta estar solo."

Cursó la secundaria en el Liceo de Costa Rica, en el cual se caracterizó, según recordaban sus maestros, por ser un estudiante muy crítico y muy capaz.

De 1929 a 1934 se trasladó a Chile, en donde estudió en el Instituto Pedagógico Nacional en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. Esta etapa de su vida lo marcó para siempre. Regresó al país y empezó a dar clases de psicología y literatura en el Liceo de Costa Rica, en el cual implantó un nuevo sistema de

enseñanza. Contrajo matrimonio en 1936 con Clemencia Camacho Mora, relación de la cual nacieron seis hijos.

En 1948 se trasladó a la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, en la cual su principal objetivo fue fortalecer el sentido crítico y de estudio de los universitarios, además de transmitirles el humanismo social que lo caracterizaba. En 1944, codirigió el Diario de Costa Rica y robusteció el cultivo del ensayo literario.

Fue fundador del Centro de Estudio para los Problemas Nacionales, que dio origen al pensamiento social y pragmático del Partido Liberación Nacional (PLN), del cual fue cofundador.

De 1946 a 1948 fue Secretario General de la Asociación Nacional de Educadores y Director de Segunda Enseñanza en el Ministerio de Educación Pública.

Entre 1962 y 1966 fue nombrado embajador de Costa Rica en Chile durante la Administración de Francisco Orlich Bolmarcich. Al concluir su misión como diplomático, fue condecorado por el presidente de entonces Eduardo Frei Montalvo, con la Orden al Mérito del Libertador General Bernardo O'Higgins. También fue galardonado con el Premio Honoris Causa Gabriela Mistral.

Durante el período en que dirigió la Escuela de Estudios Generales de la Facultad de Ciencias y Letras de la Universidad de Costa Rica, impulsó la revitalización del pensamiento universitario crítico y comprometido, además de aportar a los estudios introductorios de la Facultad de Ciencias Sociales y de ser cofundador de la Escuela de Estudios Generales. Perteneció a la Academia Costarricense de la Lengua.

Recibió dos veces el Premio Aquileo J. Echeverría, en 1964 y 1969, y el Primer Premio de Poesía del Certamen Centroamericano de Literatura, El Salvador, en 1961. En 1980 recibió el máximo galardón que se pueda otorgar a un artista nacional: el Premio Nacional de Cultura “Magón”. El Concejo Municipal de Santo Domingo de Heredia, en sesión solemne del 125 aniversario de la fundación del cantón, lo nombró Hijo Predilecto del cantón. Asimismo, el 26 de agosto de 1994, fue condecorado por la Universidad de Costa Rica con el Premio Rodrigo Facio, por su valioso aporte a la vida cultural, política y a la justicia social de nuestro país y por considerar que su obra refleja aspectos que desarrolló Rodrigo Facio en su proyecto de Universidad. En conmemoración de su décimo aniversario, la Universidad Estatal a Distancia le entregó el Doctorado Honoris Causa, por su labor de educador, que sobrepasó más del medio siglo, y por la calidad de su poesía.

Fundó el Partido del Progreso, siendo su candidato a la presidencia en el año 1990, y posteriormente fue el primer presidente del Partido Fuerza Democrática.

Igualmente fue fundador y presidente del Grupo Soberanía. Dedicó los mejores esfuerzos de los últimos años de su vida a la defensa de su Patria y de los intereses y derechos de las mayorías.

Quedan de él sus valientes ensayos sobre la realidad del país, pero más que nada la belleza de sus poemas, actos amorosos hacia el prójimo: *"la soledad fue su único don desde su nacimiento de hombre/ como acontece a los dioses/perdido, se buscó en sí mismo y se halló en los demás/ y dijo:/Hombre soy y este es mi hermano."*

Su primer poema fue "La voz de las cumbres patrias" publicado en el Diario de Costa Rica, en 1928, seguido por:

- "Trunca unidad" (1958)
- "Vigilia en pie de la muerte" (1961)
- "Canción" (1964)
- "Estaciones" (1967)
- "Días y territorios" (1969)
- "Poesía" (1972)
- "La cima del Gozo" (1974)
- "Cruce de Vía" (1982)
- Y una serie de poesía no recogida en libros.

Sus ensayos, están dispersos en Surco, Repertorio Americano, Revista de la Universidad de Costa Rica, y en periódicos como La Nación ("Prosa con ton y son" en el que se reúnen sus opiniones y comentarios de la página 15), La República y Universidad. Entre sus obras de ensayo están:

- "Liceo y democracia" (1937)
- "Don Mauro Fernández: teoría y práctica de su reforma educativa" (escrita y dada a conocer en 1955; publicada luego en 1972 por Fernández-Arce)
- "La Isla que somos"
- "Mi viejo Liceo"
- "Historia de la literatura Universal"
- "Guía para el estudio y la investigación."

Isaac Felipe Azofeifa falleció el 2 de abril de 1997, a los 87 años.

Tal y como indica, Óscar Montanaro Meza en su artículo *"Isaac Felipe Azofeifa: Poeta y Maestro"*

> "En estos momentos de incertidumbre social, en el que, un grupo ostenta el poder económico y político de este país, se empeña en orientarlo por rumbos que comprometen su soberanía y sus más nobles tradiciones; conviene que los costarricenses repasemos el pensamiento de quienes en nuestra historia patria, han hecho de la palabra su acción de magisterio en la defensa de los principios fundamentales de su idiosincrasia."

La vida y los frutos de la obra del Profesor Isaac Felipe Azofeifa, no se pueden resumir en estas pocas líneas, pero reiteramos las palabras de don Fernando Soto Harrison, amigo suyo muy cercano:

> "Isaac Felipe fue siempre un joven inquieto que recogía a raudales cuanta información estuviera a su alcance, procesaba esos conocimientos en su brillante cerebro y los convertía en sabiduría que repartía a veces con la suavidad con que corre la brisa veraniega y a veces con la fuerza de un huracán como cuando se proponía barrer con nidos de corrupción, defender la justicia social de la ferocidad del capitalismo salvaje o nutrir con nuevas ideas el pensamiento político costarricense. Su ausencia nos deja en la orfandad a cuantos teníamos en él una fuente permanente de ideas claras, cristalinas, comprensibles gracias a la pureza, elegancia y sencillez de sus palabras. Definir a Isaac Felipe sin quedarse corto es casi imposible, fue como un recipiente que recogió todas las virtudes del costarricense. Fue un gran pensador, un gran diplomático, un gran político, un gran poeta, dominó nuestra lengua como pocos y se convirtió al salir de las aulas del Liceo de Costa Rica, donde fuimos compañeros de profesorado, y de la Universidad de Costa Rica, en un maestro sin frontera que enseñaba al país entero desde una cátedra abierta que acogía a cuantos quisieran acudir a ella.
>
> Los años no le hicieron mella, atravesó el tiempo como un instante y murió en la plena juventud, demostrando así que la juventud es más reflejo de una actitud que cosa de años. Nos deja una obra monumental repleta de valores permanentes que seguirán iluminando el pensamiento de los costarricenses pese al tiempo que transcurra."

Por las razones expuestas presento esta iniciativa como una deuda pendiente de este Parlamento, para honrar la memoria del poeta, ensayista, educador y político, en una palabra de un humanista, que trasciende las fronteras del tiempo.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
ACUERDA:

DECLARATORIA COMO BENEMÉRITO DE LAS LETRAS PATRIAS A ISAAC FELIPE AZOFEIFA BOLAÑOS

ARTÍCULO ÚNICO- Se declara Benemérito de las Letras Patrias a Isaac Felipe Azofeifa Bolaños.

Rige a partir de su aprobación.

José María Villalta Flórez-Estrada
Diputado

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Honores.

1 vez.—(IN2018295648).

BENEMERITAZGO DE LAS LETRAS PATRIAS
A FABIAN DOBLES RODRÍGUEZ

Expediente N.º 21.042

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Dentro de los honores conferidos a los distintos creadores nacionales sobresale el máximo galardón de Benemérito de las Letras Patrias, otorgado a aquellos escritores que han puesto el nombre de Costa Rica en el nivel singular de convocar con su obra el legado del pasado, la labor en el presente en el cual se desenvolvieron y el futuro como ejemplo a seguir para las nuevas generaciones. Sobresale en la historia literaria de Costa Rica el aporte del escritor Fabián Dobles Rodríguez (1918-1997) cuya obra ha sido elogiada por respetables estudiosos dentro y fuera del país y cuya herencia disfrutamos todos los lectores nacionales.

El escritor Fabián Dobles Rodríguez dio inicio a sus trabajos literarios como poeta, distinguido en certámenes de nivel centroamericano. A partir de 1941 empieza una obra narrativa de singulares méritos, en el campo de la novela y el cuento, que cambia el panorama de nuestra cultura al insertar al campesino moderno, con sus contradicciones y aciertos, haciendo del lenguaje popular una obra de arte y complementando, y hasta superando, la obra de los escritores que le antecedieron.

Su obra literaria comprende géneros como la poesía, el cuento y la novela. Se encuentran entre sus poemarios; Tú, voz de sombra (1944), Verdad del agua y del viento, (Premio 15 de septiembre, Guatemala, 1948) y Yerbamar (1965, en conjunto con el poeta Mario Picado). Figuran entre sus novelas; “Ese que llaman pueblo” (1942), “El sitio de las abras” (Premio 15 de septiembre, Guatemala, 1950), “Una burbuja en el limbo” (1946), “Los leños vivientes” (1962), “En el San Juan hay tiburón” (Premio Aquileo Echeverría, 1967), “Los años pequeños días” (1970).

En lo que al género del cuento se refiere, se destacó por su oficio y maestría; como queda patente en, “La rescoldera” (1957), “El jaspe” (1955), “El maijú” y otras “Historias de Tata Mundo” (1955, integradas en Historias de Tata Mundo en 1966), “El violín y la chatarra” (1966). Es necesario mencionar que Historias de Tata Mundo (1966), fue incluida en la colección universal de la Unesco, y traducida a varios idiomas.

La vida de Fabián Dobles se mantuvo siempre en un nivel de dignidad singular, lo que le permitió expresarse como profesor, conferencista, ensayista, defensor de las

mejores causas nacionales, periodista, defensor de la libertad de expresión en todos los niveles, y con un acervo humanista que le caracteriza entre sus colegas. Su militancia política y social en defensa de los oprimidos y explotados, su compromiso con la solidaridad para con todos los pueblos del mundo, su lucha por los ideales socialistas; forman parte indisoluble de una vida ejemplar.

Su labor de toda la vida ha sido reconocida con el máximo galardón que otorga el país a sus creadores en el año 1968. A partir del año 2004 su nombre figura en el diccionario de Literatura Universal, a nivel mundial editado por la prestigiosa casa editorial Océano y como representante de nuestro país, junto a los mejores creadores de obras literarias de todos los tiempos.

De delicada sensibilidad social y profundo compromiso ético con los desposeídos y lúdico talento en el manejo del idioma, en tiempos de la globalización; cuando el perfil de los distintos pueblos solo lo esbozará su singularidad, su literatura es fundamental en la conformación de una identidad nacional. Por lo anterior Fabián Dobles es considerado un geógrafo del espíritu costarricense.

Perteneciente a la emblemática *Generación del Cuarenta*, dirigió su transparente mirada a las luchas y faenas del campesinado, personas tozudas y sencillas que forjaron la patria desde abajo, abriendo montaña virgen; Fabián Dobles escribió la épica humana de estos hombres y mujeres. Una característica que diferencia su literatura de la de sus compañeros de generación, son sus personajes femeninos, a menudo mujeres de rompe y rasga. Su novela "*Ese que llaman pueblo*" (1942), se considera la primera de la literatura costarricense en abordar la temática urbana.

Esta iniciativa de ley, tiene como antecedente el Expediente Nº 16375 presentada a la corriente legislativa por el exdiputado José Merino del Río. La iniciativa fue recientemente archivada con fundamento en las resoluciones 12250-2015, 11658-2018 y 13570-2018 de la Sala Constitucional, que versan sobre el plazo de vigencia de los expedientes legislativos y las prórrogas posibles, mediante una moción de plazo cuatrienal, y que determina que éste proyecto de ley debe ser archivado.

En razón de lo anterior, acogiendo el interés de los escritores y artistas de Costa Rica y de gran parte de la ciudadanía, presentamos a consideración de los señores diputados y las señoras diputadas el siguiente proyecto de acuerdo.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
ACUERDA:

**BENEMERITAZGO DE LAS LETRAS PATRIAS
A FABIÁN DOBLES RODRÍGUEZ**

ARTÍCULO ÚNICO- Se declara Benemérito de las Letras Patrias a Fabián Dobles Rodríguez.

Rige a partir de su aprobación.

José María Villalta Flórez-Estrada
Diputado

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Honores.

1 vez.—(IN2018295651).

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 56 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, LEY N.º 17, DE 22 DE OCTUBRE DE 1943, Y SUS REFORMAS

Expediente N.º 21.045

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Esta iniciativa de ley, tiene como antecedente el Expediente Nº 17.954, que fue dictaminado afirmativamente y por unanimidad en la Comisión Especial que analizó la situación de la Caja Costarricense del Seguro Social (Expediente Nº 18.201) el 23 de mayo de 2012, pasando al Plenario para lo que corresponde. Sin embargo, la Presidencia de la Asamblea Legislativa determinó que este proyecto de ley debía ser archivado - muy a pesar de lo avanzado que se encontraba en el trámite legislativo - a partir de las resoluciones 12250-2015, 11658-2018 y 13570-2018 de la Sala Constitucional, que versan sobre el plazo de vigencia de los expedientes legislativos y las prórrogas posibles mediante una moción de plazo cuatrienal.

El objetivo fundamental de la presente propuesta es reforzar el cumplimiento del principio constitucional de irrenunciabilidad del derecho a la seguridad social (artículos 73 y 74 de la Constitución Política) mediante la modificación de tres aspectos sustanciales de la regulación vigente en el artículo 56 de la Ley Orgánica de CCSS, en relación con la prescripción de las obligaciones con la seguridad social:

1- Se propone reformar el plazo de prescripción para ejercer la acción penal en el caso de delitos contra la seguridad social, como la retención indebida de cuotas de las y los trabajadores (artículo 45 de la Ley orgánica de la CCSS, en relación con el numeral 216 del Código Penal). Actualmente la norma vigente del artículo 56 establece un plazo de prescripción de dos años que es **menor** al término mínimo previsto en el artículo 31 del Código Procesal Penal para delitos sancionables con penas de prisión (tres años).

En este caso, se propone equiparar el plazo de prescripción del artículo 56 con las reglas generales establecidas en el Código Procesal Penal, por cuanto, no existe justificación alguna para que los delitos contra la seguridad social y los derechos de las personas trabajadoras tengan un plazo de prescripción menor que el resto de infracciones penales sancionadas en nuestro ordenamiento jurídico. El daño social que produce la retención

indebida de cuotas de las y los trabajadores es significativo, pues no solo afecta directamente a las personas que lo sufren, sino a la clase trabajadora en su conjunto, que resultará afectada por el deterioro en la prestación de los seguros sociales.

Así las cosas, en materia de seguridad social la legislación nacional más bien debería ser más cuidadosa y rigurosa en garantizar la protección efectiva de los derechos laborales, de conformidad con el principio protector de la parte más débil de la relación laboral y el principio de irrenunciabilidad. Esta legislación, como mínimo no debería establecer una protección más débil para quienes sufren delitos contra la seguridad social, que la que se otorga en otras infracciones penales de naturaleza similar.

2- Se propone reformar el párrafo segundo del artículo 56 de la Ley orgánica de la CCSS, a fin de garantizar que no prescribirá el derecho de las personas trabajadoras a reclamar las cuotas adeudadas correspondientes al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que se requieren para consolidar o actualizar su derecho a una pensión por este seguro social de rango constitucional. Por esta vía, se pretende evitar que se repita la triste historia de muchas personas adultas mayores que laboraron toda su vida, pero que no pueden disfrutar una pensión digna por el régimen IVM porque no cuentan con las cuotas suficientes y actualizadas, debido a que personas inescrupulosas no cumplieron con sus obligaciones.

Esta propuesta busca armonizar el artículo 56 con el párrafo final del numeral 44 de la Ley Orgánica de la CCSS, que ya establece que el derecho a la pensión por invalidez, vejez y muerte es imprescriptible. Pero, si se permite que prescriba el derecho de la persona trabajadora a reclamar o recuperar las cuotas necesarias para consolidar su derecho a una pensión digna, de poco serviría tal enunciado, pues, en la práctica, se estaría tornando nugatorio este derecho.

Las personas trabajadoras, en muchas ocasiones, no se enteran del incumplimiento patronal en el reporte y pago oportuno de las cuotas a la seguridad social, hasta mucho tiempo después de terminada la relación laboral, precisamente cuando intentan hacer efectivo su derecho a la pensión.

Por razones similares, también se propone regular de mejor manera las causales de interrupción de la prescripción y el momento a partir del cual empieza a correr el plazo, así como ampliar a veinte años el plazo de prescripción para que la CCSS ejerza la gestión de cobro de las cuotas adeudadas a la seguridad social, ya que sin el cumplimiento oportuno de las fuentes constitucionales de financiamiento, tampoco es posible hacer efectivos los derechos irrenunciables a una pensión digna y a las demás prestaciones de los seguros sociales.

3- En concordancia con las anteriores propuestas, se plantea agregar un párrafo final a la norma citada para reforzar la obligación de las autoridades de la CCSS de ejercer de forma diligente y oportuna las acciones de cobro de las cuotas adeudadas a la seguridad social, así como las sanciones administrativas y disciplinarias que deberán imponerse a los funcionarios irresponsables que no cumplan con esta obligación. De esta forma, se busca garantizar que la protección legal establecida a favor de las contribuciones de la seguridad social no sea utilizada como excusa por la Administración para no incoar diligentemente las gestiones de cobro.

El principio fundamental que motiva estas reformas es que las contribuciones a los seguros sociales que administra la Caja Costarricense de Seguro Social de conformidad con el artículo 73 de la Constitución Política son derechos irrenunciables, según lo dispone expresamente el numeral 74 de la Carta Magna. De acuerdo con esta norma constitucional, los derechos y beneficios del capítulo de Garantías Sociales de la norma fundamental -incluidas las normas que protegen el financiamiento obligatorio de los seguros sociales- "*son irrenunciables"*.

En este sentido, una consecuencia lógica de esta disposición constitucional es que los derechos y beneficios que constituyen los seguros sociales no deben perderse por el simple paso del tiempo, pues son indispensables para garantizar el cumplimiento del derecho fundamental a la seguridad social de las personas trabajadoras.

De acuerdo con el artículo 73 de la norma fundamental, los seguros sociales a cargo de la Caja Costarricense de Seguro Social se rigen por un sistema de "*contribución forzosa del Estado, patronos y trabajadores*". De manera que, si este sistema de contribución tripartita y obligatoria no se cumple, sencillamente se estaría dejando sin financiamiento las pensiones de invalidez, vejez y muerte así como la prestación de los servicios de salud a la población costarricense.

El pago de las contribuciones a los seguros sociales constituye una obligación esencial de solidaridad con el resto de la sociedad costarricense, incluyendo a las futuras generaciones. Se trata de una obligación especialmente reforzada con rango constitucional. Por lo tanto, ningún subterfugio legal debe ser utilizado para evadirla, pues el daño que su incumplimiento le genera a la colectividad es de imposible o muy difícil reparación.

Si bien la legislación vigente impide a la CCSS negar la prestación de servicios de salud a personas trabajadoras por el solo hecho de que su empleador no ha cumplido con el pago de sus obligaciones, este incumplimiento afecta gravemente nuestro sistema de seguridad social.

En este sentido, lo afecta porque este sistema se basa en los principios de solidaridad y cobertura universal. De manera que la falta de pago de unos repercute directamente en la prestación de los servicios dirigidos a toda la colectividad. El daño es todavía más grave cuando el incumplimiento incluye la retención de las

propias contribuciones de la persona trabajadora, pues a ésta se le está privando injustamente parte de su salario.

La jurisprudencia constitucional ha sido conteste al pronunciarse reiteradamente contra la improcedencia de cualquier medida que pretenda eximir a algún sector de la población del pago de sus obligaciones con la seguridad social. Por ejemplo, ha señalado la Sala Constitucional:

> *"Este Tribunal consideró en la sentencia No. 1998-7393, que el derecho a la seguridad social tutelado en los artículos 73 de la Constitución Política, 11 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y 9 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, garantiza a todos los ciudadanos que el Estado, por medio de la Caja Costarricense de Seguro Social, les otorgará al menos los servicios indispensables en caso de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez y muerte. Este régimen de seguridad social se financia en forma tripartita, mediante la contribución forzosa de los patronos, los trabajadores y el Estado. Por lo tanto, la contribución es una obligación esencial para la existencia del régimen de seguridad social, y su finalidad es el fortalecimiento del fondo, para protección y beneficio de los propios contribuyentes. Este derecho supone, que los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos en el más alto rango, de manera que garantice la asistencia y brinde las prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad para preservar la salud y la vida. El ámbito subjetivo de aplicación del derecho de la seguridad social incorpora el principio de universalidad, pues se extiende a todos los ciudadanos, con carácter de obligatoriedad. El ámbito objetivo asume el principio de generalidad, en tanto protege situaciones de necesidad, no en la medida en que éstas hayan sido previstas y aseguradas con anterioridad, sino en tanto se produzcan efectivamente. Además, incorpora los principios de suficiencia de la protección, según módulos cuantitativos y cualitativos y de automaticidad protectora, lo que se traduce en la adecuada e inmediata protección en materia de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Por expresa disposición constitucional, esta gestión debe ser pública, a cargo del Estado, representado por la Caja Costarricense de Seguro Social, y* ***la financiación responde al principio cardinal de solidaridad social, pues se funda en la contribución forzosa y tripartita que realizan trabajadores, patronos y el Estado. De forma tal que, como bien indica la Procuraduría, la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social en ejercicio de esa competencia establecida constitucionalmente para administrar los seguros sociales y fijar el monto de las cuotas que deben pagar el Estado, los patronos y trabajadores, no podría establecer tratos discriminatorios, ni eximir, total o parcialmente del pago de la cuota que le corresponde a cada sector, porque igualmente al asumirlo la institución, es un monto que finalmente será compensado finalmente***

por todos aquellos que contribuimos al financiamiento de esta institución." (Voto N.º 2006-6347. Énfasis agregado).

Si hay una materia donde la ley debería ser especialmente rigurosa y no admitir "portillos" o excepciones que justifiquen o legitimen la falta de pago de las obligaciones, es justamente la protección del derecho fundamental a la seguridad social. Si hay una materia, donde se justifica plenamente la irrenunciabilidad de derechos, es precisamente esta. No solo por disposición expresa del artículo 74 de la Carta Magna, sino también por lo valioso de los principios que están en juego y la naturaleza misma de las relaciones obrero-patronales.

La sostenibilidad del seguro social que administra la CCSS es esencial para garantizar la paz social en Costa Rica. Pero esa sostenibilidad es imposible si permitimos que se siga debilitando el principio cardinal de solidaridad social en el que se basa la financiación de los seguros sociales. Cada vez, que se abre una vía legal para no pagarle a la CCSS se socava un poco más este principio.

Por otra parte, nuestra legislación también debería considerar la estructura desigual de las relaciones laborales. Una estructura donde las personas trabajadoras se encuentran en una posición de franca desventaja frente al poder del empleador, que, a su vez, se traduce en mayor vulnerabilidad frente al incumplimiento patronal y serias dificultades para reclamar el pago de las obligaciones adeudadas. Las normas procesales no pueden ignorar esta realidad, pues de lo contrario estarían cometiendo una grave injusticia.

No es casual que la Sala Constitucional haya reconocido la necesidad y la constitucionalidad de limitar la aplicación del instituto de la prescripción en materia laboral. Por ejemplo ha dicho que: *"reconocer cualquier prescripción durante la vigencia del contrato atenta contra principios fundamentales del derecho laboral -principalmente el de justicia social, consagrado por los artículos 74 de la Constitución y 1° del Código de Trabajo- que precisamente se basan en la idea de compensar mediante una legislación protectora la debilidad económica y social del trabajador, particularmente dentro de su relación con el patrono. Hacer prescribir un derecho del trabajador mientras esté vigente la relación laboral, es decir, en esa situación de dependencia, equivale a menudo, y la experiencia lo ha demostrado, a ponerlo a escoger entre efectuar el reclamo de sus derechos o conservar su empleo."* (Voto N.º 5969-93)

A pesar de lo anterior, el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Costarricense de Seguro Social (CCSS) establece para delitos tan graves como la retención indebida de cuotas de las y los trabajadores un plazo de prescripción inferior a los mínimos de la legislación procesal penal y dispone que la acción para reclamar el pago de daños y perjuicios ocasionados a esta institución, **prescribirá en un plazo de diez años,** *"sea que se ejercite la vía de ejecución de sentencia penal o directamente la vía civil".*
Nuestros tribunales de justicia han interpretado esta norma en el sentido de que dicho plazo de prescripción de los reclamos por daños y perjuicios también incluye

las deudas derivadas de la falta de pago de cuotas obrero-patronales a los seguros sociales que administra la CCSS. Así por ejemplo, mediante la Sentencia N.º 1193-2010, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia confirmó resoluciones previas que declararon con lugar una demanda interpuesta por una empresa que adeuda cuotas obrero-patronales a la seguridad social desde 1993 y que impugnó la gestión de cobro realizada por la CCSS, alegando que estas obligaciones se encuentran prescritas.

En el caso mencionado, la Sala Segunda confirmó la sentencia del Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José que resolvió: *"Se declara prescrita la acción de cobro de las planillas de julio, setiembre y noviembre del año mil novecientos noventa y tres y en consecuencia se anula la resolución ARL-0433-07-2006. Asimismo, prescrita la acción principal, quedan también prescritas las acciones por los derechos accesorios, a saber, intereses, multas y cualquier otro recargo que pretenda sumarle la parte demandada a lo anterior. Deberá la institución demandada reintegrar a la sociedad actora el dinero recaudado por concepto de servicios médicos cobrados como consecuencia del adeudo de cuotas prescritas".*

Sin embargo, también debe tomarse en cuenta que los derechos irrenunciables a los seguros sociales de salud y pensiones serían una quimera si la CCSS y las personas trabajadoras afectadas quedan imposibilitadas de accionar para reclamar las cuotas necesarias para garantizar su financiamiento. Muchos de estos casos son de naturaleza compleja, donde el incumplimiento no llega a ser conocido oportunamente por las partes afectadas y surgen obstáculos significativos a la acción de cobro, incluyendo el uso de maniobras fraudulentas como la utilización de testaferros y sociedades inactivas.

Probablemente la afectación más grave se produce en el caso del seguro IVM cuando las personas trabajadoras en edad de pensionarse ven afectado su derecho a una pensión digna por incumplimientos en el pago de cuotas ocurridos con más de una década de antelación. En estos casos, históricamente se han cometido grandes injusticias contra las personas trabajadoras más humildes, al condenarlas a pensiones de hambre -o incluso del Régimen No Contributivo- a pesar de que trabajaron duramente a lo largo de su vida.

Para atemperar esta injusticia, la Sala Segunda, en la sentencia anteriormente citada (N.º 1193-2010) interpretó correctamente las implicaciones del artículo 44, in fine, de la Ley Orgánica de la CCSS que declara imprescriptible el derecho a la pensión, en el sentido de que -para que esta norma tenga sentido- tampoco puede prescribir el derecho de la persona trabajadora a reclamar las cuotas que se le adeudan. Al respecto, dijo la Sala Segunda:

> *"En el caso en estudio, no se está en presencia de pretensiones en que el trabajador (a), o ex trabajador (a), pidan el pago de las cuotas adeudadas, por no haber sido empadronados por su empleador (a), durante la vigencia de la relación laboral, para efectos del recálculo de su pensión.* ***<u>En estos</u>***

otros procesos en donde quien figura como parte actora lo es el trabajador (a) y se constata el incumplimiento del patrono de no empadronar y se declara el derecho del (la) demandante al recálculo del monto de su pensión de vejez, que se encuentre disfrutando, por lo que en esos supuestos sí es aplicable el artículo 44 de la Ley Constitutiva de la C.C.S.S, considerándose imprescriptible la acción pertinente del trabajador (a) para reclamar el monto de la pensión y los daños y perjuicios." (Énfasis agregado).

Sin embargo, para dar seguridad jurídica a las personas trabajadoras es necesario integrar lo dispuesto en el artículo 44 y esta importante jurisprudencia con el artículo 56 de la Ley Orgánica de la CCSS, que no contempla expresamente la situación descrita al regular el plazo de prescripción de la acción para reclamar el pago de cuotas adeudadas a los seguros sociales, tal como se plantea en la presente propuesta.

Por otra parte, en esta iniciativa también se busca recoger las mejoras incorporadas al proyecto de ley N°17.954 por la Comisión Especial N° 18.201, a partir de las consultas formuladas sobre dicho expediente. Estos criterios se sintetizan de la siguiente manera:

1- La **Caja Costarricense del Seguro Social** mediante **Oficio Nº 34.618**, de 4 de julio del año 2011, manifestó su criterio favorable al proyecto y entre otras cosas señaló que:

"(…) si se toma en consideración que la Institución se encuentra obligada a otorgar el beneficio de pensión y brindar los servicios de salud a todos los trabajadores, independientemente de la recuperación de las cuotas adeudadas por el empleador; ***la propuesta constituye un medio de justicia social****, al declarar imprescriptible el cobro de las cuotas obrero patronales en deber de la Institución, garantizando un equilibrio real entre los principios básicos de solidaridad y cobertura universal."*

2- El **Ministerio de Trabajo y Seguridad Social** respondió mediante oficio **DMT-921-2011** de 14 de julio del año 2011, expresando que el Despacho Ministerial:

"(…) apoya este proyecto de ley en el tanto contribuye a fortalecer los mecanismos con que cuenta la Caja Costarricense del Seguro Social para combatir la morosidad, el fraude y la evasión en contra de la seguridad social y poder recuperar las cotizaciones que patronos y trabajadores le adeudan, independientemente del tiempo transcurrido (…) expresamos nuestro apoyo a esta iniciativa, en momentos en que precisamente el Gobierno de la República se ha mostrado preocupado por los problemas financieros que enfrenta la Caja Costarricense del Seguro Social, los cuales ameritan un conjunto de soluciones idóneas

que en distintos ámbitos coadyuven a que esta querida e indispensable institución siga siendo un pilar de la democracia y la justicia social costarricense."

3- La **Procuraduría General de la República** respondió mediante oficio **OJ-060-2011**, de 19 de setiembre de 2011, concluyendo que *"(…) la definición del contenido del presente proyecto de ley, como su aprobación o no, es un asunto de política legislativa que le compete en forma exclusiva a ese Poder de la República."*

4- Adicionalmente se cuenta en este análisis con el Informe del **Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa**, que en su oficio ST.178.2011 de 23 de setiembre de 2011 realizó un aporte en relación con la normativa que regula la morosidad patronal, y que puntualmente y en lo atinente sobre la reforma propuesta señala:

"Sobre el aumento del plazo de prescripción de la acción penal, tal y como nos lo indicara el Lic. Luis Diego Calderón de la Dirección de Cobros de la Caja, el texto propuesto vendría a reforzar jurídicamente las posibilidades de la institución para gestionar en la vía penal el cobro de las cuotas obreras retenidas por parte del patrono, al ampliar el plazo de prescripción de 2 a 3 años".

Por último, el Departamento de Servicios Técnicos indicó en relación con la reforma propuesta sobre imprescriptibilidad de la acción para recuperar cuotas de la seguridad social *"(…) ha quedado claro en párrafos anteriores, la seguridad social en nuestro país ha merecido una protección especial y progresiva por parte del ordenamiento jurídico y los poderes constituidos, tal y como lo indica la Sala Constitucional en su Voto Nº 10553-2009. (…) esta Asesoría considera que la propuesta de imprescriptibilidad de la acción para lograr dicho objetivo es jurídicamente viable y acorde con los esfuerzos que han de hacer los Estados para garantizar los principios de justicia y solidaridad social, universalidad, generalidad, suficiencia de la protección, gradualidad, progresividad y sostenibilidad aplicados a la seguridad social. Por lo dicho, esta Asesoría considera que la aprobación de la presente iniciativa legislativa queda a criterio de conveniencia y oportunidad de las y los señores diputados."*

En virtud de las consideraciones expuestas, someto a conocimiento de la Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley para su estudio y pronta aprobación por parte de los señores diputados y las señoras diputadas.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 56 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, LEY N.º 17, DE 22 DE OCTUBRE DE 1943, Y SUS REFORMAS

ARTÍCULO ÚNICO- Se modifica el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Caja Costarricense de Seguro Social, Ley N.º 17 de 22 de octubre de 1943, y sus reformas, que se leerá de la siguiente manera:

Artículo 56- Las multas impuestas con ocasión de la aplicación de esta Ley ingresarán a los fondos de la Caja Costarricense de Seguro Social debiendo ser giradas de inmediato a dicha Institución una vez practicado el depósito respectivo.

La acción penal en cuanto a las faltas contempladas en esta Ley, prescribirá **de conformidad con las reglas establecidas en el Código Procesal Penal y el Código Penal, con la salvedad de que el plazo se computará a partir del momento en que la institución tenga conocimiento de la falta.** El derecho a reclamar el monto de los daños y perjuicios irrogados a la Caja, sea que se ejercite la vía de ejecución de sentencia penal o directamente la vía civil, prescribirá en el término de diez años.

La acción para recuperar las cuotas adeudadas de los seguros sociales de enfermedad y maternidad e invalidez, vejez y muerte, así como, los aportes de la Ley de Protección al Trabajador, **prescribirá en veinte años. El plazo empezará a correr a partir del momento en que la Caja tenga conocimiento efectivo del incumplimiento. Además de las causales establecidas en el Código de Trabajo y la legislación común, el cómputo del plazo se interrumpirá por cualquier gestión en sede administrativa o judicial que realicen la Caja o las personas trabajadoras afectadas para el reclamo de las cuotas adeudadas. No obstante, la acción para que las personas trabajadoras reclamen las cuotas requeridas para consolidar o actualizar su derecho a una pensión del seguro de invalidez, vejez y muerte, será imprescriptible, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de la Constitución Política y el artículo 44, párrafo final de esta Ley.**

Sin perjuicio de lo anterior, la Caja accionará de forma inmediata la recuperación de las cuotas adeudadas una vez identificada la mora del deudor. Los funcionarios encargados de gestionar los cobros pertinentes respecto del pago de las obligaciones con la seguridad social, deberán realizar todas las gestiones administrativas y judiciales necesarias, de manera diligente y eficiente El no realizar las acciones cobratorias en los términos señalados dará lugar a establecer las responsabilidades disciplinarias y patrimoniales dispuestas en el régimen jurídico interno de la Caja.

Rige a partir de su publicación.

José María Villalta Flórez-Estrada
Diputado

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales.

1 vez.—(IN2018295659).

AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS PARA QUE DESAFECTE UN LOTE DE SU PROPIEDAD Y LO DONE A LA UNIÓN ZONAL DE ASOCIACIACIONES DE DESARROLLO INTEGRAL DE SABALITO, COTO BRUS

Expediente N.° 21.046

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La presente iniciativa de ley pretende la desafectación de uso público y la donación de un inmueble propiedad de la Municipalidad de Coto Brus a la Unión Zonal de Asociaciones de Desarrollo Integral de Sabalito de Coto Brus, debido a que en el cantón existe una latente necesidad de espacios para la realización de deporte, recreación, actividad física y actividades de carácter cultural, especialmente para las personas de escasos recursos económicos, quienes encuentran mayor dificultad para acceder a estos espacios en lugares privados, pues generalmente los costos son muy elevados.

Actualmente la comunidad de Sabalito de Coto Brus cuenta con dos plazas de fútbol, una al lado de la otra. Por esta situación surge la iniciativa de la Unión Zonal de Asociaciones de Desarrollo Integral de Sabalito de Coto Brus, para desafectar la propiedad en la que se ubica una de las canchas, esto sin afectar ni disminuir los espacios destinados a la recreación de los habitantes de esta zona; por el contrario, se busca diversificar las actividades recreativas y a su vez lograr la inclusión de las todos los grupos deportivos y culturales.

El lote cuenta con escritura y es propiedad de la Municipalidad de Coto Brus. El Concejo Municipal, mediante oficio N.° MCB-CM-430-2018, en sesión extraordinaria N.° 049 celebrada el 25 de mayo de 2018, en el artículo III, inciso único acuerda lo siguiente:

> "Solicitar a la Asamblea Legislativa la desafectación del bien público municipal y autorice el cambio de naturaleza del inmueble y la trasferencia de 10000 mts a la Unión Zonal de Sabalito para la construcción de un complejo Cultural Recreativo en la comunidad de San Rafael de Sabalito, Coto Brus, que se describe en el Folio Real P-18.033, Plano P-6986629-87, con un área de 10000 metros cuadrados".

Con la donación de este terreno se pretende desarrollar un proyecto deportivo-cultural que se presentó en las oficinas centrales del Instituto Mixto de Ayuda Social

(IMAS) y que cuenta con el visto bueno de personeros de oficinas regionales, en el que se espera la donación de doscientos millones de colones (₡200.000.000) para la construcción de un anfiteatro, una pista de atletismo, un parque para patinetas y las baterías sanitarias.

Esta comunidad, como muchas otras del territorio nacional, se encuentran atravesando una serie de problemas con la juventud y la niñez, pues muchos incursionan en la delincuencia y otros se ven afectados por el sedentarismo ligado al uso excesivo de videojuegos, lo que desencadena en altísimos índices de obesidad y sobrepeso, así como en una alta tasa de enfermedades crónicas no transmisibles como son la hipertensión arterial y la diabetes, las cuales se pueden prevenir con una sana alimentación y una adecuada rutina de actividad física. Por ello es de gran importancia diversificar los espacios recreativos y culturales, para garantizar el acceso a todos los grupos sociales por igual.

En el distrito de Sabalito se cuenta con gran cantidad de plazas de fútbol pero no con un espacio para las personas que disfrutan correr y patinar. Ante la ausencia de estos espacios, estas personas se han visto obligadas a realizar sus actividades en espacios públicos como la pista de aterrizaje de San Vito, en donde se reúnen por las tardes a patinar, correr y andar en bicicleta, aun cuando podrían exponer su integridad física.

Como parte de esta iniciativa de ley se adjuntan los siguientes documentos:

1- Copia del plano de la propiedad.
2- Copia de estudio registral de la propiedad.
3- Copia del oficio MBC-CM-430-2018, acuerdo del Concejo Municipal de Coto Brus.
4- Copia de la personería jurídica Unión Zonal de Asociaciones de Desarrollo Integral de Sabalito.

Por las razones expuestas, se somete a consideración de las señoras diputadas y los señores diputados el siguiente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS PARA QUE DESAFECTE UN LOTE DE SU PROPIEDAD Y LO DONE A LA UNIÓN ZONAL DE ASOCIACIACIONES DE DESARROLLO INTEGRAL DE SABALITO, COTO BRUS

ARTÍCULO 1- Se desafecta del uso público el inmueble finca número uno ocho cero tres tres (N.° 18033), propiedad de la Municipalidad de Coto Brus, cédula de persona jurídica número tres - cero uno cuatro – cero cuatro dos uno uno tres – dos siete (N.º 3-014-042113-27), que mide diez mil metros con cero decímetros cuadrados (10000,00 m²), según el plano catastrado número P - seis nueve ocho seis dos nueve - uno nueve ocho siete (N.° P-698629-1987).

ARTÍCULO 2- Se autoriza a la Municipalidad de Coto Brus, cédula de persona jurídica número tres - cero uno cuatro – cero cuatro dos uno uno tres – dos siete (N.º 3-014-042113-27), para que done el terreno finca número uno ocho cero tres tres (N.° 18033), naturaleza del terreno plaza de deportes, en el cual está instalada la plaza de fútbol de San Rafael de Sabalito, y que se desafecta en el artículo 1 de la presente ley. El lote mide diez mil metros con cero decímetros cuadrados (10000,00 m²). El terreno se ubica en el distrito dos, Sabalito; cantón ocho, Coto Brus; provincia de Puntarenas; colinda al norte con Marciano Barrantes Campos, finca Ñ11891; al sur, con calle Sabalito - San Marcos; al este, con Marciano Barrantes Campos, finca Ñ11891 y, al oeste, con Marciano Barrantes Campos, finca Ñ11891.

ARTÍCULO 3- El destino del terreno indicado en el artículo 2 de esta ley será donado a favor de la Unión Zonal de Asociaciones de Desarrollo Integral de Sabalito de Coto Brus, cédula jurídica número tres – cero cero dos – seis nueve dos cuatro uno ocho (N.° 3-002-692418), para el Complejo Cultural y Recreativo Comunal de Sabalito de Coto Brus.

ARTÍCULO 4- En la condición de disolución o incumplimiento de los fines de dicho proyecto, la Unión Zonal de Asociaciones de Desarrollo Integral de Sabalito deberá reversar el inmueble a la Municipalidad de Coto Brus.

ARTÍCULO 5- Se autoriza a la Notaría del Estado para que confeccione la escritura de traspaso y proceda a la inscripción, en el Registro Nacional, del terreno supracitado en los artículos 1 y 2 de la presente ley, a nombre de la Unión Zonal de Asociaciones de Desarrollo Integral de Sabalito de Coto Brus. Asimismo, se autoriza a la Procuraduría General de la República para que corrija los defectos que señale el Registro Nacional.

Rige a partir de su publicación.

Wagner Jiménez Zúñiga
Diputado

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Especial de la Región Brunca, encargada de analizar, investigar, estudiar, dictaminar y valorar las recomendaciones pertinentes en relación con la problemática social, económica, empresarial, agrícola, turística, laboral y cultural de dicha región y expediente 20.938.

1 vez.—(IN2018295665).

DESAFECTACIÓN DEL USO PÚBLICO DE UN TERRENO PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE SALUD Y AUTORIZACIÓN PARA QUE EL TERRENO SE DONE A FAVOR DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS

Expediente N.° 21.047

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El presente proyecto pretende la desafectación del uso público de un terreno perteneciente al Ministerio de Salud, para que sea donado a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

En agosto del año 1978, el señor Audurio Pirola Cormalli donó al Estado costarricense un lote de trescientos cincuenta y un metros cuadrados (351 m) aproximadamente, el cual se ubica en el centro del distrito de San Vito de Coto Brus; lo anterior con el objeto de que en dicho terreno se tramitara la construcción de un centro de educación y nutrición para la población infantil local. Dicho terreno fue traspasado al Ministerio de Salud, que se encargó de llevar a cabo la construcción y el funcionamiento del Centro de Educación y Nutrición.

Con el paso de los años la población creció y las instalaciones se volvieron insuficientes para abastecer las necesidades locales; por esa razón, el Ministerio de Salud tramitó un proyecto para el traslado del CEN y las instalaciones quedaron desocupadas desde el año 1988, aproximadamente.

Es así como, en el año 1990, la sucursal de la Caja Costarricense de Seguro Social solicitó al Ministerio de Salud el préstamo del edificio y lo adaptó a sus necesidades, utilizando estas instalaciones hasta el año 1995.

Posteriormente, en la administración del gobierno Figueres Olsen, dicho edificio fue ofrecido en préstamo al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), que lo ocupó desde 1996 a 1998. Posterior a esta época, el IMAS se trasladó y el edificio nuevamente quedó en desuso. Mientras estaba vacío, el Ministerio de Salud utilizaba las instalaciones como bodega; no obstante, cuando se dio la reforma del sector salud y el Hospital San Vito se dividió con el Área de Salud de Coto Brus, la Jefatura de Enfermería realizó la solicitud de préstamo del edificio a las autoridades locales del Ministerio de Salud. El préstamo fue efectivo y en el edificio se instaló parte del personal de enfermería, entre ellos los asistentes técnicos de atención primaria (ATAP). Los asistentes técnicos de atención primaria hacen uso de las oficinas desde el año 2000; hasta este momento la Caja Costarricense de Seguro Social ha hecho uso de las instalaciones por medio del Área de Salud de Coto Brus, ente

encargado de dar mantenimiento básico y de pagar los servicios públicos necesarios para el funcionamiento de dichas oficinas.

En la actualidad, las instalaciones cuentan con un recinto para vacunación, tres oficinas de asistentes técnicos de atención primaria en salud (ATAP), la oficina del director de enfermería, la oficina para el asistente de la Dirección de Enfermería, dos secretarias. Estas oficinas son utilizadas por la Dirección de Enfermería para realizar reuniones y capacitaciones del personal, tanto asistentes técnicos de atención primaria como auxiliares de enfermería de todo el cantón.

A este proyecto de ley se adjuntan la copia del informe registral, una copia del documento de solicitud del proyecto por parte del Área de Salud de Coto Brus, una copia de la escritura 26573 y la copia del plano madre.

Por los motivos antes expuestos, se somete a consideración de las señoras diputadas y los señores diputados el siguiente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

DESAFECTACIÓN DEL USO PÚBLICO DE UN TERRENO PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE SALUD Y AUTORIZACIÓN PARA QUE EL TERRENO SE DONE A FAVOR DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)

ARTÍCULO 1- Se desafecta del uso público el inmueble finca número dos seis cinco siete tres (N.° 26573), propiedad del Ministerio de Salud, cédula de persona jurídica número dos - cero cero cero - cero cuatro cinco cinco dos dos (2-000-045522), la cual mide trecientos cincuenta y un metros con cuarenta decímetros cuadrados (351,40 m²). El plano no se indica.

ARTÍCULO 2- Se autoriza al Ministerio de Salud, cédula de persona jurídica número dos - cero cero cero - cero cuatro cinco cinco dos dos (2-000-045522), para que done el terreno finca número dos seis cinco siete tres (N.° 26573); naturaleza del terreno destinado al Centro de Educación y Nutrición de San Vito, desafectado en el artículo 1 de la presente ley; el lote mide trecientos cincuenta y un metros con cuarenta decímetros cuadrados (351, 40m²). El terreno se ubica en el distrito uno, San Vito; cantón ocho, Coto Brus; provincia de Puntarenas; colinda al norte con Alicio Pirola Rosa; al sur, en parte con calle pública y en parte con calle privada; al este, en parte calle privada y en parte con calle pública y, al oeste, resto del donante.

ARTÍCULO 3- El destino del terreno indicado en el artículo 2 de esta ley será donado a favor de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), cédula jurídica número cuatro - cero cero cero - cero cuatro dos uno cuatro siete (N.° 4-000-042147). Dicho terreno estará destinado a la construcción del Área Administrativa de Supervisión de Enfermería y de Asistentes Técnicos de Atención Primaria en Salud de la Zona de Coto Brus.

ARTÍCULO 4- Se autoriza a la Notaría del Estado para que confeccione la escritura de traspaso y proceda a la inscripción, en el Registro Nacional, del terreno supracitado en los artículos 1 y 2 de la presente ley, a nombre de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Asimismo, se autoriza a la Procuraduría General de la República para que corrija los defectos que señale el Registro Nacional.

Rige a partir de su publicación.

Wagner Alberto Jiménez Zúñiga
Diputado

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración.

1 vez.—(IN2018295667).

REFORMA A LOS ARTÍCULOS 229 Y 260 DEL CÓDIGO PENAL, LEY N° 4573 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 1970 Y SUS REFORMAS, PUBLICADO EN EL ALCANCE 120 A, DE LA GACETA N° 257 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 1970

Expediente N.° 21.048

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Nuestra Constitución Política consagra en el artículo 61 el derecho de los trabajadores a la huelga y de los patronos al paro, salvo en los servicios públicos esenciales, tal como lo determina la Reforma Procesal Laboral, Ley N° 9343 que establece las regulaciones de este derecho, las cuales desautorizan todo acto de coacción o violencia.

En otras palabras, es el propio Constituyente el que a la hora de consagrar los derechos a la huelga y al paro, desautoriza que -con ocasión a su ejercicio- se realicen intencionalmente acciones de coacción o violencia, que bien podría ser física, psicológica o moral, y ser empleadas como forma de presión, manipulación, maltrato o sufrimiento, contra la integridad de personas o de bienes públicos o privados con el propósito de alcanzar sus fines.

Si bien esta norma constitucional es clara, lo cierto es que independientemente de que sea declarada o no ilegal, en los últimos años el ejercicio de estos derechos ha sido aprovechado por algunos sectores interesados para ejecutar acciones delictivas contra bienes de naturaleza pública o privada, con la aviesa intención de causar daños significativos que les permita suspender, descontinuar o paralizar el servicio que prestan y de paso, coaccionar la negociación pendiente.

Se trata de acciones delictivas realizadas sin consideración alguna al impacto social o económico que generan o al grave perjuicio que podrían causar a las personas o al Estado, sobrepasando de manera evidente los límites legales y constitucionales fijados, pues el ejercicio de la huelga debe enmarcarse siempre dentro del marco de la legalidad.

Aunque son innumerables los ejemplos que pueden extraerse del pasado; la más reciente huelga nacional, convocada en Costa Rica el 10 de setiembre del 2018, por distintas organizaciones sindicales, -como medida de presión en contra del Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que presentó el Gobierno de la República (Expediente N° 20.580)- ofrece nuevos y temibles ejemplos de violencia contra de la integridad de las personas y las cosas.

El desabastecimiento de combustible o de gas que ha vivido el país, por causa de los intentos de sabotaje a terminales petroleras, poliductos y plantas que administra RECOPE para el almacenamiento y venta de los hidrocarburos, lo mismo que la elaboración de bombas “molotov” y hasta el accionamiento de armas de fuego contra funcionarios de esa refinadora, representan claros ejemplos de una intencionalidad delictiva que nuestro país simplemente no se puede dar el lujo de tolerar.

Así quedó plasmado en la última encuesta CIEP-UCR, cuyos datos publicó el Semanario Universidad el 22 de septiembre del 2018, a dos semanas de inicio de la huelga.

Luego de una amplia consulta realizada de manera aleatoria entre las jornadas 9 y 10 de la huelga, con un margen de error de 3,6 puntos, un 82% de los costarricenses fustigaron los obstáculos a la distribución de combustibles, que ocurrieron como consecuencia de este tipo de movimientos. Es claro que no sólo por los bloqueos en sí, que también fueron rechazados en un 72% por la misma población, sino también por acciones muy concretas dirigidas deliberadamente con el ánimo de entorpecer la distribución de los hidrocarburos.

2.568.400 barriles de combustible que RECOPE almacena en su terminal de Moín, por ejemplo pudieron haber causado un daño devastador a las instalaciones de esa refinadora y a todo su entorno, por causa del sabotaje que funcionarios de aquella empresa pública realizaron a una de las válvulas de gas LPG para evitar con ello su salida y distribución y hacer sentir tempranamente a los consumidores el impacto de dicha huelga.

El día 3 de octubre del 2018, en el juicio llevado a cabo en los Tribunales de Limón por ese hecho, dicho peligro fue precisado mejor, tanto por fiscales como por los representantes de RECOPE:

Así consta en la nota de “Sucesos & Judiciales” publicada el 4 de octubre , en la página 9/A del periódica La Nación:

> *“El atentado ocurrió el 11 de setiembre a las 8 p.m. cuando, en las instalaciones de la refinadora en Moín, se estaba pasando gas licuado (se usa para cocinar) de un barco de gran tamaño a las esferas en las cuales se almacena en esa planta.*
>
> *En determinado momento dos funcionarios que estaban a cargo de la labor, notaron que en una de las esferas había aceite hidráulico regado, pues la pieza que regula la entrada y salida del gas estaba desarmada y de inmediato se suspendió todo.*
>
> *De no haber detectado el sabotaje, pudo suceder un escape de gas que, tomando en consideración la cantidad que había en la esfera, y además en*

> *la embarcación, pudo desatar una explosión de grandes magnitudes, dijeron tanto fiscales como los representantes de Recope"*

La gravedad de las consecuencias que se pudieron haber derivado de ese hecho, tanto en el plano personales, como ambientales y económico, fue reconocido por el Director General de Bomberos de Costa Rica, señor Héctor Chaves, en la conferencia de prensa que el Gobierno de la República convocó el 17 de setiembre del 2018 para denunciar estos actos.

Según este funcionario: *"…los hidrocarburos en las refinerías, en los cisternas y en los poliductos presentan condiciones de alto riesgo, y por tanto en una protesta no se pueden utilizar porque esto indudablemente amenaza a toda la población".*

Esta advertencia, sin embargo, no fue obstáculo para que actos de sabotaje de similar gravedad se continuaran ejecutando como medida de presión en los días previos y posteriores a esos hechos. De hecho, según consta en la misma nota periodística citada:

> *"El primer día de la huelga (10 de setiembre) se descubrió el sabotaje en varias calderas de asfalto en el plantel de Moín, Limón. Desconocidos apagaron las calderas, lo que provocó el agotamiento del material pocos días después. De esta forma, las constructoras se quedaron sin el insumo principal para mantenimiento de vías. Por esta causa, hubo 300 empleados temporales despedidos".* (Ibid)

Una semana después, el 17 de setiembre, se llevaría a cabo otro atentado en contra de uno de los poliductos que RECOPE utiliza para el trasiego y transporte de hidrocarburos, y así fue reportado por la misma prensa;

> *"Desconocidos perforaron el poliducto en un tramo en El Coyol de Alajuela. Le hicieron un orificio con una broca lo que provocó fuga de combustible. Bomberos cerró la vía para labores de limpieza. El caso fue denunciado ante la Policía Judicial"* (Ibid)

En esa ocasión, entre de 500 y 1000 galones de diésel de los 3000 que se encontraban encapsulados en el poliducto de la Garita de Alajuela salieron expulsados a gran presión con dirección la carretera de alto tránsito que atraviesa esa zona, luego de haber sido perforado precisamente para que con el derrame se desabasteciera de ese hidrocarburo al país. De no haber sido por la rápida intervención de los Bomberos, este otro daño bien pudo también haber causado pérdidas materiales, ambientales y humanas de gran magnitud, con sólo el hecho de que una fuente de ignición hubiera entrado en contacto con ese hidrocarburo y una llama retrógrada hubiere llegado hasta la fuente del derrame.

El 17 de setiembre del 2018, -en entrevista concedida en el canal 6 de televisión-, el Ministro de Comunicación de la Administración Alvarado Quesada, Juan Carlos Mendoza, no dudó en calificar tales actos como *"atentados contra la infraestructura pública y eventualmente contra la vida de las personas".*

En ese mismo medio el propio Ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, reconoció que *"…ya hemos sufrido atentados en contra del personal del Estado, contra instalaciones del Estado con una evidente mano criminal, delictiva, total y absolutamente".*

De hecho, sólo en los primeros 10 días de huelga, -según lo reconoció también ese Ministro- al menos 49 de sus agentes policiales tuvieron que ser atendidos por la Cruz Roja por causa de las lesiones provocadas con ocasión de ese movimiento.

Frente a esta realidad y para contrarrestar los actos de vandalismo que esos funcionarios denunciaron, es claro que nuestro país debe sancionar con mayor severidad las acciones violentas o ilícitas que sean cometidas con ocasión del ejercicio de los derechos constitucionales consagrados en numeral 61 antes citado, pues esta norma es la que desautoriza precisamente el empleo de mecanismos de coacción, violencia o amenaza durante su ejercicio.

Para tales efectos la suscrita diputada se propone modificar el Código Penal con único el objeto de elevar en un tercio las penas de los delitos de:

1- Daño agravado, y
2- Atentado contra plantas, conductores de energía y de comunicaciones,

Lo anterior cuando tales acciones delictivas sean cometidas por un funcionario público en situación de huelga y/o se trate también de una persona que sin ser funcionario público realice estos atentados con motivo de una huelga o paro.

Asimismo, por no haber sido tipificado con anterioridad, se pretende incorporar dentro del Código Penal los daños agravados que se cometan en contra de cualquiera de los componentes del Sistema Nacional de Combustibles, esto para proteger de la acción vandálica la terminal petrolera que RECOPE mantiene actualmente en el Caribe, su red de poliductos que se extiende de costa a costa, así como sus estaciones de bombeo, y planteles de almacenamiento y venta, incluyendo los que emplea para las ventas en aeropuerto.

Con esta reforma, se pretende proteger, de manera especial, los componentes que integran el Sistema Nacional de Combustible, que utiliza RECOPE para abastecer de manera continua, eficiente y segura las necesidades de hidrocarburo que requiere el país, en particular, durante el ejercicio del derecho a la huelga, agravando la sanción cuando los daños en contra de sus equipos e instalaciones provenga de funcionarios del Estado

En virtud de lo anterior, sometemos a conocimiento de la Asamblea Legislativa el proyecto de ley adjunto, que castiga los actos de violencia y coacción cometidos con ocasión de una huelga o paro, a través de la reforma a los artículos 229 y 260 del Código Penal, Ley N° 4573 del 15 de noviembre de 1970 y sus reformas para su respectiva aprobación:

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

REFORMA A LOS ARTÍCULOS 229 Y 260 DEL CÓDIGO PENAL, LEY N° 4573 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 1970 Y SUS REFORMAS, PUBLICADO EN EL ALCANCE 120 A, DE LA GACETA N° 257 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 1970

ARTÍCULO 1- Se reforman los artículos 229 y 260 del Código Penal, Ley N° 4573 del 15 de noviembre de 1970 y sus reformas, publicado en el Alcance 120 A, de la Gaceta N° 257 del 15 de noviembre de 1970, cuyos textos dirán:

Artículo 229- Daño agravado

Se impondrá prisión de seis meses a cuatro años:

1- Si el daño fuere ejecutado en cosas de valor científico, artístico, cultural o religioso, cuando, por el lugar en que se encuentren, se hallaren libradas a la confianza pública, o destinadas al servicio, la utilidad o la reverencia de un número indeterminado de personas.

2- Cuando el daño recayere sobre medios o vías de comunicación o tránsito, sobre puentes o canales, sobre plantas de producción o conductos de agua, de electricidad o de sustancias energéticas.

3- Cuando el hecho fuere ejecutado con violencia en las personas o con amenazas.

4- Cuando el hecho fuere ejecutado por tres o más personas.

5- Cuando el daño fuere contra equipamientos policiales.

6- Cuando el daño recayera sobre redes, sistemas o equipos informáticos, telemáticos o electrónicos, o sus componentes físicos, lógicos o periféricos.

La pena precedente se elevará en un tercio cuando los hechos señalados los realice un funcionario público con ocasión de una huelga.

Atentado contra plantas, conductores de energía, de comunicaciones e instalaciones y equipos del Sistema Nacional de Combustible.

Artículo 260- Se impondrán las penas establecidas por el artículo 255, aumentada en un tercio, al que creare peligro para la seguridad común:

1- Atentado contra plantas, obras e instalaciones destinadas a la producción o transmisión de energía eléctrica o de sustancias energéticas;

2- Atentado contra la seguridad de cualquier medio de telecomunicaciones; y

3- Obstaculizando la reparación de desperfectos de las plantas, obras o instalaciones a que se refiere el inciso 1), o el restablecimiento de comunicaciones interrumpidas.

4- Atentado contra las instalaciones y equipos del Sistema Nacional de Combustibles: terminal petrolera, red de poliductos, estaciones de bombeo, planteles, .recipientes y tanques de almacenamiento de combustibles y otros relacionados, así como esferas para gases destinados a la venta, tuberías de conducción , sitios de carga de cisternas, y demás componentes requeridos para abastecer de manera continua las necesidades de hidrocarburo del país

Si de esos hechos se deriva un desastre, la pena será de prisión de tres a ocho años.

Los hechos previstos por el presente artículo serán punibles con la pena establecida por el artículo 246, cuando sean ejecutados para impedir o dificultar las tareas de defensa o salvamento contra un desastre ocurrido , o cuando fueren cometidos durante la existencia de un movimiento de huelga o paro.

Rige a partir de su publicación.

María Inés Solís Quirós

Pedro Miguel Muñoz Fonseca

Aracelly Salas Eduarte

Rodolfo Rodrigo Peña Flores

María Vita Monge Granados

Óscar Mauricio Cascante Cascante

Erick Rodríguez Steller

Erwen Yanan Masís Castro

Diputadas y diputados

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos.

1 vez.—(IN2018295670).

REFORMA INTEGRAL A LA LEY REGULADORA DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO TURÍSTICO PAPAGAYO, LEY N° 6758 DE 4 DE JUNIO DE 1982

Expediente N° 21.050

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El Proyecto Turístico Golfo de Papagayo se inicia con la promulgación de la Ley Nro. 5847 del 18 de noviembre de 1975 y publicado en el Alcance 194-A de la Gaceta Nro. 223 del 22 de noviembre de ese mismo año, en la que se aprobó el convenio de préstamo por U.S.$370.000.00, entre el Instituto Costarricense de Turismo (en adelante ICT) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) con el fin de financiar exclusivamente la elaboración de un estudio de factibilidad técnica económica y el plan maestro del polo turístico de Bahía Culebra, provincia de Guanacaste y con el aval del Poder Ejecutivo dado que el prestatario de ese empréstito fue el Instituto Costarricense de Turismo. Dicho estudio fue realizado en el abril del año 1978 y aprobado por parte del ICT el Estudio de Factibilidad Técnico Económico y Financiero, el Plan Maestro y Diseño Preliminar del Proyecto Turístico de Bahía Culebra por la empresa BEL Ingeniería, CEISA, Madriz Mezerville & Asociados, Checohi & Co., y actualizado en 1988.

En 1995 se realizó el replanteamiento del Plan Maestro y la Junta Directiva del ICT en sesión Nro. 4572, artículo 2, inciso VIII, del 10 de julio de 1995, aprobó el actual Reglamento al “Plan Maestro General del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo”, publicado en la Gaceta Nro. 140 del 24 de julio de 1995.

La promulgación de esa Ley en su Artículo 3° indica que el proyecto turístico de Bahía Culebra que surja como consecuencia de ese estudio de factibilidad será el Estado costarricense de conformidad con la ley especial que la Asamblea Legislativa deberá emitir para ese propósito.

En ese mismo orden cronológico en el mes setiembre de 1979 se promulgó la Ley Nro. 6370, que declaró de utilidad pública los bienes inmuebles para realizar y ejecutar el proyecto turístico en Bahía Culebra o Papagayo necesarios para el desarrollo del proyecto turístico Golfo Papagayo (en adelante PTGP), motivo por el cual se demarcó el área territorial del Proyecto, el proceso de adquisición y estableció los procedimientos de compra a seguir que debería seguir el ICT para su implementación. Según la página WEB del ICT indica que se eligió Bahía Culebra como sitio más apto para localizar un proyecto de turismo de estadía tipo sol-mar-

arena, donde se privilegiaron sus condiciones naturales, culturales y posibilidades de explotación.

Para agilizar el proceso de adquisición de terrenos que conforman el PTGP se autorizó a la Dirección General de Tributación Directa (en adelante DGDT) e instruye a los jueces que durante el proceso de exportación de la propiedad autorizar la entrada en posesión de lo expropiado, previa indemnización que al DGDT hiciera al respecto, ello con el fin de agilizar plazos y tiempos de ejecución de la infraestructura base para desarrollo del proyecto.

En el Artículo 5° de esa Ley establece que en la etapa de valoración de los bienes inmuebles el legislador de ese entonces tuvo una visión extraordinaria al adicionar que además de los parámetros usuales en materia de avalúos se debe considerar tanto su ubicación como por el valor ecológico con lo cual se brinda una valoración económica a la belleza escénica entre otros atributos que posea la ubicación geoespacial del PTGP.

Sin embargo, el legislador de ese entonces reconoce que esta segunda ley es de índole preoperativa en búsqueda de la adquisición de tierra con base en el estudio de factibilidad antes citada e indica la necesidad de crear una ley especial para el desarrollo único y exclusivo conforme lo estableció los legisladores en el año 1975.

En esa misma línea, surge la Ley Nro. 6758, Regula la Ejecución del Proyecto Turístico de Papagayo del 4 de junio de 1982 cuya vigencia data desde el 25 de junio de ese mismo año, publicada en la Gaceta Nro. 122, misma que ha tenido varias reformas entre ellas, la Ley Nro. 8823, Reforma varias leyes sobre la participación de la Contraloría General de la República (en adelante CGR) para la simplificación y el Fortalecimiento de la Gestión Pública, publicada en la Gaceta Nro. 105 del 01/06/2010, específicamente en el Artículo 21 de la citada ley reforma los alcances del Artículo 5° de la ley que regula la ejecución del PTGP en materia de exoneraciones para la ejecución del proyecto.

El Proyecto Turístico Golfo de Papagayo comprende por lo tanto un área aproximada de 1.658 hectáreas, además de la zona pública, inscrita a nombre del Estado Costarricense bajo la administración del ICT, con el fin primordial de atraer el turismo nacional e internacional, aprovechando al máximo los recursos turísticos, naturales y culturales de esa región.

En ese sentido, la Ley Nro. 6758 establece, entre otros aspectos, la creación de una Oficina Ejecutora que tiene, en forma exclusiva, las facultades de dirigir, coordinar, administrar y controlar el desarrollo del Proyecto y la conformación de un Consejo Director integrado por tres representantes del ICT y dos del sector privado con experiencia en turismo. Ese Consejo Director, tiene como principales atribuciones y deberes dirigir coordinar, administrar y controlar el desarrollo del PGTP y recomendar a la Junta Directiva del ICT el otorgamiento o la cancelación de las concesiones de los terrenos dentro del proyecto, de las cesiones totales o parciales y de sus gravámenes, según así se indica en el Reglamento de operación del

Consejo Director del Polo Turístico del Golfo Papagayo, publicado en La Gaceta Nro. 213 del 5 de noviembre del 2003.
No se puede obviar las acciones acontecidas por parte del Estado costarricense en los años 70 en virtud que, en esa década que se empieza a gestar el polo turístico de Bahía Culebra el Estado estaba imponiendo nuevas reglas en lo que respecta a la recuperación de la zona costera de nuestro país, para ello, en el año 1977 se promulgó la Ley Nro. 6043, Zona Marítima Terrestre, publicada en la Gaceta Nro. 52 del 16 de marzo de 1977, en la cual crea la zona pública y la zona restringida, conceptos claves de la Zona Marítima Terrestre, ley que en sí misma constituye una ley marco que posee el sustento del Artículo 6° constitucional cuyo fin es la de proteger, conservar y explotar con exclusividad todos los recursos y riquezas naturales en las aguas, el suelo, subsuelo de Costa Rica.

Es por ello, que la Ley Nro. 6758 el legislador brindó la opción de crear un marco especial para el desarrollo e implementación del PTGP, no obstante, esa intención no constituye que esa ley sea una ley general sino más bien una ley operativa para el buen desarrollo del proyecto, y es con ese fin de dicha ley crea las condiciones de crear la oficina ejecutora, crea un fondo especial para el buen desempeño del proyecto.

Desde la promulgación de las citadas leyes fundadoras han pasado 43 años desde la vigencia de la Ley Nro. 5847 y 36 años de la entrada de vigencia la Ley Nro. 6370, señalar la línea de tiempo es con el fin de hacer un análisis y revisión sobre la efectividad de la ejecución de este polo turístico.

Bajo esa premisa, se debe considerar el fin que se persigue para incentivar un polo turístico es que promueva no sólo la inversión privada en áreas costeras sino que mantenga los ideales para lo cual fue creado, en ese sentido, la intención es cubrir dos grandes actividades: la primera consiste en dar en concesión los terrenos dentro de su zona de influencia para ello el Estado debe realizar obras de infraestructura pública a través del ICT como lo es la construcción de carreteras, acueductos, obras de electrificación, etcétera, que le permitan crear un marco ideal para atraer inversionistas interesados en la explotación de los recursos naturales y turísticos que brinda la zona, y la otra consiste en el otorgamiento de concesiones para realizar obras turísticas conforme al Plan Maestro cuyo riesgo y cargo serían propiamente de los concesionarios del proyecto.

Del estudio realizado por la Contraloría General de la República en su Informe Nro. DFOE-ED-5-2008 de fecha 31 de marzo de 2008 en relación con la ejecución del polo turístico ha manifestado temas que se consideran de atención inmediata, dicho estudio abarca desde la primera concesión de terrenos fue otorgada en el año 1991 y hasta enero del año 2008 en la cual la Oficina Ejecutora indica que tienen pendientes de adjudicar nueve lotes. Para diciembre de año 2007 se registran 214 concesionarios de los cuales 188 corresponden a cesiones parciales de terrenos al amparo de los contratos suscritos entre adjudicatarios, concesionarios y otros interesados con el aval del ICT; estas cesiones parciales las han practicado al menos las siguientes empresas: Ecodesarrollo Papagayo, S.A., Grupo Istmo

Papagayo S.A. y Grupo Papagayo GP S.A., otras han sido canceladas como Auromax S.A., Brueton S.A., Inmensidades del Sol S.A.
El Estado debe ofrecer un marco operativo eficaz para un proyecto de esta naturaleza, pero sobre todo, debe analizarse también el papel de la Oficina Ejecutora y las demás instancias del ICT en determinar el por qué el proyecto no se ha consolidado como tal después de 43 años como se mencionó en párrafos anteriores, el ente Contralor detectó que el Plan Maestro estaba desactualizado (para el año 2008) e instruyó su adecuación a las nuevas circunstancias para ejecutividad, sin embargo, su última revisión data del año 2009 por lo que es necesario determinar su avance real y ajustes con variables como el cambio climático, el rol del Estado de Costa Rica Neutral, ajustes en construcciones verdes a fines a los propósitos y objetivos del nuevo plan de desarrollo que la actual administración emita en su gestión.

Dentro de los factores externos de las concesiones otorgadas según detalla el Informe de la Contraloría con base en datos suministrados por la Oficina Ejecutora para marzo de 2007 se registraban 1.196 habitaciones, cantidad inferior de las 26.450 habitaciones proyectadas en el Plan Maestro anterior, aunado a este fenómeno, también se registra en el estudio del ente Contralor que de la muestra tomada para su informe 26 de los concesionarios con corte a enero de 2008, 11 concesionarios no han iniciado los proyectados comprometidos en los respectivos contratos de concesión firmados más de 10 años (dado que el informe data 2008) podría indicarse que si no han iniciado estos proyectos se han “gastado” tiempo para su ejecución 18 años con lo cual produce un prejuicio para el desarrollo del proyecto dado que no se incentiva el cumplimiento de las metas del polo turístico.

Queda claro, que a falta de información requerida en su oportunidad al ICT por parte de este Despacho ha producido que no se pueda determinar con exactitud quienes son los actuales concesionarios y quienes son los que poseen más tiempo de concesión, sin embargo, este hecho no es perjudicial para que se dé un cambio de ley.

En esa misma línea, según la Contraloría General indica que muchas de las concesiones otorgadas aún no han suscrito los respectivos contratos de concesión con lo cual queda congelada esa porción de tierra para ser oferta de nuevo para atraer verdaderos interesados en desarrollar y aprovechar el proceso de maduración del proyecto bajo el enfoque principal del producto es sol-playa-mar, zona en la se puede disfrutar de atractivos relacionados con las vistas escénicas al golfo y costas, diversidad de playas, manglares, arrecifes coralinos, diversidad de flora y fauna, áreas con valores arqueológicos que hace que el PTGP sea un polo turístico único.

En el siguiente cuadro se muestra el comportamiento de 13 adjudicatarios de concesión en estado irregular con datos suministrados por parte de la Oficina Ejecutora a la CGR:

Concesionario	Fecha Contrato	Hectáreas Concesionadas	Compromiso	Realizado
1	23-07-96	24.9	257	-
2	08-06-92	20.0	180	-
3	25-09-96	0.56	11	-
4	26-09-96	8	40	-
5	03-04-98	7.8	18	-
6	25-08-98	2	40	-
7	07-06-02	15	110	Construido sólo el restaurante
8	04-12-02	0.6	12	-
9	09-02-05	8.46	20	-
10	31-08-06	6.9	24	-
11	14-12-06	12	54	-
12	09-07-01 (a)	7	240	-
13	2005 (a)		-	-

(a) Se refiere a la fecha de adjudicación por parte de la Junta Directiva del ICT, sin que los contratos de concesión se hayan suscrito todavía. Ver punto 2.5 de este informe.

Fuente: CGR DFOE-ED-5-2008

Conforme a esa situación, también se debe considerar cuantas concesiones la Oficina Ejecutora ha recomendado y ejecutado la rescisión de concesiones por incumplimiento por parte de los interesados y cuáles han sido las acciones correctas para su recuperación basada en el debido proceso para no pagar indemnizaciones que no corresponden sino más bien el rescate de las mismas y la respectiva ejecución de la garantía de cumplimiento.

Otro problema detectado a lo largo de la ejecución de este proyecto por parte de la Oficina Ejecutora y queda de manifiesto en el Informe de la Contraloría, es con

respecto a los plazos otorgados en los contratos de concesión, pues el ICT ha autorizado ampliaciones o ajustes en los mismos sin que el concesionario haya realizado obras para lo cual se comprometió, muchas veces llevando al límite máximo de concesión (50 años) y en algunos casos adicionándole prórrogas extralimitándose el alcance del máximo plazo.

Con el fin de ilustrar ese tema se ilustra el siguiente cuadro con datos suministrados del Informe de la Contraloría:

Concesionario	Fecha Adjudicación	Plazo Inicial	Fecha de adición	Plazo adicional
1	29/04/1996	20 años	26/03/2007	30 años
2	08/06/1992	30 años	07/12/2007	20 años
10	09/12/1993	20 años	31/08/2006	20 años

Fuente CGR DFOE-ED-5-2008

Si bien el Reglamento de la Ley Nro. 6758, DE-25439 establece un plazo máximo de 50 años indica que la motivación del plazo deberá estar debidamente razonada y fundamentada con criterio técnico, la ampliación del plazo original menor al plazo máximo deberá contener criterio técnico para la debida justificación de no haber realizado las obras para la cual se comprometió, caso contrario lo que procedía era continuar con el debido proceso de rescisión, a pesar de tener un beneficio el administrado en el caso de que la justificación procedía con la ampliación de esos plazos.

Los argumentos antes esbozados conllevan hacia un criterio del actuar de la Oficina Ejecutora creada con base legal en el artículo 9° de la Ley Nro. 6758 y el artículo siguiente de esa ley crea un Consejo Director y un Director Ejecutivo en la ley no establece los lineamientos para su creación e implementación, acción que recae en el Reglamento de Ley otorgándole a dicho órgano el grado de desconcentración máxima adscrito al ICT y dependiendo directamente de la Junta Directiva del ICT.

La conformación del Consejo Director será presidirá el Presidente Ejecutivo, dos representantes del Instituto y dos representantes de la empresa privada y mediante esa reglamentación faculta las acciones transversales en la cual opera la Oficina Ejecutora.

Queda claro en el cuerpo normativo Nro. 6758 en su Artículo 12 es la Junta Directiva del ICT la que podrá otorgar concesiones sobre el uso de suelo de las tierras destinadas al PTGP conforme al Artículo 107 de la Ley Nro. 8131 Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos publicada en la Gaceta Nro.198 del 16 de octubre de 2001 relacionado con el Régimen de responsabilidad y el Principio de legalidad en la cual los “actos y contratos administrativos dictados en

materia de administración financiera, deberán conformarse sustancialmente con el ordenamiento jurídico, según la escala jerárquica de sus fuentes.

Se presume la legalidad de los actos y las operaciones de órganos y entes públicos sujetos a la presente Ley, pero se admitirá prueba en contrario", es por ello, que consideramos que esta responsabilidad en sí misma es acatamiento en todo su cuerpo normativo no sólo exclusivamente en el acto administrativo para lo cual gestión, administración y fiscalización de los contratos y actos de adjudicación deben estar acordes con la protección del patrimonio público para los cuales fueron llamados a su custodio.

Otro aspecto de interés es lo referente al Artículo 18 de la Ley Nro. 6758 que establece la facultad del cobro de cánones y tarifas o que en cualquier forma les conceda beneficios económicos para la sana ejecución del PTGP e indica que tampoco podrá variarse el concepto de zona pública referente a la Ley Nro. 6043 del 2 de marzo de 1977, Ley de la Zona Marítima Terrestre (Artículo 20 propiamente), y vía reglamento de ley el ICT (Artículo 14) ha implementado un sistema de base imponible para establecer el cobro de cánones sobre la zona restringida establecida sobre una base fija de US$3.04 por cada metro cuadrado de terreno concesionado para ello se excluye las áreas de reserva tales como humedales, esteros, riscos y demás áreas que por disposición legal o por sus condiciones naturales no puedan ser objeto de utilización por el concesionario para realizar obras turísticas.

En lo referente al Artículo 13 de la ley que la regula establece el otorgamiento de las concesiones, cesiones totales o parciales, gravámenes, arrendamiento cuando corresponda, traspaso en fideicomiso, afectación al régimen de condominio, traspaso a sociedades administradoras de fondos de inversión, entre otras potestades, con lo cual se demuestra el interés del Estado costarricense en otorgar condiciones favorables para que los potenciales inversores puedan tener acceso a fuentes de financiamiento para realizar las obras para lo cual se comprometieron, vía reglamento se han ampliado los alcances referentes a la gestión propiamente de este artículo de ley.

Ahora bien, se ha analizado la situación actual del PTGP, sus leyes y reglamentos considerando y retomando el objetivo principal propuesto en el Plan Maestro vigente es el "*Desarrollar un polo turístico cuyo fin primordial será la atracción del turismo nacional e internacional, aprovechando al máximo los recursos turísticos de la región, a través de explotar diferentes puntos de circuito y dar una imagen del país, con la que se pueda competir dentro del mercado internacional, del producto sol-playa-mar, combinando con los atractivos regionales ecológicos, que conforman los volcanes, parques, reservas y tomando en cuenta los otros proyectos turísticos de la zona, plasmándolo en un Plan Maestro de desarrollo como una guía del ordenamiento físico y un plan a largo plazo que determinará las facilidades de realización y fases de posibles inversiones públicas y privadas, tratando de lograr el óptimo aprovechamiento de los terrenos destinados al Polo Turístico Golfo Papagayo para que sea un modelo de desarrollo turístico sostenible para el mundo."*

En virtud de todo lo expuesto, se hace una reforma integral con el fin de adecuar el PTGP a la realidad actual y la perspectiva de un mejor aprovechamiento de los recursos y beneficios que el polo turístico debe generar a Costa Rica por la inversión realizada y especialmente a las zonas paralelas al polo turístico que sirva de promotor de desarrollo rural y armonizando sus beneficios a la colectividad por medio de una justa distribución tributaria a las municipalidades de la zona.

De esta manera, se ha estimado ampliar el marco normativo con clarificación de conceptos, cobertura, y normas aplicables en la diligencia de leyes para que tanto el ICT, las Municipalidades como los Concesionarios posean pleno conocimiento de su actuar.

Elevar a rango de ley la elaboración del Plan Maestro y sus actualizaciones no sólo con respecto al desarrollo del polo turístico sino debe armonizarse con los planes que promueve el Poder Ejecutivo y la incorporación de variables relevantes como lo es la variable ambiental y el fenómeno del cambio climático, como ejemplo.

Los alcances y deberes de los concesionarios con respecto a la titularidad del derecho de propiedad para el desarrollo y conveniencia de las obras a ejecutar en los terrenos cedidos por la administración del proyecto (ICT), facilidades de financiamiento tanto internas como externas, el manejo de las exoneraciones por parte del ICT cuyo fin sea consolidar el objetivo plasmado en su plan maestro.

Uno de los aspectos de cambio es la creación de la Oficina Ejecutora que la actual Ley Nro. 6758 en sencilla y deja que sea vía reglamento que consolide el actuar de la Oficina Ejecutora y es que se debe considerar que uno de los fines que persigue esta ley es la creación de un fondo especial denominado FONDETUR regulado por decreto ejecutivo Nro.2 1828-MT-MEIC del 17 de diciembre de 1992 y sus reformas que consiste básicamente en como destinar recursos para el desarrollo y ejecución del proyecto que según Plan Maestro uno de sus objetivos específicos es el de agilizar el desarrollo de la infraestructura del Proyecto y las obras complementarias de los recursos, conforme al Informe del ente Contralor manifiesta que alrededor del 24% de los recursos presupuestados han sido canalizados para el pago de salarios y cargas sociales, sin embargo, en consulta a la Oficina Ejecutora manifestaron que dichos recursos salen del fondo y no del presupuesto de la institución. Ante esa ambigüedad, es necesario elevar a rango de ley y no por reglamento el uso de los recursos del fondo y que este sea a fin al objetivo específico plasmado en el Plan Maestro vigente.

De esta manera la creación de la Oficina Ejecutora su estructura organizativa está compuesta por un Consejo Ejecutor Técnico y de una Dirección Ejecutora; esta motivación de cambio de Consejo Director actualmente regulado en la Ley Nro. 6758 no ha representado el fin que persiguió el legislador de ese entonces, es por ello, que el cambio de nombre conlleva modificaciones de su composición hacia un órgano colegiado auxiliar a la Junta Directiva del ICT para la administración eficaz y eficiente del PTGP, para ello se varió la composición con la entrada de nuevos

actores que deben estar vinculados con los intereses nacionales, regionales sin perder el horizonte para qué es el polo turístico, también se le da las funciones básicas para lograr ese fin.

En ese mismo sentido, la creación del Consejo Asesor como de la Dirección Ejecutora deben promover en forma oportuna, eficiente, eficaz y económica el desarrollo del proyecto como polo turístico, motivo por el cual deben estar con funciones claras de su cometido; también creemos que debe estar directamente vinculado con la actividad del polo es por ello, que se instruye la ubicación del mismo en las actuales instalaciones que posee el proyecto en Playa Panamá ubicado en el cantón de Carrillo, debemos tener claro que es la Oficina Ejecutora que debe resolver problemas y atención directa no sólo de las necesidades del proyecto sino también de las necesidades de sus concesionarios.

En cambio de estrategia y renovación que se le hace al marco normativo del polo turístico reside en clarificar la base imponible para el pago de los cánones y tarifas cuyo espíritu del legislador brindó y normalizarlo con las normas y bases de cálculo que establece la Ley de la Zona Marítima Terrestre, este cambio hace que sea más armónico y justicia tributaria para con las municipalidades. A continuación se ejemplifica un caso comparativo de valor conforme al uso de suelo para 100 habitaciones entre el PTGP y la ZMT de la Municipalidad de Carrillo

COMPARACIÓN DEL VALOR DE TERRENOS EN POLO TURÍSTICO GOLFO PAPAGAYO Y LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE BAJO ADMINISTRACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE CARRILLO

2. TERRENO PARA 100 HABITACIONES.

En el segundo caso, se compara el **área necesaria para poder construir un proyecto de 100 habitaciones**.
En el caso de **Papagayo**, con una **densidad de 20 habitaciones por hectárea**, sería necesario contar con una concesión como mínimo de **5 hectáreas** (50 mil m²) y en el caso de la ZMT bajo administración de la Municipalidad de **Carrillo** con una **densidad de 50 habitaciones por hectárea** (Uso turístico en zonas MIX y TAP de conformidad con el Plan Regulador vigente), sería necesario contar con una concesión como mínimo de **2 hectáreas** (20 mil m²).

TERRENO PARA 100 HABITACIONES

	m²	VALOR/m²	VALOR TERRENO P 100 HAB	CANON
PAPAGAYO	50 000	1 839,80	91 990 000,00	**3 679 600,00**
EL COCO	20 000	109 200,00	2 184 000 000,00	**21 840 000,00**
HERMOSA	20 000	118 666,67	2 373 333 333,33	**23 733 333,33**
OCOTAL	20 000	79 500,00	1 590 000 000,00	**15 900 000,00**
MATAPALO	20 000	29 500,00	590 000 000,00	**23 600 000,00**

El cálculo del valor del terreno se realiza según corresponde: en el caso de Papagayo con el valor de 3,24 dólares por metro cuadrado (al tipo de cambio de 567,84 colones) y en el caso de la ZMT bajo administración de la Municipalidad de Carrillo, el cálculo del valor por metro cuadrado se realiza con promedio de diferentes avalúos fiscales realizados entre 2017-2018 según la Plataforma de Valores Vigente.
Para el cálculo del canon se aplica el porcentaje correspondiente, sea el 4% en Papagayo; y en el caso de la ZMT bajo administración de Carrillo el porcentaje de 1% en El Coco, Hermosa y Ocotal y 4% en Matapalo.

Como se puede observar los valores por metro cuadrado distan para situaciones parecidas muy disímiles con lo cual contraviene al desarrollo de los cantones promotores del PTGP.

En la corriente legislativa se han propuesto proyectos de ley que reforman parcialmente la actual legislación, sin embardo no han considerado todos los aspectos de la actual iniciativa que es más integral, de esta manera, la intención es también recoger lecciones aprendidas del por qué no se han materializado esas propuestas, el tema de fondo está relacionado con la justicia tributaria, aspectos que consideramos que han reformado en esta propuesta legislativa, sin embargo, en el Reglamento de Ley Nro. 6758 en su Artículo 16 establece que los adjudicatarios de concesiones sean por concurso o por cesión de derechos deberán cumplir con una garantía de cumplimiento de los proyectos a ejecutar del cinco por ciento (5%) del valor estimado de cada etapa del proyecto a realizar, sin embargo, cuando se dé la cesión total o parcial deberán pagar un canon equivalente a un dólar de los Estados Unidos de América por cada metro cuadrado de terreno traspasado de previo a su aprobación y reembolsable en cada de improbación por parte del ICT.

En ese sentido, el proyecto de ley crea una tarifa del 5% sobre el valor de concesión la que deberá pagarse por cada traspaso de las concesiones establecidas en esta ley o de las acciones, cuotas o participaciones de la persona jurídica concesionada porque de hecho constituye una cesión total o parcial. En particular esta propuesta queda dentro del apartado de las cesiones unificando ambos conceptos la del canon que percibe el ICT y la tarifa impositiva en favor de las municipalidades respectivas.

Reconsiderando propiamente lo articulado en el Artículo 18 actual si bien se mantiene los porcentajes según el uso de suelo que se dé el cambio radical reside en la determinación de la base de cálculo para la zona restringida igualándolo con lo establecido en la ZMT y su reglamento.

En lo respecta al canon para el ICT se establece que sea el ICT la encargada vía reglamento de crear la base de cálculo dado que los recursos que capte serán destinados al fondo especial para el crear infraestructura y obras complementarias.

El proyecto rescata el valor ecológico promovido por el legislador que promulgó la Ley Nro. 6370 al adquirir los terrenos que conforman lo que hoy es el polo turístico se incorporó en el avalúo correspondiente criterios relativos al lugar de residencia de poseedores y propietarios, la duración de su posesión o propiedad; el aporte de cada parcela al buen éxito del proyecto, tanto por su ubicación como por su valor ecológico, entre otros factores que determinan el precio justo para la adquisición de tierras.

La bahía Culebra, con su forma de serpiente, ha encandilado a la gran mayoría de turistas tanto nacionales como internacionales que la han visitado y esta área natural **s**e ha convertido en todo un referente de conservación y riqueza biológica en Guanacaste, está bañada por las aguas del Pacífico Norte, donde el principal

aspecto que resalta es la gran cantidad de acantilados y abruptas piedras que rodean el área, confiriéndole así una personalidad especial. Además cuenta con algunas de las playas de más renombre de la provincia, como son las playas de Nancite, Nacascolo, Iguana, Playa Blanca, Virador, y Nascacolito.

Por otro lado, aquí se encuentran algunos de los parques naturales más impresionantes y bellos de Costa Rica, como, por ejemplo, los parques nacionales Santa Rosa y Guanacaste, también se encuentra el Refugio Nacional de Vida Silvestre Iguanita y playa Manzanillo.

Uno de los sellos principales de identidad de la bahía Culebra es la excelente calidad de sus aguas, las cuales cuentan en sus profundidades con un ecosistema natural muy valioso, lo que la hace aún más atractiva para visitar. Además, la bahía se ha convertido en todo un referente para los arqueólogos**,** debido a que allí se han encontrado asentamientos de pueblos precolombinos de hace más de quinientos años.

Es por estos motivos que en los años 70 se eligió esta zona para conformar el PTGP con lo cual representa un verdadero esfuerzo del país para materializar y convertirlo en el principal polo turístico planificado del país, con un área de más de 2000 hectáreas que encierra playas, tierras y mar de gran belleza natural, comprende las irregularidades que sirven de límite norte a la Bahía Culebra, tales como Punta Mala y una serie de pequeñas bahías que conforman un paisaje de excepcional belleza, con condiciones ideales para las actividades de sol-playa-mar, facilitadas por el clima y un patrón de pendientes que se sucede en planos levantados o pequeñas elevaciones y descensos accidentados, muy accidentado, quebrados y muy quebrados.

Es por ello, que en la actual propuesta se ha creado el canon ambiental de las áreas de la concesión que poseen riqueza natural, este canon deberá ser administrado para el mejoramiento de esta variable al Fondo Especial y coordinado con el Ministerio de Ambiente y Energía.

Por otro lado, se adiciona procesos con base en la Ley de Contratación Administrativa que a su vez es supletoria en esta área porque es necesario considerar que tanto el cartel de licitación o el concurso es orientado conforme al Plan Maestro y la determinación del uso de suelo con el fin de maximizar los beneficios potenciales que se derivan de buscar la mejor opción para el proyecto y para Costa Rica.

En materia de resolución o rescate de concesiones eleva a rango de ley lo que se pretendía hacer vía reglamento por lo que es necesario determinar las causas por la cual la Administración considera con el debido proceso el rescate de los espacios dados en concesión, también las causas de extinción de la concesión y otras disposiciones transitorias que permitan la transición.

En el proyecto de ley se visibiliza el actuar de la auditoría interna y su interacción con el polo turístico, las responsabilidades de hacer vigilancia sobre la Administración Activa al establecer en forma explícita la aplicación de la Ley General de Control Interno Nro. 8292, en la cual se establecen los criterios mínimos que deben observar la Contraloría General de la República (CGR) y los órganos sujetos a su fiscalización en el establecimiento, funcionamiento, mantenimiento, perfeccionamiento y evaluación de los sistemas de control.

En forma adicional se aprobaron las Normas de Control Interno para el Sector Público mediante Resolución de la CGR No. R-CO-9-2009 del 26 de enero de 2009 (CGR, 2009), dado que las entidades y órganos del sector público costarricense se caracterizan por una amplia diversidad de actividades y de recursos administrados, lo cual deviene en la necesidad de establecer regulaciones que tengan en cuenta esas diferencias y que, al mismo tiempo, propicien el cumplimiento de las obligaciones legales establecidas.

Según lo apuntado la auditoría interna es la actividad independiente, objetiva y asesora que proporciona seguridad al ICT, validando y mejorando sus operaciones la cual incluye el proyecto Polo Turístico Golfo de Papagayo consolide en forma eficiente y eficaz que la institución alcance sus objetivos, al evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección, proporcionando a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación de la Junta Directiva y de la Administración Activa ejecute su actuar conforme al marco legal y técnico y a las prácticas sanas.

De esta manera el incorporar y visibilizar el papel de la Auditoría Interna del ICT detallará las acciones por cada componente funcional de control interno que debían ser ejecutadas por los titulares subordinados (directores, jefes) con el objeto de evidenciar el cumplimiento de las normativas y un buen manejo del proyecto Polo Turístico Golfo Papagayo dado que al realizar auditorías o estudios especiales es porque estamos ante la presencia de utilización y captación de fondos públicos.

Por último se incorporan tres transitorios con el fin de armonizar estas nuevas regulaciones con la ley vigente con la salvaguarda de los derechos si los poseen los concesionarios de modo tal que no se vean perjudicados todo aquel que su situación está a derecho.

Por estas razones antes expuestas es que someto antes ustedes Señorías la intención de remozar una legislación que sea oportuna y eficaz a los intereses del Estado de Costa Rica, dar justicia tributaria a las municipalidades de la zona del PTGP sea realmente distribuido para el beneficio de todos y todas las personas habitantes de la zona de interés con el fin de que se aumente el desarrollo social y económico de la zona y no polarizar un área:

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

REFORMA INTEGRAL A LA LEY REGULADORA DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO TURÍSTICO PAPAGAYO, LEY N° 6758 DE 4 DE JUNIO DE 1982

ARTÍCULO ÚNICO- Para que se modifique en forma integral la Ley Reguladora de la Ejecución del Proyecto Turístico Papayo, Ley No. 6578 de fecha 4 de junio de 1982, de manera tal que su texto se lea de la siguiente manera:

Artículo 1- Ámbito de aplicación y objeto de la ley.

Esta ley regula el desarrollo y ejecución del proyecto turístico de Papagayo, que se realizará en Bahía Culebra, provincia de Guanacaste por medio del Instituto Costarricense de Turismo el cual deberá iniciar un procedimiento administrativo o gestionar un Proyecto de inversión sobre los inmuebles que adquiridos para desarrollar el proyecto de Bahía Culebra con el fin de establecer un marco jurídico básico para el otorgamiento de los respectivos contratos de concesión.

En caso de haber ampliado el espacio dado y se hayan modificado los límites derivadas por las leyes anteriores, el ICT queda obligado a revelarlo y hacer los ajustes correspondientes en el Plan Maestro.

Artículo 2- Para los efectos de esta ley se definen los siguientes conceptos:

a) ICT: Instituto Costarricense de Turismo o Administración Concedente.

b) Junta Directiva: Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo.

c) Consejo de Fiscalización y Recomendación: Consejo de Fiscalización y Recomendación del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo.

d) Oficina Ejecutora: Órgano de desconcentración en grado mínimo del Instituto, integrado por el Consejo de Fiscalización y Recomendación y la Dirección Ejecutora del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo.

e) Dirección Ejecutora: Dirección administrativa para la ejecución del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo.

f) Proyecto: Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, declarado de utilidad pública y que comprende el área terrestre y marítima ubicada dentro de los límites dispuestos por el artículo 1º de la Ley Nro. 6370 del 3 de setiembre de 1979.

g) Concesionario: Persona física, jurídica o mixta titular del derecho real administrativo derivado de la concesión otorgada por el ICT.

h) Plan Maestro: Herramienta para el control del uso de la tierra, a través de la zonificación y la planificación del desarrollo urbano aprobado por la Junta Directiva del ICT. Es una figura directiva de planeamiento, en tanto señala las grandes directrices o líneas maestras que han de orientar y coordinar la ordenación urbanística o edificatoria y el uso del suelo del Proyecto Turístico de Papagayo, dentro de las limitaciones legales previstas, en armonía con el medio ambiente natural y cultural, cuya naturaleza además de técnica es de alcance normativo y obligatorio. Deberá estar incorporado en el Plan Regulador Costero de la Zona Marítima Terrestre.

i) Bien Demanial: Cada uno de los bienes inmuebles y sus atributos, declarados de utilidad pública, que componen el área de desarrollo del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, afectos por las Leyes Nro. 6370 y Nro. 6758 al uso turístico y sobre cuyo destino legal el ICT ejerce un poder de administración, vigilancia y control, siendo el fin turístico el criterio de afectación de tales inmuebles, los cuales pueden ser dados en concesión a particulares. Igualmente, se incluye dentro de éste concepto el área de la Zona Ampliada.

j) Concesión: Acto administrativo de naturaleza contractual acordado por la Junta Directiva del ICT a favor de una persona física, jurídica o mixta, que le confiere el derecho real administrativo, para un uso privativo, exclusivo y excluyente, de tipo patrimonial sobre un bien demanial dentro del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo. Ese derecho real administrativo le permite al Concesionario ejercer todos los atributos del dominio excepto el de enajenación de la tierra. A los efectos del fin público turístico del Proyecto implica, entre otros, la facultad del Concesionario de usar, disfrutar, transformar, edificar o coedificar, defender, dar en garantía, gravar, arrendar, el bien demanial concesionado, para el cumplimiento de su proyecto de desarrollo turístico, siempre bajo la vigilancia y control del ICT,

k) Contrato de Concesión: Documento suscrito entre el ICT por medio de su representante y el Concesionario en el cual se estipulan los alcances del derecho real administrativo a que se refiere la concesión otorgada sobre el bien demanial según la normativa vigente, así como los derechos y obligaciones de carácter particular referidos a la relación concreta surgida entre el ICT y el Concesionario para la realización del proyecto específico de desarrollo turístico.

l) Cesión de la Concesión: Transmisión total o parcial de la titularidad de una concesión que celebra un Concesionario a favor de un tercero, para lo cual se requiere previa y expresa autorización de la Junta Directiva del ICT, incluye tanto la cesión parcial, total, cambio accionario de las sociedades anónimas, cambios en la composición de las cuotas que componen el capital accionario, así como la absorción de una sociedad concesionaria hacia otra sociedad.

m) Cesión Total de la Concesión: Transmisión total de la titularidad de una concesión, en virtud de la cual el cesionario asume los términos, condiciones y obligaciones del contrato de concesión vigente para esa concesión. La autorización del ICT de la cesión total de la concesión comportará la suscripción de un nuevo

contrato con el cesionario, en los mismos términos y condiciones del contrato original, salvo el plazo de la misma, el cual se adecuará, salvo criterio técnico, al plazo original de la concesión.

n) Cesión Parcial de la Concesión: Transmisión parcial de la titularidad de una concesión, en la que el acto de autorización por parte del ICT conllevará el otorgamiento de una nueva concesión a favor del cesionario, cuyos términos y condiciones se estipularán en el contrato de concesión que se suscriba con el cesionario, el cual, a pesar de constituir una concesión independiente respecto de aquella de la cual se deriva, conservará el plazo original de la concesión de la cedente. Para todo efecto jurídico el cesionario parcial de la concesión, debidamente autorizado por el ICT, tendrá la condición de titular de la concesión derivada adquirida.

o) Canon: Precio público de la Concesión y de eventuales modificaciones de ésta que debe pagar el Concesionario al ICT conforme a los procedimientos dispuestos para ello.

p) Canon municipal: Precio público que debe pagar el Concesionario a la Municipalidad competente conforme a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre y su Reglamento, respecto del área de la zona restringida que tuviere incluida dentro de su Concesión.

q) Canon ambiental: Precio público de la Concesión que se debe pagar por concepto de restauración, conservación de los recursos naturales de la zona de interés.

r) Tarifa: cargo que debe pagar el cesionario de la concesión sea esta parcial o total por concepto de traspaso de la concesión.

s) Fin público Turístico: Es el fin público último y supremo perseguido por las Leyes de la República Nro. 6370 y Nro. 6758, consistente en el desarrollo turístico productivo del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo.
t) Zona Concesionable: área de tierra correspondiente al bien demanial que podría incluir la Zona Pública y la Zona Ampliada.

u) Zona Marítima Terrestre: la que establece el Artículo 9° de la Ley Nro. 6043 3 de setiembre de 1979 y su composición.

v) Zona Pública: área correspondiente a la Zona Pública establecida en la Zona Marítimo Terrestre definida en la Ley Nro. 6043 del 3 de setiembre de 1979 y el área adyacente cubierta permanentemente por el mar destinada a la edificación, administración y explotación de marinas y atracaderos turísticos, ubicada dentro del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, conforme a lo dispuesto por la Ley de Concesión y Funcionamiento de Marinas Turísticas, Ley Nro. 7744 del 19 de diciembre de 1997 y su Reglamento.

x) Zona Restringida: área constituida por la franja de los ciento cincuenta metros restantes, o por los demás terrenos que por su naturaleza la conforme de conformidad con la ley especial creada para ese efecto.

y) Zona Ampliada: área de tierra que complementa la zona dada en concesión para lo cual queda regulada por las leyes establecidas en la presente ley.

Artículo 3- Cobertura

El Instituto Costarricense de Turismo actuará y dará en concesión las áreas claramente delimitadas del bien inmueble creado al amparo de la Ley de Contrato de Préstamo Nro. 5847 del 22 de noviembre de 1975 y de la ley que declara de utilidad pública los bienes inmuebles para realizar y ejecutar el proyecto turístico en Bahía Culebra o Papagayo, Nro. 6370 de 4 de junio de 1982, para lo cual deberá constar en el procedimiento administrativo o en el proyecto de inversión el área dada en concesión mediante acto administrativo final motivado y razonado, todo conforme a los procedimientos dispuestos en esta ley y supletoriamente a la Ley General de la Administración Pública, Nro. 6227 del 2 de mayo de 1978 y sus reformas.

Transcurrido el plazo de estos contratos de concesiones, dichas obras pasarán a la titularidad del Estado, según corresponda.

Artículo 4- Normas aplicables.

1- Las concesiones referidas en esta ley serán vinculantes y se regirán por el siguiente cuerpo normativo:

a) La presente ley y su reglamento.

b) La Ley de Zona Marítimo Terrestre, Nro. 6043 y su Reglamento, publicado en la Gaceta No.52 del 16 de marzo de 1977.

c) La Ley Nro. 5847, Préstamo BCIE al ICT para Plan Maestro Polo Turístico Bahía de Culebra, publicado en Colección de leyes y decretos del año 1975, segundo semestre, Tomo 3, página 1303.

d) La Ley Nro. 6370, Declaratoria de utilidad pública los bienes inmuebles para realizar y ejecutar el proyecto turístico en Bahía Culebra o Papagayo publicado en la Gaceta No.171 de fecha 13 de septiembre de 1979.

e) La Ley Nro. 6758, Regula la Ejecución del Proyecto Turístico de Papagayo, publicado en la Gaceta Nro. 122 de fecha 25 de junio de 1982.

f) Ley Nro. 7744 Ley de Concesión y Operación de marinas y atracaderos turísticos, de 19 de diciembre de 1997 y su Reglamento, publicado en la Gaceta Nro. 26 del 06 de febrero de 1998.

g) La Nro. 7509, Ley del Impuesto de Bienes Inmuebles y su Reglamento, publicado en la Gaceta Nro. 116 del 09 de junio de 1995.

h) La Ley Nro. 7494, Ley de Contratación Administrativa, publicado en la Gaceta Nro. 110 publicado en el Alcance Nro. 20, Gaceta 110 del 08 de junio de 1995.

i) La Ley Nro. 8292, Ley General de Control Interno, publicado en la Gaceta Nro. 169 del 04 de septiembre de 2002

j) El cartel de la licitación y sus circulares aclaratorias.

k) La oferta del adjudicatario, y sus modificaciones aprobada en el proceso de adjudicación.

l) El contrato de concesión.

2- La legislación costarricense será aplicable a toda relación jurídica originada con fundamento en la presente ley. Asimismo, los tribunales nacionales serán los únicos competentes para conocer de las situaciones jurídicas derivadas de las concesiones y dirimir los conflictos que puedan surgir durante la vigencia de los contratos. El cartel del concurso deberá autorizar la vía del arbitraje como solución alterna a los tribunales de justicia.

Artículo 5- Elaboración del Plan Maestro

En el área destinada al desarrollo de este proyecto deberán llevarse a cabo, únicamente las obras previstas en el Plan Maestro, aprobado por el Instituto Costarricense de Turismo, y todas aquellas obras concordantes con el mismo, de conformidad con las disposiciones de esta ley y de acuerdo con las normas técnicas que este Instituto emita al efecto.

El Plan Maestro deberá estar asociado con los Plan Nacional de Desarrollo Turístico y el Plan Regulador Costero con la colaboración de la Oficina de Planificación en referente al plan general de uso de la tierra tanto en la zona restringida de la Ley de Zona Marítima Terrestre, así como en la zona ampliada de los terrenos adquiridos para el desarrollo del polo turístico.

En el caso de construcciones o crear infraestructura para disfrute tales como la creación de campos de golf en las zonas verdes dentro de la zona restringida que proporciones usufructos deberá pagar el respectivo canon establecido en el Artículo 18 de esta ley.

Artículo 6- Titularidad del derecho de propiedad

Las áreas destinadas al desarrollo del proyecto turístico de Papagayo, que no estén debidamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad, por ser derechos de

posesión, se inscribirán a nombre del Instituto Costarricense de Turismo, sin más trámites que la presentación de los planos catastrados y del documento o documentos de compra-venta del derecho o derechos, sin perjuicio de terceros.

En todas las concesiones reguladas por esta ley, se considerarán propiedad de la respectiva Instituto Costarricense de Turismo las obras que se construyan y las que se incorporen al inmueble, conforme avance la construcción. En el reglamento de la ley, el cartel de licitación para la base concursal, así como las ofertas y sus mejoras durante la fase previa al acto adjudicatario serán la base para confeccionar el respectivo contrato de concesión en el cual deberá determinarse los bienes y derechos incorporados por el respectivo contrato de concesión, que no sean propiedad de la administración concedente y se requieran para la prestación del servicio o disfrute de la misma, todo conforme al uso de suelo acreditado.

Artículo 7- Financiamiento para las concesiones

Las entidades financieras que conforme a la Ley Orgánica del Sistemas Bancario Nacional, Ley Nro. 1644 del 26 de septiembre de 1953, de la, Ley Sistema de Banca para el Desarrollo, Ley Nro. 8634 del 07 de mayo de 2008 y las instituciones del Estado quedan autorizados para conceder al Instituto Costarricense de Turismo y a los concesionarios para el desarrollo del proyecto turístico Golfo de Papagayo préstamos destinados para el mejoramiento y ejecución de proyectos dados en concesión o desarrollos complementarios a éste, con garantía de la respectiva concesión y sus edificaciones, mejoras e instalaciones.

Artículo 8- Exoneraciones del pago de impuestos para la ejecución del Proyecto.

Para el uso exclusivo del Instituto Costarricense de Turismo, en cuanto a la ejecución del Proyecto, estará exonerada del pago de todo tipo de impuestos la compra y la importación de maquinaria, equipo y materiales para construcción, desarrollo y ejecución de la actividad turística prevista en esta Ley.

El Instituto podrá, igualmente, subastar libre de impuestos, previo acuerdo de la Junta Directiva, el equipo y los materiales en desuso o deteriorados, si, una vez consultadas las instituciones autónomas del Estado, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y las municipalidades del país, estas instituciones no muestran interés en adquirir estos bienes al precio de su base. El precio será fijado, en cada caso pericialmente, por el personal capacitado del Instituto Costarricense de Turismo o, en su defecto, la Dirección General de Tributación.

La celebración de los remates se realizará conforme a los procedimientos previstos en la Ley de Contratación Administrativa del 08 de junio de 1995 y su reglamento.

Artículo 9- Fuentes de Financiamiento para la ejecución del Proyecto.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley y sus disposiciones legales conexas, el Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Hacienda, contratará, conforme al ordenamiento jurídico y a favor del Instituto Costarricense de Turismo, créditos externos hasta por la suma de cuarenta millones de dólares o en su valor actual equivalente en otro tipo de moneda, en las condiciones más favorables. En todo caso, los empréstitos respectivos deberán hacerse tomando en cuenta la capacidad de pago del Estado, cuyo aval se autoriza. El Poder Ejecutivo deberá incluir, anualmente, en el presupuesto, las sumas necesarias para amortizar las obligaciones originadas en tales créditos.

Artículo 10- Creación e integración de la Oficina Ejecutora.

El Instituto Costarricense de Turismo creará para la plena ejecución del proyecto turístico Papagayo una Oficina Ejecutora para lo cual incorporará en su presupuesto anual los costos necesarios para la ejecución del proyecto el cual deberá respetar en todo momento los lineamientos de la Ley Nro.8131 del 16 de octubre de 2001.

Con el fin de coadyuvar en la ejecución del proyecto, el Instituto Costarricense de Turismo creará un fondo especial, destinado al desarrollo del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo. Para tales efectos la Junta Directiva establecerá un canon de percepción anual pagaderos por todos los concesionarios del proyecto turístico Papagayo al ICT el cual se consignará en dicho fondo.

Cualquier remanente que se produzca, una vez cubiertas las necesidades del proyecto, la Oficina Ejecutora podrá desarrollar proyectos factibles de apoyo en el resto del país dando prioridad a aquellas zonas de aptitud turística cuyas necesidades sociales ameriten planes de inversión pública, no obstante, este rubro también podrá recibir otros fondos o recursos tal como lo establece la presente Ley o transferencias que realicen las municipalidades de interés a la zona a desarrollar a fin de consolidar recursos para elaborar y ejecutar proyectos de interés social.

Artículo 11- Obras Complementarias al Proyecto Turístico Papagayo.

De conformidad con lo dispuesto en la presente ley el Instituto Costarricense de Turismo desarrollará la infraestructura básica necesaria para el desarrollar un Pueblo Turístico emblemático que represente a Guanacaste que incluya variables de protección ambiental y apoyo sociocultural para las comunidades dentro del proyecto y su área de influencia.

Para ese cumplimiento el Instituto Costarricense de Turismo deberá contar con un terreno destinado a levantar una infraestructura de actividades en armonía con el ambiente que sirva de atractivo turístico para todos los costarricenses y especialmente para los habitantes de la zona con el fin de incentivar y cultivar una cultura hacia el turismo sostenible.

Para tal efecto, el Instituto deberá coordinar con las demás instituciones del estado quienes estarán anuentes a brindar su apoyo en el desarrollo de dichos fines y

conforme al Artículo 7 de esta ley tiene la facultad para contratar créditos con entes internacionales como con bancos del Sistema Financiero Nacional, inclusive el Sistema de Banca para el Desarrollo.

En adición a las obras complementarias, el Proyecto Turístico Golfo de Papagayo deberá reservar un lote de terreno con la finalidad de adecuarlo para que las organizaciones o instituciones nacionales a cargo de los programas relativos a la tercera edad, puedan construir instalaciones recreativas para atender a las personas beneficiarias de estos programas. Estas instalaciones deberán ser acordes con las regulaciones del plan maestro del proyecto.

Para la implementación del denominado Pueblo Turístico Emblemático es responsabilidad directa del ICT y se considerará como obra complementaria, y contará con el sello Costa Rica Esencial y se considerará parte del concepto de Responsabilidad Social Ambiental del Polo Turístico. Queda totalmente prohibida transferir esta área a los concesionarios para su administración.

Artículo 12- Alcance de la Oficina Ejecutora.

Para ejecutar y desarrollar el proyecto, el Instituto Costarricense de Turismo se creará una oficina ejecutora tendrá, en forma exclusiva y gozará desconcentración mínima, adscrito al Instituto Costarricense de Turismo, tendrá las facultades de dirigir, coordinar, administrar y controlar el desarrollo de los proyectos designados por esta ley. Esta oficina ejecutora deberá conformar e integrar un consejo asesor y una dirección ejecutora que le permita desarrollar los lineamientos que le solicita la Junta Directiva del Instituto.

Artículo 13- Creación e integración del Consejo Asesor

1- Créase el Consejo Asesor, en adelante el Consejo el cual estará integrado de la siguiente manera:

a) El Presidente o la Presidenta del Instituto Costarricense de Turismo, quien lo presidirá.

b) El Viceministro o la Viceministra de Egresos de Hacienda.

c) El Viceministro o la Viceministra de Planificación y Política Económica.

d) Una persona designada de las ternas presentadas por la Cámara de Turismo de Guanacaste (CATURGUA)

e) Una persona designada de las ternas presentadas por la Cámara de Turismo de Liberia (CALITUR)

2- Los representantes mencionadas en el punto anterior, deberán remitir sus ternas a la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo dentro de los

quince días hábiles siguientes a la publicación de la convocatoria. Transcurrido el plazo sin recibir las ternas de alguno de los grupos señalados, la Junta Directiva quedará en libertad de designar a las personas necesarias para integrar el órgano consultivo.

3- Las personas referidas en los incisos b) y c) podrán delegar en otra persona el ejercicio de las atribuciones que esta Ley les confiere y serán nombradas por períodos de cuatro años.

4- Las personas referidas en los incisos d) y e) podrá ejercerlos el Alcalde de las respectivas municipales debidamente ratificados por el respectivo Concejo Municipal y estarán en ese cargo por el período que ostenten su nombramiento

5- Las personas referidas en los incisos f) y g) serán nombradas por el período de cuatro años.

6- Por concepto de la prestación de este servicio los integrantes del Consejo no percibirán dietas dado que en su mayoría son funcionarios públicos con excepción de las personas acreditadas por parte del sector privado.

7- En la integración del Consejo se debe garantizar una representación equitativa de ambos géneros.

Artículo 14- Funciones del Consejo Asesor.

El Consejo Asesor tendrá funciones de dirección, fiscalización y recomendación. No tiene responsabilidades en el campo de la administración ejecutiva del proyecto pero si sobre la Dirección Ejecutora.

Son responsabilidades del Consejo:

1- El Consejo tendrá personalidad jurídica instrumental para los efectos de administrar el Fondo Especial para el proyecto, así como para concertar los convenios y contratos necesarios para cumplir sus funciones.

2- Corresponderá a la Presidencia del Consejo ejercer la representación judicial y extrajudicial; tendrá las funciones establecidas en esta Ley y su respectivo Reglamento, así como las que le asigne la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo.

3- En igual forma, podrá contratar las consultorías y los estudios que se requieran para el cumplimiento de las competencias asignadas por ley, cuando por inopia se compruebe que tanto el Consejo como la Dirección Ejecutora, titular de las obras y los servicios objeto de la concesión, carecen de los recursos profesionales y técnicos para suplir estas necesidades.

4- La adquisición de los recursos materiales necesarios para el cumplimiento de las funciones de la Dirección Ejecutora y del Consejo, se regirá por los procedimientos estatuidos en la Ley de contratación administrativa.

5- Revisar y ajustar periódicamente el Plan Maestro, aprobado por la Junta Directiva, dichas modificaciones serán ratificadas por la Junta Directiva y el Consejo hará lo correspondiente para su publicación en el diario oficial La Gaceta.

6- Recomendar a la Junta Directiva el dictado o la reforma de los reglamentos de operación del Proyecto.

7- Autorizar, previo dictamen técnico y jurídico, la realización de concursos públicos para la adjudicación de áreas libres en el Proyecto Turístico Golfo de Papagayo.

8- Aprobar los planes de desarrollo propuestos por los concesionarios para la adecuada ejecución de su concesión.

9- Recomendar a la Junta Directiva, con fundamento en los criterios técnico y legal, el otorgamiento, prórroga, cesión, gravamen, traspaso en fideicomiso, sometimiento en condominio o al régimen de sociedad de inversión, cancelación, extinción y el rescate de concesiones.
10- Establecer el monto del canon que se debe pagar al ICT por concepto del otorgamiento de la concesión y para todos aquellos otros actos dispuestos en el presente reglamento.

11- Solicitar y realizar el presupuesto de la Oficina Ejecutora, así como sus modificaciones.

12- Fiscalizar el trabajo de la Dirección Ejecutora. Ejercer la potestad disciplinaria sobre el Director Ejecutivo y el personal contratado para la ejecución de sus fines. En ausencia de normativa específica se aplicará supletoriamente el régimen disciplinario del Instituto.

13- Emitir la normativa interna que regule su actividad y funcionamiento como órgano colegiado.

14- Todas aquellas acciones que se deriven del marco jurídico que regula el Proyecto Turístico Golfo de Papagayo.

Artículo 14- Creación de la Dirección Ejecutora.

Para la ejecución de las tareas propias del proyecto turístico Papagayo y de las obras complementarias, el Consejo nombrará un director ejecutivo, así como el personal estrictamente necesario. Los actuales servidores de la oficina ejecutora conservarán todos los derechos que hayan adquirido conforme a la legislación laboral.

Para la ejecución del Proyecto Polo Turístico Golfo de Papagayo, la Dirección Ejecutora deberá ubicarse en las instalaciones físicas que posee el Instituto localizadas en Playa Panamá en el cantón de Carrillo para un mejor control administrativo del mismo.

Artículo 15- Funciones de la Dirección Ejecutora.

La Dirección Ejecutora estará compuesta por un Gerente y contará con el personal necesario para el correcto ejercicio de sus funciones. Al personal del ICT destacado en la Dirección Ejecutora le serán aplicables en todos sus extremos y sin excepciones las disposiciones legales y reglamentarias a que están sujetos todos los funcionarios de la Institución.

La Dirección Ejecutora es la unidad responsable directa de la administración total del proyecto y responde plenamente por su adecuado funcionamiento, para ese efecto podrá tener sus propios niveles de subdirección, jefaturas y personal necesario para el desarrollo armónico del polo turístico. El Director Ejecutivo es el funcionario de mayor jerarquía en materia administrativa de esa unidad.

Son funciones de la Dirección Ejecutora, bajo la absoluta responsabilidad del Director Ejecutivo:

a) Ejecutar todos acuerdos que el Consejo Asesor y que la Junta Directiva del Instituto le encomiende.

b) Ejercer la dirección, coordinación, administración y control constante sobre el desarrollo general del Proyecto con el propósito de asegurar que el mismo se ejecute de conformidad con la normativa y disposiciones internas y externas vigentes.

c) Emitir el criterio técnico correspondiente para el otorgamiento, prórroga, cesión, gravamen, traspaso en fideicomiso, sometimiento en condominio o al régimen de sociedad de inversión, cancelación, extinción y el rescate de concesiones.

d) Elaborar el proyecto de presupuesto de la Oficina Ejecutora, así como sus modificaciones.

e) Ejecutar el presupuesto aprobado por el Consejo Ejecutivo Técnico.

f) Recomendar cuando corresponda la revisión y ajustes periódicos del Plan Maestro y su vinculación con los otros planes nacionales vinculantes a la promoción del turismo.

g) Recomendar la realización de concursos públicos para la adjudicación de áreas libres en el Proyecto Turístico Golfo de Papagayo.

h) Proponer la emisión de la normativa interna necesaria para la correcta y oportuna ejecución del Proyecto.

i) Velar por una adecuada coordinación del Proyecto Papagayo con las distintas instituciones públicas involucradas y relacionadas con el mismo.

j) Desarrollar un sistema de información para llevar los expedientes archivos y registros en donde conste toda la documentación y gestiones acerca de las concesiones y de las obras de infraestructura.

k) Fiscalizar, en conjunto con el proceso financiero del ICT, el control contable y presupuestario que sobre los procesos, transacciones, operaciones relativas a las obras de infraestructura le compete desarrollar al Proyecto.

l) Administrar el recurso humano y financiero.

m) Comunicar a las municipalidades respectivas, una vez adjudicada en firme una concesión o autorizaciones de cesiones totales o parciales de una concesión; el concesionario responsable del pago del canon municipal y será obligación de la Dirección Ejecutora llevar un estricto control sobre los cánones y tarifas que se cobren por el disfrute de las respectivas concesiones.

n) Las que le instruya el Consejo Asesor y todas las que se deriven del marco jurídico que regula el Proyecto.

Artículo 16- Relación de la Administración Concedente y del Órgano Ejecutor.

La Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo podrá otorgar concesiones sobre el uso de las tierras del proyecto en las áreas destinadas al mismo que conforma la zona concesionable de conformidad con los plazos y las condiciones que la administración concedente establezca al efecto, y de conformidad con las disposiciones del Artículo 107 y Artículo 108 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuesto Públicos, Nro. 8131 del 16 de octubre de 2001.

Artículo 17- Papel de la Auditoría

La Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo como administración activa deberá realizar las funciones de fiscalización que contempla la Ley de Control Interno, Ley Nro. 8892 del 04 de septiembre de 2002 para el proyecto Polo Turístico Golfo de Papagayo por medio de la Auditoría Interna del Instituto.

Artículo 18- Canon de la Zona Marítima Terrestre

Esta ley es de orden público y deroga cualquier norma que se le oponga, excepto en cuanto otorgue derechos o autorice a entes de Derecho público para percibir cánones y tarifas, o que en cualquier forma les conceda beneficios económicos.

Las municipalidades de Liberia y de Carrillo cobrarán y percibirán un canon anual sobre cada una de las concesiones otorgadas o que se otorguen para disfrute de las áreas que ocupen esos desarrollos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Nro. 6043, Ley de Zona Marítimo-Terrestre.

Los cánones a pagar por parte de los concesionarios que posean áreas en la Zona Marítimo Terrestre, se regularán mediante el documento técnico denominado Plan Maestro que sustituye el Plan Regulador Costero, para lo cual se aplicará la siguiente tabla de canon:

a) Uso habitacional será de tres por ciento (3%).

b) Uso hotelero turístico, condohotel o recreativo será de cuatro por ciento (4%).

c) Por uso comercial o industrial será de cinco por ciento (5%).

Para efectos de la determinación del canon a que se refiere este artículo las municipalidades respectivas deberán elaborar el avalúo de los terrenos, para ello deberá contar con los servicios profesionales para realizar dichos avalúos conforme a la metodología de valoración del Órgano de Normalización Técnica (ONT) basados en las plataformas de valores por zonas homogéneas.

En caso de las municipalidades no cuenten con la actualización anterior, llevará los avalúos de acuerdo con los siguientes acuerdos:

a) A fin de determinar el valor del derecho de uso y explotación del área considerada, el perito tomará como base el valor de mercado del terreno se incluirán las construcciones e instalaciones fijas o permanentes existentes en dichas áreas y para lo cual se establecerá al valor de mercado un coeficiente de relación de 0.60 indicándolo explícitamente en el citado avalúo.

Se entenderá por valor de mercado el valor de un bien inmueble estimando el precio que se pagaría por el mismo en una hipotética venta, de no ser posible establece el valor, el perito determinará el valor de mercado del terreno caracterizado por las siguientes condiciones:

a- El comprador y vendedor presentan un interés normal.

b- La compraventa se entiende producida en un mercado existente y abierto. Si el bien no fuere transmitido a este comprador, el mercado siempre proveerá otro igualmente motivado. Tanto uno como otro se consideran bien informados y aconsejados.

c- Ni el comprador ni el vendedor presentan urgencias de tiempo en el comprar o vender, si no se transmite en una fecha se hará en otra.

d- El bien se considera libre de cargas especiales.

e- Se entiende que para la concesión del bien se realiza para destinarlo a su uso más completo y apropiado.

b) En el referido avalúo no deberán incluirse los terrenos comprendidos dentro de la zona de cincuenta metros inmediata a la línea de la pleamar ordinaria destinada al uso común, ni las áreas de reserva tales como: humedales, esteros, riscos y demás áreas que, por disposición legal o por sus condiciones naturales, no puedan ser objeto de utilización por los titulares; salvo en los casos de instalaciones autorizadas conforme a lo dispuesto en el art. 21 de la Ley Nº 6043, Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre.

Para tal efecto, el concesionario aportará a la Municipalidad un plano de agrimensura que indique el área sobre la cual la Municipalidad deberá, previa verificación y estudios, realizar el avalúo correspondiente. Los avalúos mencionados tendrán una vigencia de cinco años contados a partir del período siguiente a su firmeza. Los cánones vigentes deberán ajustarse de conformidad con el nuevo avalúo, para lo cual los contratos respectivos deberán contener estipulación expresa en este sentido. Estos avalúos deberán actualizarse al menos cada cinco años.

No podrá variarse tampoco el concepto de zona pública, a que se refiere el artículo 20 de la Ley Nº 6043 de 2 de marzo de 1977.

Artículo 19- Comunicatoria del Avalúo de la concesión.

Una vez que la Municipalidad cuente con el respectivo avalúo de acuerdo con el artículo 18 de esta ley, lo comunicará mediante resolución a la Oficina Ejecutora con el fin de comunicarlo al concesionario determinando el canon a pagar. Esta comunicación deberá hacerse con arreglo al artículo 147 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios y será comunicada mediante los procedimientos establecidos en la Ley de Notificaciones Judiciales, Nro. 8687 del 04 de diciembre de 2008.

En la misma resolución la Municipalidad otorgará al interesado el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación respectiva para presentar los recursos ordinarios que se establecen a partir del párrafo segundo del artículo 19 de la Ley Nro. 7509, Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

En tanto no exista determinación definitiva del canon correspondiente el interesado de común acuerdo con la Municipalidad respectiva podrá hacer depósitos a cuenta, a la orden de la Municipalidad sin que signifique aceptación del canon o avalúo por

parte del interesado. En ningún caso dicho depósito devengará intereses a cargo de la Municipalidad.

Artículo 20- Pago del canon municipal

El canon deberá ser calculado por anualidades adelantadas, pudiendo ser cancelado en forma trimestral conforme lo disponga la Municipalidad respectiva. Dicho canon, cuando se trate de la primera determinación regirá de inmediato, salvo que exista oposición del concesionario; en cuyo caso entrará a regir a partir de la fecha del contrato vigente. En las posteriores determinaciones el canon regirá a partir del periodo siguiente a la fecha en que quede firme la resolución definitiva que lo apruebe. En caso de mora, el derecho de la Municipalidad para hacer efectivas las sumas que se le adeudan por el indicado concepto, prescribirá en el plazo de cinco años conforme lo establece el artículo 73 del Código Municipal.

Artículo 21- Canon para el Instituto Costarricense de Turismo

Conforme al Artículo 7 de esta ley, se faculta a la Junta Directiva establecerá un canon de percepción anual pagaderos por todos los concesionarios del proyecto turístico Papagayo al ICT el cual se consignará en dicho fondo.
La base de cálculo y cobro la definirá el Instituto Costarricense de Turismo vía reglamento, la misma deberá actualizarse cada cinco años comenzando a partir de la del 30 de junio de 1982 considerando la promulgación de la Ley Nro. 6758 de 4 de junio de 1982.

Para futuras concesiones, cesiones totales o parciales, y prórrogas de los contratos de concesión, el Instituto Costarricense de Turismo tomará como base referencial para el cálculo del canon de percepción la tasa “Prime Rate” de los Estados Unidos de América que publica el Banco Central de Costa Rica en sus estadísticas de referencia de indicadores económicos. EL inicio para considerar su base será a partir de la promulgación de la ley reformativa de la Ley Nro. 6758 del 4 de junio de 1982 para determinar el valor de la concesión en moneda nacional, se tomará como referencia el tipo de cambio de compra establecido por el Banco Central de Costa Rica.

Todos los ingresos obtenidos por la administración del Proyecto serán transferidos al Fondo Especial creado y regulado por la presente ley.

Artículo 22- Canon Ambiental

El canon ambiental a pagar por parte de los concesionarios que posean áreas en la Zona Ampliada, se regularán mediante el documento técnico denominado Plan Maestro que establece y con base en criterio emitido por la Dirección Ejecutora sobre aquellas áreas que no posean criterios técnicos para la construcción de obras sin embargo, cumplen con una función ecológica conforme a lo dispuesto en el Artículo 5 de la Ley No. 6370 del 13 de septiembre de 1979 que establece que la adquisición de tierras que conforma el Proyecto Turístico Golfo de Papagayo se

reconoce un valor monetario a dichos terrenos tanto por su ubicación como por su valor ecológico

Por concepto de este canon se establece un 1% sobre el área no aprovechable determinada en el contrato de concesión sobre la misma base de cálculo indicada en el Artículo 18 de esta Ley, lo percibirá el ICT y lo contemplará en cuenta contable separada con el fin destinar estos recursos a las necesidades de recuperación y conservación ecológica de Bahía Culebra en asocio con la entidad que designe el Ministerio de Ambiente y Energía.

Artículo 23- Impuesto de traspaso por cesiones de concesiones.

Establécese un impuesto a favor de las municipalidades respectivas del cinco por ciento (5%) sobre el valor de la concesión establecida en el respectivo contrato de concesión, que deberá pagarse por cada traspaso de las concesiones establecidas en esta ley o de las acciones, cuotas o participaciones de la persona jurídica concesionaria.

Artículo 24- Adjudicación por licitación

Previo proceso de concurso público, los proyectos de concesión serán adjudicados según el procedimiento que disponga el reglamento de esta ley. En todo caso, los principios rectores de esta licitación son los de eficiencia, publicidad, igualdad y libre competencia.

Artículo 25- Contenido del cartel

El Instituto Costarricense de Turismo promoverá la utilización de carteles de licitación uniformes, que permitan lograr una mayor eficiencia y eficacia en la tramitación de los proyectos de concesión según las áreas previas establecidas en el Plan Maestro. Para un mejor control y transparencia el ICT utilizará las plataformas digitales que proporciona el Ministerio de Hacienda para hacer las compras públicas que sirvan de base para la divulgación del cartel de licitación.

El cartel de licitación deberá establecer:

a) La identificación de la Administración concedente.

b) La descripción de las obras y los servicios, incluso las especificaciones y los requerimientos técnicos mínimos para el diseño, la ejecución, la conservación y la explotación de la obra y los servicios, según corresponda.

c) La forma, fecha, hora y el lugar de presentación de las ofertas, requisitos que habrán de cumplir los licitantes que surjan de la base concursal; además, los antecedentes que deberán entregarse con las ofertas técnicas y económicas.

d) Las garantías que deberán constituirse con indicación de los montos y plazos.

e) Los plazos para consultas y aclaraciones del cartel.

f) Los requisitos financieros, técnicos y legales que se valorarán en la calificación de las ofertas y la metodología que se empleará.

g) Las condiciones económicas y la estructura tarifaria de la explotación de la concesión.

h) Las multas y sanciones por incumplimiento del contrato de concesión.

i) El proyecto de contrato que se suscribirá con el concesionario con la Administración concedente

j) La distribuirán de los riesgos del proyecto servirá para establecer las obligaciones y responsabilidades de cada una de ellas en la ejecución del contrato de concesión, así como en sus diferentes etapas durante la vigencia del contrato.
En materia de contratación debería regirse por la Ley de Contratación Administrativa, Ley Nro. 7494 del 08 de junio de 1995 y normativa conexa.

Artículo 26- Consultas y aclaraciones

1- La Dirección Ejecutora podrá solicitar a los oferentes y recibir de ellos proposiciones y observaciones escritas sobre el texto final del cartel de licitación y deberá realizar una sesión formal para tratar sobre las versiones finales de los documentos. Sin embargo, el ICT deberá tomar la decisión final sobre los asuntos tratados.

2- Si como consecuencia de esa sesión formal se produjeren modificaciones del cartel, estas deberán ser publicadas en La Gaceta, al menos diez días hábiles antes de la fecha de recepción de las ofertas.

Artículo 27- Presentación de ofertas

1- Las ofertas se presentarán conforme a los términos establecidos en el cartel o base concursal, en dos sobres sellados, uno para los asuntos técnicos y otro para los económicos. Solamente se abrirá el sobre que contiene la oferta económica, en los casos en que la oferta técnica haya sido admitida conforme a las reglas del concurso.

2- Las ofertas que técnicamente no califiquen se tendrán por excluidas para todos los efectos.

3- La presentación de la oferta implica el sometimiento pleno del oferente tanto al ordenamiento jurídico costarricense como a las reglas generales y particulares de la licitación.

Artículo 28- Ofertas

1- En los procedimientos de concesión podrán participar dos o más empresas reunidas en acuerdo de consorcio. Para tal efecto deberán acreditar, ante la Administración, la existencia de un acuerdo de consorcio, en el cual se regulen, al menos, las obligaciones de las partes y otros asuntos que el cartel pueda requerir.

2- La conformación del consorcio no implica la creación de una persona jurídica independiente, de resultar adjudicatario, una vez firme la adjudicación, deberá constituir las obligaciones y responsabilidades de las partes.

3- Las partes en consorcio responderán, en forma solidaria, ante la administración concedente, por todas las consecuencias derivadas de su participación en el consorcio y de conformidad con lo que establece esta Ley.

Artículo 29- Selección del concesionario

1- El concesionario será seleccionado de entre las ofertas elegibles, conforme a las reglas del cartel y, según el sistema establecido en las bases de la licitación, atendiendo a uno o más de los siguientes factores:

a) El valor presente de los ingresos de la concesión.

b) El plazo de concesión.

e) Los pagos ofrecidos por el oferente al Estado en lo referente a los posibles ingresos que se perciban por concepto de cánones y tarifas.

f) El puntaje obtenido en la calificación técnica.

2- La aplicación de estos factores y su forma de calificación serán definidos en el cartel de licitación, en el cual podrán considerar uno o más de los factores señalados.

3- En caso de empate en los parámetros de selección conforme a las reglas del cartel, ganará quien haya presentado primero la oferta.

Artículo 30- Adjudicación del contrato

El contrato se adjudicará obligatoriamente al licitante que formule la mejor oferta económica de entre las declaradas técnicamente aceptables, según la fórmula definida en el cartel, sin perjuicio de la facultad de la administración concedente para desestimar todas las ofertas por no convenir al interés público. Las ofertas

presentadas en concursos declarados desiertos o desestimadas todas las ofertas, caducarán junto con el concurso.

Artículo 31- Suscripción y cesión del contrato

1- El contrato se suscribirá, una vez firme el acto de adjudicación.

2- Los derechos y las obligaciones del contratista no podrán cederse, salvo casos excepcionales debidamente justificados, para lo que deberá contarse con la autorización previa de la administración concedente, por medio de acto debidamente razonado. Únicamente podrá autorizarse la cesión total del contrato de concesión, y se requerirá autorización previa de la Junta Directiva del ICT, habiéndose valorado el interés público por parte del Consejo Asesor y de la Dirección Ejecutora.

Todos los costos derivados del cambio de concesionario, correrán a cargo de la empresa que ostente la concesión.

3- Para autorizar la cesión del contrato de concesión, la administración deberá verificar que la cesión comprenda todos los derechos y las obligaciones de dicho contrato y solo a una persona natural o jurídica se le podrá hacer que cumpla los requisitos para ser licitante, y que sus calificaciones garanticen que podrá cumplir, en forma igual o mejor que el cedente, de acuerdo con la etapa en que se encuentre el contrato de concesión.

4- En ningún caso el adjudicatario, el concesionario ni la administración podrán ceder ni aceptar, según corresponda, la cesión de los derechos y las obligaciones de la sociedad concesionaria ni el traspaso del capital social de esta, en contra de las prohibiciones establecidas por el artículo 22 de la Ley de Contratación Administrativa del 08 de junio de 1995.

Artículo 32- Constitución de la sociedad anónima

El adjudicatario, según su conveniencia y conforme al uso de suelo para el cual tuvo la opción, podrá constituir en un plazo máximo de noventa días naturales contados a partir de la firmeza del acto de adjudicación, una sociedad anónima con la cual será suscrito el contrato de concesión. Asimismo, será responsable con esta sociedad anónima por el plazo de la concesión.

Artículo 33- Procedimiento en caso de incumplimiento

El incumplimiento de los requisitos y de la obligación de suscribir el contrato, o de la obligación de obtener el financiamiento en las condiciones establecidas en el contrato, dejará sin efecto la adjudicación de la concesión y operará, además, como una resolución de pleno derecho del contrato.

En tal supuesto, la administración concedente llamará, en un plazo de quince días a partir de haber dejado sin efecto la adjudicación, al oferente que, legitimado para resultar adjudicado, haya quedado en segundo lugar, con el propósito de que rinda la garantía y suscriba el contrato; para tales efectos, se dará un plazo de noventa días naturales. Si no llega a un acuerdo o no se presenta en el plazo establecido, la administración podrá llamar al resto de los concursantes legitimados para que resulten adjudicatarios, en el orden que hayan ocupado al evaluar las ofertas, aplicando los mismos plazos.

Artículo 34- Régimen de garantías

1- El oferente y el concesionario deberán constituir, según corresponda, las garantías de participación, construcción, explotación y ambientales, con las formas, los montos, los plazos y las demás condiciones que el reglamento y los carteles respectivos establezcan. Las garantías referidas en esta ley siempre deberán ser suficientes para garantizar el interés tutelado en cada fase de la licitación y el contrato de concesión, y serán irrevocables.

2- Para participar en la licitación pública, será necesario que cada oferente garantice su participación. La subsanación de los defectos en el cumplimiento de esta garantía se regulará en el reglamento de la ley. El incumplimiento en la constitución de la garantía, las formas y los plazos establecidos inhabilitará la oferta.

3- El adjudicatario deberá prorrogar la vigencia de la garantía de participación hasta la suscripción del contrato de concesión, momento en que deberá rendir la garantía de construcción. La administración devolverá la garantía de participación del adjudicatario, en el momento en que tenga por bien rendida la garantía de construcción y se haya suscrito el contrato. La falta de prórroga oportuna habilitará a la administración para que deje sin efecto el acto de adjudicación y proceda a la ejecución de la garantía de participación.

4- En caso de incumplimiento en la etapa de ejecución contractual, las garantías se ejecutarán hasta por el monto requerido para resarcir a la Administración concedente, por los daños y perjuicios imputables al concesionario. Esta Administración podrá perseguir al concesionario por los daños y perjuicios que no alcancen a cubrir las garantías.

6- De existir cláusula penal por cumplimiento tardío en la ejecución imputable al concesionario, no podrá ejecutarse la garantía de construcción, a no ser que él se niegue a cancelar los montos correspondientes por concepto de cláusula penal.

7- Cuando la Dirección Ejecutora haya realizado el proceso de licitación y adjudicación, el monto de las garantías ingresará al Fondo creado para la ejecución plena del proyecto.

Artículo 35- Objeción del cartel

1- Contra el cartel de licitación pública o base concursal podrá interponerse recurso de objeción, dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas. El recurso, debidamente fundado, se presentará ante la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo.

2- Todo oferente potencial o su representante, podrá interponer el recurso de objeción cuando considere que ha habido vicios de procedimiento, se ha incurrido en alguna violación de los principios fundamentales de la contratación o se ha quebrantado, en alguna forma, el ordenamiento regulador de la materia.

3- El recurso de objeción deberá resolverse dentro de los treinta días naturales siguientes a su presentación. Si no se resolviere dentro de este plazo, la objeción se tendrá por acogida favorablemente, en los términos indicados por el recurrente en la fundamentación del recurso.

4- Quien habiendo podido recurrir no lo hiciere, o no alegare las violaciones o quebrantos a que tuviere derecho, no podrá utilizar estos argumentos en el recurso de apelación en contra del acto de adjudicación.

5- Cuando se presenten recursos de objeción al cartel, e independientemente de los aspectos que se hayan objetado, la Junta Directiva del ICT estará obligada a revisar el cartel en forma integral y a advertir, a la administración, si considera que existen vicios de procedimiento o que en él se ha incurrido en alguna violación de los principios de la contratación administrativa o se ha quebrantado, en alguna forma, la normativa vigente en la materia.

Artículo 36- Apelación de la adjudicación

1- Contra el acto de adjudicación podrá interponerse recurso de apelación, dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación del acuerdo en La Gaceta. El recurso, debidamente fundamentado, se presentará ante la Contraloría General de la República.

2- El recurrente deberá demostrar que está legitimado para resultar readjudicatario y que todas las ofertas con calificación mejor que la suya carecen de legitimación para ser adjudicatarias.

3- El recurso de apelación deberá resolverse dentro de los cuarenta días hábiles siguientes al auto inicial de traslado. Este plazo podrá prorrogarse mediante resolución motivada hasta por otros quince días hábiles, en casos muy calificados, cuando se necesite recabar prueba pericial especialmente importante para resolver el recurso, y que por la complejidad no pueda ser rendida dentro del plazo normal de resolución. Vencido el plazo para resolver o su prórroga sin dictarse la resolución final, automáticamente se tendrá por confirmado el acto de adjudicación recurrido

4- La readjudicación también podrá ser recurrida cuando las causas de la inconformidad hayan surgido del motivo que fundamentó el acto de readjudicación.

5- La resolución final o el auto que ponga término al recurso dará por agotada la vía administrativa. Dentro de los tres días hábiles posteriores a la comunicación, el interesado podrá impugnar el acto final sin efectos suspensivos, ante el Tribunal Superior Contencioso - Administrativo, por medio del proceso especial dispuesto en los artículos 89 y 90 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso - Administrativa.

Artículo 37- Etapa del Contrato y régimen aplicable

Durante la etapa de vigencia del contrato de concesión, el régimen de la concesión estará sujeto a las siguientes disposiciones:

a) Las obras se ejecutarán a riesgo del concesionario, a quien le corresponde enfrentar los desembolsos necesarios hasta terminarlas, aun en presencia de caso fortuito o fuerza mayor.

b) Cuando el retraso en el cumplimiento de los plazos sea imputable a la Administración concedente, el concesionario gozará de una prórroga igual al período de entorpecimiento o paralización, sin perjuicio de las compensaciones que procedan. Sin embargo, el concesionario no podrá alegar como excusa para no aportar los fondos que le corresponden, el atraso de la administración en aportar los propios.

c) Las aguas, los minerales u otros materiales que aparezcan como consecuencia de la ejecución de las obras, no se entenderán incluidos en la concesión, y su empleo, disposición o transporte por parte del concesionario o de terceros, se regirá de acuerdo con las leyes correspondientes. Sin perjuicio de lo anterior, el concesionario deberá informar prontamente a la administración concedente acerca de la aparición de esas aguas, minerales o materiales como pueden hallazgos arqueológicos.

d) La construcción de la obra no podrá interrumpir el tránsito por caminos existentes. En el evento de que la interrupción sea imprescindible, el concesionario estará obligado a habilitar un tránsito provisional adecuado.

e) Apegarse a los mejores procedimientos constructivos y a los planos de construcción de las obras aprobadas, los cuales deben tomar en consideración los requerimientos estipulados por la Ley Nº 7600, Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y de las normas ambientales que se regulan por medio del Ministerio de Ambiente y Energía.

Artículo 38- Resolución alterna de conflictos

En el contrato podrán fijarse cláusulas de resolución alterna de conflictos para resolver las controversias o diferencias producidas con motivo de la interpretación o aplicación del contrato de concesión o surgidas de su ejecución. Estas cláusulas

se regirán por la Ley Nro. 7727 de 9 de diciembre de 1997, y sus reformas, y en ellas podrán definirse las reglas que se seguirán en los procedimientos de resolución alterna de conflictos, o bien, podrá remitirse al instrumento en el que dichas reglas se encuentran, siempre y cuando se respete lo dispuesto en la legislación costarricense vigente en esta materia. El establecimiento de la cláusula compromisoria en el contrato, obliga a la administración y al concesionario a someter sus controversias a los procedimientos de resolución alterna de disputas, establecidos en la citada ley.
No podrá someterse al procedimiento de resolución alterna de disputas, el ejercicio de las potestades de imperio ni el ejercicio de los deberes públicos por parte de la administración, de conformidad con el artículo 66 de la Ley General de la Administración Pública; sin embargo, sí procederá en cuanto al derecho y el monto de la indemnización al que pueda tener derecho el concesionario, como consecuencia de su ejercicio por parte de la administración.

Artículo 39- Financiamiento por endeudamiento

El concesionario podrá realizar cualquier operación financiera sin necesidad de autorización de la Dirección Ejecutora, con las excepciones estipuladas en esta ley y el contrato de concesión. El concesionario podrá fideicometer, gravar de cualquier manera o dar en garantía la concesión y podrá establecer prenda especial a los derechos del concesionario fijados y regulados en esta Ley, previa autorización de la Junta Directiva del ICT.

La prenda, bajo pena de nulidad, únicamente será válida en garantía de las obligaciones que guarden relación directa con la concesión correspondiente y será sin desplazamiento de los derechos y los bienes prendados, los cuales se mantendrán a cargo y bajo la responsabilidad del concesionario.

La ejecución de la prenda establecida se regirá por las disposiciones contenidas en este artículo y, supletoriamente, por las normas del Derecho común o vía reglamento.

Artículo 40- Procedimiento de sanción

Las sanciones comprendidas en este capítulo podrán imponerse previo procedimiento con garantía de defensa para el concesionario.

De no existir un procedimiento establecido que permita la debida defensa, se aplicarán las disposiciones relativas al procedimiento ordinario, contenidas en el libro II de la Ley General de la Administración Pública.

Artículo 41- Infracciones

La Administración concedente sancionará con una multa de ciento cincuenta salarios base mínimo, fijados en el presupuesto ordinario de la República, de

acuerdo con la Ley No. 7337, de 5 de mayo de 1993, a quien incurra en cualquiera de las siguientes infracciones:

a) Utilice las aguas, los minerales u otros materiales que aparezcan como consecuencia de la ejecución de las obras, sin la autorización de la respectiva Administración.

b) Incumpla la obligación de habilitar una vía de tránsito provisional, cuando la interrupción de los caminos existentes sea imprescindible.
c) No conserve las obras, sus accesos, señalización y servicios en condiciones normales de empleo y funcionamiento, según lo previsto en el contrato de concesión.

d) Destine total o parcialmente el inmueble o las obras, a actividades distintas de las autorizadas, instale o habilite otros servicios diferentes de los contemplados en el contrato de concesión, sin la autorización de la Administración concedente ni la aprobación de la Contraloría General de la República.

e) Inicie la etapa de explotación sin la autorización de la Administración concedente.

Artículo 42- Multa por mora

En caso de que el concesionario no cancele alguno de los cánones o pagos establecidos en la presente ley, se impondrá una multa del quince por ciento (15%) mensual sobre el monto del canon o pago adeudado. El retraso prolongado por más de tres meses, se interpretará como falta grave y dará lugar a la resolución del contrato de concesión.

Artículo 43- Pago de multas

Cuando la Dirección Ejecutora haya realizado el proceso de licitación y adjudicación, el valor de las multas ingresará al Fondo Especial. Por ningún concepto, este monto podrá considerarse costo de operación.

Artículo 44- Cláusula penal

La Dirección Ejecutora deberá definir en el cartel una cláusula penal por cumplimiento tardío de la ejecución, por causas imputables al concesionario.

Artículo 45- Cobro judicial

Los débitos constituidos en razón de las sanciones previstas en este capítulo, que no sean cancelados en sede administrativa, se cobrarán judicialmente. Para ello, constituirá título ejecutivo la certificación expedida por la autoridad competente de la respectiva y ratificada por la Junta Directiva del ICT.

Artículo 46- Plazo de la concesión

1- El plazo de toda concesión será determinado en función de los estudios técnicos que sustenten el cartel de licitación, sin que en ningún caso pueda ser superior a cincuenta años.

2- El plazo de la concesión se computará a partir de la fecha de inicio indicada en el contrato de concesión. El plazo de la concesión siempre incluirá el período de la etapa de construcción.

3- Una vez concluido el plazo de concesión, la Dirección Ejecutora, previo conocimiento del Consejo Técnico Ejecutor y de la Junta Directiva del ICT, podrá licitar de nuevo la concesión con las variantes que estime pertinente. La licitación correspondiente deberá efectuarse con la anticipación necesaria para que no exista solución de continuidad entre ambas concesiones.

Artículo 47- Prórroga de la concesión

1- De existir interés público demostrado, con sustento en estudios técnicos, el plazo de la concesión podrá prorrogarse durante el último tercio anterior a su vencimiento. Para tal efecto, la Dirección Ejecutora deberá obtener la autorización del Consejo Técnico Ejecutor y de la Junta Directiva del ICT.

2- La suma del plazo original más las prórrogas aprobadas no podrá exceder el cincuenta por ciento del plazo máximo establecido para toda concesión.

Artículo 48- Suspensión temporal

1- La concesión solo podrá suspenderse en las siguientes situaciones:

a) Por caso fortuito o fuerza mayor que impidan la prestación del servicio o proceso constructivo.

b) Por las causas citadas en el contrato de concesión.

2- Dentro de las doce horas siguientes al momento en que ocurrió la situación considerada causa o motivo de la suspensión, el concesionario estará obligado a comunicarlo a la Dirección Ejecutora, la cual dispondrá hasta de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación, para determinar la verdad real de la causa o situación alegada por el concesionario.

3- Comprobada la verdad real de la causa o situación invocada por el concesionario para suspender la plazo de la concesión, la Dirección Ejecutora para reanudar el plazo de la concesión toda vez que haya evaluado los daños, si existieren, y a determinar en qué forma concurrirán el concesionario a subsanarlos; además, otorgará al concesionario un plazo para realizar las acciones pertinentes, mismo que no afecta el plazo original de la concesión.

4- Si, por el contrario, la Dirección Ejecutora determinare la inexistencia de la causa o situación alegada por el concesionario, le ordenará retomar la explotación de la concesión en forma inmediata e iniciará el proceso requerido para establecer las sanciones correspondientes.

Artículo 49- Resolución de la concesión

1- Con criterio vertido por parte de la Dirección Ejecutora, visado por el Consejo Técnico Ejecutor, la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo podrá tomar la decisión de resolución del contrato de concesión en el caso que proceda por las siguientes causas:

a) Cuando haya incumplimiento del concesionario sobre los fines del proyecto y de las normas técnicas que emita el Instituto.
b) Cuando exista violación a las disposiciones legales y reglamentarias.

c) Cuando se incumplan cláusulas contractuales.

ch) Cuando se varíe el destino indicado para las tierras o las edificaciones.

d) Cuando no se acaten las disposiciones y órdenes de la Dirección Ejecutora sobre aspectos previamente establecidos.

e) Cuando se traspase o ceda, total o parcialmente, o se grave una concesión, sin autorización previa y expresa del Instituto.

f) Cuando por falta de constitución o la reconstitución de las garantías dispuestas en el contrato de concesión.

b) Cualquier incumplimiento grave en las obligaciones del concesionario derivados del contrato.

2- La declaratoria de resolución del contrato estará precedida por un proceso administrativo, que respetará las reglas del debido proceso.

3- La Dirección Ejecutora podrá hacer efectivas las garantías de que disponga, una vez firme la declaratoria de resolución.

Artículo 50- Extinción de la concesión

1- La concesión se extingue por las siguientes causales:

a) El vencimiento del plazo pactado.

b) Por vencimiento del plazo pactado y agotado los plazos de prórroga del contrato de concesión.

c) La imposibilidad de cumplimiento de contrato como consecuencia de no realizar las inversiones previstas en el contrato de concesión y en su oferta.

d) Por renuncia del interesado o interesados.

c) Por fallecimiento o ausencia legal del concesionario que no haya dejado herederos.

e) Por disolución, en el caso de personas jurídicas

f) El rescate por causa de interés público.

g) El acuerdo mutuo de la ICT y el concesionario; para ello, dicho acuerdo deberá contar con la aceptación previa de los acreedores, si existen. Este acuerdo deberá estar debidamente razonado, tomando en consideración el interés público.

h) La resolución por incumplimiento grave así señalado en el cartel y en el contrato de obligaciones del concesionario.

i) Otras que se estipulen en el contrato de concesión.

2- De vencerse el plazo, la Dirección Ejecutora recibirá los derechos y bienes objeto de la concesión en buen estado y funcionamiento, libres de gravámenes y sin costo alguno.

3- Cuando la extinción se produzca por causas ajenas al concesionario, quedará a salvo su derecho a percibir las indemnizaciones que correspondan según esta ley y el contrato de concesión.

Artículo 51- Extinción de la concesión

El Instituto Costarricense de Turismo podrá rescatar una concesión por motivos de interés público o de fuerza mayor establecido en el inciso f) del Artículo 14 de esta Ley, en estos casos se reconocerá al concesionario el valor de las edificaciones y mejoras existentes, a justa tasación de peritos nombrados por el Dirección General de la Tributación Directa, y se le brindará, de mutuo acuerdo, si ese fuere el caso, una reubicación para que siga desarrollando su actividad en el área que comprende el desarrollo.

Artículo 52- Otras generalidades

Cancelada, extinguida o rescatada una concesión, o vencido el término, todos los derechos y potestades que le correspondan al concesionario de acuerdo con esta ley, volverán al Instituto.

Artículo 53- Suspensión de pagos y quiebra del concesionario

1- Como acto previo a la solicitud de declaratoria de quiebra, el concesionario que no pueda cubrir sus obligaciones tendrá la facultad de apersonarse ante el juez civil de su domicilio, para solicitarle una suspensión de pagos por un plazo máximo de tres meses, contados a partir de la resolución que autoriza la suspensión, con el objeto de que, durante el primer mes de este período, presente una proposición de convenio para el pago de los acreedores.

2- El concesionario deberá acompañar su solicitud de suspensión de pagos, con los siguientes documentos:

a) Un estado de sus obligaciones con el nombre completo y domicilio de cada uno de los acreedores, el monto de la deuda, el plazo, los intereses convenidos y la fecha en que cesó el pago.

b) Una exposición clara y detallada de las causas determinantes del estado de cesación de pagos.

c) El estado general de la explotación de la concesión, junto con un cuadro demostrativo de gastos e ingresos.

d) La contabilidad de todos los libros, comprobantes y facturas.

El juzgado no dará trámite a la solicitud de suspensión pedida por el concesionario, si no aportare los documentos mencionados. Cualquier información falsa o dato inexacto de los requeridos en este punto, además de la responsabilidad penal que implica, será motivo suficiente para que el juez declare la quiebra.

3- Presentada la solicitud de suspensión, acompañada de los documentos requeridos, el juez autorizará la suspensión de pagos, para lo cual dispondrá de cinco días hábiles, contados a partir de la solicitud. La resolución del juez paralizará todo trámite ejecutivo contra el concesionario.

4- Para aprobar el convenio, una vez presentada la propuesta será indispensable publicar, en La Gaceta y dos diarios de circulación nacional, un edicto que convoque a los acreedores para que acudan a adherirse a la proposición del convenio o acuerden modificarla, en el término de los dos meses restantes del plazo referido en el numeral 1.

5- Si se alcanzare la mayoría de dos terceras partes de los acreedores, el juez aprobará el convenio que será obligatorio para todos los interesados. Si, por el contrario, fuere imposible alcanzar esta mayoría o si se incumpliere el convenio, se declarará la quiebra de la sociedad concesionaria.

6- También procede la declaratoria de quiebra, a instancia de la Administración concedente o algún acreedor, cuando el concesionario abandone, de hecho o de derecho, la explotación de la concesión o se resuelva el contrato de concesión. En

tales casos, para verificar el abandono, la Administración concedente dispondrá hasta de veinticuatro horas contadas a partir del momento en que tenga conocimiento del hecho o adquiera firmeza el acto que resuelve el contrato de concesión. Una vez verificado, la Administración concedente procederá a nombrar un interventor, quien asumirá la administración y explotación temporal de la concesión hasta la integración de la Junta de Intervención referida en el punto siguiente.

El interventor temporal estará obligado a depositar judicialmente los ingresos provenientes de la explotación de la concesión, una vez deducidos y pagados los gastos de administración y explotación. Asimismo, deberá proceder a depositar los recursos en efectivo o los valores que tenga el concesionario en el momento de la intervención, y a exhibir los libros y documentos pertenecientes a la sociedad, cuando proceda, y el juez lo autorice a instancia de parte.

7- Declarada la quiebra por el juez, y firme la resolución, se le notificará a la Administración concedente, que, dentro de los cinco días hábiles siguientes, procederá a integrar una Junta de Intervención, compuesta por tres miembros designados por esta Administración de la siguiente manera:

a) Un representante de la Administración concedente, quien presidirá la Junta.

b) Uno escogido de una terna presentada por la masa de acreedores.

c) Un representante del Consejo Nacional de Concesiones.

A los miembros de la Junta de Intervención se les remunerará de conformidad con lo que, para el efecto, disponga el reglamento de esta ley.

8- La Junta de Intervención tendrá las obligaciones, facultades, atribuciones y responsabilidades señaladas en el Código de Comercio para el curador en un proceso normal de quiebra.

9- Dentro de los seis meses siguientes a la firmeza de la resolución que declare la quiebra del concesionario y, conforme a las reglas que se determinan en el artículo 62 de esta Ley, se procederá a rematar el derecho a la explotación del conjunto de bienes objeto de la concesión, por el plazo que reste para el vencimiento, con prelación al acreedor de la prenda a la que se refiere el artículo 47 bis de la presente Ley.

10- En lo no previsto en este artículo, se aplicará supletoriamente el Código de Comercio.

Artículo 54- Reglas sobre el remate

1- El remate se regirá por las siguientes reglas:

a) Solo podrán ser rematarios las empresas o los consorcios empresariales que cumplan los requisitos indicados en el cartel de la concesión respectiva para ser concesionario. Para este efecto, la Dirección Ejecutora dispondrá de treinta días hábiles contados a partir del remate, para determinar si el rematario cumple o incumple los requisitos.

b) El monto obtenido del remate se destinará al pago de los créditos legalizados. En todo caso, los créditos que se encuentren garantizados con la prenda especial a los derechos del concesionario, se cancelarán con preferencia sobre cualquier otro crédito y demás acreencias. El excedente, si existe, corresponderá a la ICT y su destino será para el Fondo Especial.

c) En caso de que no existan postores idóneos en el tercer remate, la Dirección Ejecutora asumirá directamente la explotación. Podrá promover un nuevo concurso para dar en concesión la obra o el servicio público, si lo estima pertinente; en tal caso, en el cartel de la nueva licitación considerará la forma de cancelar la deuda que haya quedado pendiente del anterior concesionario con los acreedores registrados, hasta lo que sea posible, financieramente.

2- El monto obtenido del remate se destinará al pago de los créditos debidamente legalizados, en la alícuota que corresponda. El excedente, si lo hubiere, corresponderá a la Administración concedente.

3- El nuevo concesionario adquirirá el derecho de explotación libre de todo gravamen.

Artículo 55- Indemnización por extinción

1- En las indemnizaciones que procedan, solo se tomarán en cuenta los gastos efectivamente realizados, una utilidad hasta del cincuenta por ciento (50%) del lucro cesante, así como el estado actual de los bienes y las pérdidas que puedan haberse ocasionado.

2- La liquidación respectiva requerirá la aprobación de la Contraloría General de la República; para ello, deberá remitir, a la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa, un informe donde justifique, debidamente, la aprobación de estas liquidaciones.

Disposiciones Transitorias

Transitorio I- Las concesiones adjudicadas al entrar en vigencia esta Ley y que las mismas no hayan iniciado las obras constructivas por responsabilidad del concesionario se tendrán por rescindidas y volverán los terrenos de pleno derecho al ICT para iniciar un proceso concursal.

Transitorio II- En el caso de nuevas prórrogas, cesiones parciales o totales, las adenda que se celebren en los contratos de concesión vigentes se regularán con estas nuevas disposiciones establecidas en la presente ley.

Transitorio III- El Instituto Costarricense de Turismo tendrá un plazo máximo de 24 meses para reubicar la Dirección Ejecutora del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo dentro de la estructura organizativa y presupuestaria del Instituto, queda claro que todos los funcionarios no perderán su estatus laboral por dicho movimiento interno del ICT.

Transitorio IV- El Instituto Costarricense de Turismo tendrá un plazo máximo de 6 meses para reglamentar este nuevo marco jurídico, que incluye las modificaciones al Plan Maestro.

Rige a partir de su publicación.

Rodolfo Rodrigo Peña Flores

Mileidy Alvarado Arias

Aracelly Salas Eduarte

María Inés Solís Quirós

María Vita Monge Granados

Erick Rodríguez Steller

José María Villalta Flórez-Estrada

Aida María Montiel Héctor

Óscar Mauricio Cascante Cascante

Yorleni León Marchena

María José Corrales Chacón

Ana Karine Niño Gutiérrez

Daniel Isaac Ulate Valenciano

Luis Antonio Aiza Campos

Silvia Vanessa Hernández Sánchez

Harllan Hoepelman Páez

Marolin Raquel Azofeifa Trejos

Laura Guido Pérez

Paola Alexandra Valladares Rosado

Jonathan Prendas Rodríguez

Eduardo Newton Cruickshank Smith

Nielsen Pérez Pérez

Xiomara Priscilla Rodríguez Hernández

Ivonne Acuña Cabrera

Wagner Alberto Jiménez Zúñiga

Ana Lucía Delgado Orozco

Nidia Lorena Céspedes Cisneros

Erwen Yanan Masís Castro

Ignacio Alberto Alpízar Castro

Catalina Montero Gómez

Carmen Irene Chan Mora

Jorge Luis Fonseca Fonseca

Paola Viviana Vega Rodríguez

Víctor Manuel Morales Mora

Dragos Dolanescu Valenciano

Luis Fernando Chacón Monge

Giovanni Alberto Gómez Obando

Luis Ramón Carranza Cascante

Sylvia Patricia Villegas Álvarez

Carlos Luis Avendaño Calvo

Diputados y diputadas

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Turismo.

1 vez.—(IN2018295684).

REFORMA DE LA LEY DE ASOCIACIONES COOPERATIVAS Y CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVA, Nº 4179, DEL 22 DE AGOSTO DE 1968, Y ADICIÓN DE UN NUEVO TITULO IV CREACIÓN DEL COMITÉ PARA LA IGUALDAD Y LA EQUIDAD DE GÉNERO Y LOS DERECHOS DE LAS MUJERES DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO

Expediente N.° 21.051

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El movimiento cooperativo ha sido uno de los protagonistas del proceso de desarrollo económico y social del último siglo y sigue siéndolo en el presente siglo; ha contribuido y lo sigue haciendo al ensanchamiento de la democracia económica al establecer un modelo empresarial peculiar que ha desarrollado la participación y el protagonismo de sectores de menor desarrollo, conformados por mujeres y hombres.

Las cooperativas representan una forma de convivencia democrática y una alternativa económica humanizadora, en la cual las mujeres participan desde sus inicios con derecho a mejores y más flexibles condiciones de empleo y, en consecuencia, a la legítima aspiración por un mejoramiento de la calidad de la vida.

El IV Censo Nacional Cooperativo, del 2012, se tiene que un 21% de la población nacional está asociado a una cooperativa; que se registra un total de 887.335 de personas asociadas en cooperativas; que en el país hay 594 cooperativas y que de un total de 860.843 reportadas, un 57.3% son hombres y un 42.7% son mujeres.

Ahora bien, en relación con las posiciones de poder y de toma de decisiones, los datos que arrojan el último censo en relación con los cuerpos directivos son claros: los hombres tienen un claro predominio con respecto a las mujeres, una cifra global de 61.5% de hombres y de un 38.5% de mujeres.

En los puestos de gerencia, la distancia porcentual es mayor, siendo que el 69.9% de gerencias son ocupadas por hombres frente a un 30.1% por mujeres.

En las presidencias de los Consejos de Administración, el cargo es ocupado mayoritariamente por hombres en un 77.9%; y 22.1% por mujeres.

En general, los datos que arrojan el IV Censo, en relación con la participación de hombres y mujeres en las cooperativas, muestran que si bien la mayoría son mixtas, existen cooperativas son conformadas sólo por mujeres o sólo por hombres. Y que existe un predominio de hombres en los cargos que y puestos de toma de decisiones.

Sobre la preocupación alrededor de la falta de paridad de género en el movimiento cooperativista, se tiene que a nivel de nacional, en el XIII Congreso Nacional Cooperativo, realizado en diciembre de 2014, se incluyó en la agenda el punto, tomándose el acuerdo 59, en los siguientes términos:

> "Acuerdos Foro de Género. Participación. 59. Ejecutar las resoluciones legales vigentes y realizar un análisis profundo sobre el proyecto de ley N°18.199 ´Reforma de la Ley de Asociaciones Cooperativas y Creación Del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo N°4.179 del 22 de agosto de 1968 y adición de un nuevo título cuarto para la creación Comité Nacional para la Equidad e Igualdad de Género y los Derechos Humanos de las Mujeres del Movimiento Cooperativo´."

Efectivamente, el proyecto al que hace referencia este acuerdo es el proyecto que se ha venido conociendo en la corriente legislativa desde el año 2011, con el objetivo de hacer una vasta reforma a la N.º 4179, Ley de Asociaciones Cooperativas y Creación del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, de 22 de agosto de 1968, y de crear un ente para impulsar la igualdad y la equidad de género en el movimiento cooperativo, fue recientemente archivado por derivación de la resolución del 11 de octubre de 2018 sobre la aplicación del artículo 119 del Reglamento en relación con las resoluciones 12250-2015, 2018-11658 y 2018-13520 de la Sala Constitucional, que emitiera la Presidenta del Congreso.

Subsistiendo el interés y la necesidad de dar continuidad a esta importante iniciativa, con la aprobación de este proyecto de ley se culmina una fructífica y larga discusión parlamentaria que ya había recorrido buena parte de su camino, y que enfrentó un nuevo escollo por un problema de formalidades de procedimiento parlamentario ya indicado.

Para retomar este esfuerzo, presento este proyecto que recoge la discusión por el fondo del proyecto 18.199, con la pretensión de que éste sea la mejor propuesta para que finalmente sea aprobada como ley de la República.

Reafirmando que, actualmente, el único sector que no tiene incorporada la paridad de género en sus diversas instancias es el cooperativista.

El antecedente de obligada referencia es la ley N° 8901 sobre el Porcentaje mínimo de mujeres que deben integrar las Directivas de Asociaciones, Sindicatos y Asociaciones Solidaristas. En la misma dirección, este proyecto de ley pretende cumplir con la paridad entre mujeres y hombres en las cooperativas y las instancias que rigen el cooperativismo.

Al respecto, la jurisprudencia de la Sala Constitucional, vinculante erga omnes, ha sido clara y conteste en la legitimidad y constitucionalidad de este mecanismo, para asegurar la igualdad de participación entre mujeres y hombres, al reconocer que:

> "Históricamente, la mujer ha sido objeto de discriminación en diferentes ámbitos de la sociedad – laboral, económico, político, cultural, legal, etc -, siendo relegada en la determinación, adopción y ejecución de aquellas medidas de orden general, tendientes al desarrollo del grupo humano que integran. En este sentido, la comunidad internacional ha reafirmado en diversos instrumentos internacionales el principio de no discriminación, al proclamar que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, reconociendo a todos derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, sin distinción de raza, color, sexo, religión, opinión política o de cualquier otro tipo (Artículos 1 y 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y artículo 1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos). Igual relevancia reviste la adopción por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, con el objeto de erradicar la discriminación contra la mujer y promocionar la participación de ésta en la vida política, social, cultural y económica de su país, en igualdad de condiciones que el hombre, en procura de que asuma un papel protagónico en aquellas actividades que históricamente le han sido vedadas o limitadas de alguna forma". (SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 2003-04819, San José, a las diez horas con cincuenta y dos minutos del treinta de mayo del dos mil tres).

En materia de cooperativismo y participación en el desarrollo económico, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW), establece obligaciones que el Estado costarricense debe cumplir, particularmente en los artículos 1, 2, 3, 4, 13 y 14. Es necesario recalcar la norma del artículo 3 que establece:

> Artículo 3, CEDAW. Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.

Y la norma del artículo 4.1 directamente vinculada con el segundo objetivo del proyecto que es la creación de un Comité especializado en impulsar la igualdad y la equidad de género y los derechos de las mujeres en el movimiento cooperativista. Su creación encuentra el respaldo y asidero con rango convencional en la norma que se refiere a las medidas temporales, en los siguientes términos:

> Artículo 4. CEDAW. 1. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato (…)

Debe agregarse que con la creación de este comité, se están destinando fondos que ya existen, que corresponden a un porcentaje fijado por ley aportado por CONACOOP y otro por INFOCOOP, fondos que ya existen y que se les da un destino específico para cumplir con los objetivos de la ley.

En virtud de las consideraciones expuestas, sometemos a conocimiento de la Asamblea Legislativa el siguiente Proyecto de Ley para su estudio y aprobación por parte de los señores diputados y las señoras diputadas.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

REFORMA DE LA LEY DE ASOCIACIONES COOPERATIVAS Y CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVA, Nº 4179, DEL 22 DE AGOSTO DE 1968, Y ADICIÓN DE UN NUEVO TITULO IV CREACIÓN DEL COMITÉ PARA LA IGUALDAD Y LA EQUIDAD DE GÉNERO Y LOS DERECHOS DE LAS MUJERES DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO

ARTÍCULO 1- Modifíquense los artículos 3, 36, 39, 40, 42, 47, 95, 100, 106, 124, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 155, 157, 160, 162, 166, 167, 172 y 185 de la Ley N.º 4179, Ley de Asociaciones Cooperativas y Creación del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, Ley Nº 4179 de 22 de agosto de 1968, y sus reformas.

El texto dirá:

Artículo 3.-

Todas las cooperativas del país deberán ajustarse estrictamente a los siguientes principios y normas:

[…]

l) Igualdad y equidad de género

Artículo 36-

La dirección, la administración, la vigilancia y la auditoría interna de las asociaciones cooperativas estarán a cargo de:

[…]

f) El Comité interno de mujeres, sobre la ejecución de las acciones de igualdad y equidad de género en la organización.

[…]

Artículo 39-

Corresponde a la Asamblea la elección del Consejo de Administración y de los comités que establezcan la ley y los estatutos.

Cuando la cooperativa esté integrada por hombres y mujeres, la elección e integración de cada uno de los órganos que la conforman deberá hacerse cumpliendo con la paridad de género, para que en su conformación la diferencia entre hombres y mujeres no sea superior a una persona.

Artículo 40-

La Asamblea deberá elegir dos suplencias, que serán ocupadas por un hombre y una mujer, quienes sustituirán a las personas propietarias de manera que se garantice la paridad, en sus ausencias temporales, definitivas o cuando dejen de asistir a las reuniones del Consejo de Administración por tres veces consecutivas sin causa que lo justifique.

En los dos últimos casos, las personas suplentes entrarán a ser integrantes del consejo, observando el orden en que fueron electas y garantizando la paridad de género, en la sesión en la cual se integra la nueva persona, garantizándose la paridad.

Artículo 42-

Cuando las condiciones de una cooperativa así lo aconsejen, el INFOCOOP podrá autorizar que la Asamblea de asociados y asociadas se sustituya por una Asamblea de delegados y delegadas, la cual en ningún caso podrá tener menos de cincuenta integrantes electos en la forma y condiciones que indiquen los estatutos, para garantizar que sea fiel expresión de los intereses de todas las personas asociadas. Las personas integrantes del Consejo de Administración y del Comité de Vigilancia, serán delegadas ex oficio.

En caso de las cooperativas de autogestión, se considera delegada ex oficio la persona gerente, siempre y cuando sea socia de la cooperativa.

Cuando la cooperativa está integrada por hombres y mujeres, la Asamblea de personas delegadas, tanto propietarias como suplentes, deberá estar integrada cumpliendo con la paridad de género, en donde la diferencia entre hombres y mujeres no podrá ser superior a una persona.

Artículo 47-

En la primera sesión que se deberá celebrar después de la elección del nuevo consejo de administración, se elegirán: una presidencia, una vicepresidencia, una secretaría y dos vocalías. Además, se integrarán las comisiones de trabajo que establezcan los estatutos.

Cuando la cooperativa está integrada por hombres y mujeres, las comisiones de trabajo deberán integrarse cumpliendo con la paridad de género, en donde la diferencia entre hombres y mujeres no podrá ser superior a una persona.

Artículo 94-

Las cooperativas podrán formar federaciones, uniones y cuatro confederaciones sectoriales, a saber, cooperativas de autogestión, cooperativas de cogestión, cooperativas de ahorro y crédito, y de las demás cooperativas. Las juntas directivas de estos órganos cooperativos deberán ser conformadas cumpliendo con la paridad de género tanto en puestos en propiedad como en las suplencias.

Esta representación paritaria significa que los órganos pares se conformarán cincuenta por ciento (50%) hombres y cincuenta por ciento (50%) mujeres y los impares la diferencia entre hombres y mujeres no será superior a una persona.

Artículo 95-

Las uniones, federaciones y confederaciones tendrán como finalidad:

[…]

e) Tomar en cuenta las condiciones, necesidades e intereses de las mujeres e integrar la perspectiva de género en sus decisiones, políticas y estructuras cooperativistas para promover y alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres.

[…]

Artículo 100-

Los objetivos de las cooperativas de autogestión son:

a) Propiciar el pleno desarrollo de las personas asociadas con perspectiva de género mediante un mecanismo de participación organizada a las personas trabajadoras del país, en la producción de bienes y servicios, la toma de decisiones y el reparto de los beneficios económico-sociales, producto del esfuerzo común.

b) Agrupar a las personas trabajadoras en organizaciones productivas estables y eficaces en las que prive el interés comunitario, promoviendo criterios de igualdad género.

(…)

g) Promover, con criterios de igualdad y equidad de género, la capacitación y la educación integral de las personas trabajadoras y sus familiares. Dicha capacitación deberá estar orientada, en lo fundamental, a que las personas trabajadoras asimilen sucesivos niveles de conocimiento y destrezas para afianzar la gestión democrática, igualitaria y eficiente de sus empresas.

(…)
Artículo 106-

El Consejo de Administración será elegido por la Asamblea General y sus integrantes permanecerán en sus cargos por un período de dos años, pudiendo ser reelecta de forma consecutiva.

Cuando la cooperativa está integrada por hombres y mujeres, la elección e integración de cada uno de estos órganos deberá cumplir con la paridad de género, en donde la diferencia entre hombres y mujeres no podrá ser superior a una persona.

Artículo 124-

El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y el Instituto de Fomento Cooperativo, en consulta con el Consejo Nacional de Cooperativas, el Comité para la Igualdad y la Equidad de Género y los Derechos de las Mujeres del Movimiento Cooperativo y las cooperativas de cogestión, reglamentarán para este tipo de cooperativas lo relacionado con la propiedad, la distribución de excedentes, la participación en la gestión y otros aspectos que se consideren necesarios, tomando en cuenta las condiciones, necesidades e intereses de las mujeres, y los siguientes criterios:

[…]

Artículo 137-

Las funciones del Consejo Nacional de Cooperativas son:

(…)

j) Promover e incidir en las políticas cooperativistas para que éstas cumplan con la igualdad, la equidad y la participación de mujeres y hombres que integran el movimiento cooperativo, en coordinación con el Comité para la Igualdad y la Equidad de Género y los Derechos de las Mujeres del Movimiento Cooperativo.

Artículo 138-

El Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP) elegirá de su seno una presidencia, una vicepresidencia, una secretaría y dos vocalías, respetando la igualdad, paridad y alternancia entre los sexos , de tal suerte que representen los intereses de todos los sectores cooperativos incluyendo los del Comité para la Igualdad y la Equidad de Género y los Derechos de las Mujeres del Movimiento Cooperativo.

La asamblea se reunirá ordinariamente por lo menos cada tres meses y, extraordinariamente, cuando sea convocada por la presidencia o por diez personas delegadas. El cuórum lo formará la mitad más una de las personas delegadas.

Artículo 139-

El CONACOOP será integrado mediante el siguiente procedimiento:

a) Se celebrarán cuatro asambleas separadamente: una de las cooperativas de autogestión, otra de las cooperativas de producción agrícola e industrial, otra de cooperativas de ahorro y crédito y una cuarta de las demás cooperativas. Cada asamblea será constituida en forma paritaria.

[…]

e) Cada una de las asambleas a que se refiere el inciso a) de este artículo elegirá a diez personas representantes, integradas por un cinco hombres y cinco mujeres. Además, en la cuarta asamblea, ninguno de los sectores que la integren podrá elegir a más de tres personas representantes.

f) Las confederaciones, federaciones y uniones designarán cada uno, dos personas candidatas de diferente sexo, como representantes ante CONACOOP. Este órgano designará posteriormente de las candidaturas propuestas a la persona representante que tendrá ante su seno voz y voto. La designación debe cumplir con el principio de paridad. El Comité para la Igualdad y la Equidad de Género y los Derechos de las Mujeres del Movimiento Cooperativo designará a una persona representante ante el CONACOOP.

g) Es deber de la presidencia del CONACOOP convocar a las cooperativas para las asambleas mencionadas en los incisos anteriores y pedir a las uniones, federaciones, confederaciones y al Comité para la Igualdad y la Equidad de Género y los Derechos de las Mujeres del Movimiento Cooperativo, la designación de sus representantes con treinta días de anticipación. Las personas que se nombren permanecerán en sus cargos por un período de dos años.

Artículo 140-

Las diez personas representantes de las cooperativas de autogestión ante el CONACOOP constituirán la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión, la cual tendrá las funciones y atribuciones que esta ley le confiere, a saber:

[…]

b) Definir las políticas de administración del Fondo Nacional de Cooperativas de Autogestión con perspectiva de género y elaborar los reglamentos de funcionamiento y uso de dicho fondo.

[…]

g) Brindar capacitación, asistencia técnica y apoyo financiero a las cooperativas de autogestión, confederaciones, federaciones y uniones afiliadas con perspectiva de género; para ello, definirán las políticas correspondientes.

[…]

k) Implementar la política de igualdad y equidad de género del movimiento cooperativo, en lo que corresponda, en coordinación con el Comité para la Igualdad y la Equidad de Género y los Derechos de las Mujeres del Movimiento Cooperativo.

[…]

La Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión (CPCA) podrá sesionar con la mitad más una de sus personas integrantes. De su seno nombrará un directorio compuesto por una presidencia, una vicepresidencia, una secretaría y dos vocalías. Una de las personas integrantes de este directorio deberá ser una representante del Comité para la Igualdad y la Equidad de Género y los Derechos de las Mujeres del Movimiento Cooperativo. El Directorio de la CPCA deberá estar conformado paritariamente tanto en puestos propietarios como vocalías, de tal forma que la diferencia entre el total de hombres y mujeres no podrá ser superior a una persona.

Artículo 141-

Para la elección de las personas representantes a la Junta Directiva del INFOCOOP, cada uno de los cuatro sectores representados en el CONACOOP presentará una terna paritaria de dos mujeres y un hombre o dos hombres y una mujer, a conocimiento del plenario; de estas ternas se elegirá una persona representante de cada sector.

Artículo 142-

[…]

Los recursos del FNA establecidos en este artículo deberán destinarse al financiamiento de proyectos viables, avales y al acompañamiento, mediante la asistencia técnica, la formación, la capacitación, el asesoramiento, los estudios de preinversión, la viabilidad y los estudios de factibilidad; asimismo, a favorecer las iniciativas de emprendimiento cooperativo y la incubación de empresas cooperativas de autogestión con perspectiva de género en coordinación con el CONACOOP y con el Comité para la Igualdad y la Equidad de Género y los Derechos de las Mujeres del Movimiento Cooperativo.

Artículo 143-

La administración financiera del FNA estará a cargo del INFOCOOP, de acuerdo con las políticas y los reglamentos elaborados por la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión, en coordinación con CONACOOP y con el Comité para la Igualdad y la Equidad de Género y los Derechos de las Mujeres del Movimiento Cooperativo.

La Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión, CONACOOP y el Comité para la Igualdad y la Equidad de Género y los Derechos de las Mujeres del Movimiento Cooperativo podrán solicitar al INFOCOOP informes detallados del manejo del Fondo Nacional de Cooperativas de Autogestión.

Artículo 144-

El CONACOOP podrá obtener recursos del Fondo Nacional de Cooperativas de Autogestión (FNA) con el propósito de destinarlos a la compra de equipo fijo y tierras, a fin de que puedan ser arrendados a empresas cooperativas de autogestión para atenuar costos y riesgos en dichas empresas.

El Comité para la Igualdad y la Equidad de Género y los Derechos de las Mujeres del Movimiento Cooperativo podrá obtener recursos del Fondo Nacional de Cooperativas de autogestión con el propósito de cumplir sus funciones y la incorporación de la perspectiva de género en el Movimiento Cooperativo.

Artículo 145-

Las solicitudes de crédito de las cooperativas de autogestión a financiarse con el Fondo las resolverá una comisión integrada por una persona representante de las cooperativas de autogestión en la Junta Directiva del INFOCOOP, una persona nombrada por la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión, una persona representante del INFOCOOP, que será técnica en el estudio y tramitación de créditos y dos personas representantes del Comité para la Igualdad y la Equidad de Género y los Derechos de las Mujeres del Movimiento Cooperativo quienes tendrán que ser representantes de cooperativas de autogestión. Esta comisión estará integrada paritariamente y será responsable del otorgamiento de los créditos tomando en cuenta la perspectiva de género y todas sus actuaciones relacionadas con el otorgamiento de estos.

Con el fin de superar las desigualdades de género del sector autogestionario, la CPCA en coordinación con el Comité para la Igualdad y la Equidad de Género y los Derechos de las Mujeres del Movimiento Cooperativo, deberá establecer acciones afirmativas para el desarrollo de unidades productivas de las mujeres cooperativistas en cooperativas mixtas y para las cooperativas de mujeres.

Artículo 155-

El Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, INFOCOOP, tiene como finalidad: fomentar, promover, financiar, divulgar y apoyar el cooperativismo en todos los niveles, propiciando las condiciones requeridas y los elementos indispensables, a una mayor y efectiva participación de la población del país, en el desenvolvimiento de la actividad económico-social que simultáneamente contribuya a: crear mejores condiciones de vida para las personas de escasos recursos, realizar una verdadera promoción de la ciudadanía y fortalecer la cultura democrática nacional.

Artículo 157-

Para el cumplimiento de sus propósitos el INFOCOOP tendrá las siguientes funciones y atribuciones de carácter general:

[…]

b) Fomentar la enseñanza y divulgación del cooperativismo en todas sus formas y manifestaciones; para ello, establecerá con preferencia cursos permanentes sobre doctrina, administración, contabilidad, gerencia, mercadeo, derechos humanos, igualdad de género, liderazgos democráticos y ejercicio del poder con perspectiva de género y toda actividad educativa que promueva un verdadero espíritu cooperativista nacional.

c) Prestar asistencia técnica a las asociaciones cooperativas en cuanto a estudios de factibilidad, ejecución y evaluación de programas estableciendo acciones afirmativas para las cooperativas de menor desarrollo empresarial.

d) Conceder crédito a las asociaciones cooperativas en condiciones y proporciones especialmente favorables al adecuado desarrollo de sus actividades y con perspectiva de género, percibiendo por ello, como máximo, los tipos de interés autorizados por el Sistema Bancario Nacional.

[…]

k) Realizar investigaciones en diferentes ramas cooperativas económicas y sociales con perspectiva de género, tendientes a ir diseñando un eficiente sector cooperativo en la economía nacional.

l) Llevar una estadística completa del movimiento cooperativo nacional desagregada por sexo; estadísticas de las brechas de género en el movimiento con sus respectivos indicadores de género para cumplir y avanzar con los convenios internacionales vigentes en el Estado; mantener un activo intercambio de informaciones y experiencias entre todas las cooperativas y proporcionar a entidades nacionales e internacionales información relacionada con el movimiento cooperativo nacional.

[…]

t) Participar, como representante del Estado costarricense, en convenios internacionales sobre materia cooperativa y efectuar los aportes correspondientes de contrapartida, incluso a nombre del Estado costarricense, cuando lo justifique el análisis técnico que se realice para estos efectos. La Junta Directiva deberá garantizar que los recursos y beneficios que se obtengan de estos convenios se distribuyan con perspectiva de género, garantizando mayor equidad y amplia y efectiva participación entre las entidades cooperativas. La representación del Estado costarricense será, en todo caso, el Ministro o Ministra de Trabajo y Seguridad Social o su representante.

u) El INFOCOOP, junto con otras organizaciones del Estado, coordinará, ejecutará, divulgará y promocionará en todo el ámbito cooperativo y las políticas públicas a favor de la igualdad y equidad de género.

v) Deberá implementar la política de igualdad y equidad de género del Movimiento Cooperativo en lo que le corresponde y apoyar las labores del Comité para la Igualdad y la Equidad de Género y los Derechos de las Mujeres del Movimiento Cooperativo.

Artículo 160-

El Instituto estará regido por una junta directiva integrada de la siguiente manera:

a) una persona representante de la Junta Directiva del Banco Nacional de Costa Rica.
b) una persona representante de la Del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
c) una persona representante de la Del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
e) Cinco representantes de las cooperativas, nombrados de conformidad con lo que establece el artículo 141 de la presente ley.
d) Una representante del Comité para la Igualdad y la Equidad de Género y los Derechos de las Mujeres del Movimiento Cooperativo.

La Junta Directiva de INFOCOOP estará conformada en forma paritaria de tal forma que la diferencia entre el total de hombres y mujeres será de una persona y durarán en sus cargos por dos años y podrán ser reelectas.

Artículo 162-

Compete a la Junta Directiva trazar la política del instituto con perspectiva de género, velar por la realización de sus fines y de un modo específico lo siguiente:

Nombrar y remover a la Dirección Ejecutiva, la persona subdirectora y la Auditoría.

[…

e) Resolver las solicitudes de crédito con una perspectiva de género que se presenten al instituto, conforme a las normas del reglamento específico que sobre esta materia deberá dictarse.

[…]

Artículo 166-

La administración general del INFOCOOP estará a cargo de una dirección ejecutiva, nombrada por la Junta Directiva por un período de cuatro años, pudiendo ser reelecta de forma consecutiva.

Artículo 167-

El nombramiento de la Dirección Ejecutiva deberá recaer en una persona de reconocida capacidad y probada experiencia en asuntos cooperativos y perspectiva de género.

Artículo 172-

El INFOCOOP tendrá una comisión de crédito que será presidida por la Dirección Ejecutiva y estará integrada por las personas funcionarias que determine el reglamento; a esta comisión le corresponde estudiar y dictaminar las solicitudes de préstamo con una perspectiva de género presentadas por cualquier asociación cooperativa, sobre los empréstitos y las emisiones de bonos del INFOCOOP. Se exceptúan las solicitudes de crédito a ser financiadas con recursos provenientes del Fondo de Cooperativas de Autogestión, las cuales serán conocidas por la comisión a que se refiere el artículo 145 de esta ley.

Artículo 185-

El Instituto Nacional de Fomento Cooperativo deberá girar al Consejo Nacional de Cooperativas el monto correspondiente al 1.5% de su presupuesto de capital y operaciones, y un monto similar al Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa, como apoyo a los programas de educación, capacitación y transferencia de tecnología al movimiento cooperativo.

Además, girará una transferencia de 0.5% al Comité para la Igualdad y la Equidad de Género y los Derechos de las Mujeres del Movimiento Cooperativo, calculado sobre el valor de los activos de la cartera de crédito e inversiones de los recursos propios al cierre del ejercicio económico anterior, fondos que serán destinados para el cumplimiento de los objetivos del Comité.

El Comité para la Igualdad y la Equidad de Género y los Derechos de las Mujeres del Movimiento Cooperativo someterá a consideración del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, su presupuesto anual de operaciones en lo que corresponda al porcentaje establecido en esta norma, para que, una vez aprobado, lo incluya en

sus obligaciones anuales de operación. En concordancia con el presupuesto anual, este Comité le presentará cada cuatro meses a dicho instituto, los informes de ejecución presupuestaria.

ARTÍCULO 2- Adiciónese a la Ley N.º 4179, Ley de Asociaciones Cooperativas y Creación del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, de 22 de agosto de 1968, y sus reformas, el Título IV denominado: Comité para la Igualdad y la Equidad de Género y los Derechos de las Mujeres del Movimiento Cooperativo.

El texto dirá:

TÍTULO IV
Comité para la Igualdad y la Equidad de Género y los Derechos de las Mujeres del Movimiento Cooperativo.

CAPÍTULO I
Naturaleza, objetivos, atribuciones y funciones

Artículo 186- Naturaleza

Créase el Comité para la Igualdad y la Equidad de Género y los Derechos de las Mujeres del Movimiento Cooperativo como un ente público no estatal, con domicilio en San José y competencia en todo el territorio nacional.

Este Comité para la Igualdad y la Equidad de Género y los Derechos de las Mujeres del Movimiento Cooperativo contará con personalidad jurídica instrumental, que utilizará en los actos y contratos que adopte para cumplir las funciones y atribuciones que la ley indica.

Artículo 187- Objetivo

El Comité para la Igualdad y la Equidad de Género y los Derechos de las Mujeres del Movimiento Cooperativo tiene como objetivo promover, impulsar, incidir y fiscalizar la incorporación de la perspectiva de género en el movimiento cooperativo promoviendo el desarrollo económico, político y social de las mujeres cooperativistas en igualdad de trato y condiciones con los hombres cooperativistas.

Artículo 188-

Las personas que integran el Comité para la Igualdad y la Equidad de Género y los Derechos de las Mujeres del Movimiento Cooperativo serán nombradas por una Asamblea General de Mujeres Cooperativistas conformada por una representante propietaria designada por cada una de las cooperativas inscritas en un patrón previamente a la convocatoria, de conformidad con los requisitos y procedimientos establecidos en el reglamento que se emita para los efectos.

El cuórum para conformar la Asamblea será con la mitad más una de la totalidad de las delegadas nombradas, y los acuerdos que se tomen en la Asamblea requerirán la mitad más uno de los delegadas presentes en el momento de la votación.

La Asamblea nombrará de manera individual a las integrantes del Comité para la Igualdad y la Equidad de Género y los Derechos de las Mujeres del Movimiento Cooperativo , ocupando los cargos de presidenta, vicepresidenta, secretaria y dos vocales, garantizando que exista representación de los sectores cooperativos de autogestión, cogestión, agrícola industrial, ahorro y crédito y todos los demás sectores. Las personas nombradas lo serán por un período de dos años y podrán ser reelectas en Asamblea de manera consecutiva.

El Comité para la Igualdad y la Equidad de Género y los Derechos de las Mujeres del Movimiento Cooperativo sesionará una vez al mes en forma ordinaria y extraordinariamente como máximo dos veces al mes.

Las sesiones extraordinarias serán convocadas por la Presidencia o mediante convocatoria de la tercera parte de sus integrantes.

Artículo 189- Atribuciones

El Comité para la Igualdad y la Equidad de Género y los Derechos de las Mujeres del Movimiento Cooperativo tendrá las siguientes atribuciones:

a) Establecer la coordinación interinstitucional cooperativa necesaria que le permita promover y orientar políticas para el fortalecimiento de los programas dirigidos a la plena incorporación y participación activa de las mujeres en el movimiento cooperativo para una igualdad y equidad de género.
b) Impulsar la promulgación de políticas cooperativas que beneficie la condición socioeconómica de la mujer y su plena incorporación al desarrollo de la sociedad en igualdad de condiciones con el hombre.
c) Coordinar actividades cooperativas con organismos nacionales e internacionales y ejecutores de programas para el desarrollo sostenible con perspectiva de género.
d) Promover la participación y representación paritaria de las mujeres dirigentes cooperativistas en la dirección de todos los órganos y entes cooperativos de toma de decisiones.
e) Promover la incorporación de la perspectiva de género en los procesos de planificación y asignación presupuestaria en cada uno de los diferentes entes y órganos cooperativos.
f) Promover, orientar y proponer actividades para lograr la incorporación de la perspectiva de género en el quehacer de las organizaciones cooperativas.
g) Coordinar y colaborar con las organizaciones cooperativas, los programas con perspectiva de género que fortalezcan la igualdad y equidad de género en el movimiento cooperativo.

h) Establecer y mantener mecanismos de comunicación, información y consulta permanente con una perspectiva de género con todos los entes y órganos cooperativos.
i) Promover la creación de oficinas regionales del Comite, garantizando y coordinando su funcionamiento.
j) Brindar asesoramiento y orientación a todos los entes y órganos cooperativos para que desempeñen sus actividades sin discriminación entre mujeres y hombres.
k) Vigilar que las disposiciones administrativas cooperativas no sean discriminatorias y respeten los derechos de las mujeres.
l) Promover y realizar investigaciones con una perspectiva de género, que permitan identificar las brechas e indicadores de género del movimiento cooperativo.
m) Mantener relaciones de intercambio y cooperación con organismos nacionales e internacionales que se ocupen de la promoción de la igualdad y equidad de género.
n) Apoyar los Comité para la Igualdad y la Equidad de Género y los Derechos de las Mujeres del Movimiento Cooperativo s de género que se conformen en las diferentes organizaciones cooperativas.
o) Presentar un informe anual de actividades realizadas al plenario del CONACOOP y enviar al INFOCOOP un informe anual de liquidación de gastos.
p) Cualesquier otro deber o atribución que le pueda corresponder en su condición de representación y defensa de la igualdad de género y los derechos de las mujeres en el Movimiento Cooperativo.

Artículo 190- Funciones

El Comité para la Igualdad y la Equidad de Género y los Derechos de las Mujeres del Movimiento Cooperativo, tendrá las siguientes funciones:

a) Formular, diseñar, impulsar y fiscalizar la política para la igualdad y equidad de género del movimiento cooperativo. Esta política se diseñara tomando en cuenta las brechas e indicadores de género así como la agenda de las mujeres producto del diagnóstico de sobre la condición y posición de las mujeres en el movimiento cooperativo.
b) Resguardar e impulsar el cumplimento de los derechos de las mujeres cooperativistas consagrados tanto en declaraciones, convenciones y tratados internacionales, así como en el ordenamiento jurídico costarricense, promoviendo la igualdad entre mujeres y hombres y propiciando acciones afirmativas tendientes a mejorar la condición y posición de las mujeres cooperativistas.
c) Coordinar, fiscalizar y asesorar para que los diferentes entes y órganos cooperativos aprueben e implementen la política para la igualdad y equidad de género del movimiento cooperativo.
d) Coordinar con el Instituto Nacional de las Mujeres, programas y acciones necesarias para la implementación de la Política de Igualdad y Equidad de Género del Movimiento Cooperativo.
e) Promover, monitorear y verificar el cumplimiento de la paridad en todos los órganos y entes cooperativos.

f) Convocar a la Asamblea General de mujeres cooperativistas una vez cada dos años para el nombramiento de las representantes al Comité para la Igualdad y la Equidad de Género y los Derechos de las Mujeres del Movimiento Cooperativo .
g) Convocar cada cuatro años el Congreso Nacional de las Mujeres Cooperativistas para conocer el diagnóstico de brechas de género del sector cooperativo actualizado y tomar acuerdos para el cierre de las mismas.
h) Elegir una representante con derecho a voz y voto para cada Junta Directivas y Directorios de los diferentes entes y órganos públicos cooperativos, con el fin de que incida y promueva la implementación de la Política de Igualdad y Equidad de género del Movimiento Cooperativo.
i) Nombrar y destituir a la persona que ocupe la Dirección Ejecutiva del Comité con una votación de mayoría calificada.
j) Aprobar el plan anual operativo y el plan presupuesto del Comité para la Igualdad y la Equidad de Género y los Derechos de las Mujeres del Movimiento Cooperativo.
k) Aprobar los reglamentos internos de funcionamiento y organización.
l) Aprobar instrucciones, directrices, circulares y demás clases de actos administrativos necesarios para el cumplimiento de esta ley.
m) Aprobar convenios con CONACOOP, INFOCOOP, CPCA, el órgano auxiliar CENECOOP R.L y otras entidades públicas y privadas para el cumplimiento de sus objetivos.
n) Las demás funciones y deberes legales que le correspondan.

CAPÍTULO II
Financiamiento del Comité para la Igualdad y la Equidad de Género y los Derechos de las Mujeres del Movimiento Cooperativo

Artículo 191-

El Comité para la Igualdad y la Equidad de Género y los Derechos de las Mujeres del Movimiento Cooperativo financiará sus programas con:

a) 10% del presupuesto general de CONACOOP, calculado al cierre del ejercicio económico anterior,
b) 0.5% del presupuesto del INFOCOOP, calculado sobre el valor de los activos de la cartera de crédito e inversiones de los recursos propios al cierre del ejercicio económico anterior,
d) Los recursos económicos que el Estado y las entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, les asignen en Comité para la Igualdad y la Equidad de Género y los Derechos de las Mujeres del Movimiento Cooperativo y,
e) Las donaciones, las herencias o los legados que reciba de personas físicas o jurídicas, nacionales o internacionales,

El Comité para la Igualdad y la Equidad de Género y los Derechos de las Mujeres del Movimiento Cooperativo deberá destinar estos recursos al cumplimiento de sus objetivos, atribuciones y funciones de ley, y no estará sujeto a las disposiciones que

sobre política presupuestaria se establecen en los artículos 21, 23 y 24 de la Ley N.º 8131, de 18 de setiembre de 2001.

CAPÍTULO III
De la Dirección Ejecutiva del Comité para la Igualdad y la Equidad de Género y los Derechos de las Mujeres del Movimiento Cooperativo

Artículo 192-

La Dirección Ejecutiva del Comité para la Igualdad y la Equidad de Género y los Derechos de las Mujeres del Movimiento Cooperativo estará a cargo de una mujer de reconocida capacidad y de experiencia en asuntos cooperativos, administrativos y de género.

No podrá ser integrante del Comité para la Igualdad y la Equidad de Género y los Derechos de las Mujeres del Movimiento Cooperativo ni tener parentesco de consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive, de cualquiera de las personas integrantes del Comité para la Igualdad y la Equidad de Género y los Derechos de las Mujeres del Movimiento Cooperativo, del directorio de CONACOOP, de la Junta directivas del INFOCOOP, de la CPCA y del organismo auxiliar CENECOOP R.L.

A la Directora Ejecutiva del Comité le corresponde:

a) Ejecutar los acuerdos del Comité para la Igualdad y la Equidad de Género y los Derechos de las Mujeres del Movimiento Cooperativo,
b) Proponer al Comité para la Igualdad y la Equidad de Género y los Derechos de las Mujeres del Movimiento Cooperativo los diversos planes o acciones para mejorar su gestión,
c) Proponer los lineamientos ejecutivos y normativos para la adecuada marcha del Comité para la Igualdad y la Equidad de Género y los Derechos de las Mujeres del Movimiento Cooperativo,
d) Coordinar los procesos de planificación, presupuesto, organización, ejecución y control de los procesos administrativos del Comité para la Igualdad y la Equidad de Género y los Derechos de las Mujeres del Movimiento Cooperativo,
e) Participar con voz pero sin voto en las sesiones del Comité para la Igualdad y la Equidad de Género y los Derechos de las Mujeres del Movimiento Cooperativo y,
f) Las demás funciones que le encomiende el Comité para la Igualdad y la Equidad de Género y los Derechos de las Mujeres del Movimiento Cooperativo para el cumplimiento de sus atribuciones y funciones.

Artículo 193-

La Directora Ejecutiva fungirá como la de mayor rango administrativo del Comité para la Igualdad y la Equidad de Género y los Derechos de las Mujeres del Movimiento Cooperativo y de ella dependerá, para efectos laborales, el personal administrativo a su cargo. Tendrá la representación legal conjuntamente con la

presidencia del Comité para la Igualdad y la Equidad de Género y los Derechos de las Mujeres del Movimiento Cooperativo y responderá ante ésta por su gestión.

Artículo194-

La Directora Ejecutiva no podrá nombrar para que formen parte del personal del Comité para la Igualdad y la Equidad de Género y los Derechos de las Mujeres del Movimiento Cooperativo, a quienes sean cónyuges o estén ligados con las personas integrantes del Comité para la Igualdad y la Equidad de Género y los Derechos de las Mujeres del Movimiento Cooperativo por parentesco de consanguinidad hasta el tercer grado inclusive o de afinidad hasta el segundo grado inclusive."

TRANSITORIO I-

La convocatoria a la primera Asamblea General de Mujeres Cooperativistas estará a cargo de la Ministra de la Condición de la Mujer y Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, se hará en el plazo de tres meses contados a partir de la entrada en vigencia esta ley.

La convocatoria se hará a través de diferentes medios de prensa, y se levantará un padrón así como las directrices necesarias para la primera inscripción de las delegadas.

La Asamblea General, una vez constituida, nombrará una comisión especial conformada por 9 delegadas que representen los sectores, y deben formular un reglamento interno, para que el Comité para la Igualdad y la Equidad de Género y los Derechos de las Mujeres del Movimiento Cooperativo cumpla con lo estipulado en esta ley. Este reglamento debe ser aprobado por la Asamblea por mayoría calificada, en una sesión convocatoria extraordinaria, que tendrá lugar en un plazo máximo de 6 meses, posterior a la realización de la primera Asamblea.

TRANSITORIO II-

Se mantendrá la integración actual de las Juntas directiva del INFOCOOP, el Directorio de CONACOOP y el de la CPCA, hasta que se cumpla el plazo por el cual fueron nombrados y nombradas.

Una vez vencido el plazo, se conformarán las nuevas juntas directivas, integrando el cuarto sector de ahorro y crédito, en cumplimiento con la paridad de género en todos los órganos, comités y entes cooperativos de conformidad con lo estipulado en esta ley.

Rige a partir de su publicación.

Nielsen Pérez Pérez Mario Castillo Méndez

Luis Ramón Carranza Cascante

Enrique Sánchez Carballo

José María Villalta Flórez-Estrada

Laura Guido Pérez

Catalina Montero Gómez

Shirley Díaz Mejía

Paola Viviana Vega Rodríguez

Carolina Hidalgo Herrera

María Vita Monge Granados

Víctor Manuel Morales Mora

Ivonne Acuña Cabrera

Diputados y diputadas

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de la Mujer.

1 vez.—(IN2018295688).

PROTECCIÓN Y PENSIÓN ANTICIPADA A LOS TRABAJADORES CESADOS DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA (JAPDEVA), A CONSECUENCIA DE LA ENTRADA EN OPERACIONES DE APM TERMINALS

Expediente N.° 21.053

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El numeral 56 de la Constitución Política establece que el trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad. Desde esta última perspectiva, de la obligación, tanto el trabajador como el empleador deben procurar y fomentar relaciones laborales permanentes, estables, continuas y armónicas; sin embargo, este ideal no siempre se cumple.

Los mercados, la evolución de las relaciones comerciales, las nuevas formas de gestión de la economía, la revisión periódica del papel que desempeñan el sector público es el proceso económico y el reclamo del sector privado que desea mayor protagonismo y participación en la actividad de gestión de servicios, provocan reacomodos en las relaciones de trabajo, con graves consecuencias para los trabajadores, como lo es la pérdida del empleo.

Nadie tiene un empleo asegurado de por vida, prueba de ello es que el constituyente anticipó esta grave situación, instituyendo el seguro de desempleo, un sistema técnico y permanente de protección a los desocupados y las acciones dirigidas a la reintegración de los trabajadores cesados en el trabajo; pero lo que podemos deducir, de esa norma tutelar, es la posibilidad de que la legislación establezca otras formas de apoyo y ayuda dentro del marco de la política permanente de la solidaridad nacional a que obliga el artículo 74 constitucional.

El proyecto de ley que se presenta obedece a este orden de ideas. Frente a la fatalidad permanente de la pérdida de empleo, la sociedad exige comportamientos compensatorios, inspirados en el valor de la solidaridad.

Enfrentamos un hecho trágico en la provincia de Limón, donde un número superior a seiscientos trabajadores perderán su empleo a consecuencia de la entrada en operación de un nuevo muelle de contenedores, operado por una empresa privada que introduce nuevas técnicas y métodos de trabajo, que producen el desplazamiento de trabajadores portuarios.

Somos conocedores de que algunos de ellos podrán reinsertarse en el mercado de trabajo, pero también sabemos que otros muchos, los de mayor edad, encararán situaciones penosas para poder hacerlo. Estos últimos quedarán ubicados en un escenario especialmente difícil, sin trabajo, sin ingresos y sin la protección de la seguridad social, en el tanto que por su edad no reúnen las condiciones para obtener los beneficios del auxilio económico que otorga una pensión.

Frente a la ausencia de un derecho, un empleo, un ingreso y ante la imposibilidad de seguir contribuyendo a los fondos de la seguridad social, se propone una medida solidaria y compensatoria consistente en una prestación económica, anterior a la situación de jubilado, para aquellos trabajadores desempleados que, habiendo cumplido cincuenta y cinco años, a la fecha de la publicación de esta ley, no hayan podido reincorporarse al trabajo.

Destacamos un factor. Nos encontraremos en una coyuntura extrema que coloca a las personas en una situación precaria, sin trabajo, sin ingreso, sin una posibilidad de acceder a un empleo por causa de su edad, sin posibilidades de cotizar para la Caja y de acceder al beneficio de una pensión.

Frente a esto se dispone una solución que ya cuenta con antecedentes legislativos. Se concede una suma de ingreso, por concepto de prejubilación, para aquellos trabajadores desempleados que, habiendo cumplido cincuenta y cinco años y con tiempo acumulado de laborar en el sector público de veinticinco años, al momento de publicarse esta ley, no cuenten con un empleo en el sector público o privado.

Por las razones expuestas, someto a consideración de las compañeras diputadas y los compañeros diputados el siguiente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

PROTECCIÓN Y PENSIÓN ANTICIPADA A LOS TRABAJADORES CESADOS DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA (JAPDEVA), A CONSECUENCIA DE LA ENTRADA EN OPERACIONES DE APM TERMINALS

ARTÍCULO ÚNICO- Los exservidores de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), que fueron cesados en el año 2018 o en el 2019, como resultado de la entrada en operación de APM Terminals y la pérdida del sesenta por ciento (60%) de la carga de contenedores que sufrió dicha institución y que, además, cuenten al menos con cincuenta y cinco años de edad y, como mínimo, veinticinco años de servicio en la Administración Pública, tendrán derecho a una prejubilación con cargo al presupuesto nacional.

El monto de la prestación económica asignable, en cada caso, será el equivalente a un sesenta y tres por ciento (63%) del salario promedio calculado con los doce mejores salarios mensuales de los últimos cinco años que hayan recibido en Japdeva. Los exservidores de Japdeva protegidos por este transitorio quedarán obligados a aportar las contribuciones mensuales correspondientes a los seguros sociales administrados por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), mediante la modalidad de asegurados voluntarios, conforme a las disposiciones reglamentarias que rigen esta modalidad de aseguramiento, hasta que cumplan los requisitos establecidos en la normativa vigente para acogerse a una pensión por vejez otorgada por el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, momento en el cual cesará la obligación del Estado en cuanto al pago de la prejubilación.

Para los fines pertinentes, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la CCSS suscribirán un convenio de aseguramiento colectivo, el cual permitirá regular las condiciones de aseguramiento de los exservidores de Japdeva que gocen del beneficio de prejubilación otorgado por esta ley, siempre en estricto apego a la normativa y la reglamentación vigentes en la CCSS, en materia de aseguramiento voluntario. Los ingresos de referencia para el pago de las contribuciones a la CCSS, estipulados en ese convenio, mantendrán la continuidad de los salarios reportados en su calidad de asegurados asalariados obligatorios. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por medio de la Dirección Nacional de Pensiones, tendrá la función de acopiar las contribuciones a la CCSS y realizar el traslado correspondiente.

A los exfuncionarios de Japdeva cesados en el año 2018 o en el 2019, que al momento de la aprobación de esta ley tengan más de cincuenta años de edad y un mínimo de veinte años de laborar en el sector público, se les reconocerán las cuotas

que hayan cotizado en la CCSS, antes de ingresar a trabajar en Japdeva, para completar la contabilización de los veinticinco años de servicios laborales prestados, que indica la presente ley.

Una vez aprobada la prejubilación a favor del exservidor de Japdeva en caso de que se reinserte en el mercado laboral, sea en el sector público o privado, la prejubilación caducará de forma automática. La persona prejubilada deberá informar a la Dirección Nacional de Pensiones su condición de empleado dentro de los cinco días siguientes a su vinculación laboral; de no hacerlo dentro del plazo establecido, se le impondrá una multa de cinco salarios base, definido en el artículo 2 de la Ley N.º 7337, de 5 de mayo de 1993, sin perjuicio de las sanciones conexas.

En el caso de los exfuncionarios de Japdeva que fueron cesados en los años 2018 o 2019, que a partir de esas fechas se hayan asegurado voluntariamente a la CCSS y hayan pagado cuotas por concepto de seguro voluntario, de seguro como trabajadores independientes o en cooperativas de autogestión podrán computarse las cotizaciones indicadas para los efectos de completar los veinticinco años de servicio requeridos para la aprobación de la prejubilación.

Toda solicitud de pensión se tramitará ante la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

TRANSITORIO ÚNICO- Los trabajadores, a quienes en el momento de la aprobación de esta ley les falten menos de treinta y seis meses para cumplir la edad requerida para prejubilarse con esta ley, podrán cancelar el monto de las cotizaciones faltantes hasta alcanzar las cuotas y la edad requeridas, y podrán acogerse a la prejubilación una vez cumplidos los cincuenta años de edad.

Rige a partir de su publicación.

David Hubert Gourzong Cerdas
Diputado

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Especial de la provincia de Limón, encargada de analizar, investigar, estudiar, dictaminar y valorar las recomendaciones pertinentes en relación con la problemática social, económica, empresarial, agrícola, turística, laboral y cultural de dicha provincia.

1 vez.—(IN2018295691).

PROTECCIÓN A TRABAJADORES DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA (JAPDEVA) Y DE TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS ESTIBA Y DESESTIBA AFECTADOS POR EL DESEMPLEO GENERADO EN LOS MUELLES DE LIMÓN

Expediente N.º 21.054

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El presente proyecto de ley surge como respuesta al drama que representa el desempleo para los funcionarios de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), como resultado de la entrada en operación de APM Terminals, luego de haber contribuido a la seguridad social, en algunos casos hasta con un número de cuotas que supera las requeridas para pensionarse y que, por la rigidez del sistema, no pueden acceder a una jubilación. Por otra parte, la situación se agrava por las condiciones imperantes en el mercado de trabajo que los discrimina por motivo de su edad y, en ausencia de un ingreso, su estado patrimonial se afecta ubicándolos en situación de impagos.

Si las condiciones de exclusión del ámbito laboral son difíciles para cualquiera, lo son aún más para las personas que superan los cincuenta y cinco años de edad y pierden la estabilidad que habían logrado hasta entonces.

Se trata de personas que demandan, desde lo público, la atención a su situación y una serie de respuestas para sobrellevar este período amargo y difícil, y en esa dirección van encaminadas las normas que se crean o modifican en el presente proyecto de ley.

Consultamos a Japdeva sobre la cantidad de trabajadores mayores de cincuenta y cinco años que quedan desempleados por la entrada en operaciones de APM Terminals, tanto de funcionarios directos como indirectos de las empresas de estiba y desestiba. El resultado de esa consulta muestra la cifra de 425 funcionarios que se encuentran en planilla en esa institución y de 203 funcionarios de las empresas de estiba y desestiba, concretamente 49 de Codesa, 52 de Servinave, 28 de Limonense, 32 de Anfo y 42 de Coopeunitrap. Este grupo humano es numeroso y demanda atención inmediata o medidas concretas para paliar los impactos negativos que ofrece el desempleo para las personas mayores de cincuenta y cinco años.

Con el ánimo de ofrecer una respuesta, articulamos una iniciativa de reforma del sistema de pensión complementaria obligatoria. Nos confrontamos con la absurda situación de personas que tienen en riesgo el patrimonio alcanzado, merced a una ardua vida de trabajo, con hipotecas aún pendientes y que cuentan con millones de colones en sus cuentas con los cuales lograrían paliar su situación, pero que no pueden tener acceso a esos recursos. Parece indispensable ofrecerles una salida, que concebimos en principio como transitoria, para que puedan valorar las opciones disponibles de acceso a esos recursos y administrarlos de la manera que resulte más conveniente.

En esa dirección, se propone la reforma del artículo 20 de la Ley N.° 7983, Ley de Protección al Trabajador, de 16 de febrero de 2000, que establece el acceso a esos fondos cuando la persona tenga la edad de cincuenta y cinco años, como mínimo, y se encuentre en situación de desempleo por más de seis meses, a fin de que pueda solicitar a la operadora de pensiones complementarias que le gire un doceavo de la cuantía con la que cuenta, más los rendimientos generados durante ese mes.

De manera alterna, podrá solicitar el giro de la totalidad de los recursos depositados en su cuenta para el pago de una hipoteca pendiente. Comprensiblemente, el monto solicitado podrá ser menor según sea el monto de esta obligación.

Otra excepción contemplada es el pago de un tratamiento médico, los cuidados y medicamentos necesarios para la atención de una enfermedad o accidente grave o terminal.

Respecto a la anticipación de la edad de retiro, regulada por el reglamento aprobado por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, conforme al artículo 26 de la misma ley, se estipula que, ante el mismo supuesto del artículo 20, una persona mayor de cincuenta y cinco años, con más de seis meses de desempleo, pueda solicitar el saldo de la cuenta de su pensión obligatoria complementaria para cubrir las cuotas, a fin de lograr una pensión anticipada. Se le penalizará en un diez por ciento (10%) el monto de la pensión que se le conceda por concepto de anticipación.

Al existir la posibilidad de que el trabajador pueda conseguir un nuevo empleo, y ante esta hipótesis, la ley le permite suspender el beneficio y pueda volver a cotizar hasta que alance la edad de jubilación, elevando su pensión por más cotizaciones y suprimiendo la penalización, con lo cual logrará mejores condiciones en la vejez.

Asimismo, con la adición de un párrafo final al artículo 5 de la Ley N.° 17, Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, de 22 de octubre de 1943, se le concede otra ventaja a esta misma población, ya que les permitirá contar con un seguro de salud, como asegurados indirectos, por cualquier pariente por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado, y siempre se incluye la posibilidad de que la persona sea asegurada por el Estado, cuando no haya familiares o estos no estén en disposición de proteger a sus parientes.

Por lo anterior, presento a consideración de las señoras diputadas y los señores diputados el siguiente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

PROTECCIÓN A TRABAJADORES DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA (JAPDEVA) Y DE TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS ESTIBA Y DESESTIBA AFECTADOS POR EL DESEMPLEO GENERADO EN LOS MUELLES DE LIMÓN

ARTÍCULO 1- Se reforman los artículos 20 y 26 de la Ley N.° 7983, Ley de Protección al Trabajador, de 16 de febrero de 2000. Los textos son los siguientes:

Artículo 20- Condiciones para acceder a los beneficios del Régimen Obligatorio de Pensiones

Los beneficios del Régimen Obligatorio de Pensiones se obtendrán una vez que el beneficiario presente, a la operadora, una certificación de que ha cumplido con los requisitos del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) o del régimen público sustituto al que haya pertenecido. En caso de muerte del afiliado, los beneficiarios serán los establecidos en el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte o el sustituto de este. Cada operadora tendrá un plazo máximo de noventa días naturales para hacer efectivos los beneficios del afiliado. El incumplimiento de esta obligación se considerará como una infracción muy grave, para efectos de imponer sanciones.

Cuando un trabajador no se pensione bajo ningún régimen tendrá derecho a retirar los fondos de su cuenta individual al cumplir la edad establecida vía reglamento, por la Junta Directiva de la CCSS. En este caso, los beneficios se obtendrán bajo las modalidades dispuestas en este capítulo. No obstante, la Junta Directiva de la CCSS podrá establecer un monto por debajo del cual puede optarse por el retiro total.

El trabajador cesante, con edad o superior a cincuenta y cinco años, que no haya podido obtener empleo luego de seis meses de la terminación de su relación laboral, podrá solicitar a la operadora de pensiones complementarias, que administra su cuenta, la entrega de una doceava parte de esta más las utilidades generadas en el último mes, por la totalidad de su capital acumulado.

También podrá pedir el giro de la totalidad de los depósitos acreditados en su cuenta, cuando compruebe alguno de los siguientes casos:

a) Que tiene una obligación hipotecaria sobre su vivienda, con una institución financiera. La operadora girará directamente al acreedor el monto que corresponda.

b) Que requiere para sí o su familia, en casos de accidente o enfermedades graves o terminales, tratamiento médico, cuidados paliativos, geriátricos o medicamentos.

Artículo 26- Anticipación de la edad de retiro

El afiliado podrá anticipar su edad de retiro del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte utilizando los recursos acumulados en su cuenta del Régimen Voluntario de Pensiones Complementarias, de conformidad con esta ley y el reglamento que dicte la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Cuando una persona mayor de cincuenta y cinco años haya permanecido en la condición de desempleado por más de seis meses podrá solicitar el traslado del saldo de la cuenta de su pensión obligatoria complementaria para cubrir las cuotas y lograr una pensión anticipada. Su solicitud y el dinero se remitirán directamente al Régimen de Invalidez, Vejez o Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, en un plazo de treinta días. Se penalizará en un doce coma cinco por ciento (12,5%) el monto de la pensión para la que venía cotizando, por concepto de anticipación.

En caso de obtener un empleo se suspenderá dicho beneficio, volviendo a cotizar para la pensión complementaria y para la pensión de la Caja Costarricense de Seguro Social, hasta alcanzar la edad de jubilación y eliminar la penalización.

ARTÍCULO 2- Se adiciona un párrafo final al artículo 5 de la Ley N.° 17, Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, de 22 de octubre de 1943. El texto es el siguiente:

Artículo 5-

[…]

Un trabajador mayor de cincuenta y cinco años de edad, con al menos ciento cincuenta cuotas pagadas, que tenga seis meses o más de estar desempleado, podrá ser asegurado a cargo de cualquier pariente por consanguinidad o afinidad hasta tercer grado. En caso de no disponer de parientes que se hagan cargo, será cubierto por el Estado, en cuanto subsista su condición de desempleado.

Rige a partir de su publicación.

David Hubert Gourzong Cerdas
Diputado

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Especial de la provincia de Limón, encargada de analizar, investigar, estudiar, dictaminar y valorar las recomendaciones pertinentes en relación con la problemática social, económica, empresarial, agrícola, turística, laboral y cultural de dicha provincia, expediente legislativo N.°20.935.

1 vez.—(IN2018295692).

REFORMA DE LA LEY N.º 4420, LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO DE PERIODISTAS Y PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN COLECTIVA DE COSTA RICA, DE 22 DE SETIEMBRE DE 1969, Y SUS REFORMAS

Expediente N.° 21.055

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El presente proyecto de ley está elaborado con base en el expediente N.° 18.171, presentado por la diputada liberacionista Alicia Fournier Vargas (periodo 2010-2014). Dicha iniciativa contaba con un dictamen afirmativo unánime de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración de 5 de julio de 2016 que recomendó unánimemente su aprobación al Plenario y en el presente periodo constitucional se construyeron los consensos políticos necesarios a su alrededor que permitirían su aprobación en la Comisión con Potestad Legislativa Plena Primera; sin embargo, producto de la resolución emanada de la Presidencia de la Asamblea Legislativa, dictada en la sesión ordinaria N.° 77 de 11 de octubre de 2018, sobre la aplicación del artículo 119 del Reglamento, en relación con las resoluciones 12.205 2015, 11.628 2018 y 13.520 2018 de la Sala Constitucional, se enviaron al archivo un gran número de proyectos de ley que contaban con la moción de extensión del plazo cuatrienal presentada, pero nunca fueron conocidas a tiempo por el Plenario legislativo.

Asimismo, el expediente fue consultado amplia y permanentemente con diversos sectores que alimentaron la redacción del proyecto, cuestión que permitió alcanzar un texto bastante depurado. Las consultas realizadas fueron:

- Procuraduría General de la República (16/11/2011)
- Colegio de Periodistas (27/09/2011)
- Consejo Superior de Educación (02/10/2012)
- Contraloría General de la República (02/10/2012)
- Federación de Colegios Profesionales (02/10/2012)
- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (02/10/2012)
- Universidad de Costa Rica (05/07/2016)
- Procuraduría General de la República (05/07/2016)
- Universidad Internacional de las Américas (05/07/2016)
- Universidad Fidélitas (05/07/2016)
- Universidad Autónoma de Centro América (05/07/2016)

- Colegio de Periodistas (05/07/2016)
- Consejo Superior de Educación (05/07/2016)
- Contraloría General de la República (05/07/2016)
- Federación de Colegios Profesionales (05/07/2016)
- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (05/07/2016)

Así las cosas, dicha iniciativa, que hoy retomamos fue archivada por la incapacidad de la Asamblea Legislativa de conocer a tiempo las mociones de extensión de los plazos cuatrienales y la entrada en vigor de la resolución antes citada y no por su contenido, que traería amplios beneficios a los trabajadores del mundo de la comunicación y, por ende, indirectamente a la sociedad en general.

Las principales intenciones del proyecto -que continúan siendo prácticamente las mismas- quedaron plasmadas en la exposición de motivos del expediente N.° 18.171, que aquí retomamos:

> «El presente proyecto tiene por objeto actualizar la ley que dio origen a la creación del Colegio de Periodistas de Costa Rica, N.º 4420, de 22 de setiembre de 1969 y su reforma posterior Ley N.º 5050, del 8 de agosto de 1972, conforme con la evolución de la institución y las exigencias de los profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva; además de promover el progreso del Colegio de Periodistas de Costa Rica y de las ciencias de la comunicación.
>
> La reforma establece la elección de la Junta Directiva cada dos años y no cada año, asimismo pretende fortalecer al tribunal de honor.
>
> Ante diferentes resoluciones de la Procuraduría General de la República y la Sala Constitucional, el Colegio de Periodistas de Costa Rica cambiaría su nombre por el de Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica, para reflejar mejor su nueva composición.
>
> La resolución C-063-91, de 24 de abril de la Procuraduría indica que: "… el Colegio de Periodistas debe incorporar en su gremio a todos los graduados de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, sin hacer distinción alguna de la proveniencia de esos títulos universitarios en razón de la vigencia del plan de estudios, con el cual aquellos fueron extendidos por las autoridades universitarias."
>
> Asimismo, desde el año 1992 el Colegio ha incorporado bachilleres de otras profesiones con maestrías en comunicación. Hoy en día se incorporan publicistas, relacionistas públicos, productores audiovisuales y periodistas. Esa diversidad de disciplinas obliga a dictar nuevas normas de ética y a recomponer el tribunal de honor y sus competencias.

> Estos son los cambios más importantes, que le permitirán al Colegio de Periodistas y Comunicadores de Costa Rica cumplir con las obligaciones que, como lo señaló la Sala Constitucional en el voto 2004-09759, corresponden a "… la satisfacción de intereses públicos, tales como la fiscalización del ejercicio profesional de sus agremiados y la promoción de las ciencias de la comunicación colectiva". »

Por lo anteriormente expuesto, se propone el siguiente proyecto de ley a esta Asamblea Legislativa, con el objetivo de modificar varios artículos de la actual Ley Orgánica del Colegio de Periodistas de Costa Rica, Ley N.º 4420, de 22 de setiembre de 1969, y sus reformas, esperando sea considerado para su aprobación cuanto antes.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

REFORMA DE LA LEY N.º 4420, LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO DE PERIODISTAS Y PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN COLECTIVA DE COSTA RICA, DE 22 DE SETIEMBRE DE 1969, Y SUS REFORMAS

ARTÍCULO ÚNICO- Se reforman los artículos 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18, 19 y 20 de la Ley N.° 4420, Ley Orgánica del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica, de 22 de setiembre de 1969 y, sus reformas. Los textos son los siguientes:

Artículo 1- Se crea el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica, como un ente público de carácter no estatal, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. Su domicilio será la ciudad de San José, sin perjuicio de que pueda establecer sedes regionales.

Tendrá los siguientes fines:

a) Autorizar y regular el ejercicio de las personas profesionales colegiadas en periodismo, relaciones públicas, publicidad y producción audiovisual.

b) Respaldar y promover las ciencias de la comunicación colectiva.

c) Defender los intereses de sus agremiados, individual y colectivamente.

d) Apoyar, promover y estimular la cultura y toda actividad que tienda a la superación del pueblo de Costa Rica.

e) Gestionar o acordar, cuando sea posible, los auxilios o sistemas de asistencia médico social pertinentes para proteger a sus miembros, cuando estos se vean en situaciones difíciles por razón de enfermedad, vejez o muerte de parientes cercanos, o cuando sus familiares, por alguna de esas eventualidades, se vean abocados a dificultades, entendiéndose por familiares, para efectos de esta ley, a la esposa, los hijos y los padres.

f) Cooperar con todas las instituciones públicas de cultura, siempre que sea posible, cuando estas lo soliciten o la ley lo ordene.

g) Mantener y estimular el espíritu de unión de los periodistas y de los profesionales en ciencias de la comunicación colectiva.

h) Contribuir a perfeccionar el régimen republicano y democrático, defender la soberanía nacional y las instituciones de la nación.

i) Pronunciarse sobre asuntos públicos, cuando así lo estime conveniente.

Artículo 2- El Colegio estará compuesto por quienes ostenten el grado de bachiller o licenciado en ciencias de la comunicación colectiva o periodismo, relaciones públicas, publicidad y producción audiovisual, obtenido en universidades nacionales o instituciones equivalentes en el extranjero. Su incorporación al Colegio se hará de acuerdo con la normativa nacional e internacional que fija la materia. No puede ser miembro del Colegio quien estuviera inhabilitado para el ejercicio de profesiones liberales por sentencia judicial.

Artículo 4- Las funciones propias de las profesiones mencionadas en el inciso a) del artículo 1 solo podrán ser realizadas por miembros inscritos en el Colegio. Quedan excluidos del deber de colegiación los periodistas, los publicistas, los relacionistas públicos y los productores audiovisuales que ejerzan la profesión, en los medios de comunicación colectiva, en labores de búsqueda, recepción o difusión de informaciones. Los bachilleres y licenciados en periodismo, relaciones públicas, publicidad o producción audiovisual podrán incorporarse al Colegio y separarse de forma temporal o definitiva, sin que ello les impida el libre ejercicio de su profesión en labores de búsqueda, recepción o difusión de informaciones en los medios de comunicación colectiva.

Artículo 6- El último jueves de octubre, en los años en que corresponda, se llevarán a cabo las elecciones de los integrantes de la Junta Directiva y el fiscal; el resultado de la elección será conocido en la Asamblea General ordinaria correspondiente.

En la primera semana de noviembre de cada año se celebrará la Asamblea General ordinaria, en la que se conocerán los informes de Presidencia, Tesorería y

Fiscalía y cualquier otro informe de conocimiento de la Asamblea General, correspondiendo a la Asamblea aprobarlos o improbarlos; también, se presentará para discusión y aprobación el proyecto de presupuesto ordinario para el año siguiente; en esa misma Asamblea se llevarán a cabo los nombramientos ordinarios de los órganos cuya integración sea competencia de ese cuerpo colegiado.

Se celebrarán, además, las asambleas extraordinarias que acuerde la Junta Directiva o que lo solicite por lo menos el cinco por ciento (5%) de los colegiados. También, corresponde la convocatoria, cuando el fiscal de Junta solicite la intervención de la Asamblea General por anomalías graves. Para que se verifique una Asamblea, es necesaria la convocatoria, que se publicará en La Gaceta y en uno de los diarios del país, debiendo mediar por lo menos tres días hábiles entre la primera publicación y el día señalado, y expresar en el aviso el objeto de la convocatoria. La Asamblea General está constituida por la totalidad de los miembros del Colegio. Habrá cuórum si concurre la mitad más uno de los colegiados. En caso de que no hubiera cuórum se dará por convocada otra Asamblea treinta minutos después de la hora fijada, para la que se entiende que existirá cuórum con cualquier número de miembros presentes.

Artículo 7- La Junta Directiva estará integrada por una Presidencia, una Vicepresidencia, una Secretaría, una Tesorería y tres Vocalías. Estos nombramientos deberán asegurar la representación paritaria de ambos sexos, para que la integración de este órgano colegiado impar, la diferencia entre el total de hombres y mujeres no sea superior a uno.

Artículo 8- Los miembros de la Junta Directiva serán elegidos mediante papeletas en proceso electoral abierto, que será regulado por el Tribunal de Elecciones Internas. En ese proceso podrán participar todos los miembros activos y resultará elegida la papeleta que obtenga el mayor número de votos válidos emitidos; los votos nulos o en blanco no se sumarán a ningún grupo. Corresponde al Tribunal de Elecciones Internas informar en la Asamblea General ordinaria del resultado de las elecciones y procederá a juramentar a las personas electas, quienes iniciarán funciones el primero de enero del año siguiente.

En caso de empate entre las papeletas más votadas, que impida definir un ganador, se repetirá la elección entre ambas en una votación que se realizará el segundo jueves de noviembre.

Artículo 11- Son atribuciones de la Junta Directiva:

a) Convocar a la Asamblea ordinaria en la fecha que señala esta ley y, a las asambleas extraordinarias, cuando sea necesario, según su juicio. En ningún caso se podrá diferir esta convocatoria a Asamblea General extraordinaria, por más de cinco días.

Se podrá pedir la convocatoria a Asamblea General extraordinaria cuando así lo solicite al menos el cinco por ciento (5%) de los miembros del Colegio, dando las

razones que tengan para ello y citando el tema específico que quieran tratar. La petición se hará por escrito y la Directiva actuará automáticamente, una vez recibida, lo que implicará la convocatoria inmediata a sesión de Junta Directiva, para proceder de conformidad.

La Junta Directiva acordará la convocatoria de Asamblea ordinaria en la fecha que señala esta ley y la publicará indicando el día y la hora en que se realizará.

b) Dirigir las publicaciones que haga el Colegio, delegando su responsabilidad en uno o más miembros asociados y asumiendo ella la responsabilidad intelectual y económica.

c) Examinar las cuentas de Tesorería, formular los proyectos de presupuesto y rendir informes de labores a la Asamblea General, en su sesión ordinaria.

d) Conocer las renuncias de sus miembros directores o de los colegiados y hacerlo del conocimiento de la Asamblea.

e) Dictar las normas reglamentarias necesarias para la buena marcha del Colegio.

f) Las demás que la ley y los reglamentos le señalen.

Artículo 12- Son atribuciones de la Asamblea General:

a) Conocer el informe de las elecciones de los miembros de la Junta Directiva del Colegio, de conformidad con lo establecido en la presente ley.

b) Aprobar o improbar el informe anual de actividades rendido por la Junta Directiva.

c) Resolver, en definitiva, los asuntos que la ley, la Junta Directiva o los miembros del Colegio, con arreglo a estas normas, le sometan.

d) Conocer y resolver los casos de reposición de directores, por renuncia de ellos, en caso de expulsión decretada por los tribunales de honor o por cualquier otra circunstancia.

e) Conocer de las apelaciones planteadas por los miembros del Colegio, respecto de las decisiones de la Junta Directiva o de los fallos de los tribunales de honor.

f) Aprobar el proyecto de reglamento de la presente ley y sus modificaciones o reformas, antes de que sean sometidos al Poder Ejecutivo para su promulgación.

g) Aprobar los proyectos del Código de Ética que regulará cada una de las profesiones señaladas en el artículo 2 de la ley y las reformas y modificaciones que le presente la Junta Directiva.
h) Elegir la Fiscalía y su suplencia de forma independiente al resto de la Junta Directiva, que tendrá voz pero no voto en las sesiones de la Junta Directiva. La Fiscalía será nombrada por dos años, en los años en que no corresponda elegir Junta Directiva, y podrá ser reelegida una sola vez.

i) Nombrar el Tribunal Electoral, el cual estará integrado por cinco personas colegiadas, las cuales durarán en sus cargos dos años y podrán ser reelegidos únicamente por un período adicional. En el mismo acto se nombrarán dos suplentes, quienes serán llamados a ocupar las ausencias temporales de los propietarios.

j) Cualquiera otra conferida en esta ley o en su reglamento.

Los acuerdos de Asamblea General se tomarán por mayoría absoluta y se podrán ejecutar salvo que se presente recurso de revisión, debidamente fundamentado, dentro de los siguientes tres días hábiles a la fecha de celebración de la Asamblea.

Artículo 13- La Presidencia de la Junta Directiva es la representante judicial y extrajudicial del Colegio, con las facultades de apoderado general que indica el artículo 1255 del Código Civil; no obstante, para enajenar o gravar bienes muebles requiere de acuerdo firme de la Junta Directiva y, para gravar, vender, hipotecar o de cualquier forma enajenar bienes inmuebles del Colegio, se requiere la aprobación previa y expresa de la Asamblea General.

Además, la Presidencia tendrá las siguientes atribuciones:

a) Presidir las sesiones de Junta Directiva y de la Asamblea General.
b) Proponer el orden en que deben tratarse los asuntos y dirigir los debates.
c) Atender la correspondencia con las autoridades de la República y con los organismos públicos y privados.
d) Con su doble voto, decidir en caso de empate en la Junta Directiva.
e) Conceder licencia con justa causa y hasta por un mes a los miembros de la Junta Directiva.
f) Nombrar comisiones que contribuyan a ejecutar diversas tareas.
g) Autorizar, conjuntamente con la Tesorería, los gastos que no pasen del cero coma uno por ciento (0,1%) del presupuesto ordinario aprobado por Asamblea, e informar de ello a la Junta en sesión de Junta Directiva posterior.
h) Firmar, conjuntamente con la Secretaría, las actas de las sesiones; con la Tesorería los cheques que cubran las erogaciones y, con la Fiscalía, los cortes de caja trimestrales, dejando constancia de los gastos en los libros de la Tesorería.
i) Convocar a sesiones extraordinarias a la Junta Directiva y presidir todos los actos de la Corporación. Las ausencias de la Presidencia serán suplidas por la Vicepresidencia, y en ausencia de esta, por las vocalías, en el orden de su nombramiento.

Artículo 18- El Colegio tendrá cuatro tribunales de honor que conocerán de las denuncias presentadas contra los integrantes de cada una de las profesiones reguladas en el inciso a) del artículo 1. Cada tribunal de honor estará integrado por tres miembros propietarios, quienes serán nombrados por la Junta Directiva y durarán en sus cargos dos años, pudiendo ser reelegidos por un nuevo período. En el mismo acto, se elegirán al menos dos miembros suplentes. Cada tribunal tendrá una presidencia, una secretaría y una vocalía, puestos que serán designados, por cada tribunal, en la primera sesión de trabajo que realicen.

Artículo 19- La designación de los miembros de los tribunales de honor, tanto suplentes como propietarios, se hará tomando en cuenta los valores morales, los atestados profesionales e intelectuales de las personas. Estos nombramientos deberán asegurar la representación paritaria de ambos sexos, para que en la integración de estos órganos colegiados impar, la diferencia entre el total de hombres y mujeres no sea superior a uno.

Artículo 20- El Tribunal de Honor conocerá de las denuncias que se presenten contra los miembros del Colegio, por infracciones al Código de Ética, para las profesiones mencionadas en el artículo 2 de esta ley.

Atendiendo a la naturaleza de la falta, el Tribunal de Honor recomendará las siguientes sanciones:

a) Amonestación escrita de carácter privado.
b) Amonestación escrita de carácter público, en cuyo caso deberá recomendar el medio por el cual se dará a conocer esta.
c) Suspensión en el ejercicio de su profesión de una semana hasta por tres meses, o de uno a dos años.

El Tribunal también podrá conocer de denuncias, por los mismos motivos mencionados en el artículo anterior, contra periodistas que no sean miembros del Colegio; en estos casos, deberá notificarle al profesional de la existencia del proceso, quien podrá apersonarse o no al expediente; en caso de no hacerlo, el Tribunal continuará con la investigación; en estos casos, únicamente podrá recomendar las sanciones previstas en los incisos a) y b) de este artículo. El denunciado conservará el derecho de apersonarse al proceso en cualquier momento, tomándolo en el estado en que se encuentre.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

TRANSITORIO I- Las elecciones para todos los puestos de la Junta Directiva y el fiscal, para el primer período de dos años, se desarrollarán en la elección inmediata posterior a la aprobación del Reglamento de Elecciones.

TRANSITORIO I I- Al entrar en vigencia la presente ley se convocará a una Asamblea General extraordinaria, a fin de elegir el Tribunal Electoral del

Colegio, órgano que contará con un plazo de tres meses, a partir su elección, para presentar a la Asamblea General las modificaciones que amerite el Reglamento de Elecciones Internas y cualquier otra normativa interna que regule la materia de elecciones internas. La propuesta con las enmiendas del caso deberá ser aprobada por la Asamblea General, en un plazo no mayor a un mes a partir de su presentación.

TRANSITORIO III- La Junta Directiva contará con un plazo de seis meses, a partir de la publicación de esta ley, para remitir al Poder Ejecutivo el proyecto de reglamento de la presente ley.

Rige a partir de su publicación.

Luis Fernando Chacón Monge
DIPUTADO

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración.

1 vez.—(IN2018295694).

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

RESOLUCIÓN RE-0213-JD-2018

ESCAZÚ, A LAS ONCE HORAS Y TREINTA MINUTOS DEL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO

METODOLOGÍA TARIFARIA PARA LA PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO (MTPRH).

EXPEDIENTE OT-193-2018

RESULTANDO:

I. Que los servicios de agua potable son vitales para el bienestar general de la sociedad y estratégicos para el desarrollo nacional, por lo que resulta necesario, establecer un instrumento tarifario que permita a los operadores del servicio de acueducto generar ingresos para realizar proyectos orientados a la protección del recurso hídrico, como una extensión natural del servicio de acueducto.

II. Que el artículo 5 de la Ley Nº 7593, establece que en los servicios públicos definidos en ese artículo, la Autoridad Reguladora fijará precios y tarifas. Entre esos servicios están los de acueducto y alcantarillado e hidrantes.

III. Que el artículo 6 inciso d) de la Ley Nº 7593 establece como obligación de la Autoridad Reguladora *"fijar las tarifas y los precios de conformidad con los estudios técnicos*".

IV. Que el artículo 29 de la Ley Nº 7593, dispone que la Autoridad Reguladora formulará y promulgará las definiciones, los requisitos y las condiciones a las que se someterán los trámites de tarifas y precios de los servicios públicos.

V. Que el artículo 31 de la ley Nº 7593, establece que para fijar tarifas se deben tomar en cuenta las estructuras modelo para cada servicio público o la situación particular de cada empresa. Dicha norma dispone que los criterios de equidad social, sostenibilidad ambiental, conservación de energía y eficiencia económica definidos en el Plan nacional de desarrollo, deberán ser elementos centrales para fijar las tarifas y los precios de los servicios públicos. No se permitirán fijaciones que atenten contra el

equilibrio financiero de las entidades prestadoras del servicio público. Asimismo, dispone el artículo 31 de la Ley N° 7593, que al fijar las tarifas de los servicios públicos, se deberán contemplar la protección de los recursos hídricos, costos y servicios ambientales.

VI. Que el artículo 33 de la Ley Nº 7593, establece que en el procedimiento tarifario, cada petición sobre tarifas y precios, deberán estar debidamente justificadas, y el artículo 34 ibídem, dispone que regirán las tarifas y precios, que fije la ARESEP, a partir del momento de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta o a partir del momento en que lo indique la resolución correspondiente.

VII. Que el artículo 15 del Decreto Nº 29732-MP, Reglamento a la Ley Reguladora de los Servicios Públicos, dispone que para fijar las tarifas, se utilizarán los modelos, los cuales deben ser aprobados por la ARESEP, de acuerdo con la ley.

VIII. Que el artículo 6 inciso 16) del Reglamento Interno de Organización y Funciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y su Órgano Desconcentrado (RIOF), establece que la Junta Directiva de la ARESEP, tiene la competencia para aprobar las metodologías regulatorias.

IX. Que el artículo 21 inciso 3 del RIOF, dispone que le compete a la Dirección General Centro de Desarrollo de la Regulación, la "*(…) revisión de la validez y competitividad de los modelos que están siendo aplicados por Aresep para regular los servicios públicos*".

X. Que en la actualidad existe una tarifa hídrica para la Empresa de Servicios Públicos de Heredia. El 1 de marzo de 2004, se publicó en La Gaceta Nº 42, la resolución del Regulador General RRG-3326-2004, mediante la cual, se dispuso entre otras cosas, el pliego tarifario vigente de la tarifa hídrica para la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, S.A.

XI. Que el 12 de abril del 2013, mediante la resolución RIA-002-2013 del 22 de marzo de 2013, publicada en la Gaceta N° 70, Alcance Nº 65; la Intendencia de Agua, entre otras cosas, fijó un ajuste en la Tarifa Hídrica para la Empresa de Servicios Públicos de Heredia. Tarifa Hídrica vigente a partir del 13 de abril del 2013.

XII. Que la ARESEP, se encuentra en la actualidad en un proceso de formalización y diseño de metodologías en todos los sectores regulados.

XIII. Que el 14 de mayo de 2002, se publicó en la Gaceta Nº 91, Alcance 38, el "Reglamento Sectorial para la Regulación de los Servicios de Acueducto y Alcantarillado Sanitario", Decreto Ejecutivo Nº 30413-MP-MINAE-S-MEIC, mediante el cual, se establecen las definiciones y condiciones generales en las que se aplicará la norma técnica y la

metodología tarifaria que regularán las actividades de los prestadores de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado sanitario y las relaciones entre éstos y la Autoridad Reguladora; conforme con lo establecido en la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos Nº 7593 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo Nº 29732-MP.

XIV. Que el 12 de junio de 2002, se publicó en la Gaceta Nº 112, el Reglamento que "Determina los principios que regirán la política nacional en materia de gestión de los recursos hídricos, y deberán ser incorporados, en los planes de trabajo de las instituciones públicas relevantes", Decreto Ejecutivo Nº 30480-MINAE, mediante el cual, se dispuso, los principios regirán la política nacional en materia de gestión de los recursos hídricos, y deberán ser incorporados, según corresponda, en los planes de trabajo de las instituciones públicas relevantes, entre los cuales, señaló que el acceso al agua potable constituye un derecho humano inalienable y debe garantizarse constitucionalmente; que la gestión del agua y sobre todo las reglas de acceso a este recurso deben regirse por un principio de equidad y solidaridad social e intergeneracional; que el aprovechamiento del agua debe realizarse utilizando la mejor infraestructura y tecnología posibles de modo que se evite su desperdicio y contaminación, que el recurso hídrico y las fuerzas que se derivan de éste son bienes estratégicos del país.

XV. Que el 12 de setiembre de 2013, el Regulador General, mediante el oficio 707-RG-2013, designó a la *"Comisión Autónoma Ad Hoc que tendrá a su cargo la revisión y, de ser necesario, replanteamiento y/o modificación de la Metodología de fijación de precios de los servicios de acueductos (establecidas en sus etapas de producción, conducción y distribución), alcantarillado (establecidas en sus en sus etapas de producción, conducción y distribución) gestión ambiental (tarifa hídrica para la protección de acuíferos y fuentes en general), servicio de hidrantes y servicio de agua para actividades productivas (para riego en agricultura y para piscicultura)."*

XVI. Que el 26 de febrero de 2015, la referida Comisión Ad Hoc, mediante el oficio 007-CMTA-2015, remitió a la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora, la propuesta de "Modelo tarifario de los servicios de acueductos, alcantarillados e hidrantes y del programa de protección de recursos hídricos", (expediente OT-80-2015).

XVII. Que el 16 de marzo de 2015, la Junta Directiva mediante el acuerdo 01-11-2015 del acta de la sesión extraordinaria 11-2015, dispuso someter al proceso de audiencia pública, la propuesta de "Modelo tarifario de los servicios de acueductos, alcantarillado e hidrantes y del programa de Protección de Recursos Hídricos"; misma que se celebró el 4 de mayo de 2015. (expediente OT-80-2015).

XVIII. Que el 11 de septiembre de 2015, la indicada Comisión Ad Hoc, mediante el oficio 11-CMTA-2015, remitió a la Junta Directiva, el "Modelo tarifario de los servicios de

acueductos, alcantarillado e hidrantes y del programa de Protección de Recursos Hídricos". (folio 2).

XIX. Que el 21 de septiembre de 2015, la Junta Directiva, mediante el acuerdo 05-46-2015 del acta de la sesión extraordinaria 46-2015, resolvió el cierre del expediente OT-80-2015 y de seguido, mediante el acuerdo 06-46-2015 se resolvió someter al trámite de audiencia pública el "Modelo tarifario de los servicios de acueductos, alcantarillado e hidrantes y del programa de Protección de Recursos Hídricos". Fundamentado en lo indicado por la Comisión Ad Hoc en los oficios 011-CMTA-2015 y 009-CMTA-2015. (folio 1 del expediente OT-193-2015).

XX. Que el 7 de octubre de 2015, se publicó en el diario oficial La Gaceta N° 195, la convocatoria a audiencia pública y, en los periódicos La Teja y Diario Extra, el 8 de octubre de 2015. (folios 165 al 166 y 280).

XXI. Que el 5 de noviembre de 2015, se celebró la audiencia pública según consta en el Acta N ° 98-2015, (folios 348 al 358).

XXII. Que el 29 de enero de 2016, la Comisión Ad Hoc, mediante el oficio 013-CMTA-2016, remite a Junta Directiva el Informe de respuesta a oposiciones de la audiencia pública celebrada el 5 de noviembre y la propuesta de modelo ajustada según el análisis de las posiciones del modelo sometido a audiencia pública.

XXIII. Que el 12 de mayo de 2016, la Junta Directiva, mediante el acuerdo 03-27-2016, dispuso modificar el acuerdo 05-26-2016 y acoger el recurso de revisión interpuesto por la señora Adriana Garrido, estableciéndose continuar con el análisis de la propuesta hasta tanto el CDR realice una revisión integral de la propuesta, y verifique la incorporación de las observaciones planteadas por la directora, y se someta a la Junta Directiva la versión ajustada, en una próxima oportunidad y mediante oficio 425-SJD-2016 del 2 de junio de 2016, se le comunica al CDR el acuerdo 05-26-2016.

XXIV. Que el 24 de noviembre de 2017, el CDR mediante el oficio 349-CDR-2017, en cumplimiento del acuerdo 05-26-2016 remitió a la Junta Directiva una propuesta de "Metodología tarifaria para los servicios de acueducto, alcantarillado e hidrantes."

XXV. Que el 24 de noviembre de 2017, el CDR mediante el oficio 350-CDR-2017, en cumplimiento del acuerdo 05-26-2016 remitió a la Junta Directiva una propuesta de "*Metodología tarifaria para la protección del recurso hídrico.*"

XXVI. Que el 7 de diciembre de 2017, el Regulador General, mediante el oficio 989-RG-2017, remitió a la Junta Directiva, la propuesta de "*Metodología tarifaria para la protección del recurso hídrico.*"

XXVII. Que el 12 de diciembre de 2017, en la Sesión Ordinaria N° 67-2017, mediante el acuerdo 09-67-2017, la Junta Directiva resolvió por unanimidad: "*Dar por recibida la exposición del Centro de Desarrollo de la Regulación en torno a la propuesta de la Metodología Tarifaria para la Protección del Recurso Hídrico, remitida mediante oficios 989-RG-2017 del 7 de diciembre de 2017 y 350-CDR-2017 del 24 de noviembre de 2017, de manera que se tomen en consideración las observaciones planteadas en esta oportunidad por los miembros de la Junta Directiva, y se incorporen en una nueva propuesta, para los fines pertinentes.*"

XXVIII. Que el 08 de febrero de 2018, el CDR mediante el oficio 44-CDR-2018, remitió a la Junta Directiva, una nueva propuesta de "Metodología tarifaria para la protección del recurso hídrico" en atención del indicado acuerdo 09-67-2017 de la Junta Directiva.

XXIX. Que el 9 de febrero de 2018, el Regulador General, mediante el oficio 116-RG-2018, remitió a la Junta Directiva, la propuesta de instrumento Regulatorio "Metodología tarifaria para la protección del recurso hídrico", la cual contiene las observaciones planteadas en la sesión ordinaria 67-2017 del 12 de diciembre de 2017, acuerdo 09-67-2017.

XXX. Que el 13 de febrero de 2018, en la Sesión Ordinaria N°08-2018, mediante acuerdo 07-08-2018, la Junta Directiva resolvió: *"Continuar, en una próxima sesión, con el análisis de la propuesta del instrumento Regulatorio "Metodología tarifaria para la protección del recurso hídrico", remitida mediante oficio RG-116-2018, de manera que se incluyan las observaciones planteadas en esta oportunidad".*

XXXI. Que el 21 de febrero de 2018, el CDR organizó un Taller de análisis para exponer los alcances de la propuesta de "Metodología tarifaria para la protección del recurso hídrico" con el fin de generar un espacio de análisis y socialización de la propuesta de metodología. Se contó con la participación de sesenta representantes de diecisiete distintas organizaciones, a saber: veinte representantes de las Asociaciones Administradoras del Sistema de Acueducto y Alcantarillado (ASADA) y Federaciones de ASADAS, un representante de la Fundación AVINA; cinco representantes del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA); dos representantes del Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (Cedarena); un representante del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA); un representante del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE); un representante de Consumidores de Costa Rica (Concori); cuatro representantes de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A. (ESPH); un representante del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo); un representante de la Fundación Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible; tres representantes de la Universidad de Costa Rica (UCR); un representante de la Cooperación Técnica Alemana (GIZ); tres representantes del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM); un representante del Instituto Meteorológico Nacional de

Costa Rica (IMN); un representante de la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC) y catorce funcionarios de la Aresep.

En el Taller indicado se sugirió: i) que los costos y gastos administrativos debe ser más explícitos, ii) se consideró positivo que se incorpore la liquidación de los recursos sin ejecución, iii) se consideró importante los mecanismos de control, selección y priorización de proyectos. En la priorización no se recomendó que sean exhaustivos los criterios, esto basado en la experiencia de la tarifa hídrica de la ESPH, iv) no se consideró que debe establecerse un monto máximo en la tarifa, ya que debe estar en función de las necesidades. A nivel de aplicación, los participantes manifestaron que: i) las guías se consideran buenas y suficientes, no se considera necesario otros documentos. ii) que se requiere de una mayor socialización de las guías a nivel de Asadas, iii) En cuanto a la línea base, se considera que debe detallarse mejor a quien le corresponde establecerla. Por último, a nivel de gestión de los operadores i) la ESPH no considera dificultades en el levantamiento de la información requerida en la propuesta, ii) en el caso de AyA manifiestan imposibilidad en el sistema contable de hacer cambios de estructura de costos a medio periodo. Por lo que un transitorio de un año se ajustaría mejor a su situación actual.

XXXII. Que el 1º de junio de 2018, el CDR mediante el oficio 211-CDR-2018, remitió a la Junta Directiva, la propuesta de "*Metodología tarifaria para la protección del recurso hídrico*", que toma en cuenta lo indicado en la sesión ordinaria 08-2018 del 13 de febrero de 2018, acuerdo 07-08-2018.

XXXIII. Que el 5 de junio de 2018, en la Sesión Ordinaria N°37-2018, mediante acuerdo 04-37-2018, la Junta Directiva resolvió: "*1 Someter al procedimiento de audiencia pública la "Propuesta de Instrumento Regulatorio: Metodología tarifaria para la protección del recurso hídrico", con fundamento en las modificaciones presentadas por la Dirección General Centro de Desarrollo de la Regulación al oficio 211-CDR-2018 del 1º de junio del 2018, indicadas en el Considerando II, con el fin de mejor fundamentar la propuesta que recomienda someter al proceso de audiencia pública, cuya propuesta se transcribe a continuación: (…Propuesta…). 2 Instruir al Departamento de Gestión Documental, incorporar la presente resolución al expediente OT-193-2015 para el trámite respectivo. 3 Instruir a la Dirección General de Atención al Usuario, que proceda a publicar la convocatoria a audiencia pública en periódicos de amplia circulación y en el diario oficial La Gaceta. 4 Instruir a la Dirección General Centro de Desarrollo de la Regulación, para que una vez realizado el procedimiento de audiencia pública, proceda al trámite del respectivo expediente, incluyendo el análisis de posiciones y la elaboración de la propuesta final de la metodología, y proceda a remitirlo a la Junta Directiva."*

XXXIV. Que el 23 de julio de 2018, el CDR, realizó una sesión explicativa de la propuesta de "*Metodología tarifaria para la protección del recurso hídrico*", previo a la audiencia pública, abierta al público, con el fin de aclarar cualquier duda de la propuesta.

XXXV. Que el 14 de agosto del 2018, la DGAU realiza la audiencia pública, de forma presencial en el Auditorio de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ubicado en Guachipelín de Escazú, San José, Oficentro Multipark, edificio Turrubares, y por medio de sistema de videoconferencia en los Tribunales de Justicia de los centros de: Limón, Heredia, Ciudad Quesada, Liberia, Puntarenas, Pérez Zeledón y Cartago, en la que el CDR expone la Propuesta de instrumento regulatorio: "*Metodología tarifaria para la protección del recurso hídrico*".

XXXVI. Que el 24 de agosto del 2018, la DGAU emite el informe de posiciones de la audiencia pública, mediante oficio IN-0015-DGAU-2018 y de acuerdo a la Ley 7593, artículo 36, y en el Decreto 29732-MP, artículos 50 a 56, se recibieron las posiciones respectivas.

XXXVII. Que el 29 de octubre de 2018, el CDR mediante el oficio OF-535-CDR-2018, remitió a la Junta Directiva, el informe del análisis de posiciones de la Propuesta de instrumento regulatorio "*Metodología tarifaria para la protección del recurso hídrico*" y el informe final de la "*Metodología tarifaria para la protección del recurso hídrico*" donde recomienda a la Junta Directiva la respectiva aprobación.

CONSIDERANDO:

I. Que es necesario dictar una metodología tarifaria para la protección del recurso hídrico.

II. Que en la sesión ordinaria Nº 37-2018 del 5 de junio del 2018, la Dirección General Centro de Desarrollo de la Regulación presentó una serie de modificaciones al oficio 211-CDR-2018 del 1º de junio del 2018, con el fin de mejor fundamentar la propuesta que recomienda someter al proceso de audiencia pública.

III. Que la Junta Directiva en la sesión ordinaria 37-2018, tomó el acuerdo 04-37-2018 de someter al procedimiento de audiencia pública la propuesta de "*Metodología tarifaria para la protección del recurso hídrico.*"

IV. Que con fundamento en los resultandos y considerandos que preceden, lo procedente es, someter al procedimiento de audiencia pública previsto en el artículo 36 de la Ley 7593; la *"Propuesta de Instrumento Regulatorio: Metodología tarifaria para la protección del recurso hídrico",* tal y como se dispone.

V. Que en cuanto a las oposiciones y coadyuvancias presentadas en la respectiva audiencia pública, se tiene como respuesta el oficio OF-535-CDR-2018 del 29 de octubre del 2018.

VI. Que del oficio OF-535-CDR-2018 del 29 de octubre del 2018, conviene extraer lo siguiente en cuanto a la justificación técnica y legal de la metodología tarifaria propuesta:

"*(…)*

JUSTIFICACIÓN

Los servicios de agua potable son vitales para el bienestar general de la sociedad y estratégicos para el desarrollo nacional. El acceso al servicio de agua constituye un derecho tutelado por diferentes cuerpos normativos y es una prioridad nacional. Por lo tanto la protección de las fuentes de aprovisionamiento del recurso hídrico se concibe como una extensión natural del servicio de acueducto que garantiza su sostenibilidad.

En esta sección se resumen elementos que permiten dimensionar la importancia de la protección del recurso hídrico.

1.1 Problemas de sostenibilidad del servicio de agua potable.

Desde hace algunos años se viene observando una alta vulnerabilidad de los acuíferos que son utilizados para el abastecimiento del servicio de acueducto, originados principalmente por los residuos que genera la intensificación de las actividades agrícolas, pecuarias y turísticas, el aumento poblacional, el crecimiento urbanístico e industrial, lo cual presiona la demanda e impacta la oferta del recurso hídrico, a partir de intensos procesos de contaminación y el rezago en la construcción de infraestructura de almacenamiento, conducción y distribución del agua[1].

Principalmente en la estación seca y en ciertas zonas del país la población se ve afectada por disminución de la disponibilidad del recurso y ante la escasez del recurso aunada a la falta de infraestructura, se ha tenido que recurrir al racionamiento. Es necesario cambiar esta tendencia para lo cual se requiere desarrollar actividades concretas de protección de las fuentes y reducir su vulnerabilidad.

Esta situación se ha agravado en los años más recientes, por el impacto del cambio climático en el régimen de lluvia que ocasiona periodos más prolongados de sequía y periodos de lluvia más intensa que más bien originan inundaciones que afectan los acuíferos y la infraestructura del servicio de acueducto. De ahí que las actividades de

[1] Agenda del Agua de Costa Rica (2013), Pág. 20

protección del recurso hídrico son consideradas además como medidas de adaptación frente a los efectos del cambio climático, pues no solo protegen las fuentes sino también las infraestructuras.

1.2 Criterios generales para fijar tarifas.

El artículo 31 de la Ley 7593 establece que "Los criterios de equidad social, sostenibilidad ambiental, conservación de energía y eficiencia económica… deberán ser elementos centrales para fijar las tarifas..." En este sentido, en ese artículo 31 se destaca expresamente la necesidad de atender con urgencia temas como la protección del recurso hídrico y el desarrollo de infraestructura prioritaria.

1.3 Desafíos establecidos en el Plan Estratégico Institucional de ARESEP.

En el Plan Estratégico Institucional de ARESEP (PEI) para el periodo 2017/ 2022 se establece el compromiso de incorporar en la política regulatoria, instrumentos que incorporen criterios de sostenibilidad ambiental, que como es este caso contribuyan a las sostenibilidad y continuidad del servicio de agua potable.

Esta propuesta responde a lo establecido en el PEI, pues se trata de un instrumento tarifario que busca la sostenibilidad ambiental del servicio de agua potable y contempla los mecanismos de fiscalización de la utilización de los recursos tarifarios que permitan constatar el buen uso de los recursos y valorar el impacto alcanzado en la solución de las necesidades del usuario.

I. MARCO LEGAL

Esta sección resume el marco legal en que se fundamenta esta metodología.

a. *Potestades regulatorias generales de la ARESEP.*

El artículo 4 de la Ley 7593, señala, entre otros, los siguientes objetivos de la ARESEP: "a) Armonizar los intereses de los consumidores, usuarios y prestadores de los servicios públicos definidos en esta ley y los que se definan en el futuro. b) Procurar el equilibrio entre las necesidades de los usuarios y los intereses de los prestadores de los servicios públicos. c) Asegurar que los servicios públicos se brinden de conformidad con lo establecido en el inciso b) del artículo 3 de esta ley [Principio de servicio al costo]. d) formular y velar porque se cumplan los requisitos de calidad, cantidad, oportunidad, continuidad y confiabilidad necesarios para prestar en forma óptima, los servicios públicos sujetos a su autoridad e) Coadyuvar con los entes del Estado, competentes en la protección del ambiente, cuando se trate de la prestación de los servicios regulados o del otorgamiento de concesiones. f) Ejercer, conforme lo dispuesto en esta ley, la regulación de los servicios públicos definidos en ella."

b. *Fijación de precios y tarifas.*

El artículo 5, inciso c), de la Ley 7593 establece que la Aresep fijará precios y tarifas; además velará por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima, de los servicios públicos de "Suministro del servicio de acueducto y alcantarillado, incluso el agua potable, la recolección, el tratamiento y la evacuación de las aguas negras, las aguas residuales y pluviales, así como la instalación, la operación y el mantenimiento del servicio de hidrantes". Sobre esta misma línea, el artículo 6 inciso d) de la Ley 7593, establece como obligación de la Autoridad Reguladora "(…) fijar las tarifas y los precios de conformidad con los estudios técnicos".

Asimismo, el artículo 29 de la Ley 7593, dispone con respecto a los trámites de tarifas y precios de los servicios públicos, que "(…) la Autoridad Reguladora formulará y promulgará las definiciones, los requisitos y las condiciones a las que se someterán los trámites de tarifas y precios de los servicios públicos. (…)".

El artículo 31 de esta Ley establece los parámetros que debe seguir ARESEP para fijar las tarifas de los servicios públicos.

c. *Servicio al costo y equilibrio financiero del operador.*

El artículo 3, inciso b), de la Ley 7593 establece que el servicio al costo es el "Principio que determina la forma de fijar las tarifas y los precios de los servicios públicos, de manera que se contemplen únicamente los costos necesarios para prestar el servicio, que permitan una retribución competitiva y garanticen el adecuado desarrollo de la actividad…", en relación con lo dispuesto en los numerales 6 incisos a) y f) y 20. Por su parte, el artículo 31 de la ley 7593, en su párrafo segundo, inciso a), señala que la ARESEP deberá garantizar el equilibrio financiero del operador. De manera concordante, el artículo 4, inciso a) punto 2 del Reglamento a la Ley Reguladora de los Servicios Públicos, Decreto Ejecutivo No. 29732-MP, dispone como funciones y obligaciones de la ARESEP "2. Fijar los precios, tarifas y tasas de los servicios públicos regulados por la ley, con observancia del principio de servicio al costo, según lo establecido en el artículo 31 de la ley y con sujeción a los criterios de equidad social, sostenibilidad ambiental, conservación de energía y eficiencia económica, definidos en el Plan Nacional de Desarrollo, así como en procura del equilibrio financiero de la empresa o entidad prestataria del servicio."

d. *Promoción de la eficiencia.*

De acuerdo con los artículos 5 y 25 de la Ley 7593, la Aresep debe velar porque sean cumplidos los requisitos de calidad, cantidad, oportunidad y confiabilidad necesarios para prestar en forma óptima los servicios públicos.

Del artículo 31 de la citada Ley, se desprenden los parámetros que debe seguir esta Autoridad Reguladora para fijar las tarifas de los servicios públicos. El artículo 31 citado, se dispone de forma expresa que al fijar las tarifas de los servicios públicos, se deberán contemplar los siguientes aspectos y criterios, cuando resulten aplicables "c) La protección de los recursos hídricos (…)". Esto es, la sujeción a las estructuras productivas modelo para cada servicio público, según el desarrollo del conocimiento, la tecnología, las posibilidades del servicio, la actividad de que se trate y el tamaño de las empresas prestadoras. Por otra parte, los criterios de equidad, sostenibilidad ambiental, conservación de energía y eficiencia económica, deben ser elementos centrales para fijar tarifas de los servicios públicos. En ese sentido, los factores que deben ser considerados en la fijación de tarifas son vitales no solo para la prestación óptima del servicio, sino también para el desarrollo sostenible del país.

En ese sentido, la Sala Constitucional, se ha referido en reiteradas ocasiones a los principios rectores de los servicios públicos, indicando que deben ser aplicados en todo momento y sin excepción; ya que el buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos constituye una obligación jurídica para los funcionarios y un derecho fundamental de los usuarios. (Sentencia 2011-008326, dictada a las 11:54 horas del 24 de junio del 2011).

- ***e.*** *Proceso de inversión.*

El Reglamento Sectorial para la Regulación de los Servicios de Acueducto y Alcantarillado Sanitario, aprobado mediante el Decreto Ejecutivo Nº 30413-MP-MINAE-S-MEIC, establece en su artículo 8 que "La expansión y mejoras del servicio. Para efectos tarifarios, los prestadores de los servicios deberán elaborar y presentar ante la Autoridad Reguladora un Programa de Mejora y Expansión Continua del Servicio (PMES) para cada servicio que brinde, conteniendo en detalle las metas u objetivos concretos para los primeros 5 años... Su objetivo general será el de alcanzar y mantener las metas de expansión (desempeño) y los niveles de servicio establecidos por la Autoridad Reguladora…".

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) señala como uno de los problemas que requieren atención urgente, la construcción de infraestructura pública para "estimular el crecimiento económico, establecer beneficios sociales y fomentar el uso racional de los recursos naturales" (Cap. 2 y 7, PND).

Adicionalmente, el Plan Nacional de Gestión del Riesgo (PNGR) para el periodo 2016-2020, elaborado con base en la Política Nacional de Gestión del Riesgo contenida en la Ley 8488, Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgos, según el Eje 4 de Inversión

Financiera Sostenible, Infraestructura y Servicios, dicta que se incluya la variable riesgo a desastres en el modelo tarifario de los servicios públicos, como medio de financiamiento de las obras que aseguren su protección y recuperación, meta a cumplir durante el año 2017.

f. *Subsidios.*

La fijación de tarifas y precios por parte de ARESEP está sujeta a criterios de equidad social y no discriminación (Artículos 12, 14 inciso h y 31 de la Ley 7593). El Art. 12 indica que "…No constituirán discriminación las diferencias tarifarias que se establezcan por razones de orden social." Por su parte, la Ley Constitutiva del AyA N° 2726 promulga en su Art. 4 que "Para la fijación de tarifas se aplicarán criterios de justicia social distributiva, que tomen en cuenta los estratos sociales y la zona a que pertenecen los abonados, de manera que los que tienen mayor capacidad de pago subvencionen a los de menor capacidad…"

Por otra parte, la Autoridad Reguladora debe seguir lineamientos de carácter sectorial, que dicte el Poder Ejecutivo, según el artículo 1 de la Ley 7593, que indica: "la Autoridad Reguladora no se sujetará a los lineamientos del Poder Ejecutivo en el cumplimiento de las atribuciones que se le otorgan en esta Ley; no obstante, estará sujeta al Plan nacional de desarrollo, a los planes sectoriales correspondientes y a las políticas sectoriales que dicte el Poder Ejecutivo".

g. *Protección del recurso hídrico.*

La regulación de los servicios públicos relacionada con la protección y conservación del recurso hídrico parte de los artículos 46 y 50 de la Constitución Política de Costa Rica, que indican que "Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente..." y que "Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado".

El artículo 14, inciso e), de la Ley 7593 señala que "Son obligaciones de los prestadores: …Proteger, conservar, recuperar y utilizar racionalmente los recursos naturales relacionados con la explotación del servicio público, según la legislación vigente." El PND indica que la sostenibilidad ambiental es uno de los elementos centrales para fijar las tarifas y precios de los servicios públicos. Además, el artículo 31, inciso c), de la Ley 7593 indica que "… al fijar las tarifas de los servicios públicos, se deberán contemplar los siguientes aspectos y criterios, cuando resulten aplicables:… La protección de los recursos hídricos, costos y servicios ambientales."

h. *Calidad.*

La ARESEP debe velar por el cumplimiento por parte de los prestadores de los requisitos de calidad, cantidad, oportunidad y confiabilidad necesarios para prestar en forma óptima los servicios públicos. (Artículos 4 inciso d), 5 y 25 de la Ley 7593).

El artículo 4 del Reglamento Sectorial para la Regulación de los Servicios de Acueducto y Alcantarillado Sanitario [2] establece que "…Todo prestador deberá brindar el servicio con carácter obligatorio y en condiciones que aseguren su calidad, cantidad, continuidad, confiabilidad, prestación óptima e igualdad; de manera que se garantice su eficiente provisión a los usuarios en conciliación con el medio ambiente. Con ese fin, este Reglamento Sectorial adopta un esquema de regulación técnica basado en el cumplimiento de metas y objetivos referidos a: a) La calidad del suministro del servicio, y b) La expansión y mejora continua del servicio." Los Art. 5, 6, 7 y 8 de este reglamento establecen normas relativas a metas, parámetros e indicadores de calidad en los servicios.

i. *El derecho fundamental de acceso al agua potable.*

De la relación entre los artículos 21 y 50 constitucionales deriva el derecho al acceso al agua para todos los seres humanos para cubrir sus necesidades vitales y garantizar el derecho a la vida y a la salud, en un ambiente sano. La consideración del agua como derecho fundamental fue establecida por la Sala Constitucional en su jurisprudencia, doctrina que es recogida en la resolución n° 2014-12887, de las 14:30 horas del 8 de agosto del 2014:

> *"La jurisprudencia de la Sala, es clara en reconocer el derecho al agua como un derecho fundamental, siendo así que junto con la realización de esfuerzos serios para su otorgamiento a la población, existe el deber de las instituciones públicas de hacer un uso responsable y prudente del recurso hídrico disponible. Lo anterior, conlleva la necesidad de adquirir certeza del agua susceptible de explotación –disponibilidad-garantizando su otorgamiento presente y la futura sostenibilidad del servicio, evitando que con la utilización actual del recurso se produzca un riesgo ambiental que comprometa la existencia y dotación futura del líquido. La Sala ha tenido oportunidad de pronunciarse de manera contundente y detallada sobre la protección que debe otorgarse al recurso hídrico nacional, clarificando tanto el marco normativo de protección, como las instituciones que conforman el sector hídrico, reconociendo y precisando el ámbito de*

[2] Aprobado mediante Decreto Nº 30413-MP-MINAE-S-MEIC del 14/05/2002.

competencias de dichas instancias y la trascendencia de sus actuaciones en materia de otorgamiento, aprovechamiento y protección del agua." (El subrayado no es del original).

En la misma línea, la reciente sentencia de la misma Sala, N° 2017-1591 de las 9:25 horas del 3 de febrero de 2017, condensa esas notas fundamentales de su naturaleza – como derecho y servicio público – en los siguientes términos:

"III.- Sobre ***el derecho fundamental de acceso al agua potable****. Al respecto, esta Sala ha manifestado:*
"Este Tribunal ha reconocido como parte del Derecho de la Constitución, el Derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos a la salud, la vida, al medio ambiente sano, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros. En este mismo sentido se han pronunciado instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos aplicables en Costa Rica; así, figura explícitamente en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (artículo 14) y la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 24); además, se enuncia en la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo de El Cairo (principio 2). En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Costa Rica se encuentra particularmente obligada en esta materia por lo dispuesto en el artículo 11.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ("Protocolo de San Salvador" de 1988), el cual dispone en lo que interesa: "Artículo 11. Derecho a un medio ambiente sano 1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos". Por otro parte, en el marco del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Culturales y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas reiteró que la disposición de agua es un derecho humano que además de ser imprescindible para llevar una vida saludable, es un requisito para la realización de todos los demás derechos humanos. Partiendo de esta normativa, es claro que el Estado costarricense se encuentra obligado a garantizar un servicio de agua potable en forma eficiente y oportuna. La propia Constitución Política recoge, implícitamente, el derecho fundamental de los administrados al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos, esto es, que sean prestados con elevados estándares de calidad." (Sentencia Nº 2000-04595 a las 09:06 horas del 2 de junio del 2000; en idéntico sentido véase, entre muchas otras, sentencias Nº 2014-14669, Nº 2015-6424 y Nº 2015-7340). (El subrayado no es del original). Ver en igual sentido, la resolución n° 2017-1163 de las 9:40 horas del 27 de enero del 2017.

En ese mismo sentido, el artículo 1 inciso 1) mediante el decreto N° 30480-MINAE "Determina los principios que regirán la política nacional en materia de gestión de los recursos hídricos, y deberán ser incorporados, en los planes de trabajo de las instituciones públicas relevantes", establece de forma expresa lo siguiente: "1. El acceso al agua potable constituye un derecho humano inalienable y debe garantizarse constitucionalmente."

j. *Interés superior del usuario.*

"Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a un trato equitativo...". "El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza." (Artículos 46 y 50, Constitución Política de Costa Rica).

Asimismo, la Ley General de la Administración Pública, N° 6227, ley que es de orden público, cuyas normas y principios son criterios de interpretación de todo el ordenamiento jurídico administrativo del país, dispone en su artículo 4, lo siguiente: "La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los principios fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios.
Con base en la normativa expuesta, se concluye que ARESEP cuenta con las potestades necesarias para aplicar los instrumentos regulatorios propuestos en esta metodología."

VII. Que en la sesión ordinaria 70-2018 del 04 de diciembre de 2018; la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, acuerda con carácter de firme, dictar la presente resolución.

POR TANTO:

Con fundamento en las facultades conferidas en la Ley N° 7593 y sus reformas, en la Ley General de la Administración Pública N° 6227, en el Decreto Ejecutivo N° 29732-MP, que es el Reglamento a la Ley N° 7593, y en el Reglamento Interno de Organización y Funciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y su Órgano Desconcentrado.

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AUTORIDAD REGULADORA

DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

RESUELVE:

I. Dictar la *"Metodología tarifaria para la protección del recurso hídrico (MTPRH)",* contenida en el oficio OF-535-CDR-2018, tal y como se detalla a continuación:

METODOLOGÍA TARIFARIA PARA LA PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO (MTPRH).

Objetivo y alcance

III. OBJETIVOS

Objetivo general:

> *Establecer un instrumento tarifario que permita a los operadores del servicio de acueducto generar ingresos para realizar proyectos orientados a la protección del recurso hídrico.*

Objetivos específicos:

a. *Promover proyectos para mejorar la disponibilidad y la calidad del agua en las fuentes de abastecimiento del recurso hídrico utilizadas por los operadores del servicio de acueducto y mejorar su sostenibilidad.*
b. *Contribuir en la adaptación del impacto del cambio climático sobre las fuentes de abastecimiento del recurso hídrico mediante la aplicación de este instrumente regulatorio.*

IV. ALCANCE

La metodología tiene el siguiente alcance:

a. *Se aplica a todas las fijaciones tarifarias ordinarias, para la protección del recurso hídrico.*
b. *Se aplica a los operadores regulados por ARESEP que prestan los servicios de acueducto, en todo el territorio nacional; no considera a las municipalidades.*
c. *Se aplica a la estructura tarifaria y por lo tanto no contempla cambios en la estructura.*

V. MODELO GENERAL

Este modelo tarifario delimita y precisa la forma de determinar los ajustes de tarifas anuales en fijaciones ordinarias para la protección del recurso hídrico. Las tarifas se establecen para un período de cinco años con una revisión anual de conformidad con lo establecido en la Ley de la Aresep. Para determinar las tarifas anuales se requiere el cálculo de los siguientes

componentes: a) costos y gastos operativos, b) desembolso estimado de las inversiones, c) ingresos totales y d) volumen de agua a facturar.

De conformidad con el artículo 30 de la Ley 7593, los operadores deberán presentar, por lo menos una vez al año, una solicitud de estudio ordinario; así mismo, la Autoridad Reguladora podrá realizar de oficio dichos estudios de conformidad con lo establecido en dicha Ley. En ambos casos, deben establecerse tarifas individuales para cada uno de los cinco años siguientes. De esta forma, el operador puede planificar mejor sus inversiones.

En la fijación de las tarifas para protección del recurso hídrico, la presente metodología, garantiza el financiamiento de los proyectos diseñados por el operador y avalados por la Autoridad Reguladora. Por lo tanto, los ingresos totales correspondientes a tarifa hídrica serán suficientes para permitir a los operadores cubrir los costos totales correspondientes a los respectivos proyectos asociados.

Para establecer la tarifa hídrica se utilizará la información de la contabilidad regulatoria. En las cuentas del código contable regulatorio se deben detallar las partidas para cada uno de los proyectos que se van a realizar. En el caso de las ASADAS se aplicará la Contabilidad Regulatoria o el manual de cuentas respectivo, según lo determine la ARESEP y esté disponible en la Autoridad Reguladora.

Se establece como información requerida que deberán presentar los operadores a la Aresep para solicitar un estudio tarifario por concepto de protección del recurso hídrico la siguiente:
i) Un plan quinquenal en el que se detalle el (los) proyecto (s) a realizar con los recursos que se recauden por concepto de esta tarifa y el impacto que estos proyectos tendrán en su oferta (cantidad de agua ofrecida y/o en su calidad), la justificación de realizar esos proyectos, la priorización en la ejecución de esos proyectos y el detalle de costos de cada uno de los proyectos; así como los demás requerimientos que la ARESEP establezca.

ii) Los proyectos de inversión que se presenten en el plan quinquenal deberán establecer objetivos claros y orientados a la protección del recurso hídrico; tener una línea base que sirva como referencia de partida para la medición del impacto en la cantidad y/o calidad del agua, en la recuperación del recurso hídrico y/o la adaptación al cambio climático. En caso de que los proyectos no cuenten con línea base, el proyecto empezará por la elaboración de la misma. Asimismo, esos proyectos deberán proponer mecanismos de monitoreo de los resultados proyectados que permitan dar un seguimiento y evaluación periódica del impacto obtenido.

Adicionalmente, se debe justificar la coherencia de los proyectos con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y de ser relevante de los objetivos de los planes sectoriales existentes.

Para presentar la información requerida por la Aresep, anteriormente indicada, el operador tomará como referencia la "Guía para la evaluación de los Proyectos incluidos en las propuestas de Estrategias Quinquenales a ser financiados con la tarifa de protección del recurso hídrico (TPRH)" y la "Guía para el desarrollo de estrategias quinquenales de los operadores del servicio de acueducto". No deberá considerarse los apartados correspondientes a los cálculos tarifarios que se incluyen en esas Guías. Estas Guías o el documento que en su lugar las sustituya, serán las utilizadas como referencia para obtener la información y están disponibles en la ARESEP.

Esta metodología define el ajuste porcentual requerido para compensar el cambio en los costos y en la demanda, y por tanto, en los costos totales e inversiones para el periodo en que estará vigente la tarifa. En ese sentido, la metodología no contempla el procedimiento de cálculo de la estructura tarifaria. Se determina el ajuste porcentual requerido que deberá posteriormente distribuirse de conformidad con lo que técnicamente determine la IA entre las diferentes tarifas y bloques de acuerdo con la estructura tarifaria. En la aplicación por primera vez no se calcula un ajuste porcentual sino una tarifa siguiendo lo establecido en el apartado "VI aplicación por primera vez".

1. Costos y gastos operativos y de mantenimiento totales (CT_{et})

Son los costos y gastos operativos para ejecutar proyectos de protección del recurso hídrico de la empresa "e" para el periodo "t". El cálculo de los costos y gastos operativos totales incluye los siguientes componentes que se detallan en la siguiente fórmula:

$$\boldsymbol{CT_{et} = GREM_{et} + CSER_{et} + DEP_{et} + CMS_{et} + OG_{et}}$$

Ecuación 1

Donde:

CT_{et} = *Costos y gastos totales operativos y de mantenimiento en que incurran los operadores para ejecutar proyectos de protección del recurso hídrico de la empresa "e", para el período "t". Estos costos y gastos se componen de gastos por remuneraciones, costos por servicios, costos por depreciación, costos por materiales y suministros y otros gastos para ejecutar proyectos de protección del recurso hídrico; que contribuyan a mejorar la sostenibilidad, continuidad y calidad del servicio de acueducto.*

$GREM_{et}$ = *Gastos por remuneraciones en que incurran los operadores para ejecutar proyectos de protección del recurso hídrico de la empresa "e", para el período "t". Corresponde a los gastos en que incurre la empresa por concepto de sueldos y salarios, y contribuciones sociales necesarias para el adecuado desarrollo de la actividad. Este gasto se debe presupuestar al plantear el*

proyecto, debe ser específico e incluir montos y desgloses por tipos de trabajos requeridos en el proyecto, así como el plazo en que los mismos serán necesarios. Este gasto se debe estimar utilizando la información de la contabilidad regulatoria vigente, los formularios y plantillas regulatorias asociadas, y los lineamientos regulatorios respectivos establecidos por la ARESEP. En el caso de las ASADAS se aplicará la Contabilidad Regulatoria o el manual de cuentas respectivo, según lo determine la ARESEP.

$CSER_{et}$ = *Costos por servicios en que incurran los operadores para ejecutar proyectos de protección del recurso hídrico de la empresa "e", para el período "t". Corresponde a costos por insumos requeridos para la ejecución de proyectos que son contratados con terceros. Este costo se debe estimar utilizando la información de la contabilidad regulatoria, los formularios y plantillas regulatorias asociadas, y los lineamientos regulatorios respectivos establecidos por la ARESEP. En el caso de las ASADAS se aplicará la Contabilidad Regulatoria o el manual de cuentas respectivo, según lo determine la ARESEP.*

DEP_{et} = *Costo por depreciación de los activos, para ejecutar proyectos de protección del recurso hídrico de la empresa "e", para el período "t".*

Este costo se debe estimar utilizando la información de la contabilidad regulatoria, los formularios y plantillas regulatorias asociadas, y los lineamientos regulatorios respectivos establecidos por la ARESEP. En el caso de las ASADAS se aplicará la Contabilidad Regulatoria o el manual de cuentas respectivo, según lo determine la ARESEP. Para realizar la fijación tarifaria ARESEP deberá revisar el valor monetario de los activos fijos netos presentados por el operador.

También ARESEP podrá establecer tablas de depreciación de activos, ya sea vida útil o el método de depreciación a utilizar, cuando considere técnicamente que debe ser diferente al presentado por el operador. Puede basarse en tablas equivalentes del Ministerio de Hacienda, especificaciones técnicas de la casa fabricante del activo en cuanto a vida útil y valor de rescate o en activos similares en el país o a nivel internacional.

CMS_{et} = *Costo por materiales y suministros para ejecutar proyectos de protección del recurso hídrico de la empresa "e", para el período "t". Este costo comprende las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de insumos requeridos para el*

		desempeño de las actividades administrativas y productivas. Este costo se debe estimar utilizando la contabilidad regulatoria, los formularios y plantillas regulatorias asociadas, y los lineamientos regulatorios respectivos establecidos por la ARESEP. En el caso de las ASADAS se aplicará la Contabilidad Regulatoria o el manual de cuentas respectivo, según lo determine la ARESEP.
OG_{et}	=	*Otros costos o gastos en que incurran los operadores para ejecutar proyectos de protección del recurso hídrico de la empresa "e", para el período "t". Comprende todo aquel gasto operativo asociado con el proyecto para proteger el recurso hídrico y que no esté incluido en las cuentas descritas anteriormente en las variables de esta fórmula. Este costo o gasto se debe estimar utilizando la contabilidad regulatoria, los formularios y plantillas regulatorias asociadas, y los lineamientos regulatorios respectivos establecidos por la ARESEP. En el caso de las ASADAS se aplicará la Contabilidad Regulatoria o el manual de cuentas respectivo, según lo determine la ARESEP.*
e	=	*Empresa prestadora de servicios regulados por ARESEP.*
t	=	*El periodo "t" toma valores para t=1, 2, 3, 4 y 5 correspondiente al periodo de tiempo para el cual se calcula el ajuste tarifario, inicia con el año calendario "t=1". Típicamente corresponde a un periodo de 5 años.*

La ARESEP Revisará y validará la justificación presentada por el operador para cada uno de los costos. Para toda la información anterior, se utiliza la contabilidad regulatoria validada por la Intendencia de Agua. Se deberá utilizar el criterio técnico especializado más adecuado para la naturaleza de los proyectos.

El operador debe llevar registros contables individualizados y emitir reportes específicos de los costos incurridos, inversiones realizadas y financiamiento obtenido específicamente para la ejecución de los proyectos de protección del recurso hídrico (PRH).

2. Rédito para el desarrollo (RD_{et})

El rédito para el desarrollo se calcula mediante la suma de los costos necesarios para realizar la inversión con recursos propios y los costos para atender las obligaciones del servicio de la deuda. Estos recursos se asignan con el objetivo de brindar al operador recursos que permitan garantizar el adecuado desarrollo de la actividad.
El rédito para el desarrollo se calcula de la siguiente manera:

$$RD_{et} = CINV_{et} + SD_{et}$$ *Ecuación 2*

Donde:

RD_{et} = *Rédito para el desarrollo para ejecutar proyectos de protección del recurso hídrico de la empresa "e", para el período t. Este rédito se compone de la suma de las inversiones estimadas con recursos propios y el servicio de la deuda.*

$CINV_{et}$ = *Desembolso estimado de inversiones con recursos propios para ejecutar proyectos de protección del recurso hídrico de la empresa "e" para el período "t". El costo de los proyectos debe ser explícito y justificado por el prestador del servicio, con base en criterios técnicos y financieros razonables de acuerdo a las reglas univocas de la ciencia o de la técnica.*

SD_{et} = *Costo del servicio de la deuda para ejecutar proyectos de protección del recurso hídrico de la empresa "e", para el período t. El procedimiento para obtener este costo se detalla en la Ecuación 3.*

e = *Empresa prestadora de servicios regulados por ARESEP.*

t = *El periodo "t" toma valores para t=1, 2, 3, 4 y 5 correspondiente al periodo de tiempo para el cual se calcula el ajuste tarifario, inicia con el año calendario "t=1". Típicamente corresponde a un periodo de 5 años.*

2.1 Servicio de la Deuda

El servicio de la deuda se calcula de la siguiente manera:

$$SD_{et} = AP_{et} + GF_{et} - IF_{et}$$ *Ecuación 3*

Donde:

SD_{et} = *Costo de ejecutar el servicio de la deuda para ejecutar los proyectos de protección del recurso hídrico de la empresa "e" para el período "t". Este costo se compone de la suma de la amortización del principal más los gastos financieros menos los ingresos financieros.*

AP_{et} = *Amortización del principal de las deudas, requerido para cumplir los contratos de financiamiento de los proyectos de protección del recurso hídrico de la empresa "e" para el período "t". Este costo se debe estimar utilizando la contabilidad regulatoria, los formularios y plantillas regulatorias asociadas, y los lineamientos regulatorios respectivos establecidos por la ARESEP. En el caso de las ASADAS se aplicará la Contabilidad Regulatoria o el manual de cuentas respectivo, según lo determine la ARESEP.*

GF_{et} = *Gastos financieros requeridos para cumplir con las obligaciones de financiamiento de los proyectos de protección del recurso hídrico de la empresa "e" para el período "t". Incluye intereses, comisiones bancarias y otros rubros relacionados con los compromisos financieros de la empresa. Este costo se debe estimar utilizando la contabilidad regulatoria, los formularios y plantillas regulatorias asociadas, y los lineamientos regulatorios respectivos establecidos por la ARESEP. En el caso de las ASADAS se aplicará la Contabilidad Regulatoria o el manual de cuentas respectivo, según lo determine la ARESEP.*

IF_{et} = *Ingresos financieros para ejecutar proyectos de protección del recurso hídrico de la empresa "e" para el período "t". Incluye intereses y otros rubros relacionados. Este ingreso se debe estimar utilizando la contabilidad regulatoria, los formularios y plantillas regulatorias asociadas, y los lineamientos regulatorios respectivos establecidos por la ARESEP. En el caso de las ASADAS se aplicará la Contabilidad Regulatoria o el manual de cuentas respectivo, según lo determine la ARESEP.*

e = *Empresa prestadora de servicios regulados por ARESEP.*

t = *El periodo "t" toma valores para t=1, 2, 3, 4 y 5 correspondiente al periodo de tiempo para el cual se calcula el ajuste tarifario, inicia con el año calendario "t=1". Típicamente corresponde a un periodo de 5 años.*

3. Ingresos totales (IT_{et})

La suma de los costos y gastos totales (CT_{et}) y el rédito para el desarrollo (RD_{et}) que se estimaron para la ejecución de los proyectos de protección del recurso hídrico para el periodo "t", es decir el periodo en que regirá la tarifa, determinan los ingresos totales esperados por el operador.

3.1 Liquidación del periodo anterior

Una vez aplicado por primera vez el modelo descrito en la presente metodología, en las sucesivas fijaciones tarifarias ordinarias se deberán revisar y actualizar todas las estimaciones efectuadas en el periodo "t-1", para proceder con el nuevo cálculo de ajuste tarifario para el periodo "t". De manera que se identifiquen las diferencias entre los valores estimados para todas las variables que se consideran en el cálculo del ajuste tarifario y los valores reales contabilizados durante el período en que el ajuste tarifario estuvo vigente ("t-1"), cuantificando estas diferencias para las variables de costos totales (CTet-1) y los ingresos totales (IT_{et-1}).

De esta forma, en caso de presentarse diferencias entre lo estimado y lo contabilizado; el monto de la diferencia de la liquidación deberá sumarse al monto de ingresos del periodo "t" según se obtiene de la Ecuación 4 y manteniendo su signo, es decir, un monto positivo sumará un mayor ingreso en "t", mientras que un monto negativo implica reducir el ingreso en "t" para compensar por liquidación.

Asimismo, para estos efectos, los datos contabilizados, deberán proceder de la contabilidad regulatoria, los formularios y plantillas regulatorias asociadas, y los lineamientos regulatorios respectivos establecidos por la ARESEP. Estos datos serán revisados, analizados y depurados por parte de la Autoridad Reguladora, y podrá establecer un valor monetario diferente al reportado por el operador, con el propósito de determinar su reconocimiento. Se deberá cumplir con los objetivos de la Ley 7593 y sus reformas.

$$\boldsymbol{LI_{et} = CTA_{et-1} - ITA_{et-1}}$$

Ecuación 4

Donde:

LI_{et} = *Liquidación del periodo "t-1" aplicada en el periodo "t". Se refiere a la diferencia entre los ingresos totales ajustado y los costos totales ajustado del periodo "t-1".*

CTA_{et-1} = *Costos y gastos totales ajustados. Se refiere al ajuste por diferencial entre costos reales contabilizados y costos estimados para la empresa "e" en el periodo "t-1", correspondiente a proyectos de protección del recurso hídrico.*

ITA_{et-1} = *Ingresos totales ajustados. Se refiere al ajuste por diferencial entre ingresos reales contabilizados y los ingresos estimados para la empresa "e" en el periodo "t-1", correspondiente a proyectos de protección del recurso hídrico.*

a. Liquidación de costos

Los rubros de costos y gastos reales que serán analizados en dicho proceso deben coincidir con los incluidos en el estudio tarifario del periodo inmediato anterior (t-1). Para realizar la liquidación en los costos y gastos y determinar el ajuste correspondiente a aplicar en el periodo t, se debe obtener el diferencial entre los costos y gastos estimados, y, los costos y gastos reales contabilizados para ejecutar los proyectos de protección del recurso hídrico, como se detalla a continuación:

$$\boldsymbol{CTA_{et-1} = CR_{et-1} - CE_{et-1}}$$

Ecuación 5

Donde:

CTA_{et-1}	=	*Costos y gastos totales ajustados. Se refiere al ajuste por diferencial entre costos reales contabilizados y costos estimados para la empresa "e" en el periodo "t-1", correspondiente a proyectos de protección del recurso hídrico.*
CR_{et-1}	=	*Costos y gastos totales reales contabilizados de la empresa "e" para ejecutar los proyectos de protección del recurso hídrico del periodo "t-1". Son los costos y gastos reales por concepto operación, mantenimiento, administración y otros gastos en que incurran los operadores para proteger el recurso hídrico en el periodo "t-1". Este dato se debe tomar de la contabilidad regulatoria, los formularios y plantillas regulatorias asociadas, y los lineamientos regulatorios respectivos establecidos por la ARESEP. En el caso de las ASADAS se aplicará la Contabilidad Regulatoria o el manual de cuentas respectivo, según lo determine la ARESEP.*
CE_{et-1}	=	*Costos y gastos totales estimados de la empresa "e" para ejecutar los proyectos de protección del recurso hídrico del periodo "t-1". Son los costos y gastos estimados por concepto operación, mantenimiento, administración y otros gastos en que incurran los operadores para proteger el recurso hídrico en el periodo "t-1". Este dato se debe tomar de la fijación tarifaria efectuada por la ARESEP para el periodo "t-1".*
e	=	*Empresa prestadora de servicios regulados por ARESEP.*
t-1	=	*Período inmediatamente anterior a la fecha de vigencia de la fijación tarifaria "t-1".*

En el caso de aquellos costos y gastos que no fueron incorporados por la empresa regulada en su pretensión tarifaria para el periodo "t-1" o fueron excluidos por el Ente Regulador como resultado de su análisis regulatorio, pero que fueron realizados y ejecutados por la empresa en el ejercicio de sus funciones, esta deberá de aportar toda la información técnica requerida para validar la pertinencia del costo y su vínculo a la protección del recurso hídrico. La Autoridad Reguladora valorará y determinará los rubros y montos a reconocer en el ajuste.

Cuando existan disposiciones especiales que conlleven al retraso en la ejecución de inversiones y que los recursos económicos correspondientes a estas inversiones hayan sido reconocidas en tarifas, el operador será el encargado de presentar la documentación correspondiente que le permita justificar ante la Aresep la no ejecución de esas inversiones para que no se incluya dentro de la liquidación de costos como se indica en la ecuación 5.

b. Liquidación de ingresos

El ajuste total de ingresos corresponde a la diferencia entre los ingresos reales contabilizados y los ingresos estimados incluidos en el cálculo de la tarifa de la empresa "e", para el periodo "t-1", el cual se obtiene de la siguiente manera:

$$\boldsymbol{ITA_{et-1} = ITR_{et-1} - ITE_{et-1}}$$

Ecuación 6

Donde:

ITA_{et-1} = *Ingresos totales ajustados. Se refiere al ajuste por el diferencial entre los ingresos reales contabilizados y los ingresos estimados para la empresa "e" para el periodo t-1 correspondientes a proyectos de protección del recurso hídrico.*

ITR_{et-1} = *Ingresos totales reales contabilizados que recibió el operador para realizar los proyectos de protección de recurso hídrico de la empresa "e" y para el periodo "t-1". Este dato se debe tomar de la contabilidad regulatoria, los formularios y plantillas regulatorias asociadas, y los lineamientos regulatorios respectivos establecidos por la ARESEP.*

ITE_{et-1} = *Ingresos totales estimados por ARESEP en la fijación tarifaria para realizar los proyectos de protección de recurso hídrico de*

la empresa "e" y para el periodo "t-1". Este dato se debe tomar de la fijación tarifaria efectuada por la ARESEP para el periodo "t-1".

e = Empresa prestadora de servicios regulados por ARESEP.

t-1 = Período inmediatamente anterior a la fecha de vigencia de la fijación tarifaria "t".

La aplicación del diferencial de los ingresos y costos/gastos ajustados en el periodo "t-1" (LI_{et}), deben ser tales que no se vea amenazado el equilibrio financiero en el periodo "t".

c. Diseño de incentivos, para el cumplimiento del plan de proyectos de inversiones en protección del recurso hídrico.

Los operadores disponen de los recursos del rédito para el desarrollo que fueron aprobados en el periodo "t-1", para ejecutar las inversiones propuestas en el periodo "t-1". La diferencia entre el monto de inversiones anual real contabilizado en el periodo "t-1" y el monto anual presupuestado en el periodo "t-1", será aplicada como recursos disponibles o faltantes y considerados en el rédito para el desarrollo del periodo "t", de la siguiente manera:

i. Un monto positivo sumará un mayor rédito en "t", mientras que un monto negativo implicará reducir el rédito en "t" para compensar la liquidación, pues el operador cuenta con estos recursos.

ii. Las sobreinversiones deberán justificarse y estar en línea con el plan quinquenal de inversiones aprobado.

3.2 Ingresos por ventas

Los ingresos totales esperados por el operador se obtienen del cobro de la tarifa de protección del recurso hídrico a usuarios (IV_{et}), según se expresa en la siguiente ecuación.

$$IT_{et} = IV_{et}$$

Ecuación 7

Donde:

IT_{et} = Ingresos totales para la protección del recurso hídrico de la empresa "e" y para el periodo "t". Se obtiene de la suma de los

costos y gastos totales (CT_{et}) y el rédito para el desarrollo (RD_{et}).

IV_{et} = *Ingresos por el cobro de la tarifa de protección del recurso hídrico a usuarios (IV_{et}) de la empresa "e", para el período "t". Corresponden a los ingresos totales estimados que deberá recibir el operador con la tarifa para protección del recurso hídrico, y que garantizan la igualdad de los costos y gastos totales (CT_{et}) y el rédito para el desarrollo (RD_{et}) con los ingresos totales.*

e = *Empresa prestadora de servicios regulados por ARESEP.*

t = *El periodo "t" toma valores para t=1, 2, 3, 4 y 5 correspondiente al periodo de tiempo para el cual se calcula el ajuste tarifario, inicia con el año calendario "t=1". Típicamente corresponde a un periodo de 5 años.*

3.3 Identificación de variación o ajuste en las tarifas

Una vez que se conoce el monto total de los ingresos necesarios para que el operador pueda ejecutar los proyectos de protección del recurso hídrico es necesario establecer la tarifa requerida para generar esos ingresos, utilizando la estructura tarifaria, la estimación de demanda y considerando las tarifas vigentes. Con el fin de identificar si se requiere realizar una variación o ajuste en las tarifas. Se podrían presentar 3 escenarios:

i. Que los ingresos requeridos por el operador sean iguales a los ingresos totales proyectados a tarifas vigentes; en este caso no se requiere realizar ajuste en las tarifas y se deben mantener las mismas tarifas vigentes.

ii. Que los ingresos requeridos por el operador sean mayores a los ingresos totales proyectados a tarifas vigentes; en este caso se requiere realizar un aumento en las tarifas vigentes hasta que se logre igualar a los ingresos requeridos.

iii. Que los ingresos requeridos por el operador sean menores a los ingresos totales proyectados a tarifas vigentes; en este caso se requiere realizar una disminución en las tarifas vigentes hasta que se logre igualar a los ingresos requeridos.

Así, el monto total absoluto del ajuste requerido es la diferencia entre los ingresos requeridos para la ejecución de los proyectos y los ingresos generados con la tarifa vigente, expresado de la siguiente manera:

$$\Delta IV_{et} = IV_{et} - IVTV_{et}$$

Ecuación 8

Donde:

ΔIV_{et}	=	*Cambio absoluto requerido en los ingresos totales por cobro de la tarifa de la empresa "e" y para el periodo "t".*
IV_{et}	=	*Ingresos por el cobro de la tarifa de protección del recurso hídrico a usuarios (IV_{et}) de la empresa "e", para el período "t". Corresponden a los ingresos totales estimados que deberá recibir el operador con la tarifa para protección del recurso hídrico, y que garantizan la igualdad de los costos y gastos totales (CT_{et}) y el rédito para el desarrollo (RD_{et}) con los ingresos totales.*
$IVTV_{et}$	=	*Ingresos totales estimados a tarifas vigentes de la empresa "e" y para el periodo "t". Esta estimación de ingresos se basa en la estructura tarifaria vigente y la estimación de la demanda; se podrán estimar y proyectar estos ingresos considerando el procedimiento establecidos en el apartado 3.4. Ver Ecuación 9.*
e	=	*Empresa prestadora de servicios regulados por ARESEP.*
t	=	*El periodo "t" toma valores para t=1, 2, 3, 4 y 5 correspondiente al periodo de tiempo para el cual se calcula el ajuste tarifario, inicia con el año calendario "t=1". Típicamente corresponde a un periodo de 5 años.*
t-1	=	*Período inmediatamente anterior a la fecha de vigencia de la fijación tarifaria "t".*

3.4 Ingresos por cobro de las tarifas vigentes

Estos ingresos se obtienen de sumar los resultados de multiplicar cada categoría de tarifa, según bloque de consumo, por la cantidad total estimada de agua a facturar asociada a dicha tarifa, expresado de la siguiente manera:

$$IVTV_{et} = \sum_{b=1}^{k} \sum_{s=1}^{m} (T_{etsb} * V_{etsb})$$

Ecuación 9

Donde:

$IVTV_{et}$	=	*Ingresos totales estimados a tarifas vigentes de la empresa "e" y para el periodo "t". Esta estimación de ingresos se basa en la estructura tarifaria vigente y la estimación de la demanda; se podrán estimar y proyectar estos ingresos considerando el procedimiento establecidos en el apartado .3.4.*
T_{etsba}	=	*Tarifa para la categoría "s" de la empresa "e", para el período "t", según bloque de consumo "b". La tarifa, según bloque de consumo corresponde al valor en colones por metro cúbico, indicado en el pliego tarifario vigente al momento del estudio tarifario.*
V_{etsb}	=	*Volumen de agua a facturar en metros cúbicos (m^3) por categoría "s", según bloque de consumo "b" de la empresa "e", para el período "t". El dato que se utilizará es el correspondiente a la demanda del servicio de acueducto más actualizada.*
b	=	*Cada bloque de consumo.*
k	=	*Cantidad de bloques de consumo.*
s	=	*Cada categoría de usuario según la estructura tarifaria vigente (por ejemplo, actualmente son domiciliar, empresarial, gobierno, preferencial).*
m	=	*Cantidad de tarifas existentes de acuerdo al pliego tarifario vigente.*
e	=	*Empresa prestadora de servicios regulados por ARESEP.*
t	=	*El periodo "t" toma valores para t=1, 2, 3, 4 y 5 correspondiente al periodo de tiempo para el cual se calcula el ajuste tarifario, inicia con el año calendario "t=1". Típicamente corresponde a un periodo de 5 años.*

4. Determinación del porcentaje del ajuste en las tarifas

Para la determinación del ajuste porcentual en las tarifas para el periodo en que entrará en vigencia la nueva fijación tarifaria se debe dividir el monto del cambio absoluto requerido en los ingresos totales (ΔIV_{et}) entre los ingresos totales estimados a tarifa vigente del servicio ($IVTV_{et}$), la distribución porcentual por tipo de tarifa y bloques se hará de conformidad con lo que técnicamente determine la Intendencia.

$$\%\boldsymbol{IV_{et}} = \frac{\boldsymbol{\Delta IV_{et}}}{\boldsymbol{IVTV_{et}}} * \mathbf{100}$$

Ecuación 10

Donde:

$\%IV_{et}$ = *Ajuste porcentual requerido en los ingresos totales de la empresa "e" y para el periodo "t".*

ΔIV_{et} = *Cambio absoluto requerido en los ingresos totales por cobro de la tarifa de la empresa "e" y para el periodo "t". Ecuación 8.*

$IVTV_{et}$ = *Ingresos totales estimados a tarifas vigentes de la empresa "e" y para el periodo "t". Esta estimación de ingresos se basa en la estructura tarifaria vigente y la estimación de la demanda; se podrán estimar y proyectar estos ingresos considerando el procedimiento establecidos en el apartado 3.4.*

e = *Empresa prestadora de servicios regulados por ARESEP.*

t = *El periodo "t" toma valores para t=1, 2, 3, 4 y 5 correspondiente al periodo de tiempo para el cual se calcula el ajuste tarifario, inicia con el año calendario "t=1". Típicamente corresponde a un periodo de 5 años.*

VI. APLICACIÓN POR PRIMERA VEZ

a. *La tarifa en metros cúbicos (m^3) en cada bloque de consumo "b" y cada categoría de usuario "s" se obtiene utilizando la estructura tarifaria del servicio de acueductos y realizando los siguientes pasos:*

   i. *Se obtiene el volumen total de agua (m^3), a facturar, por bloque de consumo "b" y categoría de usuario "s".*

   ii. *Se obtiene el ingreso por bloque de consumo "b" y categoría de usuario "s". Sumando los anteriores montos, se obtiene el ingreso total de la tarifa de acueducto. Con estos datos se obtiene el porcentaje que representa el ingreso para cada uno de los bloques y categorías de usuario del ingreso total.*

   iii. *Se multiplica este porcentaje relativo obtenido por bloque y categoría de usuario, por el ingreso total (IT_{et}) de los proyectos para protección del recurso hídrico (Obtenido de la suma de los costos y gastos totales (CT_{et}) y el rédito para el desarrollo (RD_{et})). Por último, se divide entre el volumen de agua estimado a facturar por bloque de consumo "b" y categoría de usuario "s".*

Por lo que los ingresos por el cobro de la tarifa de protección del recurso hídrico a usuarios (IV_{et}) de la empresa "e", para el período "t", serán el resultado la sumatoria de los productos que se obtienen de multiplicar el volumen de agua a facturar en m^3 asociado a cada tarifa por bloque de consumo "b" y cada categoría de usuario "s".

Por lo tanto, las secciones: Identificación de variación o ajuste en las tarifas; Ingresos por cobro de las tarifas vigentes; Determinación del porcentaje del ajuste en las tarifas; Liquidación del periodo anterior; e Ingresos al cobro de tarifas vigentes, no son parte de la primera aplicación tarifaria.

b. *Se considera que la depreciación (DEP_{et}) es cero cuando un proyecto inicie, si el proyecto ya viene ejecutándose bajo la modalidad de tarifa hídrica o en La Unidad Estratégica de Negocios –Gestión Ambiental- (UEN-Gestión Ambiental o la dependencia que tenga a su cargo dichas funciones), la depreciación se considerara según la condición de cada proyecto.*

VII. DISPOSICIONES GENERALES

Si el operador recibiera una donación, transferencia o un subsidio que adicione recursos para la inversión u operación; esas donaciones no serán contabilizadas para efectos de reconocerlo en las tarifas y solo se reconocerá los costos operativos y de mantenimiento de lo adquirido con estos recursos.

VIII. TRANSITORIOS

a. *Se establece un plazo máximo de 12 meses a partir de la entrada en vigencia de la nueva metodología para que la ESPH presente un plan de liquidación de compromisos adquiridos mediante la tarifa hídrica actual y emigre a lo indicado en esta metodología tarifaria para protección del recurso hídrico.*

b. *Se establece un plazo máximo de 12 meses para que el AyA separe los gastos e inversiones de La Unidad Estratégica de Negocios –Gestión Ambiental- (UEN-Gestión Ambiental o la dependencia que tenga a su cargo dichas funciones), identificando los gastos que deben ser asignados a los servicios de acueducto, alcantarillado y los correspondientes a la protección del recurso hídrico, que serán atendidos mediante la presente metodología.*

Anexo 1

Cuadro de fórmulas utilizadas en la metodología tarifaria para la protección del recurso hídrico.

N°	*Fórmula*	*Descripción*
1	$$CT_{et} = GREM_{et} + CSER_{et} + DEP_{et} + CMS_{et} + OG_{et}$$	*Se contabilizan los costos y gastos operativos que deben retribuirse para los proyectos de protección del recurso hídrico. Estos costos y gastos se componen de gastos por remuneraciones, costos por servicios, costos por depreciación, costos por materiales y suministros y otros gastos para ejecutar proyectos de protección del recurso hídrico; que contribuyan a mejorar la sostenibilidad, continuidad y calidad del servicio de acueducto.*
2	$$RD_{et} = CINV_{et} + SD_{et}$$	*Rédito para el desarrollo para ejecutar proyectos de protección del recurso hídrico de la empresa "e", para el período t. Este rédito se compone de la suma de las inversiones estimadas con recursos propios y el servicio de la deuda.*
3	$$SD_{et} = AP_{et} + GF_{et} - IF_{et}$$	*Costo del servicio de la deuda para ejecutar los proyectos de protección del recurso hídrico de la empresa "e" para el período "t". Este costo se compone de la suma de la amortización del principal más los gastos financieros menos los ingresos financieros.*
4	$$LI_{et} = CTA_{et-1} - ITA_{et-1}$$	*Liquidación del periodo "t-1" aplicada en el periodo "t". Se refiere a la diferencia entre los ingresos totales ajustado y los costos totales ajustado del periodo "t-1".*

5	$\boldsymbol{CTA_{et-1} = CR_{et-1} - CE_{et-1}}$	*Costos y gastos totales ajustados. Se refiere al ajuste por diferencial entre costos reales contabilizados y costos estimados para la empresa "e" en el periodo "t-1", correspondiente a proyectos de protección del recurso hídrico.*
6	$\boldsymbol{ITA_{et-1} = ITR_{et-1} - ITE_{et-1}}$	*Ingresos totales ajustados. Se refiere al ajuste por el diferencial entre los ingresos reales contabilizados y los ingresos estimados para la empresa "e" para el periodo t-1 correspondientes a proyectos de protección del recurso hídrico.*
7	$\boldsymbol{IT_{et} = IV_{et}}$	*Ingresos totales para la protección del recurso hídrico de la empresa "e" y para el periodo "t". Se obtiene de la suma de los costos y gastos totales (CTet) y el rédito para el desarrollo (RDet).*
8	$\boldsymbol{\Delta IV_{et} = IV_{et} - IVTV_{et}}$	*Cambio absoluto requerido en los ingresos totales por cobro de la tarifa de la empresa "e" y para el periodo "t".*
9	$\boldsymbol{IVTV_{et} = \sum_{b=1}^{k}\sum_{s=1}^{m}(T_{etsb} * V_{etsb})}$	*Ingresos totales estimados a tarifas vigentes de la empresa "e" y para el periodo "t". Esta estimación de ingresos se basa en la estructura tarifaria vigente y la estimación de la demanda; se podrán estimar y proyectar estos ingresos considerando el procedimiento establecidos en el apartado 3.4.*
10	$\boldsymbol{\%IV_{et} = \frac{\Delta IV_{et}}{IVTV_{et}} * 100}$	*Ajuste porcentual requerido en los ingresos totales de la empresa "e" y para el periodo "t".*

Anexo 2

Cuadro de variables utilizadas en la metodología tarifaria para la protección del recurso hídrico.

Variables	***Descripción***	***Unidad de medida***	***Fuente***	***Fórmula***
AP_{et}	*Amortización del principal de las deudas, requerido para cumplir los contratos de financiamiento de los proyectos de protección del recurso hídrico de la empresa "e" para el período "t".*	*Colones.*	*Este costo se debe estimar utilizando la contabilidad regulatoria, los formularios y plantillas regulatorias asociadas, y los lineamientos regulatorios respectivos establecidos por la ARESEP. En el caso de las ASADAS se aplicará la Contabilidad Regulatoria o el manual de cuentas respectivo, según lo determine la ARESEP.*	*3*
CE_{et-1}	*Costos y gastos totales estimados de la empresa "e" para ejecutar los proyectos de protección del recurso hídrico del periodo "t-1".* *Son los costos y gastos estimados por concepto operación, mantenimiento, administración y otros gastos en que incurran los operadores para proteger el recurso hídrico en el periodo "t-1".*	*Colones.*	*Este dato se debe tomar de la fijación tarifaria efectuada por la ARESEP para el periodo "t-1".*	*5*
$CINV_{et}$	*Desembolso estimado de inversiones con recursos*	*Colones*	*El costo de los proyectos debe ser explícito y*	*2*

	propios para ejecutar proyectos de protección del recurso hídrico de la empresa "e" para el período "t".		*justificado por el prestador del servicio, con base en criterios técnicos y financieros razonables de acuerdo a las reglas univocas de la ciencia o de la técnica.*	
CMS_{et}	*Costo por materiales y suministros para ejecutar proyectos de protección del recurso hídrico de la empresa "e", para el período "t". Este costo comprende las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de insumos requeridos para el desempeño de las actividades administrativas y productivas.*	*Colones.*	*Este costo se debe estimar utilizando la contabilidad regulatoria, los formularios y plantillas regulatorias asociadas, y los lineamientos regulatorios respectivos establecidos por la ARESEP. En el caso de las ASADAS se aplicará la Contabilidad Regulatoria o el manual de cuentas respectivo, según lo determine la ARESEP.*	*1*
$CSER_{et}$	*Costos por servicios en que incurran los operadores para ejecutar proyectos de protección del recurso hídrico de la empresa "e", para el período "t". Corresponde a costos por insumos requeridos para la ejecución de proyectos que son contratados con terceros.*	*Colones.*	*Este gasto se debe estimar utilizando la información de la contabilidad regulatoria, los formularios y plantillas regulatorias asociadas, y los lineamientos regulatorios respectivos establecidos por la ARESEP. En el caso de las ASADAS se aplicará la Contabilidad Regulatoria o el manual de cuentas respectivo, según lo determine la ARESEP.*	*1*

CR_{et-1}	*Costos y gastos totales reales contabilizados de la empresa "e" para ejecutar los proyectos de protección del recurso hídrico del periodo "t-1". Son los costos y gastos reales por concepto operación, mantenimiento, administración y otros gastos en que incurran los operadores para proteger el recurso hídrico en el periodo "t-1".*	*Colones*	*Este dato se debe tomar de la contabilidad regulatoria, los formularios y plantillas regulatorias asociadas, y los lineamientos regulatorios respectivos establecidos por la ARESEP. En el caso de las ASADAS se aplicará la Contabilidad Regulatoria o el manual de cuentas respectivo, según lo determine la ARESEP.*	*5*
CT_{et}	*Costos y gastos totales operativos y de mantenimiento en que incurran los operadores para ejecutar proyectos de protección del recurso hídrico de la empresa "e", para el período "t"*	*Colones.*	*Estos costos y gastos se componen de gastos por remuneraciones, costos por servicios, costos por depreciación, costos por materiales y suministros y otros gastos para ejecutar proyectos de protección del recurso hídrico; que contribuyan a mejorar la sostenibilidad, continuidad y calidad del servicio de acueducto.*	*1*
CTA_{et-1}	*Costos y gastos totales ajustados. Se refiere al ajuste por diferencial entre costos reales contabilizados y costos estimados para la empresa "e" en el periodo "t-1", correspondiente a proyectos de protección del recurso hídrico.*	*Colones.*	*Ver Ecuación 5.*	*4 y 5*
DEP_{et}	*Costo por depreciación de los activos para ejecutar proyectos de*	*Colones.*	*Este costo se debe estimar utilizando la información de la*	*1*

	protección del recurso hídrico de la empresa "e", para el período "t".		*contabilidad regulatoria, los formularios y plantillas regulatorias asociadas, y los lineamientos regulatorios respectivos establecidos por la ARESEP. En el caso de las ASADAS se aplicará la Contabilidad Regulatoria o el manual de cuentas respectivo, según lo determine la ARESEP. Para realizar la fijación tarifaria ARESEP deberá revisar el valor monetario de los activos fijos netos presentados por el operador.* *También ARESEP podrá establecer tablas de depreciación de activos, ya sea vida útil o el método de depreciación a utilizar, cuando considere técnicamente que debe ser diferente al presentado por el operador. Puede basarse en tablas equivalentes del Ministerio de Hacienda, especificaciones técnicas de la casa fabricante del activo en cuanto a vida útil y valor de rescate o en activos similares en el país o a nivel internacional.*	
GF_{et}	*Gastos financieros requeridos para cumplir*	*Colones.*	*Este costo se debe estimar utilizando la*	*3*

	con las obligaciones de financiamiento de los proyectos de protección del recurso hídrico de la empresa "e" para el período "t". Incluye intereses, comisiones bancarias, y otros rubros relacionados con los compromisos financieros de la empresa.		*contabilidad regulatoria, los formularios y plantillas regulatorias asociadas, y los lineamientos regulatorios respectivos establecidos por la ARESEP.* *En el caso de las ASADAS se aplicará la Contabilidad Regulatoria o el manual de cuentas respectivo, según lo determine la ARESEP.*	
$\boldsymbol{GREM_{et}}$	*Gastos por remuneraciones en que incurran los operadores ejecutar proyectos de protección del recurso hídrico de la empresa "e", para el período "t". Corresponde a los gastos en que incurre la empresa por concepto de sueldos y salarios, y contribuciones sociales necesarias para el adecuado desarrollo de la actividad.*	*Colones.*	*Este gasto se debe presupuestar al plantear el proyecto, debe ser específico e incluir montos y desgloses por tipos de trabajos requeridos en el proyecto, así como el plazo en que los mismos serán necesarios. Este gasto se debe estimar utilizando la información de la contabilidad regulatoria vigente, los formularios y plantillas regulatorias asociadas, y los lineamientos regulatorios respectivos establecidos por la ARESEP. En el caso de las ASADAS se aplicará la Contabilidad Regulatoria o el manual de cuentas respectivo, según lo determine la ARESEP.*	*1*
$\boldsymbol{IF_{et}}$	*Ingresos financieros para ejecutar proyectos de*	*Colones.*	*Este costo se debe estimar utilizando la*	*3*

	protección del recurso hídrico de la empresa "e" para el período "t". Incluye intereses y otros rubros relacionados.		*contabilidad regulatoria, los formularios y plantillas regulatorias asociadas, y los lineamientos regulatorios respectivos establecidos por la ARESEP.* *En el caso de las ASADAS se aplicará la Contabilidad Regulatoria o el manual de cuentas respectivo, según lo determine la ARESEP.*	
IT_{et}	*Ingresos totales para la protección del recurso hídrico de la empresa "e" y para el periodo "t". Se obtiene de la suma de los costos y gastos totales (CT_{et}) y el rédito para el desarrollo (RD_{et}).*	*Colones.*	*Ver ecuación 7*	*7*
ITA_{et-1}	*Ingresos totales ajustados. Se refiere al ajuste por diferencial entre ingresos reales contabilizados y los ingresos estimados para la empresa "e" en el periodo "t-1", correspondiente a proyectos de protección del recurso hídrico.*	*Colones.*	*Ver Ecuación 6.*	*4 y 6*
ITE_{et-1}	*Ingresos totales estimados por ARESEP en la fijación tarifaria para realizar los proyectos de protección de recurso hídrico de la empresa "e" y para el periodo "t-1".*	*Colones.*	*Este dato se debe tomar de la fijación tarifaria efectuada por la ARESEP para el periodo "t-1".*	*6*

ITR_{et-1}	*Ingresos totales reales contabilizados que recibió el operador para realizar los proyectos de protección de recurso hídrico de la empresa "e" y para el periodo "t-1".*	*Colones.*	*Este dato se debe tomar de la contabilidad regulatoria, los formularios y plantillas regulatorias asociadas, y los lineamientos regulatorios respectivos establecidos por la ARESEP.* *En el caso de las ASADAS se aplicará la Contabilidad Regulatoria o el manual de cuentas respectivo, según lo determine la ARESEP.*	*6*
ΔIV_{et}	*Cambio absoluto requerido en los ingresos totales por cobro de la tarifa de la empresa "e" y para el periodo "t".*	*Colones.*	*Ver Ecuación 8.*	*8 y 10*
IV_{et}	*Ingresos por el cobro de la tarifa de protección del recurso hídrico a usuarios (IV_{et}) de la empresa "e", para el período "t".*	*Colones.*	*Corresponden a los ingresos totales estimados que deberá recibir el operador con la tarifa para protección del recurso hídrico, y que garantizan la igualdad de los costos y gastos totales (CT_{et}) y el rédito para el desarrollo (RD_{et}) con los ingresos totales.*	*7, 8*
$IVTV_{et}$	*Ingresos totales estimados a tarifas vigentes de la empresa "e" y para el periodo "t".*	*Colones.*	*Esta estimación de ingresos se basa en la estructura tarifaria vigente y la estimación de la demanda; se podrán estimar y proyectar estos ingresos considerando el procedimiento establecidos en el*	*8 y 9, 10*

			apartado 3.4 Ver Ecuación 9.	
$\%\boldsymbol{IV}_{\boldsymbol{et}}$	*Ajuste porcentual requerido en los ingresos totales de la empresa "e" y para el periodo "t".*	*Porcentaje*	*Ver Ecuación 10*	*10*
$\boldsymbol{LI}_{\boldsymbol{iet}}$	*Liquidación del periodo "t-1" aplicada en el periodo "t". Se refiere a la diferencia entre los ingresos totales ajustado y los costos totales ajustado del periodo "t-1".*	*Colones.*	*Ver Ecuación 4.*	*4*
$\boldsymbol{OG}_{\boldsymbol{et}}$	*Otros costos o gastos en que incurran los operadores para ejecutar proyectos de protección del recurso hídrico de la empresa "e", para el período "t". Comprende todo aquel gasto operativo asociado con el proyecto para proteger el recurso hídrico y que no esté incluido en las cuentas descritas anteriormente en las variables de esta fórmula.*	*Colones.*	*Este costo o gasto se debe estimar utilizando la contabilidad regulatoria, los formularios y plantillas regulatorias asociadas, y los lineamientos regulatorios respectivos establecidos por la ARESEP.*	*1*
$\boldsymbol{RD}_{\boldsymbol{et}}$	*Rédito para el desarrollo para ejecutar proyectos de protección del recurso hídrico de la empresa "e", para el período t.*	*Colones*	*Este rédito se compone de la suma de las inversiones estimadas con recursos propios y el servicio de la deuda. Ver Ecuación 2.*	*2*
$\boldsymbol{SD}_{\boldsymbol{et}}$	*Costo del servicio de la deuda para ejecutar proyectos de protección del recurso hídrico de la empresa "e", para el período t.*	*Colones*	*Ver Ecuación 3.*	*2 y 3*
$\boldsymbol{T}_{\boldsymbol{etbs}}$	*Tarifa para la categoría "s" de la empresa "e",*	*Colones.*	*La tarifa, según bloque de consumo*	*9*

	para el período "t-1", según bloque de consumo "b".		*corresponde al valor en colones por metro cúbico, indicado en el pliego tarifario vigente al momento del estudio tarifario.*	
V_{etbs}	*Volumen de agua a facturar en metros cúbicos (m^3) por categoría "s", según bloque de consumo "b" de la empresa "e", para el período "t".*	*Metros cúbicos.*	*El dato que se utilizará es el correspondiente a la demanda del servicio de acueducto más actualizada.*	*9*

(…)"

II. Instruir a la Secretaría de Junta Directiva para que proceda a realizar la notificación a los interesados el oficio donde constan las respuestas a las oposiciones presentadas en la audiencia pública.

III. Instruir a la Secretaría de Junta Directiva para que proceda a realizar la respectiva publicación de esta metodología en el Diario Oficial La Gaceta.

IV. Instruir a la Secretaría de Junta Directiva para que proceda a realizar la notificación de la presente resolución a las partes.

En cumplimiento de lo que ordena el artículo 245 de la Ley General de la Administración Pública, contra la presente resolución cabe el recurso ordinario de reposición o reconsideración, el cual deberá interponerse en el plazo de tres días contados a partir del día siguiente a la notificación, y el recurso extraordinario de revisión, el cual deberá interponerse dentro de los plazos señalados en el artículo 354 de la citada ley. Ambos recursos deberán interponerse ante la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, a quien corresponde resolverlos.

Rige a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta.

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

Junta Directiva.—Alfredo Cordero Chinchilla, Secretario.—1 vez.—O.C. N° 9006-2018.—Solicitud N° 263-2018.—(IN2018303936).

INTENDENCIA DE ENERGÍA
RE-0107-IE-2018 del 7 de diciembre de 2018

SOLICITUD TARIFARIA PRESENTADA POR LA COOPERATIVA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE GUANACASTE, R.L. *(COOPEGUANACASTE)* PARA EL SERVICIO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

ET-033-2018

RESULTANDO:

I. Que Coopeguanacaste presta el servicio de generación eléctrica de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 8345, Ley de "Participación de las Cooperativas de Electrificación Rural y de las Empresas de Servicios Públicos Municipales en el Desarrollo Nacional".

II. Que el 4 de julio del 2018, mediante el oficio COOPEGTE GG337, la Cooperativa de Electrificación Rural de Guanacaste R.L. (Coopeguanacaste), presentó la solicitud para ajustar la tarifa del servicio de generación de energía eléctrica que presta (folios 01 al 02).

III. Que el 9 de julio del 2018, mediante el oficio 994-IE-2018, la Intendencia de Energía (IE) le previno a Coopeguanacaste el cumplimiento de los requerimientos necesarios para otorgar la admisibilidad de la petición tarifaria para el servicio de generación de energía eléctrica que presta (folios 205 al 207).

IV. Que el 16 de julio del 2018, mediante el oficio COOPEGTE GG356, Coopeguanacaste presentó la información solicitada por medio del oficio 994-IE-2018 (folios 200 al 204).

V. Que el 19 de julio del 2018, mediante el oficio 1074-IE-2018, la IE emitió el informe de admisibilidad de la solicitud para ajustar las tarifas del sistema de generación de energía eléctrica presentada por Coopeguanacaste (folios 208 al 209).

VI. Que el 19 de julio del 2018, mediante el oficio 1075-IE-2018, la IE otorgó la admisibilidad formal a la solicitud presentada por Coopeguanacaste para el servicio de generación de electricidad (folios 214 al 215).

VII. Que el 7 de agosto del 2018, mediante el oficio OF-1143-IE-2018, la IE le solicitó a Coopeguanacaste aclaración y detalle de la información aportada (folios 216 al 220).

VIII. Que el 17 de agosto del 2018, mediante el oficio COOPEGTE GG420, Coopeguanacaste presentó, la información solicitada por medio del oficio OF-1143-IE-2018 (folios 221 al 226).

IX. Que el 7 de agosto del 2018, se publicó la convocatoria a la audiencia pública en La Gaceta N° 142 (folios 233 al 234).

X. Que el 7 de agosto del 2018, se publicó la convocatoria a la audiencia pública en los diarios de circulación nacional La Teja y La Extra (folios 229 al 231).

XI. Que el 27 de agosto de 2018, mediante el oficio IN-0018-DGAU-2018 la Dirección General de Atención al Usuario (DGAU) emite el informe de instrucción de la correspondiente audiencia pública (folios 284 al 286).

XII. Que el 4 de setiembre del 2018 a las 17:00 horas, se llevó a cabo la respectiva audiencia pública. El 7 de setiembre del 2018 la Dirección General de Atención al Usuario remite el informe de oposiciones y coadyuvancias (oficio IN-0029-DGAU-2018), así como la respectiva Acta de la Audiencia Pública N° 44-2018 (oficio AC-0061-DGAU-2018). Se recibieron oposiciones válidas por parte de: Consejero del Usuario, representado por el señor Jorge Sanarrucia Aragón, cédula número 503020917, Yalile Carrera Blanco, cédula de identidad número 1-0334-0843, Bedyn Álvarez Gutiérrez, cédula de identidad número 5-0980-0723, José María Matarrita Mendoza, cédula de identidad número 5-0105-0449, John Henry Parker May, cédula de identidad número 7-0041-0927, Esaú Álvarez Espinoza, cédula de identidad número 5-0110-0219, Domingo Angulo Obando, cédula de identidad número 5-0146-0534, Ivonne Patricia Espinoza Rosales, cédula de identidad número 5-0279-0120, Grace María Pérez Gutiérrez, cédula de identidad número 5-0117-0626.

XIII. Que el 6 de setiembre de 2018, se recibe oposición por parte del Consejero del Usuario donde solicita *"[…] que se retrotraiga el proceso hasta la convocatoria a audiencia pública de manera que sean corregidos*

y ajustados los ajusten que se discutirán en la audiencia pública […]" (folios 600 a 604).

XIV. Que el 1 de octubre de 2018, mediante oficio IN-0019-IE-2018, la IE analizó la presente gestión de ajuste tarifario y en dicho estudio técnico recomendó, reprogramar la audiencia pública de la solicitud tarifaria presentada por Coopeguanacaste.

XV. Que el 1 de octubre de 2018, mediante resolución RE-0093-IE-2018 la Intendencia de Energía resolvió reprogramar la audiencia pública de la solicitud tarifaria presentada por Coopeguanacaste para los sistemas de generación y distribución de energía eléctrica (folio 680 a 691).

XVI. Que el 15 de octubre 2018, se publicó la convocatoria a la audiencia pública en La Gaceta N° 190 (folios 733).

XVII. Que el 16 de octubre 2018, se publicó la convocatoria a la audiencia pública en los diarios de circulación nacional La Teja y La Extra (folios 733).

XVIII. Que el 29 de octubre de 2018, mediante el oficio IN-0051-DGAU-2018 la Dirección General de Atención al Usuario (DGAU) emite el informe de instrucción de la correspondiente audiencia pública (folios 741 al 744).

XIX. Que el 8 de noviembre del 2018 a las 17:00 horas, se llevó a cabo la respectiva audiencia pública. El 15 de noviembre del 2018 la Dirección General de Atención al Usuario remite el informe de oposiciones y coadyuvancias (oficio IN-0074-DGAU-2018), así como la respectiva Acta de la Audiencia Pública N° 55-2018 (oficio AC-0186-DGAU-2018). Se recibieron oposiciones válidas por parte de: Consejero del Usuario, representado por el señor Jorge Sanarrucia Aragón, cédula número 503020917, Domingo Angulo Obando, cédula de identidad número 5-0146-0534, John Henry Parker May, cédula de identidad número 7-0041-0927, Gerardo Martín Araya Naranjo, cédula de identidad número 5-0290-0356, Ivonne Patricia Espinoza Rosales, cédula de identidad número 5-0279-0120, Gerardo Gutiérrez García, cédula de identidad número 1-0862-0699.

XX. Que el 7 de diciembre de 2018, mediante el oficio IN-0048-IE-2018, la IE, analizó la presente gestión de ajuste tarifario y en dicho estudio técnico recomendó fijar las tarifas del sistema de generación que presta Coopeguanacaste a partir del 1 de enero de 2019.

CONSIDERANDO:

I. Que del oficio IN-0048-IE-2018, citado y que sirve de base para la presente resolución, conviene extraer lo siguiente:

[…]

II. ANÁLISIS DEL ASUNTO

1. Solicitud tarifaria

Según la información aportada por Coopeguanacaste y que consta en el respectivo expediente, esta empresa solicitó ajustar la tarifa del sistema de generación de energía eléctrica, según el siguiente detalle:

Cuadro N° 1
Sistema de generación, Coopeguanacaste
Tarifa vigente y propuesta

Tarifa vigente - propuesta Sistema Generación								
Por consumo de energía (kWh), por cada kWh								
Periodo 1 oct 2018 - 31 dic 2019								
Estacional	**Tarifa vigente**		**Tarifa propuesta**		**Ajuste Absoluto**		**% Ajuste**	
Energía Punta	¢	50,45	¢	58,75	¢	8,30	16,45%	
Energía Valle	¢	41,29	¢	48,08	¢	6,79	16,45%	
Energía Nocturno	¢	35,30	¢	41,11	¢	5,81	16,45%	

Fuente: Folio 01, ET-033-2018.

Las razones que motivan la petición tarifaria para el sistema de generación que presta Coopeguanacaste se centra en: i) satisfacer el crecimiento de la demanda (las proyecciones de crecimiento de los usuarios), ii) cubrir las inversiones propuestas de forma que permita gestionar una base tarifaria que sea competitiva, eficiente y acorde con el sistema de generación, iii) cubrir los gastos de operación y mantenimiento.

2. Análisis de la solicitud

En este apartado se presenta el análisis regulatorio de la solicitud tarifaria propuesta por Coopeguanacaste para el servicio de generación de energía eléctrica.

a. Parámetros utilizados

Las proyecciones de los parámetros económicos utilizados por la IE para los respectivos estudios tarifarios y otras actividades que lo ameriten han sido elaboradas tomando como referencia el diagnóstico de la situación económica presentada por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) en su Programa Macroeconómico 2018-2019[1] y su revisión[2], así como las perspectivas de la economía mundial, según el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otras entidades internacionales.

En el 2005 la Junta Directiva del Banco Central decidió migrar, de manera gradual y ordenada, hacia una estrategia de política monetaria de Metas de Inflación, proceso que aún no ha concluido. Un esquema de Metas de Inflación hace explícito que su principal objetivo es la inflación, por lo que el anuncio de una meta para ésta (rango o valor puntual) constituye el ancla nominal explícita de la política monetaria. El principal instrumento de política es la tasa de interés de muy corto plazo y la ejecución de dicha política se realiza mediante la intervención discrecional del Banco Central en el mercado de dinero[3].

El BCCR en su Programa Macroeconómico 2018-2019 y en su Revisión, estableció como objetivo de inflación un 3% para el 2018 y 2019, con un rango de tolerancia de ±1 punto porcentual (p.p.).

Las estimaciones de la inflación local para un año particular parten de la información acumulada real, agregando para el resto del año la estimación citada anteriormente, en forma proporcional al tiempo que falta por transcurrir, calculando los meses faltantes con promedios geométricos.

En lo que respecta al tipo de cambio, como parte de la transición hacia un esquema monetario de Metas de Inflación que requiere de una mayor flexibilidad cambiaria, la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR), en el artículo 5 de la sesión 5677-2015 del 30 de enero del 2015, dispuso migrar de un régimen de banda cambiaria a uno de flotación administrada. Dadas estas condiciones, la Intendencia de Energía (IE) considera que la mejor alternativa es utilizar la última observación real, la cual corresponde con la de la fecha de la audiencia pública, y mantenerla constante para el periodo estimado.

---

[1] BCCR, https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/publicaciones/DocPolticaMonetariaInflacin/PM2018-2019.pdf
[2] BCCR, https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/publicaciones/DocPolticaMonetariaInflacin/RevisionPM-2018-2019.pdf
[3] BCCR, https://www.bccr.fi.cr/seccion-politica-monetaria/pol%C3%ADtica-monetaria

En lo que respecta a la inflación externa, medido por el Índice de Precios al Consumidor de los Estados Unidos, se recopila a partir del sitio web[4] del "U.S. Bureau of Labor Statistics" (siglas BLS, en inglés). Algunas fuentes, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) -a través del portal estadístico statista.com-, estima inflaciones para los Estados Unidos cercanas al 2,55% y 2,43% para el futuro cercano[5].

En el siguiente cuadro resumen se puede observar el comportamiento de los índices de inflación antes mencionados (interno y externo) y el porcentaje de depreciación del colón respecto al dólar para los últimos años reales (2014, 2015, 2016 y 2017) y las proyecciones para el 2018 y 2019.

Cuadro N° 2
Sistema de generación, Coopeguanacaste
Índices de precios y tipo de cambio utilizados en el estudio tarifario
Porcentajes de Variación Anuales (%)
Periodo 2014-2019

INDICES	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Variaciones según ARESEP (al final del año)						
Inflación interna (IPC-CR)	5,13%	-0,80%	0,76%	2,58%	3,00%	3,00%
Inflación Externa (IPC-USA)	0,76%	0,73%	2,07%	2,11%	2,55%	2,43%
Depreciación (¢/U.S.$)	7,82%	-0,12%	2,98%	2,04%	9,70%	0,00%
Variaciones según ARESEP (promedio anual)						
Inflación interna (IPC-CR)	4,52%	0,80%	-0,02%	1,63%	2,37%	3,57%
Inflación Externa (IPC-USA)	1,62%	0,12%	1,26%	2,13%	2,52%	1,92%
Depreciación (¢/U.S.$)	7,59%	-0,54%	2,05%	3,66%	2,22%	7,37%
Notas: Los años 2018 y 2019 son estimaciones. Las variaciones se calculan a finales de año (diciembre) o como variación de los promedios anuales de los respectivos índices.						
Fuente: Elaboración propia con base en datos del BCCR, BLS y FMI.						

b. Análisis del mercado

Este apartado exhibe el análisis de mercado elaborado para fijar la tarifa del sistema de generación que presta Coopeguanacaste. Este análisis de mercado se encuentra conformado por dos secciones, en la primera, se realiza una

[4] BLS, http://data.bls.gov/cgi-bin/surveymost?cu
[5] IMF (a través de statista.com), https://www.statista.com/statistics/244993/projected-consumer-price-index-in-the-united-states/

síntesis de los supuestos y principales resultados del informe propuesto por la cooperativa, y en una segunda parte se muestran los escenarios estimados por la Intendencia de Energía (IE), además de las diferencias encontradas y las justificaciones que respaldan cada aspecto del mercado final propuesto por la IE.

i. Mercado presentado por Coopeguanacaste:

Como parte del análisis realizado por la Intendencia de Energía (IE), se procedió a evaluar las variables que integran el estudio de mercado del sistema de generación que presta Coopeguanacaste. Los aspectos más sobresalientes de la evaluación se detallan seguidamente:

1. *Coopeguanacaste solicitó se realice un ajuste la tarifa del sistema de generación de 16,45%, tal y como se indica a continuación:*

Cuadro N° 3
Sistema de generación, Coopeguanacaste
Solicitud de ajuste tarifario presentado por bloque horario, 2018-2019
(datos presentados en colones por kWh)

	Tarifa Vigente	Tarifa Propuesta	Variación Propuesta
Por cada kWh	42,85	49,90	16,45%
Propuesta horaria			
Punta	50,45	58,75	16,45%
Valle	41,29	48,08	16,44%
Noche	35,30	41,11	16,46%

Fuente: Intendencia de Energía con datos de Coopeguanacaste.

2. *El sistema de generación incluye: la Central Hidroeléctrica Canalete; la Central hidroeléctrica Bijagua; el proyecto solar Juanilama - Belén, el cual inició en el mes de noviembre de 2017; el Proyecto Eólico Río Naranjo, el cual inició en el mes de agosto de 2018, y el Proyecto Eólico Cacao que según estimaciones de Coopeguanacaste entraría en el mes de noviembre de 2018. (Folios 58-65).*

3. *La empresa justificó la solicitud tarifaria en la necesidad de mantener el equilibrio financiero que debe de tener el sistema de generación de energía eléctrica, el cual se rige por normas regulatorias en el desarrollo de sus actividades e inversiones. Además, se requiere un autoabastecimiento competitivo, renovable y de calidad, que busque el beneficio de los usuarios del sistema de distribución el cual se abastecerá, en gran parte, con la energía del sistema de generación propio.*

4. *En las estimaciones de generación de energía eléctrica y potencia Coopeguanacaste utilizó datos reales hasta el mes de mayo de 2018.*

5. *De esta forma Coopeguanacaste proyectó una generación total de 251,32 GWh para el año 2019 la cual tomó en cuenta a los siguientes proyectos de generación eléctrica: la Central Hidroeléctrica Canalete; la Central Hidroeléctrica Bijagua; el proyecto solar Juanilama - Belén, el cual inició en el mes de noviembre de 2017; el P. Eólico Río Naranjo, el cual inició en el mes de agosto de 2018, y el P. Eólico Cacao que según estimaciones de Coopeguanacaste entraría en el mes de noviembre de 2018. (Folios 58-65).*

6. *Con la estructura tarifaria propuesta por Coopeguanacaste y de acuerdo con las proyecciones de producción eléctrica, el sistema de generación tendrá ingresos por ¢12 348,17 millones para el año 2019.*

ii. Análisis de mercado de la Intendencia de Energía (IE) y comparación con los resultados propuestos por Coopeguanacaste

Los siguientes son los aspectos más sobresalientes del estudio de mercado desarrollado por IE:

1. *La energía que se espera produzca el sistema de generación que presta Coopeguanacaste se calcula como la suma de las proyecciones individuales de cada una de sus plantas de generación. Esta estimación individual se calculó con los datos históricos desde enero del año 2010, en las que se disponga hasta octubre de 2018. A diferencia, Coopeguanacaste utilizó información real a mayo de 2018, lo que implica 5 meses menos de información real para el desarrollo de estimaciones y proyecciones.*

2. *Las estimaciones de energía para el año 2019 fueron realizadas mediante la utilización de modelos de series de tiempo desarrolladas en el software R, el cual realiza análisis de series de tiempo que responden a modelos cuantitativos de patrones históricos de la serie de datos. Es importante indicar que para el P.E. Río Naranjo, se disponía de poca información, por lo que se revisó la existencia de una elevada correlación entre la generación de la planta Aeroenergía y la planta Río Naranjo por lo que se estimó la generación de Aeroenergía con una modelación adecuada de Series de Tiempo y posteriormente mediante una regresión de Mínimos Cuadrados Ordinarios se realizó la modelación para obtener la generación de la planta Río Naranjo.*

3. *De modo similar se trabajó la planta de generación solar Juanilama, tomando en consideración el proyecto solar Miravalles. Se realizó una proyección mediante un modelaje de Series de Tiempo y con un modelo de regresión de Mínimos Cuadrados Ordinarios, se realizó la proyección de la generación de la planta Juanilama.*

4. *En cuanto a la generación del proyecto Eólico El Cacao, dado que este aún no ha iniciado operaciones, no se dispone de información para el desarrollo del modelo y por tanto se analizó la estimación remitida por la empresa regulada y se aceptó dicha proyección. No obstante, se aclara que de conformidad con la visita técnica y criterio del Proceso de Inversiones de esta Intendencia, se considera que el proyecto iniciará operaciones aproximadamente en el mes de enero, por lo que se incorporó la generación estimada a partir de dicho mes.*

5. *En este contexto, la IE proyectó una producción total de las plantas de Coopeguanacaste de 253,5 GWh, es decir un 0,8% mayor para el año 2019, que la estimada por Coopeguanacaste. Por lo que se puede concluir que las proyecciones de Coopeguanacaste y la IE son muy similares.*

6. *Para estimar las ventas mensuales de energía, por periodo horario del 2019, se utilizó la distribución proporcional de la producción mensual de energía, reportadas por la empresa a la IE, correspondientes al año 2018 y los meses faltantes (noviembre y diciembre) con el último reporte real, es decir con el año 2017.*

7. *Los ingresos mensuales del Sistema de Generación para el 2019 se calcularon con las tarifas vigentes RIE-116-2017 y publicadas en Alcance digital N° 277, Gaceta N° 217 del 16 de noviembre de 2017.*

8. *Con las ventas estimadas se espera que el sistema de generación reciba ingresos, para el año 2019, cercanos a los ¢10 939,7 millones de colones, tal como se detalla en el siguiente cuadro:*

ASPECTO	***2019***
Generación total (GWh)	*253,3*
Ingresos (En millones de colones)	*10 939,7*
¢ / kWh (*)	*43,1*

Fuente: Autoridad Reguladora, Intendencia de Energía y Coopeguanacaste.

9. *En este estudio tarifario no se realizó el proceso de liquidación. Se considerará para el próximo estudio tarifario, cuando haya finalizado el periodo de vigencia de la tarifa, que sería del año 2018.*

10. *Con base en el análisis financiero contable efectuado por la IE, se establecen los ingresos requeridos por el sistema de generación de Coopeguanacaste para el año 2019 en ¢2 377,7 millones.*

11. *Para alcanzar los ingresos adicionales resulta necesario realizar un ajuste en la tarifa del sistema de generación que presta Coopeguanacaste del 21,73% a partir del 1ero de enero del año 2019.*

12. *Con el ajuste anterior se espera que el sistema de generación alcance ingresos anuales cercanos a los ¢13 316,4 millones y la tarifa media anual del sistema alcance los ¢52,5.*

c. Análisis de inversiones

Como resultado del análisis del plan de inversiones y adición de activos presentados por Coopeguanacaste para el sistema de generación de energía eléctrica para el periodo 2018-2019, se presenta el siguiente detalle:

i. Adiciones propuestas para el sistema de generación según Coopeguanacaste

Las adiciones que muestra Coopeguanacaste, son parte del plan de inversión que ha venido desarrollando para la expansión y mejoramiento del sistema de generación, para los años 2018 y 2019. El detalle de las obras de inversión consideradas por la empresa regulada para cada período en cuestión puede ser verificado por cualquier interesado en las carpetas digitales del Estudio tarifario ET-033-2018, Carpeta ET-CG GEN 2019\Capitulo 4 Inversiones\4.2 Adiciones\4.2.1 Macroinversiones y 4.2.2 Microinversiones (según el sistema). (Folio 198) en las cuales encontrarán las estructuras de costos y justificaciones presentadas para los requerimientos y obras de inversión del sistema de generación de la empresa.

a) Adiciones realizadas durante el período 2018 y 2019:

Coopeguanacaste presentó en el informe de justificaciones y en las estructuras de costos de micro y macro-inversiones, el detalle de las adiciones materializadas y previstas durante el año 2018, pues para el 2019 no prevé realizar ninguna obra o adición de activos al sistema de generación. El detalle puede ser consultado en las carpetas digitales del Estudio Tarifario ET-033-2018, como se indica en el apartado anterior.

b) Adiciones desarrollas y previstas para 2018:

A continuación, se presenta el detalle de las micro y macro-inversiones consideradas por la empresa en la presente solicitud:

a. Macro inversiones-sistema de generación 2018:

i. Proyecto Eólico Río Naranjo.

La justificación e información relevante del proyecto se encuentra disponible en la carpeta digital ET-CG GEN 2019\Capitulo 4 Inversiones\4.2 Adiciones\4.2.1 Macro-inversiones\PE Rio Naranjo. De igual forma, se recuerda que este proyecto ya fue valorado en el marco del Estudio ET-055-2017, presentado por Coopeguanacaste en 2017.

No obstante, es importante destacar que las estimaciones de inicio de operación comercial del proyecto prevista por Coopeguanacaste para febrero 2018, no se cumplieron, considerando que el proyecto inició operación comercial el 18 de agosto de 2018 a las 6:47 a.m., según fue informado en la planta el día de la

visita técnica que se realizó el 22 de agosto de 2018 con el objetivo de verificar el estado de la planta.

En reunión realizada el 20 de agosto de 2018, en las instalaciones centrales de la Cooperativa, Coopeguanacaste informó que el Proyecto Eólico Río Naranjo, de acuerdo con el gráfico de curvas, tiene un avance real de 100% y un avance programado del 100%. Sobre este informe en particular llama la atención los datos expuestos, ya que el cronograma inicial, que fue aportado en el marco del ET-055-2017, indicaba una fecha de inicio de operación a febrero 2018, lo cual con lo realmente resultante representó un atrasado de aproximadamente 6 meses. No obstante, el reporte presentado no visibiliza dichos atrasos y supone que el proyecto no tuvo ninguna desviación, lo cual pareciera ser una información poco precisa y forzada. Realmente no fue posible precisar la línea base tomada por Coopeguanacaste para realizar los reportes de avances reales y programados. Por tanto, se considera que los datos aportados no son consistentes, considerando que no reflejan la realidad que marcó la entrada en operación del proyecto.

Lo anterior adquiere relevancia, debido al impacto que tendrá este atraso al momento de realizar la liquidación de mercado, considerando que las proyecciones de generación de P.E Río Naranjo, realizadas en el Estudio tarifario anterior (ET-055-2017), fueron calculadas a partir de abril de 2018, pero no fue hasta agosto 2018 que la planta realmente inició operación comercial, por lo que existe un desfase reconocido de más de aproximadamente 4 meses y medio.

Durante la visita técnica mencionada (ver registro fotográfico en el Anexo No. 4), se verifica que efectivamente la Planta Eólica Río Naranjo se encuentra en operación comercial y capitalizada en 2018. De igual forma, se tratan en dicha visita aspectos sobre el proceso constructivo y duraciones de los principales hitos, avances y decisiones constructivas que se detallan a continuación:

- ✓ *En noviembre empezaron los vientos fuertes.*
- ✓ *En la primera semana de diciembre 2017 se tuvieron las fundaciones realizadas.*
- ✓ *En diciembre 2017 también se tenía el edificio de control listo y acabado.*
- ✓ *El transporte y arribo a sitio de aerogeneradores tuvo una duración de 3 semanas.*
- ✓ *Se postergaron los montajes de las torres para realizarlo en el mes de abril, época de bajo viento.*
- ✓ *ENERCON tuvo un retraso de casi 15 días, por problemas en desalmacenaje de un insumo.*
- ✓ *A finales de abril inicio el montaje, el cual finalizó el 25 de mayo de 2018.*

- ✓ *Conforme iban armando las torres se realizaba el conexionado de cada aerogenerador, dura 3 días.*
- ✓ *A finales del mes de abril, en paralelo, comenzaron a llegar las celdas de potencia, a mediados de mayo realizaron pruebas de timbrado de celdas.*
- ✓ *El colector tuvo una duración de 1 semana, debido a la corta distancia entre los aerogeneradores y el edificio de control.*
- ✓ *La energización del colector se realizó a inicios de junio.*
- ✓ *El 28 de mayo de 2017 inició el proceso de commisioning, o pruebas y puesta en marcha de cada aerogenerador y finalizó a mediados de junio.*
- ✓ *El proceso de conexión a ST Miravalles, finalizó en la semana del 20 de junio.*
- ✓ *Las pruebas equipo electromecánico, telemetría y telecontrol internas se realizaron en el mes de junio.*
- ✓ *El Trial Operation con ENERCON, finalizó el 13 de julio.*
- ✓ *Las pruebas de 200 horas en modo de autosuficiencia tuvieron una duración de 8 días.*
- ✓ *El WEC 01 tuvo un daño en el engranaje de giro.*
- ✓ *Programaron las pruebas con el CENCE: el 25 de julio iniciaron las pruebas de medición, protección, telemetría, huecos de tensión, protecciones de los aerogeneradores. Se finalizó el martes 14 de agosto.*
- ✓ *El 18 de agosto de 2018 a las 6:47 a.m. se dio el inicio de operación comercial del PE Río Naranjo.*

Cabe destacar que en el ET-055-2017, se había realizado la valoración del costo de inversión y se considera que el proyecto cuenta con una información técnica y justificación razonable, y que por ende los recursos solicitados son necesarios para ampliar la capacidad de generación propia de la empresa para atención de su demanda en su zona de concesión.

ii. Proyecto Eólico Cacao

En el análisis de inversiones realizado bajo el estudio ET-055-2017, se presentó el Proyecto Eólico Cacao, el cual con la información que la cooperativa aportó en dicho estudio, se determinó que dicho proyecto no alcanzaría a ser capitalizado y habilitado operativamente por Coopeguanacaste debido a inconsistencias en el cronograma de trabajo del proyecto y avances de obra.

Mediante la RIE-116-2017 del 14 de noviembre del 2017, la IE expuso las motivaciones para excluir el Proyecto Eólico Cacao, en esa oportunidad Coopeguanacaste estaba solicitando para el año 2018 las siguientes tarifas: ¢60,17, ¢52,21 y ¢44,53 en los horarios de "punta", "valle" y "noche" respectivamente, que correspondía a un precio promedio de ¢52,83/kWh. Sin

embargo, tras los ajustes y análisis realizados por esta Intendencia (entre ellos la exclusión del P.E. Cacao), la IE fijó las tarifas de ¢50,45, ¢41,29 y ¢35,30 en el mismo orden citados, que correspondía a un precio promedio de ¢42,85/kWh.

Cabe señalar, que en el expediente que nos ocupa ET-033-2018, la Cooperativa solicitó tarifas para el año 2019 de la siguiente forma: ¢58,75, ¢48,08 y ¢41,11 en los horarios de "punta", "valle" y "noche" respectivamente, para un precio medio de ¢49,90/kWh. Las tarifas propuestas por la IE corresponden a los siguientes montos: ¢61,41, ¢50,26 y ¢42,97, en el mismo orden citados, para un precio medio de ¢52,50/kWh.

En este contexto, como se puede apreciar, los ajustes propuestos son ligeramente mayores a los solicitados por el petente, debido a las razones expuestas en el apartado "Principales variables que explican el cambio de los ingresos y la tarifa", además estas tarifas incluyen la entrada del P.E. El Cacao. Al comparar las tarifas propuestas por la IE con la pretensión de la Cooperativa tramitada bajo el expediente ET-055-2017, se puede encontrar cierta similitud en los datos producto de la inclusión de este proyecto.

Bajo la nueva solicitud tarifaria solicitada por la cooperativa bajo el expediente ET-033-2018, la empresa presenta la información técnica del proyecto la cual puede ser verificada por cualquier interesado en carpeta Digital ET-CG GEN 2019\Capitulo 4 Inversiones\4.2 Adiciones\4.2.1 Macroinversiones\PE Cacao (el ET-033-2018).

Cabe destacar que, durante el mes de abril de 2018, se realizó una primera visita de seguimiento del Proyecto para verificar el avance real y programado registrado. En esa oportunidad se logró verificar el avance en el movimiento de tierras, constitución de caminos y el avance en la construcción de las cimentaciones del edificio de control y de los aerogeneradores.

Adicionalmente, en el marco del análisis tarifario del presente estudio ET-033-2018, los días 20 de agosto, 20 de setiembre y 19 de noviembre de 2018 se realizan reuniones de seguimiento y visitas técnicas para verificar el avance real y programado del proyecto. Al respecto se evidenció un alto nivel de avance en obra civil, montaje electromecánico de PCyM y Montaje de aerogeneradores.

En la última visita del 19 de noviembre, se constató que se estaba en proceso de finalización del montaje del sexto aerogenerador, el Edificio control está terminado, al igual que el montaje de los equipos de potencia, control y medición, la construcción de línea de transmisión está finalizada y pendiente la conexión definitiva para la energización.

El día 20 de noviembre, CENCE inició pruebas de medición comercial sobre Transformadores de potencial y corriente, quedando pendiente el montaje de 3 aerogeneradores.

.

Estima finalizar el montaje de los aerogeneradores el en la semana del 07 de diciembre de 2018 y se iniciará pruebas finales de los aerogeneradores tales como huecos de tensión, telemetría y telecontrol, a partir del 10 de diciembre de 2018.

Se verificó el arribo a sitio de los segmentos para el montaje de cada aerogenerador y equipos, se encontraba en proceso el transporte de las aspas de cada unidad, al momento de la visita únicamente se encontraban 3 aspas en el patio de almacenaje de las oficinas centrales de Coopeguanacaste.

Durante la visita el 19 de noviembre del 2018, Coopeguanacaste informó sobre el estado actual del proyecto e indicó lo siguiente:

- ✓ *El proyecto inició en noviembre de 2017.*
- ✓ *Avance real: 95%.*
- ✓ *Obra civil 100%.*
- ✓ *Línea de transmisión 100%.*
- ✓ *PCyM, se tiene un avance de 92%.*
- ✓ *El proceso de fibra óptica esta lista.*
- ✓ *El proceso de telemetría está pendiente.*
- ✓ *El proceso con ENERCON se tiene un 83%.*
- ✓ *Tienen el proceso de montaje del sexto aerogenerador.*
- ✓ *Faltan las WEC 5,4 y 3, pendientes de montaje.*
- ✓ *Nos indica personal técnico de Coopeguanacaste que se trasladan dos aspas por día por WEC.*
- ✓ *El ritmo de montaje oscila entre 5 y 7 días de armado según personal técnico de Coopeguanacaste.*
- ✓ *Según equipo técnico de Coopeguanacaste el plan de capitalización PE Cacao, se tiene previsto dicho proceso para la tercera semana o última de diciembre del 2018.*
- ✓ *Edificio de control en con un avance del 100%.*

Al respecto, según lo indicado por Coopeguanacaste y luego de lo evidenciado en campo y según los tiempos indicados por la empresa en el cronograma aportado, se evidencia un importante nivel de avance del proyecto luego del ajuste de la programación, pues muchas de las tareas programadas se encuentran completadas.

Por otra parte, según indica Coopeguanacaste, la fecha estimada de inicio de operación comercial de P.E. el Cacao, es el 19 de diciembre de 2018 y su capitalización será realizada durante el mes de diciembre de 2018, según consta en informe de avance del 22 de noviembre de 2018 el cual fue incorporado al ET-055-2017.

Por estas razones se recomienda considerar el Proyecto Eólico El Cacao como parte de las adiciones del periodo 2018, y las estimaciones de energía a partir del 01 de enero de 2019.

Cabe destacar que el proyecto cuenta con información técnica y justificación razonable, y que por ende los recursos solicitados son necesarios para ampliar la capacidad de generación propia de la empresa para atención de su demanda en su zona de concesión.

b. Micro-inversiones-Sistema de Generación

i. Micro-inversiones- Modernización sistema de producción y Planta general 2018:

Las micro-inversiones realizadas por Coopeguanacaste en el período 2018 y 2019, se encuentran detalladas en la carpeta digital ET-CG GEN 2019\Capitulo 4 Inversiones\4.2 Adiciones\4.2.2 Microinversiones (según el sistema). ET-033-2018.

1. Compra de vehículos para proyectos eólicos

Coopeguanacaste requiere garantizar la movilización del personal de los proyectos, para cumplir de manera adecuada con las labores de mantenimiento y demás diligencias que se requieran en la Plantas Eólicas que se construirán durante el periodo 2018.

Al respecto la IE, considera que la justificación es técnicamente razonable, y que por ende los recursos solicitados son necesarios para realizar las labores de mantenimiento con mayor agilidad y oportunidad.

2. Compra de herramientas eléctricas para los proyectos eólicos.

Coopeguanacaste requiere contar con el equipo necesario para los técnicos eléctricos de los parques eólicos, así como de las herramientas necesarias para el aseguramiento de la disponibilidad de la producción de las plantas.

Al respecto la IE, considera que la justificación es técnicamente razonable, y que por ende los recursos solicitados son necesarios para realizar las labores de mantenimiento con mayor agilidad y oportunidad.

3. Compra de herramientas para mantenimiento de fincas.

Coopeguanacaste requiere contar con las herramientas para labores de mantenimiento de las fincas y obras civiles de los proyectos eólicos.

Al respecto la IE, considera que la justificación es técnicamente razonable, y que por ende los recursos solicitados son necesarios para realizar las labores de mantenimiento con mayor agilidad y oportunidad.

4. Construcción de bodega para almacenamiento de materiales.

Coopeguanacaste, presenta el requerimiento de la construcción de una Bodega para almacenamiento de materiales y repuestos de las centrales hidroeléctricas y de materiales peligrosos como aceites y combustibles.

En relación con esto se señala que "(…) el INS en una de sus inspecciones solicita la construcción de una bodega para solucionar el problema. (…)"

Al respecto la IE, considera que la justificación es técnicamente razonable, y que por ende los recursos solicitados son necesarios para la seguridad de las Centrales

c) Capacidad de Ejecución

De acuerdo con la metodología tarifaria vigente el porcentaje de ejecución se calcula con base a los 5 años anteriores al año en consideración en el actual estudio tarifario.

El cuadro siguiente muestra el comparativo de adiciones reconocidas y ejecutadas conforme a lo indicado, en donde se puede ver el porcentaje de ejecución por cada año del 2013 al 2017. Cabe destacar que la última fijación tarifaria fue realizada para el año 2013 y correspondía al sistema de distribución,

por tanto, se mantienen los montos reconocidos por Aresep en la fijación del 2012, y en el rubro monto ejecutado, los montos de adiciones reales ejecutados por Coopeguanacaste para el sistema de distribución.

Cuadro N° 4
Sistema de generación, Coopeguanacaste
Porcentaje de ejecución, 2013-2017

Porcentaje de ejecución para el Sistema de Generación COOPEGUANACASTE Millones de colones				
Año	**Monto ARESEP**	**Monto JASEC**	**Porcentaje de Ejecución**	**Porcentaje de ejecución ajustado***
2013	1.374,30	3.457,86	252%	
2014	1.374,30	1.510,99	110%	
2015	1.374,30	1.639,38	119%	
2016	1.374,30	41.078,70	2989%	
2017	1.374,30	1.756,35	128%	
Promedio		**1 756,35**	**719,54%**	**100,00%**

Según Metodología Tarifaria Vigente
GACETA 120, ALCANCE DIGITAL No 81 del 07 de junio de 2012, RESOLUCIÓN 870-RCR-2012, ET-022-2012

Tal y como se indicó, los montos reconocidos por Aresep en los años del 2013 al 2017 corresponden a adiciones del sistema de distribución, pues antes no se había realizado fijación tarifaria separada sobre el sistema de generación.

Por tanto, el porcentaje de ejecución que debe considerarse según lo establecido en la metodología es de un 100,00%, el cual representa el porcentaje promedio para el último quinquenio.

ii. Adición de los activos del sistema de generación.

A continuación, se presenta la proyección de adiciones de activo fijo pretendida por la empresa eléctrica.

Cuadro N° 5
Sistema de generación, Coopeguanacaste
Resumen de adiciones contables
(millones de colones)

Resumen de adiciones contable (montos en millones de colones)			
Número de Cuenta	**Cuenta COOPEGUANACASTE**	**COOPEGUANACASTE**	
	Planta Generación	**2018**	**2019**
	Proyecto Eólico Cacao		
1.2.3.01.01.01.01	OBRA METALMECANICA GENERACION EOLICA AL COSTO	0,00	0,00
1.2.3.01.01.99.01	OBRA ELECTROMECANICA GENERACION ACTIVDAD EOLICA AL COSTO	20.107,12	0,00
1.2.3.01.02.01.01	OBRA CIVIL ACTIVOS GENERACION ACTIVIDAD EOLICA AL COSTO	7.189,69	0,00
1.2.3.01.02.99.01	EQUIP. COMUNI. MONITOR GENERACION ACTIVIDAD EOLICA COSTO	37,27	0,00
1.2.3.01.03.01.01	MOBI. EQUIP. OFICI. GENERACION ACTIVIDAD EOLICA AL COSTO	22,00	0,00
1.2.3.01.04.01.	EQUIP. ELECTRONICO GENERACION ACTIVIDAD EOLICA AL COSTO	252,44	0,00
1.2.3.01.05.01.	TERRENOS GENERACION ACTIVIDAD EOLICA AL COSTO	931,25	0,00
1.2.3.01.06.01.	LINEA TRANSMICION GENERACION ACTIVIDAD EOLICA AL COSTO	429,94	0,00
	Proyecto Eólico Río Naranjo		
1.2.3.01.01.01.01	OBRA METALMECANICA GENERACION EOLICA AL COSTO	0,00	0,00
1.2.3.01.01.99.01	OBRA ELECTROMECANICA GENERACION ACTIVDAD EOLICA AL COSTO	6.923,78	0,00
1.2.3.01.02.01.01	OBRA CIVIL ACTIVOS GENERACION ACTIVIDAD EOLICA AL COSTO	2.952,22	0,00
1.2.3.01.02.99.01	EQUIP. COMUNI. MONITOR GENERACION ACTIVIDAD EOLICA COSTO	16,85	0,00
1.2.3.01.03.01.01	MOBI. EQUIP. OFICI. GENERACION ACTIVIDAD EOLICA AL COSTO	14,15	0,00
1.2.3.01.04.01.	EQUIP. ELECTRONICO GENERACION ACTIVIDAD EOLICA AL COSTO	102,52	0,00
1.2.3.01.05.01.	TERRENOS GENERACION ACTIVIDAD EOLICA AL COSTO	0,00	0,00
1.2.3.01.06.01.	LINEA TRANSMICION GENERACION ACTIVIDAD EOLICA AL COSTO	41,01	0,00
Subtotal Generación		**39.020,26**	**0,00**
	Planta General		
1.2.3.01.04.01.	Equipos de transporte, tracción y elevación	34,00	0,00
1.2.3.01.99.01.	herramientas	5,53	0,00
1.2.3.01.02.01.01	Edificio	25,00	0,00
Subtotal Planta General		**64,53**	**0,00**
TOTAL		**39.084,78**	**0,00**

Fuente: Carpeta- Estudio Tarifario COOPEGUANACASTE ET-CG GEN 2019\Capitulo 4 Inversiones\4.2 Adiciones\4.2.3 Resumen de adiciones tecnico -contable. IE RE 7802 Res adiciones tecnico contable. ET-033-2018

Una vez analizada la petición de ajuste tarifario presentado por Coopeguanacaste, y luego de revisados los parámetros económicos de tipo de cambio y las inflación interna y externa, en el siguiente cuadro se presenta la propuesta de adiciones, según la IE (ajustada por el porcentaje de ejecución, y por el respectivo índice de precios):

Cuadro N° 6
Sistema de generación, Coopeguanacaste
Resumen de adiciones contables, Aresep
(millones de colones)

Resumen de adiciones contable (montos en millones de colones)			
Número de Cuenta	**Cuenta COOPEGUANACASTE**	**ARESEP**	
	Planta Generación	**2018**	**2019**
	Proyecto Eólico Cacao		
1.2.3.01.01.01.01	OBRA METALMECANICA GENERACION EOLICA AL COSTO	0,00	0,00
1.2.3.01.01.99.01	OBRA ELECTROMECANICA GENERACION ACTIVDAD EOLICA AL COSTO	19.936,80	0,00
1.2.3.01.02.01.01	OBRA CIVIL ACTIVOS GENERACION ACTIVIDAD EOLICA AL COSTO	7.128,79	0,00
1.2.3.01.02.99.01	EQUIP. COMUNI. MONITOR GENERACION ACTIVIDAD EOLICA COSTO	36,92	0,00
1.2.3.01.03.01.01	MOBI. EQUIP. OFICI. GENERACION ACTIVIDAD EOLICA AL COSTO	21,81	0,00
1.2.3.01.04.01.	EQUIP. ELECTRONICO GENERACION ACTIVIDAD EOLICA AL COSTO	250,10	0,00
1.2.3.01.05.01.	TERRENOS GENERACION ACTIVIDAD EOLICA AL COSTO	922,61	0,00
1.2.3.01.06.01.	LINEA TRANSMICION GENERACION ACTIVIDAD EOLICA AL COSTO	426,30	0,00
	Proyecto Eólico Río Naranjo		
1.2.3.01.01.01.01	OBRA METALMECANICA GENERACION EOLICA AL COSTO	0,00	0,00
1.2.3.01.01.99.01	OBRA ELECTROMECANICA GENERACION ACTIVDAD EOLICA AL COSTO	6.865,13	0,00
1.2.3.01.02.01.01	OBRA CIVIL ACTIVOS GENERACION ACTIVIDAD EOLICA AL COSTO	2.927,22	0,00
1.2.3.01.02.99.01	EQUIP. COMUNI. MONITOR GENERACION ACTIVIDAD EOLICA COSTO	16,69	0,00
1.2.3.01.03.01.01	MOBI. EQUIP. OFICI. GENERACION ACTIVIDAD EOLICA AL COSTO	14,03	0,00
1.2.3.01.04.01.	EQUIP. ELECTRONICO GENERACION ACTIVIDAD EOLICA AL COSTO	101,57	0,00
1.2.3.01.05.01.	TERRENOS GENERACION ACTIVIDAD EOLICA AL COSTO	0,00	0,00
1.2.3.01.06.01.	LINEA TRANSMICION GENERACION ACTIVIDAD EOLICA AL COSTO	40,66	0,00
Subtotal Generación		**38.688,63**	**0,00**
	Planta General		
1.2.3.01.04.01.	Equipos de transporte, tracción y elevación	33,70	0,00
1.2.3.01.99.01.	herramientas	5,48	0,00
1.2.3.01.02.01.01	Edificio	24,79	0,00
Subtotal Planta General		**63,97**	**0,00**
TOTAL		**38.752,60**	**0,00**

Fuente: Carpeta- Estudio Tarifario COOPEGUANACASTE ET-CG GEN 2019\Capitulo 4 Inversiones\4.2 Adiciones\4.2.3 Resumen de adiciones tecnico -contable. IE RE 7802 Res adiciones tecnico contable. ET-033-2018

iii. Retiro de activos del sistema de generación.

En el caso de retiro de activos, se indica que Coopeguanacaste no presentó información de los retiros asociados al sistema de generación para ninguno de los años 2017, 2018 y 2019, según consta en la carpeta digital ET-CG GEN 2019\Capitulo 4 Inversiones\4.3 Retiros (ET-033-2018).

Llama la atención esta falta de información, ya que, por efectos del Huracán Otto, Coopeguanacaste realizó inversiones capitalizables por daños a equipos o infraestructura, lo cual debería estar reflejado al menos en los retiros asociados al período 2017.

d. Retribución de Capital

De acuerdo con la metodología tarifaria vigente la base tarifaria está compuesta por el activo fijo neto en operación revaluado promedio y el capital de trabajo de la empresa. Sobre la base tarifaria se reconoce el rédito al desarrollo, con el objetivo de incentivar la reinversión de recursos y garantizar el suministro futuro del servicio eléctrico en calidad y cantidad óptima mediante la inversión en el servicio regulado.

El rédito para el desarrollo se obtiene mediante la aplicación de dos modelos, el Costo Promedio Ponderado de Capital y el Modelo de Valoración de Activos de Capital; más adelante se detalla el cálculo del rédito para el desarrollo de Coopeguanacaste, así como las circunstancias presentadas que influyeron en el desarrollo de los cálculos.

Coopeguanacaste, obtuvo para el sistema de generación, un costo de capital propio del 3,32% y un 6,97% del costo promedio ponderado de capital.

Los valores y fuentes de información utilizados en el cálculo son:

- *La tasa libre de riesgo es la tasa nominal de los bonos del tesoro de los Estados Unidos de América, los bonos son a 10 años, en cuanto a la extensión de la serie histórica, se utilizan 5 años; tomándose para cada año el promedio anual publicado. Esta información está disponible en la dirección electrónica http://www.federalreserve.gov/datadownload/Build.aspx?rel=H15. En este caso corresponde a un 2,24%*

- *Para el cálculo de la beta desapalancada se utiliza la variable denominada "Utility (General)". Esta variable se empleará para el cálculo del beta apalancado de la inversión; siendo de 0,20 la beta desapalancada para el periodo en estudio y el beta apalancado de 0,48. En sus cálculos la Cooperativa utilizó la beta desapalancada equivalente a un 0,20.*

- *Para el cálculo de la prima por riesgo (PR) se emplea la variable denominada "Implied Premium (FCFE)", cuyo dato es de 5,53%. Estos datos se obtienen de la página de internet http://www.stern.nyu.edu/~adamodar, calculándose a partir de una serie histórica de 5 años, una observación por año.*

- *El costo de endeudamiento se determina del valor de las obligaciones con costo financiero, obtenidas del promedio ponderado de las tasas de*

interés de los pasivos con costo, para determinar el cálculo la IE utilizó la información de los estados financieros auditados a diciembre 2017 y los estados financieros disponibles al mes de marzo del 2018. Para el caso del sistema de generación este corresponde al 9,37%.

Como resultado de lo anterior se determinó que el costo promedio ponderado del capital para el servicio de generación de electricidad que presta Coopeguanacaste es el siguiente:

Cuadro N° 7
Sistema de generación, Coopeguanacaste
Rédito de Desarrollo,
2019

Coopeguanacaste	Estimación Coopeguanacaste		Estimación Aresep	
	Modelo de Valoración de Activos de Capital (CAPM)	Costo promedio ponderado del capital (WACC)	Modelo de Valoración de Activos de Capital (CAPM)	Costo promedio ponderado del capital (WACC)
Sistema de generación	3,32%	6,97%	4,89%	7,55%

Fuente: ARESEP

De acuerdo con lo anterior, el costo ponderado del capital otorgado a Coopeguanacaste para el sistema de generación (modelo WACC) es de 7,55%; mientras que el costo del capital propio es de 4,89%.

El resultado del costo ponderado del capital otorgado a Coopeguanacaste, resultó diferente, debido a que la I.E. consideró el valor del capital propio, el saldo de los préstamos y tasas de interés conforme a los estados financieros auditados de generación eléctrica, en algunos casos el dato fue omiso por lo que se consideró la tasa pactada en el contrato de financiamiento.

Es importante indicar que el monto obtenido como rédito para el desarrollo ¢7 169,81 millones, debe ser suficiente para atender el costo de la deuda de largo plazo, las micro-inversiones y aquellas macro-inversiones que no conlleven una obligación financiera con terceros.

Análisis del endeudamiento del sistema de generación de Coopeguanacaste:

Para el cálculo del valor de la deuda se analizaron los contratos e información adicional aportada por la empresa con corte a marzo del año 2018, del cual se reconocieron los siguientes préstamos:

No. OPERACION	***PROYECTO***	***SALDO***	***BANCO***
#5859246-5859260	*CH CANALETE*	*-*	*BCR*
#5859692	*CH BIJAGUA*	*1.077.124.663,20*	*BCR*
#5885101	*CH BIJAGUA*	*1.270.527.405,40*	*BCR*
#50105506	*CH BIJAGUA*	*589.186.126,47*	*BICSA*
#001-0202-003-30702127	*CH BIJAGUA*	*8.555.337.569,99*	*BNCR*
#1-596-1-2-5915401	*CH BIJAGUA*	*5.709.453.033,40*	*BCR*
#0840102149640	*CH BIJAGUA*	*9.521.467.304,46*	*BPDC*
#001-0202-003-30808692	*CH BIJAGUA*	*2.158.741.219,52*	*BNCR*
#50105503	*PE CACAO*	*478.834.386,31*	*BNCR*
#5951654	*PE CACAO*	*3.287.522.986,07*	*BCR*
#30864687	*PE CACAO*	*2.501.185.496,00*	*BNCR*
#5961397	*PE RIO NARANJO*	*6.245.755.441,42*	*BCR*

Fuente: *Contratos de operaciones crediticias y estados financieros.*

En el cuadro anterior se puede observar cada una de las fuentes de financiamiento para cada proyecto, entre ellos los Proyectos Eólicos Cacao y Río Naranjo.

Una vez que se ha determinado las adiciones de activos o el valor del "Proyecto Eólico Cacao", se evidencia que Coopeguanacaste no incluyó en su información la totalidad de las deudas para ejecutar este proyecto, lo que incide en el cálculo del "costo de endeudamiento", que forma parte de la fórmula para obtener el Costo Ponderado del Capital (WACC). Por lo cual, se le indica que en la próxima solicitud tarifaria debe de aportar dicha información de forma que la tarifa refleje la realidad financiera de la entidad.

Adicionalmente, se incorporó un breve análisis de los indicadores financieros de la Cooperativa, para los sistemas de generación y distribución, así como a nivel consolidado del sector electricidad, tal como se muestra seguidamente:

Cuadro N° 8
Sistema de generación, Coopeguanacaste
Razones financieras
Con datos a marzo del año 2018

Ratios	Distribución	Generación	Sector Energía
Razón Corriente/ Liquidez	0,80	0,03	0,74
Índice de Endeudamiento	0,28	0,58	0,51
Calidad de la deuda	0,69	0,04	0,20
Autonomía	2,53	0,73	0,95
Apalancamiento	0,39	1,36	1,06

Fuente: Elaboración propia.

Tal como se visualiza, en la razón de liquidez la Cooperativa tiene capacidad de cubrir en un 74% sus pasivos a corto plazo para el sector electricidad, así como un 80% y 3% para los sistemas de distribución y generación respectivamente. En el caso de este último llama la atención la capacidad tan baja, por lo que se advierte al petente su responsabilidad de realizar una adecuada gestión de forma que impacte positivamente sobre sus indicadores financieros.

Por otra parte, en cuanto al índice de endeudamiento, se observa que un 28%, 58% y 51% de los activos se han financiado por terceros, para los sistemas de distribución, generación y el sector electricidad, respectivamente.

La calidad de la deuda es importante porque refiere a la proporción de los pasivos que se deben cubrir a corto plazo, dicha proporción corresponde al 69%, 4% y 20% para los sistemas de distribución, generación y el sector electricidad, en el mismo orden citados.

La autonomía nos indica la proporción en que el patrimonio permite cubrir los pasivos de la entidad, dicha proporción corresponde al 253%, 73% y 95% para los sistemas de distribución, generación y el sector electricidad, en el mismo orden citados.

Por último, pero no menos importante tenemos el indicador de apalancamiento, que es la relación entre crédito y capital propio invertido correspondiente a un 39%, 136% y 95% para los sistemas de distribución, generación y el sector electricidad, respectivamente. En el caso del sistema de generación el

apalancamiento es considerable, un 99,89% de sus pasivos obedece al desarrollo de proyectos de generación, de los cuales un 2,58% son deudas en dólares contraídas con entes financieros internacionales, por lo que la exposición al riesgo cambiario es mínima (considerando los saldos de las deudas contraídas con corte al 31 de marzo del 2018).

e. Base tarifaria

De acuerdo con la metodología tarifaria vigente según la resolución RJD-141-2015, la base tarifaria está compuesta por el activo fijo neto en operación revaluado promedio (AFNORP) y el capital de trabajo (CT).

El activo fijo neto en operación revaluado promedio (AFNORP), se obtiene como una media aritmética simple del activo fijo neto en operación revaluado por planta al mes de diciembre del periodo establecido como el año base y el activo fijo neto en operación revaluado estimado por planta al mes de diciembre del periodo proyectado, así sucesivamente para los años donde este solicitando tarifa.

Los saldos de los Estados Financieros Auditados de Coopeguanacaste con corte a diciembre 2017 en conjunto con la información aportada en el Capítulo 6 "Base Tarifaria" son el insumo inicial para el cálculo de la base tarifaria. A estos saldos se le aplicó la depuración para aquellos activos con caducidad en su vida útil, lo cual sirvió como base para el cálculo de la depreciación y el AFNORP. Además, se les aplicó la asignación según los parámetros establecidos por la Cooperativa.

Los criterios técnicos utilizados para el presente estudio tarifario parten de los saldos reportados en el Estado Financiero Auditado de Coopeguanacaste con corte a diciembre 2017, los indicadores económicos detallados en la sección de "parámetros económicos" de este informe, tasas de depreciación y los porcentajes de componente local y externo, que corresponden a los porcentajes de compras locales y externas obtenidos del promedio de los proyectos construidos en el año 2017 brindados por la Cooperativa. El componente local para el sistema de generación corresponde a un 91,6%, mientras que el componente externo es un 8,4%. Para los activos de planta general se considera únicamente el 100% proveniente del componente local.

La Cooperativa indicó que el Activo Fijo Neto de Operación del sector "generación" correspondió a la suma de ¢55 066,85 millones para el año 2017, estos datos de conformidad con la información aportada originalmente en el expediente ET-033-2018, en el archivo denominado "Base tarifaria generación".

La IE asignó los activos conforme a los drivers determinados por la Cooperativa según el archivo "Separación contable de actividades de reguladas y no reguiladas.pdf". Los activos de planta general se asignaron el 61,12% y 12,47% al sistema distribución y generación respectivamente (Driver A de Gastos Administrativos). Cabe mencionar, que el petente no asignó en sus cálculos la porción concerniente de planta general para el sistema de generación, por ende, sus cálculos están subestimados.

i. Adiciones de Activos:

Las adiciones de activos incorporadas en el presente estudio tarifario corresponden a los montos señalados en el apartado de inversiones del presente informe. (Ver apartado II.2.c). Las adiciones de planta general corresponden exclusivamente al sistema de generación, según se indica en este apartado.

ii. Retiro de Activos:

No se presentaron retiros de activos para los periodos 2018 y 2019, según los datos analizados por los especialistas en inversiones de la IE.

iii. Calculo del activo fijo neto revaluado:

La Cooperativa presentó el detalle del AFNOR en la carpeta "Capítulo 6 Base Tarifaria", los saldos para los periodos 2017, 2018 y 2019 ascienden a los montos de ¢53 743,88 millones, ¢92 348,36 millones y ¢91 351,52 millones respectivamente. Sin embargo, estos datos difieren del AFNOR presentado en los formularios "IE-RE-7723-Reporte de activos fijos Generación (…).xls" ya que para estos periodos los saldos corresponden a ¢55 066,85 millones, ¢94 515,63 millones y ¢92 222,98 millones respectivamente.

Para el proceso de análisis de la información aportada por Coopeguanacaste, se efectúo la depuración de los datos, asociado al porcentaje reconocido sobre las inversiones pretendidas para el periodo de solicitud tarifaria, con base en lo expuesto anteriormente se obtienen diferencias en el cálculo del AFNORP para el año 2019 según se detalla a continuación:

Cuadro N° 9
Sistema de Generación, Coopeguanacaste
Detalle del activo fijo neto en operación revaluado promedio
Cálculo IE 2018-2019
(Datos en millones de colones)

Año	*Coopeguanacaste*	*Aresep*	*Variación Absoluta*	*Variación porcentual*
AFNORP T+1 2018	*₡73.046,12*	*₡75.356,91*	*₡2.310,79*	*3,16%*
AFNORP T+2 2019	*₡91.849,94*	*₡95.012,32*	*₡3.162,38*	*3,44%*

Fuente: Elaboración propia, con datos de Coopeguanacaste y Aresep.

Las variaciones reflejadas en el cuadro anterior obedecen a las adiciones y retiros aprobados por los especialistas en inversiones de la IE, así como la asignación al sistema de generación proveniente de los activos de planta general (atribuibles a los diferentes sistemas), la implicación del cálculo de depreciación por parte de la Cooperativa y los parámetros económicos detallados en el presente informe.

Para el periodo sujeto a estudio las adiciones de planta general corresponden únicamente al sistema de generación, motivo por el cual las adiciones se incorporan en su totalidad dentro del cálculo (atribuyendo el 100% a este sistema).

iv. Depreciación:

Con relación al gasto de la depreciación, este se obtiene de los activos que conforman el AFNOR, por ello es relevante referir al aparatado anterior, ya que las inconsistencias citadas repercuten en el cálculo de la depreciación realizado por la Cooperativa, tales como la omisión en el cálculo para asignar los activos de planta general hacia el sistema de generación.

Las tasas de depreciación utilizadas por Coopeguanacaste en el cálculo del gasto de depreciación son las aportadas en el expediente tarifario ET-033-2018 en el capítulo número 6 "Base Tarifaria".

La diferencia reflejada en el gasto por concepto de depreciación entre lo propuesto por la cooperativa y lo obtenido por la Intendencia de Energía, se debe a las siguientes razones:

- *Adiciones y retiros aprobados por los especialistas en Inversiones.*
- *Los porcentajes de asignación de los activos de planta general hacia los diferentes sectores y sistemas, así como la asignación directa de las adiciones de planta general (que corresponden en un 100% al sistema de generación).*
- *La cooperativa incluyó la revaluación del periodo, en el cálculo de la depreciación del periodo revaluada (sobreestimando el gasto por este concepto).*

Lo señalado se puede corroborar en los archivos electrónicos ubicados en el Capítulo 7 en la subcarpeta 7.2.1.

Las variaciones se pueden resumir de la siguiente manera:

Cuadro N° 10
Sistema de Generación, Coopeguanacaste
Depreciación del periodo 2019
(Expresado en millones de colones)

Gasto por depreciación (costo)	Coopeguanacaste	Aresep	Variación Absoluta	Variación porcentual
2019	₡2.363,94	₡2.472,30	₡108,36	4,58%

Fuente: Información de Coopeguanacaste y Aresep.

Gasto por depreciación (revaluada)	Coopeguanacaste	Aresep	Variación Absoluta	Variación porcentual
2019	₡268,77	₡137,70	(₡131,07)	-48,77%

Fuente: Información de Coopeguanacaste y Aresep.

v. Capital de trabajo:

El capital de trabajo del sistema de generación se estimó conforme lo establece la metodología vigente. Siendo el periodo medio de cobro de 0 días, no se incorporó ningún valor por concepto de capital de trabajo para el ejercicio 2019.

Para el año 2019 se incorporó la base tarifaria por el monto de ¢95 009,10 millones (conformada por el AFNORP y el capital de trabajo de ese periodo, que, para el caso del sistema de generación, este último es nulo).

f. Análisis financiero

i. Criterios de proyección aplicados

Los criterios utilizados por la Intendencia para proyectar los costos y gastos del servicio de generación son los siguientes:

- ✓ *Se observó la variación de los datos incluidos en el formulario "RE-IE-7717…" respecto al indicador económico correspondiente (inflación, decretos salariales, etc.) de los periodos indicados. Para aquellas cuentas cuya justificación de crecimiento tiene argumento débil o nulo se consideró un crecimiento igual a la inflación.*

- ✓ *Para la proyección de los gastos generales, se utilizaron los porcentajes de inflación de 2,37% y 3,57% para los periodos 2018 y 2019, respectivamente.*

- ✓ *Los tipos de cambio promedios utilizados son de ¢585,01 y ¢628,11 por US$ para los periodos 2018 y 2019, respectivamente.*

- ✓ *Se definió la relevancia de las partidas utilizando las herramientas financieras que se describen a continuación:*

    - *El análisis horizontal sobre las partidas y se discriminó las variaciones que superaron el indicador económico que corresponde a la cuenta (ejemplo: inflación, decretos salariales, etc.).*
    - *El análisis vertical sobre: a) el grupo de cuentas para un periodo específico y b) las variaciones que surgen de un periodo a otro.*

- ✓ *Para el análisis de las partidas, se valoraron las justificaciones que presentó Coopeguanacaste, en el caso de las partidas relevantes dentro de la estructura de gastos. Se procedió a verificar la documentación de respaldo que permitiera validar la justificación del gasto incurrido.*

- ✓ *Para el caso de partidas cuya proyección o ejecución no esté supeditado al indicador económico (se refiere a aquellas partidas que, como resultado de comparar dos periodos, su variación porcentual refleja un dato inferior a dicho indicador), se consideró el dato que indica la empresa, siempre y cuando la misma sea de carácter tarifario, por ejemplo, esta situación se suscitó en el caso de los "salarios".*

- ✓ *Se excluyó de la proyección, las erogaciones de naturaleza no recurrente.*

- ✓ *Se analizaron las partidas de remuneraciones considerando los siguientes aspectos:*

  - ➢ *El año base utilizado fue con corte a diciembre 2017. Para este periodo la empresa envió la conciliación de la CCSS y los comprobantes de pago para la validación de SICERE, el cual no presenta diferencias significativas, con los datos presentados para cada sistema y centros de costo.*

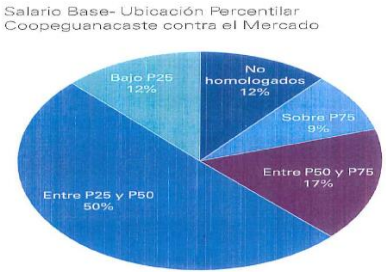
  - ➢ *Coopeguanacaste remitió el archivo "PERSONAL 2017-2018-2019.xls", el cual contiene el detalle de las plazas nuevas a contratar en cada uno de los periodos.*

    En el año 2018 la entidad presupuestó las sumas de ¢43,13 millones y ¢18,44 millones para los proyectos eólicos de "Río Naranjo" y "Cacao" respectivamente; para el año 2019 el presupuesto ascendió a los montos de ¢86,27 millones y ¢73,77 millones, en el mismo orden citados.

    En el ejercicio 2019 la Cooperativa presupuestó las sumas de ¢165,68 millones, ¢118,90 millones y ¢160,00 millones para las actividades de "comercialización", administración" y "mantenimiento" respectivamente.

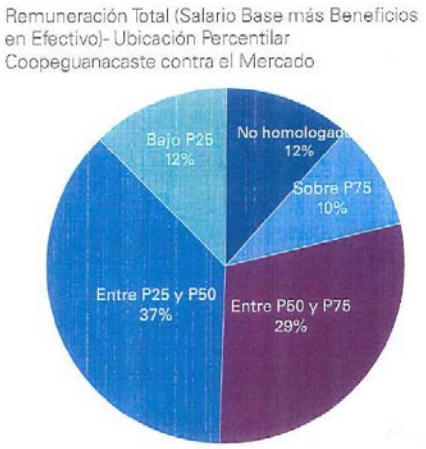
  - ➢ *La empresa realizó un proceso para actualizar el rubro de "remuneraciones". Tras realizar un estudio de mercado (en mayo del año 2017) se determinó la posición de los salarios de Coopeguanacaste respecto al mercado, según los siguientes datos:*

Gráfico No. 1
Sistema de generación, Coopeguanacaste
Estudio de mercado- Salario base
Situación salarial de Cooperativa



Fuente: Estudio de mercado, provisto por la firma contratada (KPMG).

Gráfico No. 2
Sistema de generación, Coopeguanacaste
Estudio de mercado- Remuneración total
Situación salarial de Cooperativa



Fuente: Estudio de mercado, provisto por la firma contratada (KPMG).

Además, el estudio indicó "La tabla adjunta detalla los costos mensuales para llevar al P50 (práctica regular de mercado) a aquellos salarios base que se encuentren bajo esa medida estadística", refiriendo al siguiente cuadro:

Tabla No. 1
Sistema de generación, Coopeguanacaste
Estudio de mercado- Ajuste al percentil 50

Ajuste al P-50			
Clasificación	Requerimiento presupuetario para ajuste a P-50	# de personas con ajuste	# de personas por encima del P-50
II-Gerencial	3,700,448.98	6	-
III-Mandos Medios	1,065,777.41	3	10
IV-Supervisión Técnica y Administ	10,714,449.88	25	-
V-Profesional	2,708,965.58	15	8
VI-Técnicos	7,313,706.19	61	2
VII-Administrativos	3,762,338.99	27	5
VIII-ApoyoAdministrativo	10,455,007.04	119	38
IX-Operarios Especializado	24,280.67	6	1
X - Operarios	2,037,100.91	41	32
	41,782,075.65	303	96
Porcentaje de pesonal con ajuste		76%	

Fuente: Estudio de mercado, provisto por la firma contratada (KPMG).

Para efectos del análisis regulatorio del sistema de generación, se requirió mediante oficio OF-1143-IE-2018 lo siguiente: "Remitir el informe y cálculos que dan origen al ajuste de los percentiles de los funcionarios para los años 2018 y 2019. Detallar el impacto que este ajuste tiene sobre cada clase o tipo de puesto (porcentual y monetario)". En respuesta a este punto la entidad aportó el archivo "Percentil 50 Mayo 2017 1.xls", en la hoja "BD P-50" mostró el impacto de este ajuste por cada puesto; este mismo detalle se suministró en el sistema de distribución (en respuesta al oficio OF-1144-IE-2018); de lo anterior se desprende que no es factible identificar de forma separada el ajuste que incide en cada uno de los sistemas sujetos a estudio (generación y distribución).

- *Para efectos de proyección la IE utilizó el año base ajustado por la inflación de los periodos 2018 y 2019, sin embargo, este dato no incorpora la totalidad del ajuste con el percentil 50, dichas estimaciones resultan en cifras superiores a las citadas por la empresa por concepto de "salarios" y/o "personal", motivo por el cual se incluyó en la fijación tarifaria los datos provistos por el petente.*

- *Para la cuenta de "cargas sociales" se contemplaron para el total de salarios un 26,33% correspondientes a: CCSS 14,33%, IMAS 0,50%, INA 1,50%, Asignaciones Familiares 5%, BPDC 0,50%, Régimen Obligatorio Pensiones 0,50%, FCL 3% y Cuota INS LPT 1%.*

En lo que respecta a la Cooperativa, no incluyó el 3% del Fondo de Capitalización Laboral (FCL), el 0,5% del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), ni el 1% de la cuota del INS LPT.

- *Según información aportada por la empresa se reconoce el 8,33% del total de remuneraciones por concepto de "aguinaldo". Asimismo, se incluyó el 5,99% correspondiente a la provisión de las "vacaciones". Para efectos de la liquidación tarifaria, el petente deberá aportar y justificar la provisión por este concepto con la finalidad de demostrar el gasto efectivamente incurrido en los periodos 2018 y 2019.*

- *En el análisis de prestaciones legales, Coopeguanacaste envió el archivo "SALARIOS PRÓXIMOS JUBILADOS.xls", con el detalle de los funcionarios que gozarían de este beneficio para los periodos 2018 y 2019.*

  En el caso del sistema de generación no hay funcionarios próximos a jubilar. Caso contrario en el sistema de distribución, en el cual se jubilará personal de las áreas de "comercialización", "mantenimiento" y "administrativo". La IE incluyó los siguientes montos por concepto de "prestaciones legales":

Cuadro No. 11
Sistema de generación, Coopeguanacaste
Prestaciones Legales
Millones de colones

ACTIVIDAD	2018	2019
COMERCIALIZACION	8,93	-
MANTENIMIENTO	7,83	23,73
ADMINISTRATIVO	-	4.77
TOTAL	**16,76**	**28.50**

Fuente: Elaboración propia.

.

- *Para los años 2018 y 2019 se incorporó en el cálculo tarifario las sumas de ¢379,52 millones y ¢396,14 millones, por concepto de "Personal" de operación y mantenimiento. Las remuneraciones de los gastos administrativos se explican en el apartado correspondiente.*

ii. Análisis de las principales cuentas del estado de resultados:

- ✓ ***Operación y mantenimiento, investigación y desarrollo y sociales y ambientales del sistema de generación:***

A continuación, se presenta el resultado del análisis de las cuentas:

- ✓ ***Análisis de "Servicios Contratados":***

  - ➢ *En el año 2018 la Cooperativa no detalló ni justificó la suma de ¢1,09 millones por concepto de "servicios contratados" incluidos en el rubro de "gerencia" que forman parte de los costos de operación y mantenimiento.*

  - ➢ *En el año 2019, se determinaron los siguientes ajustes:*

    Costo de operación de las plantas de generación hidráulica:

    - ✓ *El archivo "O&M PLANTAS 2018-2019.xls" muestra el monto de ¢2,5 millones para la "readecuación de gabinetes de comunicaciones", mientras que el archivo "RIE_068_2019_Anexo_1_Plan_de_cuentas_uniforme_para_el_servicio_de_generacion.xlsx" muestra el dato de ¢5,0 millones. Para efectos tarifarios se consideró ¢2,5 millones.*
    - ✓ *El gasto de "regencia ambiental hidroeléctricas" atribuible a las plantas de Canalete y Bijagua, asciende a la suma de $450 cada una. Se genera una diferencia de ¢0,72 millones inferior a lo solicitado por el petente derivada del tipo de cambio utilizado.*

    Costo de operación de las plantas de generación eólica:

    - ✓ *El archivo "O&M PLANTAS 2018-2019.xls" muestra el detalle que conforma el monto de ¢20,72 millones por concepto de "servicios contratados" para la operación de las plantas eólicas, mientras que el archivo "RIE_068_2019_Anexo_1_Plan_de_cuentas_uniforme_para_el_servicio_de_generacion.xlsx" muestra el dato de ¢52,70 millones. Para efectos tarifarios se consideró ¢20,72 millones.*

Mantenimiento preventivo de las plantas de generación hidráulica:

- ✓ *Se evidenciaron diferencias entre el archivo "O&M PLANTAS 2018-2019.xls" y el archivo "RIE_068_2019_Anexo_1_Plan_de_cuentas_uniforme_para_el_servicio_de_generacion.xlsx", tal como se muestra en el siguiente cuadro:*

Cuadro No. 12
Sistema de generación, Coopeguanacaste
Detalle de gastos ajustados
Mantenimiento preventivo, generación hidráulica
Millones de colones

Detalle	***O&M***	***RIE-068***
Mantenimiento en sistema SCADA -Bijagua	*2,86*	*5,00*
Mano de obra para construcción de barandas- Bijagua	*3,00*	*3,50*
Mano de obra para construcción de cunetas - Canalete	*5,00*	*7,50*
Mano de obra para construcción de cunetas - Bijagua	*5,00*	*7,50*
Instalación de altavoces en tomas de agua - Bijagua	*1,50*	*3,00*
TOTAL	***17,36***	***26,50***

Fuente: Elaboración propia.

Del cuadro anterior, la diferencia radica en el monto de ¢9,14 millones, para efectos tarifarios se consideró el archivo "O&M PLANTAS 2018-2019.xls".

Mantenimiento correctivo de las plantas de generación hidráulica:

- ✓ *Se evidenciaron diferencias entre el archivo "O&M PLANTAS 2018-2019.xls" y el archivo "RIE_068_2019_Anexo_1_Plan_de_cuentas_uniforme_para_el_servicio_de_generacion.xlsx", tal como se muestra en el siguiente cuadro:*

Cuadro No. 13
Sistema de generación, Coopeguanacaste
Detalle de gastos ajustados
Mantenimiento correctivo, generación hidráulica
Millones de colones

Detalle	***O&M***	***RIE-068***
Reparación de caminos internos- Bijagua	*5,00*	*7,50*
Reparación de caminos internos- Canalete	*5,00*	*7,50*
Reparación de caminos externos - Canalete	*8,00*	*10,00*
TOTAL	***18,00***	***25,00***

Fuente: Elaboración propia.

Del cuadro anterior, la diferencia radica en el monto de ¢7,00 millones, para efectos tarifarios se consideró el archivo "O&M PLANTAS 2018-2019.xls".

Mantenimiento preventivo de las plantas de generación eólica:

- ✓ *Se evidenciaron diferencias entre el archivo "O&M PLANTAS 2018-2019.xls" y el archivo "RIE_068_2019_Anexo_1_Plan_de_cuentas_uniforme_para_el_servicio_de_generacion.xlsx", tal como se muestra en el siguiente cuadro:*

Cuadro No. 14
Sistema de generación, Coopeguanacaste
Detalle de gastos ajustados
Mantenimiento preventivo, generación eólica
Millones de colones

Detalle	***O&M***	***RIE-068***
Revestimiento de cunetas- Cacao	*15,00*	*20,00*
Suministro e instalación de portones en plataformas- Río Naranjo	*15,00*	*25,00*
TOTAL	***30,00***	***45,00***

Fuente: Elaboración propia.

Del cuadro anterior, la diferencia radica en el monto de ¢15,00 millones, para efectos tarifarios se consideró el archivo "O&M PLANTAS 2018-2019.xls".

Mantenimiento correctivo de las plantas de generación eólica:

- ✓ *El archivo "O&M PLANTAS 2018-2019.xls" muestra el gasto por concepto de "nivelación de plataformas" para el mantenimiento correctivo de la planta eólica Cacao por la suma de ¢5,00 millones, mientras que el archivo "RIE_068_2019_Anexo_1_Plan_de_cuentas_uniforme_para_el_servicio_de_generacion.xlsx" muestra el dato de ¢6,20 millones. Para efectos tarifarios se consideró ¢5,00 millones.*

- ➢ *Los servicios contratados que forman parte de los gastos operativos de la tarifa del sistema de generación ascienden a la suma de ¢1 894,99 millones para el año 2019, este dato difiere con el propuesto por la Cooperativa cuya estimación fue de ¢1 962,54 millones, para una diferencia total de ¢67,55 millones*

- ✓ ***Análisis de "Materiales":***

  - ➢ *En el año 2019, se determinaron los siguientes ajustes:*

Costo de operación de las plantas de generación hidráulica:

- ✓ *El archivo "O&M PLANTAS 2018-2019.xls" muestra los montos de ¢3,0 millones y ¢2,0 millones para la "puesta en operación central hidráulica desfogues" y el "servicio propio eléctrico monofásico en tomas y desarenador" respectivamente, mientras que el archivo "RIE_068_2019_Anexo_1_Plan_de_cuentas_uniforme_para_el_servicio_de_generacion.xlsx" muestra los datos de ¢3,5 millones y ¢3,0 millones en el mismo orden citados. Para efectos tarifarios se consideró el primero.*

Mantenimiento preventivo de las plantas de generación hidráulica:

- ✓ *Se evidenciaron diferencias entre el archivo "O&M PLANTAS 2018-2019.xls" y el archivo "RIE_068_2019_Anexo_1_Plan_de_cuentas_uniforme_para_el_servicio_de_generacion.xlsx", tal como se muestra en el siguiente cuadro:*

Cuadro No. 15
Sistema de generación, Coopeguanacaste
Detalle de gastos ajustados
Mantenimiento preventivo, generación hidráulica
Millones de colones

Detalle	***O&M***	***RIE-068***
Compra fusibles para sistema de potencia y control - Canalete	*3,00*	*5,00*
Mantenimiento y mejoras de cámaras de seguridad- Canalete	*2,00*	*4,00*
Mantenimiento y mejoras de cámaras de seguridad - Bijagua	*3,00*	*4,00*
Materiales para construcción de barandas - Bijagua	*2,00*	*4,00*
Materiales para construcción de cunetas - Bijagua	*3,00*	*5,00*
Pintura para barandas y estructuras metálicas - Bijagua	*2,00*	*4,00*
Mirillas para inspección termográfica - Bijagua	*3,00*	*5,00*
Materiales mejora estructura techos viviendas -Canalete	*1,00*	*2,00*
Materiales mejora estructura techos viviendas - Bijagua	*1,50*	*2,00*
Materiales mejora estructura techos casetas operación - Bijagua	*1,50*	*2,00*
Compra de winch eléctrico para manipular compuertas - Bijagua	*1,00*	*1,50*
TOTAL	***23,00***	***38,50***

Fuente: Elaboración propia.

Del cuadro anterior, la diferencia radica en el monto de ¢15,50 millones, para efectos tarifarios se consideró el archivo "O&M PLANTAS 2018-2019.xls".

Mantenimiento correctivo de las plantas de generación hidráulica:

- ✓ *Se evidenciaron diferencias entre el archivo "O&M PLANTAS 2018-2019.xls" y el archivo "RIE_068_2019_Anexo_1_Plan_de_cuentas_uniforme_para_el_servicio_de_generacion.xlsx", tal como se muestra en el siguiente cuadro:*

Cuadro No. 16
Sistema de generación, Coopeguanacaste
Detalle de gastos ajustados
Mantenimiento correctivo, generación hidráulica
Millones de colones

Detalle	***O&M***	***RIE-068***
Construcción de desparrillador en quebrada embalse - Canalete	*3,00*	*5,00*
Carbones de repuesto para sellos de agua ejes turbinas - Bijagua	*4,00*	*5,00*
TOTAL	***7,00***	***10,00***

Fuente: Elaboración propia.

Del cuadro anterior, la diferencia radica en el monto de ¢3,00 millones, para efectos tarifarios se consideró el archivo "O&M PLANTAS 2018-2019.xls".

Mantenimiento preventivo de las plantas de generación eólica:

- ✓ *El archivo "O&M PLANTAS 2018-2019.xls" muestra el detalle que conforma el monto de ¢77,00 millones por concepto de "materiales" para el mantenimiento preventivo de las plantas de generación eólica, mientras que el archivo "RIE_068_2019_Anexo_1_Plan_de_cuentas_uniforme_para_el_servicio_de_generacion.xlsx" muestra el dato de ¢110,00 millones. La entidad no detalló el monto de ¢26,00 millones implícitos en dicha suma, por lo que para efectos tarifarios se consideró la suma de ¢74,00 millones, de la cual ¢54,00 millones corresponden a gastos de naturaleza no recurrente.*

- ✓ *Adicionalmente, el archivo "O&M PLANTAS 2018-2019.xls" muestra el monto de ¢25,00 millones por concepto de "herramientas" para el mantenimiento preventivo de la planta de generación eólica Cacao, mientras que el archivo "RIE_068_2019_Anexo_1_Plan_de_cuentas_uniforme_para_el_servicio_de_generacion.xlsx" muestra el dato de ¢34,00 millones. Para efectos tarifarios se consideró ¢25,00 millones.*
- ✓ *No se incluyeron los gastos por concepto de "mantenimiento de fincas" y "varios limpieza" que ascienden a las sumas de ¢0.7 millones y ¢1,2 millones respectivamente, estos montos no se reflejan en el archivo "O&M PLANTAS 2018-2019.xls".*

- ➢ *Los materiales que forman parte de los gastos operativos de la tarifa del sistema de generación ascienden a la suma de ¢309,70 millones para el año 2019, este dato difiere con el propuesto por la Cooperativa cuya estimación fue de ¢366,60 millones, para una diferencia total de ¢56,90 millones.*

- ✓ ***Análisis de "Alquileres":***

  - ➢ *En el año 2019, se determinaron los siguientes ajustes:*

    Costo de operación de las plantas de generación eólica:

    - ✓ *El archivo "RIE_068_2019_Anexo_1_Plan_de_cuentas_uniforme_para_el_servicio_de_generacion.xlsx" no mostró gastos asignados por este rubro; sin embargo, valorando el contrato convenido para el arrendamiento de la finca del proyecto eólico Río Naranjo, que cita en su cláusula novena referente al "pago durante el plazo de operación", que "el propietario se compromete a cancelar en los primeros cinco días de cada mes después de haber iniciado la generación el DOS PUNTO CINCO POR CIENTO (2,5%) de los ingresos netos de la planta del año UNO al SEIS. (…)", dicho contrato se firmó el 08 de enero del 2015. Para efectos de proyección se consideró el 2,5% de los ingresos vigentes para el periodo 2019, por lo que se incorpora en las tarifas la suma de ¢34,36 millones.*

Mantenimiento preventivo de las plantas de generación hidráulica:

- ✓ *El archivo "O&M PLANTAS 2018-2019.xls" muestra el monto de ¢1,00 millón por concepto de "limpieza del sedimentador" (incluido en el rubro de alquileres) para el mantenimiento preventivo de la planta Bijagua, mientras que el archivo "RIE_068_2019_Anexo_1_Plan_de_cuentas_uniforme_para_el_servicio_de_generacion.xlsx" muestra el dato de ¢1,50 millones. Para efectos tarifarios se consideró ¢1,00 millón.*

- ➢ *Los alquileres incluidos en la tarifa del sistema de generación ascienden a la suma de ¢46,36 millones para el año 2019, este dato difiere con el propuesto por la Cooperativa cuya estimación fue de ¢12,50 millones, para una diferencia total de ¢33,86 millones.*

- ✓ ***Análisis de "Seguros":***

  - ➢ *En el año 2019, se determinaron los siguientes ajustes:*

Costo de operación de las plantas de generación hidráulica:

- ✓ *El archivo "O&M PLANTAS 2018-2019.xls" muestra el monto de ¢258,97 millones por concepto de "seguro obra civil terminada" (¢83,98 millones y ¢174,99 millones de Canalete y Bijagua respectivamente); asimismo muestra la suma de ¢5,4 millones originado del "seguro garantía ambiental" (¢2,7 millones para Canalete y Bijagua), mientras que el archivo "RIE_068_2019_Anexo_1_Plan_de_cuentas_uniforme_para_el_servicio_de_generacion.xlsx" no muestra datos relacionado con la cuenta de "seguros".*
- ✓ *En virtud que es una erogación relevante y necesaria para la operación de estas plantas, se consideró en tarifas lo indicado en el archivo "O&M PLANTAS 2018-2019.xls", esto origina una desviación significativa respecto al ajuste tarifario solicitado por Coopeguanacaste.*

Costo de operación de las plantas de generación eólica:

- ✓ *El archivo "O&M PLANTAS 2018-2019.xls" muestra el monto de ¢61,13 millones por concepto de "seguro obra civil" (¢15,74 millones y ¢45,39 millones para Río Naranjo y Cacao respectivamente), mientras que el archivo "RIE_068_2019_Anexo_1_Plan_de_cuentas_uniforme_para_el_servicio_de_generacion.xlsx" del año 2019 no muestra datos relacionados a la cuenta de "seguros".*
- ✓ *En virtud que es una erogación relevante y necesaria para la operación de estas plantas, se consideró en tarifas lo indicado en el archivo "O&M PLANTAS 2018-2019.xls".*

- ➢ *Los seguros que forman parte de los gastos operativos de la tarifa del sistema de generación ascienden a la suma de ¢325,49 millones para el año 2019, este dato difiere con el propuesto por la Cooperativa cuya estimación fue nula.*

- ✓ ***Análisis de "Otros":***

  - ➢ *En el año 2019, se determinaron los siguientes ajustes:*

    Gastos por partidas amortizables e intangibles:

    - ✓ *El archivo "O&M PLANTAS 2018-2019.xls" y el archivo "RIE_068_2019_Anexo_1_Plan_de_cuentas_uniforme_para_el_servicio_de_generacion.xlsx" del año 2019 muestran el monto de ¢0,72 millones por concepto de "Licencias de software" (¢360 000 para Río Naranjo y Cacao), este gasto se incluyó en las tarifas del periodo 2019; cabe mencionar que en la etapa de liquidación tarifaria será obligación del petente demostrar que estas erogaciones se amortizan en un único periodo.*

    Canon de Aguas

    - ✓ *Corresponde al pago por concepto de canon de aprovechamiento de aguas destinado al uso para generación eléctrica se encuentra establecido mediante el Decreto N 32868-MINAE.*

- ✓ *Según oficio DA-1202-2018 del 08 de agosto de 2018 remitido por la Dirección de agua del MINAE, para el 2018 a Coopeguanacaste le corresponde cancelar ¢66,38 millones para el año 2019, mientras que la Cooperativa estimó la suma de ¢46,00 millones por este concepto. Para efectos tarifarios se consideró lo indicado por el MINAE.*

- ➢ *Los gastos clasificados como "otros" que forman parte de los gastos operativos de la tarifa del sistema de generación ascienden a la suma de ¢116,40 millones para el año 2019, este dato difiere con el propuesto por la Cooperativa cuya estimación fue de ¢96,02 millones, la variación de ¢20,38 millones corresponde al ajuste en el canon de aguas.*

Seguidamente se presenta el resumen de los gastos incluidos en el archivo "RIE_068_2019_Anexo_1_Plan_de_cuentas_uniforme_para_el_servicio_de_generacion.xlsx" del año 2019:

Cuadro N° 17
Sistema de Generación, Coopeguanacaste
Estructura de costos operación y mantenimiento

DETALLE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	Personal	Materiales	Servicios	Alquileres	Seguros	Otros	Lubricantes Y Comb	TOTAL
Costos de la gerencia de O&M central	187,39	-	-	-	-	-	-	**187,39**
Costos operación plantas de generación hidráulica	-	38,00	53,50	-	-	94,50	-	**186,00**
Costos operación plantas de generación eólica	157,63	4,60	52,72	-	-	0,72	-	**215,67**
Mantenimiento preventivo plantas hidráulicas	-	122,60	828,10	1,50	-	-	12,50	**964,70**
Mantenimiento correctivo plantas hidráulicas	-	89,00	77,00	11,00	-	-	-	**177,00**
Mantenimiento preventivo plantas eólicas	51,12	110,90	915,02	-	-	-	7,40	**1.084,44**
Mantenimiento correctivo plantas eólicas	-	1,50	36,20	-	-	0,80	-	**38,50**
TOTAL	**396,14**	**366,60**	**1.962,54**	**12,50**	**-**	**96,02**	**19,90**	**2.853,69**

Fuente: *Elaboración propia, ET-033-2018.*

Cuadro No. 18
Sistema de Generación, Coopeguanacaste
Estructura de costos operación y mantenimiento propuesto Aresep

DETALLE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	Personal	Materiales	Servicios	Alquileres	Seguros	Otros	Lubricantes Y Comb	TOTAL
Costos de la gerencia de O&M central	187,39	-	-	-	-	-	-	**187,39**
Costos operación plantas de generación hidráulica	-	36,50	50,30	-	264,37	114,88	-	**466,05**
Costos operación plantas de generación eólica	157,63	4,60	20,72	34,36	61,13	0,72	-	**279,16**
Mantenimiento preventivo plantas hidráulicas	-	107,10	818,96	1,00	-	-	12,50	**939,56**
Mantenimiento correctivo plantas hidráulicas	-	86,00	70,00	11,00	-	-	-	**167,00**
Mantenimiento preventivo plantas eólicas	51,12	74,00	900,02	-	-	-	7,40	**1.032,54**
Mantenimiento correctivo plantas eólicas	-	1,50	35,00	-	-	0,80	-	**37,30**
TOTAL	**396,14**	**309,70**	**1.894,99**	**46,36**	**325,49**	**116,40**	**19,90**	**3.108,99**

Fuente: *Elaboración propia.*

- ✓ ***Gastos administrativos:***

La Cooperativa, asignó los gastos administrativos con los porcentajes de asignación del 12,47%, 61,12%, 2,01% y 24,40% entre los sistemas de generación, distribución, alumbrado público y actividades no reguladas respectivamente.

Con la entrada en vigencia de la resolución RIE-068-2016 "Simplificación y estandarización de información financiero-contable (servicio de suministro de electricidad que prestan las Empresas Públicas, Municipales y Cooperativas De Electrificación Rural)", en el "Por Tanto V" se estableció que "[…] en la presentación de los estudios tarifarios a partir de abril 2017 y para el cumplimiento de la RIE-131-2015 del 18 de noviembre de 2015, se deberán utilizar los planes de cuentas uniformes establecidos en esta resolución. […]".

Por lo anterior Coopeguanacaste presentó el formulario "IE-RE-7717 Registro de Costos y Gastos Generación" basado en el plan de cuentas de contabilidad regulatoria y que en relación con los gastos administrativos se incluyó los drivers a utilizar en la estructura de costos, tal como se muestra seguidamente:

Cuadro N° 19
Sistema de Generación, Coopeguanacaste
Estructura de costos y gastos administrativos
Con sus respectivos drivers

5.4.	**Gastos administrativos (de apoyo a la gestión) asociados al servicio de generación**	
5.4.1.	**Gastos de las unidades administrativas (de apoyo a la gestión)**	**Driver**
5.4.1.01.	Gerencia general y estratégica	9%
5.4.1.02.	Auditoría interna y control de gestión	9%
5.4.1.03.	Legales	2%
5.4.1.04.	Relaciones públicas e institucionales	4%
5.4.1.05.	Contaduría y tesorería	15%
5.4.1.06.	Administración y finanzas	5%
5.4.1.07.	Regulación	2%
5.4.1.08.	Logística y servicios generales	7%
5.4.1.09.	Servicios informáticos	18%
5.4.1.10.	Recursos humanos	9%
5.4.1.99.	Otras gerencias de apoyo administrativo	20%

Fuente: Intendencia de Energía, ET-032-2018, ET-033-2018.

El cuadro anterior muestra las cuentas que conforman la estructura de costos y gastos administrativos, estas a su vez tienen partidas en un nivel inferior, Coopeguanacaste presentó los saldos para el análisis de estas partidas denominadas "Personal", "Materiales", "Servicios contratados", "Alquileres", "Seguros" y "Otros", y para la distribución de los montos totales se utilizaron los siguientes conductores:

Cuadro No. 20
Sistema de Generación, Coopeguanacaste
Conductores de costos y gastos
Fuente: Intendencia de Energía, ET-032-2018, ET-033-2018

Gastos Administrativos	
Partidas de quinto nivel tarifario	
Personal	69%
Materiales	5%
Servicios contratados	2%
Alquileres	0%
Seguros	3%
Otros	21%

Fuente: Intendencia de Energía, ET-032-2018, ET-033-2018

De acuerdo con la información adicional, se presenta el resultado del análisis de las cuentas:

- ✓ ***Personal:***

En el proceso de homologación de la partida "Personal" del plan de cuentas de contabilidad regulatoria con las cuentas contables de Coopeguanacaste, se agruparon las siguientes cuentas:

6-01-01-00-000	*SALARIOS*
6-01-02-00-000	*VACACIONES*
6-01-03-00-000	*C.C.S.S.*
6-01-04-00-000	*I.N.S.*
6-01-05-00-000	*BANCO POPULAR*
6-01-06-00-000	*I.N.A.*
6-01-07-00-000	*I.M.A.S.*
6-01-08-00-000	*ASIGNACIONES FAMILIARES*
6-01-09-00-000	*AGUINALDO*
6-01-10-00-000	*PRESTACIONES LEGALES*
6-01-13-00-000	*SUBSIDIOS*
6-01-14-00-000	*CAPACITACION DE PERSOL*

Tal como se indicó en los criterios generales de proyección, se incluyó el rubro de "Salarios" propuesto por la Cooperativa. A partir de este dato, se aplicaron los respectivos porcentajes por concepto de cargas sociales, aguinaldos y la provisión de vacaciones. En lo que respecta a las "prestaciones legales" se refiere a su estimación en los criterios generales citados al inicio de este apartado.

A nivel global Coopeguanacaste estimó ¢2 524,98 millones por concepto de gastos administrativos de "Personal", mientras que la IE incluyó la suma de ¢2 406,44 millones para el año 2019, lo que representa una variación de ¢118,54 millones.

Posteriormente, la IE distribuyó el gasto administrativo de "Personal" entre los diferentes servicios (utilizando los porcentajes de asignación citados por el petente), determinando las sumas de ¢1 470,82 millones, ¢48,37 millones, ¢300,08 millones y ¢587,17 millones para los servicios de distribución, alumbrado público, generación y actividades no reguladas, respectivamente.

Sin embargo, una vez que se distribuyen los gastos conforme a los drivers que estableció la Cooperativa en el archivo "RIE_068_2019_Anexo_1_Plan_de_cuentas_uniforme_para_el_servicio_de_generacion.xlsx" del año 2019 las cifras corresponden a ¢363,63 millones y ¢287,42 millones de Coopeguanacaste y Aresep, en el mismo orden citados, estos montos corresponden al gasto administrativo por concepto de "Personal" atribuible al sistema de generación.

- ✓ ***Materiales:***

En el proceso de homologación de la partida "Materiales" del plan de cuentas de contabilidad regulatoria con las cuentas contables de Coopeguanacaste, se agruparon las siguientes cuentas:

6-01-26-00-000	*PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA*
6-01-27-00-000	*ELECTRICIDAD*
6-01-28-00-000	*TELEFONO*
6-01-29-00-000	*AGUA (IMPUESTO Y TASA)*
6-01-36-00-000	*MATERIAL DE ASEO*
6-01-43-00-000	*COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES*
6-01-48-00-000	*MATERIALES Y SERVICIOS*

Al analizar las cuentas señaladas, se obtuvieron los siguientes resultados:

- ✓ *Las partidas que forman parte de grupo "materiales" se proyectaron a partir del año base con la inflación de los años 2018 y 2019, conforme los criterios generales de proyección, exceptuando la electricidad, ya que en el caso de este último se incluyó la estimación realizada por el petente.*
- ✓ *A nivel global Coopeguanacaste estimó ¢128,53 millones por concepto de gastos administrativos de "Materiales", mientras que la IE incluyó la suma de ¢128,49 millones para el año 2019, la desviación no es significativa.*
- ✓ *Posteriormente, la IE distribuyó el gasto administrativo de "Materiales" entre los diferentes servicios, determinando las sumas de ¢78,53 millones, ¢2,58 millones, ¢16,02 millones y ¢31,35 millones para los servicios de distribución, alumbrado público, generación y actividades no reguladas, respectivamente.*
- ✓ *Sin embargo, una vez que se distribuyen los gastos conforme a los drivers que estableció la Cooperativa para el archivo "RIE_068_2019_Anexo_1_Plan_de_cuentas_uniforme_para_el_servicio_de_generacion.xlsx" del año 2019 las cifras corresponden a ¢28,88 millones y ¢22,83 millones de Coopeguanacaste y Aresep, en el mismo orden citados, estos montos corresponden al gasto administrativo por concepto de "Materiales" atribuible al sistema de generación.*

- ✓ ***Servicios Contratados:***

En el proceso de homologación de la partida "Servicios Contratados" del plan de cuentas de contabilidad regulatoria con las cuentas contables de Coopeguanacaste, se agruparon las siguientes cuentas:

6-01-24-00-000 HONORARIOS PROFESIONALES
6-01-33-00-000 COMUNICACIONES

Al analizar las cuentas señaladas, se obtuvieron los siguientes resultados:

- ✓ *Las partidas de "servicios contratados" no presentan diferencias significativas respecto a lo solicitado por la Cooperativa y lo reconocido por la Aresep.*
- ✓ *A nivel global Coopeguanacaste estimó ¢39,16 millones por concepto de gastos administrativos de "Servicios contratados", mientras que la IE incluyó la suma de ¢38,69 millones para el año 2019, la desviación no es significativa.*
- ✓ *Posteriormente, la IE distribuyó el gasto administrativo de "Servicios contratados" entre los diferentes servicios, determinando las sumas de ¢23,65 millones, ¢0,77millones, ¢4,83 millones y ¢9,44 millones para los servicios de distribución, alumbrado público, generación y actividades no reguladas, respectivamente.*
- ✓ *Sin embargo, una vez que se distribuyen los gastos conforme a los drivers que estableció la Cooperativa para el archivo "RIE_068_2019_Anexo_1_Plan_de_cuentas_uniforme_para_el_servicio_de_generacion.xlsx" del año 2019 las cifras corresponden a ¢7,31 millones y ¢5,78 millones de Coopeguanacaste y Aresep, en el mismo orden citados, estos montos corresponden al gasto administrativo por concepto de "servicios contratados" atribuible al sistema de generación.*

- ✓ ***Alquileres:***

En esta partida la homologación de uno a uno, o sea que tanto en el plan de cuentas de contabilidad regulatoria y la cuenta contable de la empresa utilizó la misma denominación. En lo que respecta al año 2019 la partida no presenta ningún movimiento según la contabilidad de la empresa; sin embargo, al aplicar los drivers a los gastos de la Cooperativa se evidencia el gasto por este concepto por el monto de ¢0,02 millones.

- ✓ ***Otros:***

En el proceso de homologación de la partida "Otros" del plan de cuentas de contabilidad regulatoria con las cuentas contables de Coopeguanacaste, se agruparon las siguientes cuentas:

6-01-11-00-000 VIATICOS Y RECONOCIMIENTOS
6-01-12-00-000 UNIFORME DE EMPLEADOS

6-01-15-00-000	*DIETAS CONSEJO ADMINISTRACION*
6-01-16-00-000	*DIETAS COMITE DE VIGILANCIA*
6-01-18-00-000	*GTOS CONSEJO DE ADMINISTRACION*
6-01-19-00-000	*GTOS COMITE DE VIGILANCIA*
6-01-21-00-000	*GASTOS DE ASAMBLEA*
6-01-22-00-000	*GASTOS DE REPRESENTACION*
6-01-23-00-000	*ATENCION A FUNCIONARIOS*
6-01-25-00-000	*KILOMETRAJE*
6-01-31-00-000	*COMISION AGENCIA DE COBRO*
6-01-37-00-000	*MANTENIMIENTO DE PLANTA*
6-01-38-00-000	*MANT.EQ RADIO COMUNICACION*
6-01-39-00-000	*MAT.EQ.TALLER Y HERRAMIENTAS*
6-01-40-00-000	*MAT.MOB.EQUIPO DE OFICINA*
6-01-41-00-000	*MANT.EDIFICIO Y ESTRUCTURA*
6-01-42-00-000	*MAT.SISTEMA ALUMBRADO PUBLICO*
6-01-44-00-000	*REPUESTOS DE VEHICULOS*
6-01-45-00-000	*ENDEREZADO Y PINTURA*
6-01-46-00-000	*LLANTAS*
6-01-47-00-000	*BATERIAS*
6-01-49-00-000	*DERECHOS DE CIRCULACION*
6-01-50-00-000	*PARQUEO Y PEAJE*
6-01-71-00-000	*RECLAMOS POR DAÑOS*
6-01-73-00-000	*OTROS GASTOS*
6-01-74-00-000	*BONIFICACION ATENCION AGENCIA*
6-01-75-00-000	*GASTOS JUDICIALES*
6-01-76-00-000	*DISPOSITIVOS DE LOCALIZACIÒN GPS*
6-01-78-00-000	*GASTOS CONSULTORIO MEDICO*
6-01-79-00-000	*MANTENIMIENTO PLANTA GENERAL*
6-01-81-00-000	*TRANSPORTE*
6-01-83-00-000	*ANTENCION A ASOCIADOS*
6-01-86-00-000	*LECTURAS MEDIDORES,CORTAS Y RECONEXIONES*
6-01-88-02-000	*GASTOS POR COMISIONES EN PAGO DE SERVICIOS*
6-01-88-03-000	*GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS*
6-01-90-00-000	*HERRAMIENTAS REV*
6-01-91-00-000	*FONDO DE PENSIONES COMP.OBLIG*
6-01-92-00-000	*GASTOS POR SERVICIOS DE VIGILANCIA*
6-01-93-01-000	*DIETAS TRIBUNAL ELECTORAL*
6-01-93-02-000	*GASTOS TRIBUNAL ELECTORAL*

Al analizar las cuentas señaladas, se obtuvieron los siguientes resultados:

- ✓ *Las partidas que forman parte del grupo "Otros" se proyectaron a partir del año base con la inflación de los años 2018 y 2019, conforme a los criterios generales de proyección.*
- ✓ *Para el caso de la partida "gastos de asamblea" se excluyó del año base la suma de ¢12,16 millones, originado de erogaciones que no tienen relación con el servicio eléctrico tales como la compra de "bolsas para echar obsequios para delegados", "souvenirs para llevar a jefes de la Cooperativa COWETTA FAYETTE", "elaboración de placas para directores que cumplen su periodo", "tiquetes aéreos para participar en asamblea de Nreca", "reintegro a oficina" y "reintegro de caja chica", estos últimos por no estar debidamente justificados.*
- ✓ *La partida "atención a funcionarios" refiere en su justificación al gasto por concepto de la asistencia al "foro de agua", no se proyectó por no mantener relación con el servicio eléctrico que se brinda.*
- ✓ *En el caso de cuenta "Mant. mob. Equipo de oficina" en el año 2018 se incluyó la cifra propuesta por el petente, con la diferencia que este asignó esta cuenta en su totalidad a los gastos administrativos, mientras que la IE lo asignó entre los costos administrativos, comerciales y mantenimiento, a partir de este dato se proyectó con la inflación del periodo 2019, lo que incide en una variación de ¢18,61 millones en la porción de gastos administrativos.*
- ✓ *En la cuenta "Mant. Edificio y estructura" se incluyó en el año 2019 gastos extraordinarios de naturaleza no recurrente que refirió la Cooperativa, estos ascienden a la suma de ¢94,76 millones, de los cuales ¢35,35 millones, ¢1,73 millones y ¢57,68 millones corresponden a los gastos comerciales, mantenimiento y administración, en el mismo orden citados. La entidad no justificó la totalidad de la variación para el periodo 2019, motivo por el cual se proyectaron los gastos recurrentes con la inflación y los gastos extraordinarios citados.*
- ✓ *Las demás partidas clasificadas como "Otros" no presentan diferencias significativas respecto a lo solicitado por la Cooperativa y lo incluido a nivel de tarifas.*

- ✓ *A nivel global Coopeguanacaste estimó ¢560,30 millones por concepto de gastos administrativos de "Otros" (no incluye los gastos de "seguros" y "amortizables" o "servicios de computo"), mientras que la IE incluyó la suma de ¢531,66 millones para el año 2019, lo que representa una variación de ¢29,24 millones, explicado en los puntos anteriores.*
- ✓ *Posteriormente, la IE distribuyó el gasto administrativo de "Otros" entre los diferentes servicios, determinando las sumas de ¢324,95 millones, ¢10,69 millones, ¢66,30 millones y ¢129,72 millones para los servicios de distribución, alumbrado público, generación y actividades no reguladas, respectivamente.*
- ✓ *Sin embargo, una vez que se distribuyen los gastos conforme a los drivers que estableció la Cooperativa para el archivo "RIE_068_2019_Anexo_1_Plan_de_cuentas_uniforme_para_el_servicio_de_generacion.xlsx" del año 2019 las cifras corresponden a ¢106,97 millones y ¢84,55 millones de Coopeguanacaste y Aresep, en el mismo orden citados, estos montos corresponden al gasto administrativo por concepto de "Otros" atribuible al sistema de generación.*

- ✓ ***Partidas amortizables "servicios de cómputo":***

  - ✓ *En lo que respecta a la cuenta "servicios de cómputo" se incluyeron los gastos de naturaleza recurrente, las cifras expresadas en dólares se actualizaron con la inflación externa de los periodos 2018 y 2019, la base actualizada se utilizó para obtener el monto en la moneda local (utilizando el tipo de cambio descrito en los criterios generales de proyección). Adicionalmente, se incluyeron los gastos por concepto de "soporte", "actualizaciones" y "licencias" que se pactaron en ambos periodos, estas últimas se amortizaron en el periodo que se originaron; cabe mencionar que en la etapa de liquidación tarifaria será obligación del petente demostrar que estas erogaciones se amortizan en un único periodo.*
  - ✓ *A nivel global para el año 2019 el gasto por concepto de "servicios de computo" se estimó en las sumas de ¢126,97*

millones, ¢126,97 millones y ¢200,48 millones, para las actividades de administración, comercialización y mantenimiento, respectivamente. Mientras que la Cooperativa estimó las sumas de ¢96,12 millones, ¢151,78 millones y ¢96,128 millones en el mismo orden citados.

- ✓ *La diferencia radica principalmente en que la cooperativa no actualiza el precio en dólares para los años 2018 y 2019.*
- ✓ *Posteriormente, la IE distribuyó el gasto administrativo de "servicio de computo" entre los diferentes servicios (utilizando los drivers propuestos por la Cooperativa), determinando las sumas de ¢77,60 millones, ¢2,55 millones, ¢15,83 millones y ¢30,98 millones para los servicios de distribución, alumbrado público, generación y actividades no reguladas, respectivamente.*

- ✓ ***Seguros:***

  - ✓ *Conforme al análisis que se refiere en el apartado de "seguros", a nivel global se incluyeron en tarifas las sumas de ¢85,45 millones, ¢40,61 millones y ¢93,28 millones para las actividades de administración, comercialización y mantenimiento en el mismo orden citados, cabe mencionar que estos datos no presentan desviaciones respecto a lo solicitado por el petente.*
  - ✓ *Posteriormente, la IE distribuyó el gasto administrativo de "seguros" entre los diferentes servicios, determinando las sumas de ¢52,23 millones, ¢1,72 millones, ¢10,65 millones y ¢20,85 millones para los servicios de distribución, alumbrado público, generación y actividades no reguladas, respectivamente.*
  - ✓ *Sin embargo, una vez que se distribuyen los gastos conforme a los drivers que estableció la Cooperativa para el archivo "RIE_068_2019_Anexo_1_Plan_de_cuentas_uniforme_para_el_servicio_de_generacion.xlsx" las cifras corresponden a ¢16,62 millones y ¢13,13 millones de Coopeguanacaste y Aresep, en el mismo orden citados, estos montos corresponden al gasto administrativo por concepto de "seguros" atribuible al sistema de generación.*

- ✓ ***Servicio de regulación:***

Se incluye conforme a la publicación en la gaceta del 13 de noviembre del 2018, alcance N°195, correspondiente al canon a cobrar por empresa regulada para el año 2019, para el caso de Coopeguanacaste el monto por concepto de canon de regulación asciende a ¢85,54 millones.

Se asignó a los servicios regulados de distribución, generación y alumbrado público, según metodología vigente, considerándose la contribución porcentual de los ingresos de cada sistema respecto a los ingresos totales, según los estados financieros auditados al 31 de diciembre del 2017 correspondiendo a 79,62%, 17,73% y 2,65% respectivamente.

Cuadro No. 21
Coopeguanacaste
Calculo del canon de regulación, 2019
Millones de colones

Servicio	***Monto 2019***	***Partic. Porcentual***
Distribución	*68,11*	*79,62%*
Generación	*15,16*	*17,73%*
Alumbrado Público	*2,27*	*2,65%*
Total	***85,54***	***100,00%***

Fuente: Alcance Gaceta No. 248 publicada el 18-10-2017 y los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017.

- ✓ *Para efectos del canon de regulación la entidad incorporó en el sistema de distribución el monto de ¢46,07 millones en la actividad de mantenimiento; a nivel del sistema de generación, incorporó duplicada la suma ¢9,40 millones en los archivos "Gast adm generación abril 2018-dic-2019.xls" y "IE-RE-7717 Registro de Costos y Gastos.xls" (para un total de ¢18,81 millones). Por parte de la IE se incluyó el canon de regulación en el apartado de "gastos administrativos", asignando los montos de ¢68,11 y ¢15,16 millones a los sistemas de distribución y generación respectivamente.*

El total de gastos administrativos para el año 2019 ascienden al monto de ¢3 315,22 millones (sin incluir el canon de regulación). Este monto se desglosa en las sumas de ¢2 026,26 millones, ¢66,64 millones, ¢413,41 millones y ¢808,91 millones para los sistemas de generación, distribución, alumbrado público y actividades no reguladas.

En lo que respecta a los gastos administrativos del sistema de generación, se presenta el siguiente cuadro que resume las partidas presentadas con la contabilidad de la empresa y la depuración de esta Intendencia (sin aplicar drivers).

Cuadro No. 22
Sistema de Generación, Coopeguanacaste
Gastos Administrativos
Resumen de partidas - Sin drivers
Periodo 2019

Detalle	Coopeguanacaste	Aresep	Δ Abs	Δ %	Peso
Personal	₡314,86	₡300,08	(₡14,78)	-5%	14%
Materiales	₡16,03	₡16,02	(₡0,01)	0%	0%
Servicios Cont	₡4,88	₡4,83	(₡0,06)	-1%	0%
Alquileres	₡0,00	₡0,00	₡0,00	0%	0%
Seguros	₡10,66	₡10,66	₡0,00	0%	0%
Otros	₡69,87	₡65,99	(₡3,88)	-6%	4%
Amortizables	₡11,99	₡15,83	₡3,85	32%	-4%
* Diferencia en la base	₡8,56	-	(₡8,56)	-100%	8%
* Depreciaciones	₡56,79	-	(₡56,79)	-100%	54%
Subtotal	**₡493,65**	**₡413,41**	(₡80,24)	**-16%**	**77%**
Canon de Regulación	₡18,81	₡15,16	(₡3,64)	-19%	3%
Pólizas	₡10,66	-	(₡10,66)	-100%	10%
Vacaciones	₡9,73	-	(₡9,73)	-100%	9%
Total	**₡532,83**	**₡428,57**	**(₡104,26)**	**-20%**	**100%**

**Nota: Esta diferencia se origina sobre la base global de gastos administrativos, ya que en el expediente ET-032-2017 el petente modificó el monto global que pasó de ¢3 503,24 millones (presentado en su solicitud original) a ¢3 434,55 millones (según la información adicional).*
Fuente: Elaboración propia. Datos regulatorios ET-032-2018, ET-033-2018.

Del cuadro anterior, es importante señalar el origen de las diferencias que se mencionan seguidamente:

- ✓ *Las partidas de "personal", "materiales", "servicios contratados", "alquileres", "seguros", "otros" y "amortizables" se originan al aplicar el 12,47% sobre el monto global de gastos administrativos (información adicional ET-032-2018).*
- ✓ *Para efectos de presentación, el estado de resultados tarifario del sistema de distribución fue actualizado con el cambio en el monto global de gastos administrativos; sin embargo, el petente no corrigió el efecto por asignación que incide en el sistema de generación.*

  La cooperativa estimó sobre una base de ¢3 503,24 millones, el 12,47% asignado al sistema de generación, obteniendo la cifra de ¢436,85 millones, adicionalmente sobre esta última calculó una porción del 13% equivalente a ¢56,79 millones por concepto de gastos de depreciación (para un sub total de ¢493,65 millones, localizable en el expediente ET-032-2018, en el archivo "Gastos 2018-2019.xls", hoja "GASTOS", filas No. 104 a la 107, columna "I"); la IE no consideró este último para efectos tarifarios, ya que el gasto de depreciación se estimó sobre los activos de la empresa, desestimando el método de cálculo utilizado por la empresa.
- ✓ *El petente incluyó en el archivo "Gast adm generación abril 2018-dic-2019.xls" el canon de regulación duplicado (ya que incorporó en dos ocasiones el monto de ¢9,40 millones), para un total de gastos administrativos por la suma de ¢532,43 millones en el ejercicio 2019.*

  Igual sucedió en el formulario "IE-RE-7717 Registro de Costos y Gastos.xls", ya que al sumar las cuentas regulatorias por concepto de "Gastos administrativos" estas totalizan ¢532,83 millones, pese a que el monto total refiere a ¢523,43 millones (siendo este un valor dado, no una sumatoria). En el archivo "Estado financieros Generación.xls" se refleja la suma de ¢523,43 millones por lo que para efectos de resultados el canon no está duplicado.

  La IE incluyó el canon de regulación actualizado.

- ✓ *Además, incluyó los gastos por concepto de "pólizas" y "vacaciones", estos gastos se analizaron e incluyeron en el monto global de gastos administrativos, previo a su asignación porcentual a los diferentes sistemas.*

Una vez que se asigna el total de gastos entre las distintas cuentas que conforman la estructura de costos de la contabilidad regulatoria (utilizando los drivers que indicó Coopeguanacaste) se presentan los saldos de las partidas en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 23
Sistema de Generación, Coopeguanacaste
Gastos Administrativos
Resumen de partidas
Contabilidad Regulatoria - Con drivers
Periodo 2019

Detalle	Coopeguanacaste	ARESEP	Δ Abs	Δ %	Peso Δ
Personal	₡363,63	₡287,20	(₡76,43)	-21%	73%
Materiales	₡28,88	₡22,81	(₡6,07)	-21%	6%
Servicios contratados	₡7,31	₡5,77	(₡1,54)	-21%	1%
Alquileres	₡0,02	₡0,02	(₡0,00)	-21%	0%
Seguros	₡16,62	₡13,13	(₡3,49)	-21%	3%
Otros	₡106,97	₡84,49	(₡22,48)	-21%	22%
Canon de Regulación	₡9,40	₡15,16	₡5,76	61%	-6%
TOTAL	**₡532,83**	**₡428,57**	**(₡104,26)**	**-20%**	**100%**

Fuente: Elaboración propia, ET-055-2016.

La cooperativa estimó los gastos administrativos para el sistema de generación en la suma de ¢532,83 millones, mientras que la IE incluyó en la tarifa del sistema de generación para el año 2019 el monto de ¢428,57 millones.

Seguidamente se presenta el resumen de los gastos incluidos en el archivo "RIE_068_2019_Anexo_1_Plan_de_cuentas_uniforme_para_el_servicio_de_generacion.xlsx" del año 2019:

Cuadro No. 24
Sistema de Generación, Coopeguanacaste
Estructura de gastos administrativos

GASTOS ADMINISTRATIVOS	Personal	Materiales	Servicios contratados	Alquileres	Seguros	Otros	Canon de regulación	TOTAL
Gerencia general y estratégica	34,11	2,71	0,69	0,00	1,56	10,04	-	**49,10**
Auditoría interna y control de gestión	40,21	3,19	0,81	0,00	1,84	11,83	-	**57,88**
Legales	9,24	0,73	0,19	0,00	0,42	2,72	-	**13,30**
Relaciones públicas e institucionales	14,99	1,19	0,30	0,00	0,68	4,41	-	**21,58**
Contaduría y tesorería	81,62	6,48	1,64	0,00	3,73	24,01	-	**117,49**
Administración y finanzas	8,75	0,69	0,18	0,00	0,40	2,57	-	**12,59**
Regulación	8,50	0,68	0,17	0,00	0,39	2,50	9,40	**21,65**
Logística y servicios generales	37,55	2,98	0,75	0,00	1,72	11,05	-	**54,05**
Servicios informáticos	73,57	5,84	1,48	0,00	3,36	21,64	-	**105,89**
Recursos humanos	29,59	2,35	0,59	0,00	1,35	8,71	-	**42,60**
Otras gerencias de apoyo administrativo	25,50	2,02	0,51	0,00	1,17	7,50	-	**36,70**
TOTAL	**363,63**	**28,88**	**7,31**	**0,02**	**16,62**	**106,97**	**9,40**	**532,83**

Fuente: *Elaboración propia, ET-033-2018.*

Cuadro No. 25
Sistema de Generación, Coopeguanacaste
Estructura de gastos administrativos según Aresep

GASTOS ADMINISTRATIVOS	Personal	Materiales	Servicios contratados	Alquileres	Seguros	Otros	Canon de regulación	TOTAL
Gerencia general y estratégica	26,94	2,14	0,54	0,00	1,23	7,93	-	**38,78**
Auditoría interna y control de gestión	31,76	2,52	0,64	0,00	1,45	9,34	-	**45,71**
Legales	7,30	0,58	0,15	0,00	0,33	2,15	-	**10,50**
Relaciones públicas e institucionales	11,84	0,94	0,24	0,00	0,54	3,48	-	**17,04**
Contaduría y tesorería	64,47	5,12	1,30	0,00	2,95	18,96	-	**92,80**
Administración y finanzas	6,91	0,55	0,14	0,00	0,32	2,03	-	**9,94**
Regulación	6,72	0,53	0,14	0,00	0,31	1,98	15,16	**24,83**
Logística y servicios generales	29,66	2,36	0,60	0,00	1,36	8,72	-	**42,69**
Servicios informáticos	58,10	4,61	1,17	0,00	2,66	17,09	-	**83,64**
Recursos humanos	23,37	1,86	0,47	0,00	1,07	6,88	-	**33,65**
Otras gerencias de apoyo administrativo	20,14	1,60	0,40	0,00	0,92	5,92	-	**28,99**
TOTAL	**287,20**	**22,81**	**5,77**	**0,02**	**13,13**	**84,49**	**15,16**	**428,57**

Fuente: *Elaboración propia.*

iii. Análisis de resultados:

En los siguientes cuadros se presentan los resultados obtenidos del análisis de la petición tarifaria propuesta por Coopeguanacaste para su servicio de generación.

El gasto más representativo para del periodo 2019 corresponde a los "costos de operación y mantenimiento asociados a la generación" en este último el gasto estimado por la IE es superior al propuesto por el petente (esto se explica en el aparatado de análisis financiero, ya que el petente omitió o subestimó algunos

costos de operación y mantenimiento, tales como los gastos de "alquileres", "seguros" y "otros", este último en lo que respecta al canon de aguas).

Sin embargo, es relevante mencionar que los ajustes más significativos en los que se presenta una disminución respecto a lo solicitado por la Cooperativa se originaron en el gasto por concepto de "depreciaciones".

La IE incluyó en el cálculo de la "depreciación" el ajuste proveniente de los activos de planta general, específicamente el 12,47% asignado al sistema de generación (dato omiso por el petente); pese a ello, el monto total de depreciaciones estimado por la IE es inferior al estimado por Coopeguanacaste debido a la sobreestimación de la Cooperativa en el gasto por depreciación revaluada, ya que este último incluye el efecto de la revaluación del periodo (el cual no forma parte de la estructura de costos).

En el siguiente cuadro se observa que el total de costos y gastos aumentaron en un 2%, respecto a los propuestos por Coopeguanacaste para el año 2019:

Cuadro N° 26
Sistema de generación, Coopeguanacaste
Resumen de costos y gastos de operación
Periodo 2019
(millones de colones)

Costos	2019 CGTE	2019 ARESEP	Δ ¢	Δ %	Peso
Costos de operación y mantenimiento asociados a la	2.853,69	3.108,99	255,29	9%	185%
Gastos administrativos (de apoyo a la gestión) asocia	523,43	428,57	(94,86)	-18%	-69%
Depreciaciones y amortizaciones del ejercicio al cos	2.363,94	2.472,30	108,36	5%	79%
Depreciaciones y amortizaciones del ejercicio revalu	268,77	137,70	(131,07)	-49%	-95%
Total de costo y gastos	**6.009,84**	**6.147,57**	**137,73**	**2%**	**100%**

Fuente: *Intendencia de Energía, Aresep*

Como se puede observar la cuenta de mayor impacto corresponde a los gastos por concepto de "operación y mantenimiento", explicados en el apartado de "análisis financiero".

iv. Análisis del efecto de la rentabilidad propuesta:

Del análisis realizado en los apartados anteriores y con base en el rédito obtenido, se concluye que el servicio de generación que presta Coopeguanacaste requiere ingresos por ¢13 317,38 millones para el periodo

2019, lo que representa un incremento en la tarifa del sistema de generación del 21,73% para ese año, esto respecto a la tarifa vigente, el cual entraría a regir el 1 de enero del 2019, para un nivel de rédito para el desarrollo del 7,55%.

Es importante mencionar que el petente presentó en diversos archivos la estructura de costos, ingresos, la base tarifaria y rentabilidad. Pese a que en este estudio se obtuvo los datos de diversas fuentes de información que provee la Cooperativa, para futuras peticiones tarifarias se deberá mostrar el estado regulatorio completo en un único archivo.

III. PRINCIPALES VARIABLES QUE EXPLICAN EL CAMBIO DE LOS INGRESOS Y LA TARIFA

El ajuste propuesto en las tarifas del sistema de generación que presta Coopeguanacaste se explica principalmente por las siguientes razones:

1. *Proyecto Eólico El Cacao: se procedió a incorporar el proyecto eólico El Cacao en la base tarifaria del sistema de generación de energía eléctrica. El proyecto tiene una capacidad instalada de 20 MW, para un costo por megavatio de $2,6 millones, el cual se repaga en un plazo de 3, 7 y 20 años (según las condiciones de plazo pactadas en los contratos de financiamiento), para un gasto por depreciación de ¢874,78 millones para el año 2019.*

1. *Base tarifaria y gasto por concepto de depreciación: a) Ajuste de los activos de planta general atribuibles proporcionalmente al sistema de generación (porción del 12,47%), b) adiciones de planta general exclusivas del sistema de generación y c) cálculo incorrecto del petente, al considerar la revaluación del periodo dentro del gasto de depreciación revaluada en los periodos sujetos a estudio.*

2. *Gasto de operación y mantenimiento: se incorporó las partidas de "seguros" y "alquileres", las cuales no fueron presentadas por el petente; además de la actualización del canon de aguas, conforme a los datos provistos por el MINAE. Lo anterior representa un gasto mayor en el resultado final expuesto por la IE de un 9%.*

3. *Gastos administrativos: el monto global utilizado por Coopeguanacaste estaba desactualizado (se actualizó en el sistema de distribución, pero no se corrigió en generación). Aunado a lo anterior, lo incluido en el sistema de generación estaba sobrevaluado al incorporar de manera errónea las*

estimaciones del gasto de "depreciación", "pólizas" y "vacaciones", dando como resultado un 22% adicional.

4. *Se actualizó los ingresos vigentes y propuestos del Proyecto Eólico "El Cacao" a partir del mes de enero del 2019.*

IV. ESTRUCTURA TARIFARIA

De acuerdo con lo anterior, la tarifa de generación de Coopeguanacaste a partir del año 2019, según el análisis realizado por la Intendencia de Energía, debe ajustarse con un aumento del 21,73% a partir del primero de enero del 2019, de tal manera que permita compensar el aumento en los costos propios de la empresa.

Este ajuste se realiza sobre la tarifa vigente según RIE-116-2017 y publicadas en Alcance digital N° 277, Gaceta N° 217 del 16 de noviembre de 2017 (columna 1).

El aumento se realiza igual para todas las tarifas del sistema de generación de Coopeguanacaste: Tarifa T-SD Ventas al servicio de distribución.

Al aplicar los ajustes del presente estudio en la tarifa vigente para 2019, se obtiene las tarifas propuestas para dicho periodo (columna 2).

La siguiente tabla muestra el detalle de las tarifas, categorías tarifarias y bloques de consumo.

Cuadro N° 27
Sistema de generación, Coopeguanacaste
Tarifas del sistema de generación
2019.

COOPEGUANACASTE **Sistema de generación**		Columna 1 **Vigente a partir del 1-enero-2018**	Columna 2 **Propuesta a partir del 1/ene/2019**
► Tarifa T-SD Ventas al servicio de distribución			
Por consumo de energía (kWh)			
Periodo Punta	cada kWh	50.45	61.41
Periodo Valle	cada kWh	41.29	50.26
Periodo Noche	cada kWh	35.30	42.97

Fuente: Intendencia de Energía

[…]

VI. CONCLUSIONES:

1. *Coopeguanacaste solicitó un ajuste del 16,45% que regiría del 01 de octubre del 2018 hasta el 31 de diciembre del año 2019.*

2. *Como resultado del análisis tarifario realizado por este Ente Regulador se aumentó los costos y gastos para el año 2019 en ¢137,73 millones, donde sobresalen los gastos por concepto de operación y mantenimiento con una variación de ¢255,29, debido al reconocimiento de costos relevantes y necesarios para la operación de los proyectos (por ejemplo, los costos de seguros para todos sus proyectos de generación y el gasto por concepto de alquiler del "P.E. Río Naranjo"). Se le recuerda a Coopeguanacaste que es su responsabilidad incluir y justificar los costos que afectan la tarifa del sistema de generación.*

3. *Se recomienda considerar el Proyecto Eólico El Cacao como parte de las adiciones del periodo 2018, y las estimaciones de energía a partir del 01 de enero de 2019. Cabe destacar que el proyecto cuenta con información técnica y justificación razonable para su inclusión en las tarifas del sistema de generación que regirán en el periodo 2019.*

4. *En la presente solicitud tarifaria, no correspondió incorporar la liquidación tarifaria, por cuanto la primera fijación tarifaria una vez que entró a regir la metodología vigente fue para el año 2018.*

5. *Con base en el análisis técnico que antecede, se propone ajustar la estructura de costos sin combustible del sistema de generación que presta Coopeguanacaste para el año 2019, en un 21,73%, el cual regirá a partir del 1 de enero del 2019.*

[…]

II. Que en cuanto a la audiencia pública, del oficio IN-0048-IE-2018 citado, conviene extraer lo siguiente:

[…]

1. ***Consejero del Usuario, Jorge Sanarrusia Aragón, portador de la cédula de identidad No. 5-0302-0917:***

Relación costo beneficio; se ha señalado en los expedientes ET-32-2018 y ET-33-2018 un apartado específico de inversiones, en el mismo se presentan las justificaciones técnicas cualitativas sobre cada una de las inversiones realizadas.

a) *Pese a que se reconoce la importancia de los informes que presentó Coopeguanacaste, cabe destacar que no se encontró en los expedientes un informe cuantitativo que muestre la relación costo - beneficio de cada una de las inversiones realizadas y proyectadas. Es fundamental, que los usuarios tengamos acceso a este tipo de información ya que la relación costo - beneficio precisa si los beneficios superan a los costos, si los beneficios son iguales a los costos o si los costos son mayores que los beneficios o bien, deben presentar un argumento técnico del por qué no se presenta dicho rubro.*

En ese sentido, como no está de más en los requisitos de admisibilidad, se insta a la Intendencia de Energía de la Autoridad Reguladora en su rol de fiscalizador, que en los casos en que se pueda determinar de manera cuantitativa la relación beneficio costo en las inversiones, procurar que esa información sea incluida dentro del estudio de factibilidad que presentan las empresas y en las revisiones periódicas que se hacen para tal efecto.

b) *Satisfacción del servicio que presta Coopeguanacaste; la quinta encuesta sobre acceso y uso de satisfacción de los servicios públicos del 2016 de la Aresep señala que del 100% de los usuarios, un 55,8% opina en relación al servicio que recibe Coopeguanacaste, que el pago mensual por el servicio brindado es muy alto o alto, posicionando a este prestador del servicio eléctrico en la segunda posición más alta entre las ocho empresas prestadoras y también posee el porcentaje más alto sobre identificación de interrupciones sobre el servicio con un 80%.*

Entre las diferentes consultas realizadas a las personas usuarias sobre los niveles de acceso, uso y percepción de Coopeguanacaste, tiene los indicadores más altos de inconformidad, criterios que deben de considerarse dentro de la decisión de petición de este ajuste tarifario.

c) *El Instituto Nacional de Estadística y Censo de Costa Rica, señala que la región Chorotega posee un índice que pobreza total por la línea de pobreza de 23,6 por debajo, así mismo el Plan Nacional de Desarrollo*

del Gobierno de Costa Rica 2015 – 2018 en el apartado 5.2 Desarrollo Humano e Inclusión Social señala el listado de los 75 distritos de atención prioritaria a nivel nacional e incluye a Nicoya y Santa Cruz, Sardinal y Lepanto de Puntarenas, distritos que reciben servicio eléctrico por parte de Coopeguanacaste.

Importa señalar, que estos distritos son incluidos en el listado, a partir de las siguientes variables; distribución de pobres por la línea de pobreza, línea de pobreza extrema y necesidades básicas insatisfechas. En esa línea inquieta, que las familias afectadas por la difícil situación económica y los aumentos tarifarios automáticos de los servicios públicos, además los asociados al costo de la vida se vean perjudicados, teniendo que disminuir el consumo necesario de energía eléctrica en sus hogares y en otros que ni siquiera pueden acceder al servicio por el precio, contribuyendo a acrecentar la brecha de desigualdad social que ya existe afectando la calidad de vida de más personas usuarias de estos servicios públicos.

d) *Atracción de industrias; las industrias analizan el acceso de los servicios básicos, como un factor imprescindible para la selección de micro y macro localizaciones de nuevas empresas; uno de los factores determinantes en la implementación de proyectos corresponde a la cuantificación de las proyecciones sobre los costos de operación para el funcionamiento de una idea productiva. Si esos valores resultan elevados el proyecto productivo se desplaza hacia otros puntos geográficos.*

Resulta preocupante que los incrementos tarifarios solicitados por Coopeguanacaste en la tarifa eléctrica evidencia que los costos locales no son competitivos para las empresas, así mismo, los análisis de peticiones tarifarias no toman en consideración los impactos macroeconómicos de los incrementos en la tarifa eléctrica, cuando en este servicio público uno de los que acarrea una incidencia directa en el ámbito económico y social de la zona en donde se presta el servicio público.

Existen estudios concretos al respecto, las estadísticas del subsector eléctrico de los países del Sistema de Integración CENTROAMERICANA (SICA) 2016 ha señalado que Costa Rica está pagando más por el servicio eléctrico comparado con el resto de Centroamérica.

La Autoridad Reguladora debe analizar y proyectar los impactos de oferta y demanda en el sector industria, si bien este tema no es de competencia

sustantiva de ARESEP estrictamente, sí lo es indirectamente al regular los costos de la energía eléctrica de las industrias.

e) *Sobre el pliego tarifario; la convocatoria de la audiencia pública con fundamento en los oficios 1077-IE-2018 y lo establecido en los artículos 36 de la Ley 7593 y los artículos 44 al 61 del Decreto Ejecutivo 29732 no presenta claridad sobre la solicitud de fijación tarifaria que propone la empresa para el sistema distribución de energía eléctrica, debido a que la convocatoria de audiencia pública que presentó Coopeguanacaste, solicitó un ajuste de 5% para las tarifas residencial, comercial, servicio e industrial, tarifa media tensión y un 9,94 en la tarifa de acceso.*

Sin embargo, en el oficio Coopeguanacaste-66419 en el folio 552 del expediente; se indica, se presenta el siguiente cambio en la solicitud tarifaria al solicitar un 5,40 de ajuste del 1° de octubre del 2018 hasta el 1° de diciembre del 2019. El cambio obedece a una formulación del rédito solicitada por ARESEP, cambios en las vacaciones, pólizas y reasignación del canon de distribución, siendo finalmente el ajuste tarifario de un 5% para tarifa residencial, comercio y servicios, industrial, media tensión y un 11,47 en la tarifa de acceso.

Queda claro, que el ajuste tarifario que se solicita en esta audiencia pública no obedece a la solicitud de ajuste final presentada por Coopeguanacaste y que fue publicada en la convocatoria, es decir fue modificada y ahora nos están planteando un incremento de esa tarifa.

Esta situación genera confusión hacia aquellas personas que tienen un derecho y un interés legítimo de participar activamente en la audiencia pública y reproduce condiciones de desigualdad y vulnerabilidad hacia la participación de los usuarios al no ser clara la información para el usuario lo deja en completa indefensión a los usuarios, violentando el derecho de participación del artículo 9 de la Constitución Política y también, bueno, ahí señalo cuál voto hace referencia a este tipo de indefensión cuando se publica una cosa y cuando al finalmente se está viniendo a esta audiencia por otra solicitud distinta a la que fue convocada, que es el voto de la Sala Cuarta 07008825007-CO.

f) *Finalmente, la petitoria sería; que se admita la presente oposición con los argumentos aquí esgrimidos, que se rechace la presente solicitud de revisión tarifaria presentada por Coopeguanacaste y que se retrotraiga el proceso hasta la convocatoria de audiencia pública, para que se subsane ese error que hay en la convocatoria y se propongan*

los nuevos cambios y se hagan los ajustes correspondientes para que nuevamente haya un ajuste tarifario y una audiencia pública.

A continuación, se procede a dar respuestas a cada uno de los aspectos señalados por el señor Sanarrusia:

a. *En lo que respecta a las inversiones que realizan las empresas reguladas, la Intendencia de Energía ha emitido una serie de criterios regulatorios mediante la resolución RIE-103-2016, con el objetivo de llevar a cabo un proceso de fiscalización de cada una de las obras (micro y macro inversiones) propuestas para cada uno de los servicios públicos regulados desde la concepción de lo diferentes proyectos hasta que los mismos cumplan con el principio de ser "útiles y utilizables" y se incorporen en la base tarifaria y tarifa respectivamente.*

   En este sentido, para el caso de las inversiones asociadas al sistema de generación, cada uno de los proyectos propuestos por la petente, tuvieron que pasar por el tamiz del MINAE, quien otorga la concesión de generación, siendo este quien en conjunto con la empresa distribuidora debería de analizar el costo – beneficio de los proyectos propuestos, previo a la incorporación en el Plan de Expansión de la Generación.

   En lo que respecta a incorporar el análisis costo – beneficio como parte de los requisitos de admisibilidad de una petición tarifaria, si bien es loable lo señalado, los requisitos de admisibilidad establecidos por la Aresep mediante la resolución RRG-6570-2007, son requisitos de forma y no de fondo. No obstante, la Intendencia realiza un análisis técnico riguroso, con el propósito de velar por el cumplimiento del principio de servicio al costo.

b. *Efectivamente, la Intendencia de Energía es consciente que la calidad y la satisfacción del usuario por el servicio público prestado es fundamental como contraprestación por el pago que realiza el usuario. En este sentido, la IE ha realizado esfuerzos significativos en promover las Normas de Calidad del suministro eléctrico acordes con las necesidades del mercado, donde se define la obligatoriedad de cumplir con la cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima del servicio.*

c. *La intendencia de Energía comparte la preocupación mostrada por el Consejero del Usuario respecto a las características socioeconómicas de la zona de concesión de la empresa distribuidora y las implicaciones que representa un incremento tarifario. En este sentido, la IE realizó un esfuerzo por asegurar que cada uno de los costos y gastos incorporados en el algoritmo tarifario están debidamente justificados y estrechamente relacionados con la prestación del servicio, tal y como lo exige el artículo 32 de la Ley No. 7593 y al principio de servicio al costo.*

d. *En lo que respecto a la atracción de inversión y las repercusiones que provocan los ajustes tarifarios recurrentes. En este caso particular, es preciso indicar que, en los últimos años, el servicio de generación y distribución que presta Coopeguanacaste han estado sujetos a fijaciones a la baja de sus tarifas por diferentes circunstancias técnicas. No obstante, es claro que dicha tendencia no se puede mantener en el tiempo cuando la petente incorpora proyectos de generación de energía, que le permitirá a los usuarios disponer de un costo por la misma menor al costo ofrecido por el ICE.*

   No obstante, su preocupación no ocupa sólo a Coopeguanacaste, sino a todo el país, independientemente de la empresa distribuidora, y la Intendencia de Energía ha sido enérgica en recalcarlo, dadas las estructuraciones financieras de los proyectos, la visión individualista, sobrecostos en inversiones, plazos de recuperación costos, etc. lo cual ha provocado una presión significativa en las tarifas. En este sentido, la IE ha llevado a cabo un proceso de análisis tarifario que garantice a los diferentes usuarios que los costos y gastos incorporados en las tarifas de los sistemas de generación y distribución de energía están relacionados con la prestación del servicio y se apegan al principio de servicio al costo.

e. *Se le indica al oponente; que el petente que mediante el oficio GG419 con fecha del 17 de agosto (folios 552 al 555), Coopeguanacaste presentó una modificación a las solicitudes de ajuste tarifario para los sistemas de generación y distribución, la cual fue modificada según el oficio GG420 con fecha ambos del 17 de agosto (folio 226).*

   Como resultado de lo anterior, la propuesta tarifaria indicada según la publicación en el Diario Oficial La Gaceta, es diferente a lo pretendido por el petente. Lo cual evidentemente afecta directamente la participación de los usuarios en el proceso de Audiencia Pública,

incluso hasta propiciar que el análisis ya realizado por estos no tenga sentido técnico dado que lo pretendido por la empresa distribuidora vario. A raíz de lo anterior, la IE acoge la oposición propuesta por el Consejero al Usuario de realizar una nueva audiencia pública en la cual se exponga la información que fundamente el porcentaje de ajuste solicitado, para lo cual emitió la resolución RE-0093-IE-2018 motivando el acto.

También se le hace saber que de conformidad con lo establecido en la Ley No. 7593 los prestadores de servicios públicos deberán presentar, por lo menos una vez al año un estudio tarifario ordinario, no limitándolo a la presentación de un estudio plurianual, y corresponde a esta Autoridad Reguladora el modificar, aprobar o rechazar esas peticiones. Es importante recalcar al oponente que el resultado final de las peticiones conlleva un análisis técnico riguroso por parte de la Intendencia de Energía, de tal forma que el resultado pueda garantizar el equilibrio social y financiero de la empresa, así como armonizar los intereses de los consumidores, usuarios y prestadores de los servicios públicos. Otro punto importante de hacerle ver al oponente es la responsabilidad que tiene esta Autoridad de velar porque se cumpla el principio de "servicio al costo" y, por consiguiente, excluir gastos desproporcionados y gastos que no estén relacionados con la prestación del servicio público.

2. Yalile Carrera Blanco, portadora de la cédula de identidad n.°1-0334-0843:

Indico la oponente, para mí es un enorme orgullo y satisfacción estar participando de esta audiencia pública y quiero externar que, yo no estoy de acuerdo con este aumento. Muchos de los puntos que yo iba a externar ya fueron expuestos por el compañero que me antecedió, por lo tanto, voy a ser breve y voy a justificar mi desacuerdo en que hay mucha, mucha gente, especialmente en las costas, y no nos vayamos tan largo, a escasos 10 minutos del centro de Santa Cruz, que tienen que estar cocinando con leña, porque no pueden pagar la tarifa. Me parece una injusticia aumentarles la tarifa a estas personas que son las más vulnerables.

A continuación, se procede a dar respuestas a cada uno de los aspectos señalados por la Señora Carrera:

a. Al respecto, se le indica a la señora Carrera que de conformidad con lo establecido en la Ley de la Autoridad Reguladora, las empresas

reguladas tienen la potestad de presentar al menos una vez al año un estudio tarifario ordinario. Así como, la Autoridad Reguladora tiene la potestad de modificar, aprobar o rechazar esas peticiones, previa valoración técnica y en estricto apego a las metodologías tarifarias vigentes.

En este sentido, el resultado que se obtenga del análisis tarifario por parte de la IE, debe garantizar el equilibrio financiero de la empresa, así como, armonizar los intereses de los usuarios y prestadores de los servicios públicos bajo el principio de "servicio al costo".

3. Bedyn Álvarez Gutiérrez, portador de la cédula de identidad n.°5-0098-0723:

Presento mi oposición a la solicitud del aumento que pretende Coopeguanacaste de las tarifas eléctricas en el porcentaje establecido. Ya el compañero que hizo de primero uso de la palabra manifestaba cosas que son muy ciertas en nuestro Guanacaste, tenemos un 23% de pobreza en la región y las tarifas eléctricas golpean más duro a los que menos tienen, y ya por ahí mencionaba doña Yalile la situación de que hay gente en estos momentos que está haciendo uso de otro tipo de energía para cocinar, porque no puede pagar lo del servicio eléctrico que está saliendo ya muy caro. Además, la gente tiene que valerse de muchos artificios para poder hacerle frente al consumo de energía eléctrica, como es el caso de tener que, por las noches no dejar luces prendidas como antes se hacía, porque por ahí se dice, con buen suceso, que una luz encendida por las noches es un guarda que está vigilando, pero tampoco ya no se puede dejar la luz encendida por las noches, porque implica más alto consumo. Por lo tanto, no es justo que Coopeguanacaste aumente el precio de la electricidad. Por otra parte, ya vimos que adolece de una buena presentación la solicitud tarifaria, porque presentaron una cosa y aquí lo que estamos hablando es otra situación que no es la que se presentó, entonces eso sencillamente no procede. Por eso es mi oposición a que se aumenten las tarifas eléctricas en Coopeguanacaste.

A continuación, se procede a dar respuestas a cada uno de los aspectos señalados por el Alvarez:

a. *Es importante indicarle al Sr. Álvarez, que el resultado final de las peticiones conlleva un análisis técnico riguroso por parte de la Intendencia de Energía, de tal forma que el resultado pueda garantizar el equilibrio social y financiero de la empresa, así como armonizar los intereses de los consumidores, usuarios y prestadores de los servicios públicos. Otro punto importante de hacerle ver al oponente es la*

responsabilidad que tiene esta Autoridad de velar porque se cumpla el principio de "servicio al costo" y, por consiguiente, excluir gastos desproporcionados y gastos que no estén relacionados con la prestación del servicio público.

En lo que respecta a la diferencia entre la propuesta tarifaria indicada según la publicación en el Diario Oficial La Gaceta y lo pretendido por el petente. La Intendencia de Energía comparte la preocupación, ya que provoca una afectación directa en la participación de los usuarios en el proceso de Audiencia Pública, incluso hasta propiciar que el análisis ya realizado por estos no tenga sentido técnico dado que lo pretendido por la empresa distribuidora vario. A raíz de lo anterior, la IE acoge la oposición propuesta por el Consejero al Usuario y otros opositores de realizar una nueva audiencia pública en la cual se exponga la información que fundamente el porcentaje de ajuste solicitado, para lo cual emitió la resolución RE-0093-IE-2018 motivando el acto.

4. ***José María Matarrita Mendoza, portador de la cédula de identidad n.°5-0105-0449***

Indica el oponente, Compañeros, el 14 de agosto a las dos de la tarde, yo estuve en una audiencia con personeros de Coopeguanacaste, investigando sobre el tema y aquí no se mencionó algo que sí me lo dijeron en la reunión, que hay un hueco financiero. Entonces, estamos partiendo de que esta solicitud de aumento va a cubrir este hueco que no nos dicen cuánto es, una deficiencia de nuestra empresa, nos falta información. Yo quisiera decirles a los compañeros de la Autoridad Reguladora, que este no es el momento para que Coopeguanacaste pida aumento, tenemos el gran temor del Plan Fiscal, se nos viene, porque va a ser una realidad. Le colocamos de esta solicitud de un 5%, ¿cuánto va a ser el costo? el compañero, disculpe el nombre, compañero que presentó aquí, dice que no hay información de beneficio costo, solo nos dicen que es más barato que el ICE, que es más barato que el ICE, pero no lo demuestran.

A continuación, se procede a dar respuestas a cada uno de los aspectos señalados por el Señor Matarrita:

a. *Es importante indicarle al Sr. Matarrita, que el resultado final de las peticiones conlleva un análisis técnico riguroso por parte de la Intendencia de Energía, de tal forma que el resultado pueda garantizar el equilibrio social y financiero de la empresa, así como armonizar los intereses de los consumidores, usuarios y prestadores de los servicios*

públicos. Otro punto importante de hacerle ver al oponente es la responsabilidad que tiene esta Autoridad de velar porque se cumpla el principio de "servicio al costo" y, por consiguiente, excluir gastos desproporcionados y gastos que no estén relacionados con la prestación del servicio público.

5. ***John Hendy Parker May, portador de la cédula de identidad n°7-0041-09276***

Se opone rotundamente al aumento por una razón fundamental, la electricidad del país es cara y en Coopeguanacaste también. Indica que la cooperativa si tiene problemas financieros que revise su estructura administrativa, ya que se han realizado aumentos exorbitantes a todas las gerencias y a todas las jefaturas. Sigue indicando que lo solicito al comité de vigilancia y nos consulta que, si se les puede negar la información a los asociados, y que no debe ser información de tipo de confidencialidad. Sigue indicando que quiere hacer algunas propuestas, si hay problema económico financiero que las dietas que reciben los diferentes cuerpos directivos sean reducidas o se eliminen, de igual forma los viajes al extranjero y revisión de las contrataciones que hace la cooperativa porque hay empleados con tiempo ocioso, que se revisen los salarios de los altos jerarcas y las jefaturas sus aumentos salariales, considera controlar el aspecto administrativo donde probablemente hay derroche de dinero de la cooperativa, dinero de los asociados. Indican que los aumentos de gasolina y plan fiscal son pagados por todos los usuarios al igual que el aumento de la electricidad de la zona, y el costo de la canasta básica; por todo lo anterior me opongo rotundamente y completamente en contra del aumento.

A continuación, se procede a dar respuestas a cada uno de los aspectos señalados por el Señor Parker:

a. *Se le indica al Sr. Parker, que de conformidad con lo establecido por la Ley No 7593, la Autoridad Reguladora no puede coadministrar o inmiscuirse en gestiones gerenciales u organizativas de la Cooperativa.*

   No obstante, la Aresep tiene la obligación de validar cada uno de los costos y gastos propuestos por la petente para los sistemas de generación y distribución de energía eléctrica y a la luz de lo indicado en el artículo 32 de la Ley No. 7593, definir si los mismos son asociados al servicio público prestado o son desproporcionados o ajenos.

6. ***Esaú Álvarez Espinoza, portador de la cédula de identidad n°.5-0110-0219:***

Esta sorprendido por el hueco financiero, y que le preocupa enormemente, que siempre ha confiado en la administración de Coopeguanacaste, pero como humanos se pueden cometer errores y si el comité de vigilancia no está haciendo su trabajo, pues lógicamente nadie se da cuenta.

Le preocupa los aumentos desproporcionados en los salarios a diferentes niveles y a todos los empleados de alta gerencia; así como la confidencialidad de los salarios.

Y para finalizar se opone rotundamente al aumento ya que es micro, mini empresario y se preocupa porque va a afectar el hogar y al micronegocio y a todos.

A continuación, se procede a dar respuestas a cada uno de los aspectos señalados por el Señor Álvarez:

a. *Se le indica al Sr. Álvarez, que de conformidad con lo establecido por la Ley No 7593, la Autoridad Reguladora no puede coadministrar o inmiscuirse en gestiones gerenciales u organizativas de la Cooperativa.*

   No obstante, la Aresep tiene la obligación de validar cada uno de los costos y gastos propuestos por la petente para los sistemas de generación y distribución de energía eléctrica y a la luz de lo indicado en el artículo 32 de la Ley No. 7593, definir si los mismos son asociados al servicio público prestado o son desproporcionados o ajenos.

7. ***Domingo Angulo Obando, portador de la cédula de identidad n.°5-0146-0534:***

Indica el oponente, porque lo presentado por Coopeguanacaste en la audiencia es diferente a lo indicado inicialmente. Y por la falta de liquidez, el cual le toca demostrar a la Cooperativa.

A continuación, se procede a dar respuestas a cada uno de los aspectos señalados por el Señor Angulo:

a. *En lo que respecta a la diferencia entre la propuesta tarifaria indicada según la publicación en el Diario Oficial La Gaceta y lo pretendido por el petente. La Intendencia de Energía comparte la preocupación, ya que provoca una afectación directa en la participación de los usuarios en el proceso de Audiencia Pública, incluso hasta propiciar que el análisis ya realizado por estos no tenga sentido técnico dado que lo pretendido por la empresa distribuidora vario. A raíz de lo anterior, la IE acoge la oposición propuesta por el Consejero al Usuario y otros opositores de realizar una nueva audiencia pública en la cual se exponga la información que fundamente el porcentaje de ajuste solicitado, para lo cual emitió la resolución RE-0093-IE-2018 motivando el acto.*

b. *En lo que respecta a los problemas de facturación, se le insta al Sr. Angulo a que interponga la queja en Coopeguanacaste, si la respuesta de la empresa distribuidora no es en tiempo, la queja la puede interponer en la Dirección General de Servicio al Usuario de la Aresep.*

8. Ivonne Espinoza Rosales, portador de la cédula de identidad N° 5-0279-0120:

La cooperativa tiene varios proyectos que ya están en funcionamiento, otros por iniciar y nos indican a los asociados que los proyectos como condición es que la electricidad va a costar menos que la del ICE, no es una buena comparación con el ICE porque otros servicios son más baratos y el servicio de la cooperativa como indico el defensor de los usuarios es la segunda más cara a nivel nacional. Además, cita que el defensor del usuario indicó que no se ocupa el aumento pero que no está muy seguro de esto último, por lo que se opone completamente, si tienen problemas de liquidez por no proveer todo y no planificar no es justo que los usuarios paguemos esa falta de planificación.

A continuación, se procede a dar respuestas a cada uno de los aspectos señalados por la Señora Espinoza:

a. *Es importante indicarle a la Sra. Espinoza, que el resultado final de las peticiones conlleva un análisis técnico riguroso por parte de la Intendencia de Energía, de tal forma que el resultado pueda garantizar el equilibrio social y financiero de la empresa, así como armonizar los intereses de los consumidores, usuarios y prestadores de los servicios públicos. Otro punto importante de hacerle ver al oponente es la responsabilidad que tiene esta Autoridad de velar porque se cumpla*

el principio de "servicio al costo" y, por consiguiente, excluir gastos desproporcionados y gastos que no estén relacionados con la prestación del servicio público.

En lo que respecta a las inversiones de largo plazo, las mismas obedecen a cubrir una necesidad de demanda de energía o a un factor costo, el cual debe ser explicado o justificado ante la Aresep. En este sentido, si el costo de los proyectos propuestos por la cooperativa presentase un costo por kWh mayor al que dispone el ICE, siendo este último en que provee de energía a Coopeguanacaste para atender sus necesidades, la Aresep sólo le reconocerá como costo máximo el costo del ICE, lo cual garantiza al usuario que no se reconocerán costos o inversiones desproporcionadas en relación con gastos normales para la prestación del servicio público.

9. Grace Pérez Gutiérrez, portadora de la cédula de identidad N° 5-0117-0625:

Se opongo rotundamente al aumento de la Coopeguanacaste, ya que tenía que haber planificado bien este aumento, dado a que aquí hay muchos líderes comunales y también hay muchos asociados que participamos en la asamblea y somos conocedores de las actividades de Coopeguanacaste. Por lo tanto, no estamos de acuerdo en este aumento, porque sabemos las actividades que Coopeguanacaste realiza y que es injusto que se muestre ahora en déficit económico.

A continuación, se procede a dar respuestas a cada uno de los aspectos señalados por la Señora Pérez:

a. *Es importante indicarle al Sr. Pérez, que el resultado final de las peticiones conlleva un análisis técnico riguroso por parte de la Intendencia de Energía, de tal forma que el resultado pueda garantizar el equilibrio social y financiero de la empresa, así como armonizar los intereses de los consumidores, usuarios y prestadores de los servicios públicos. Otro punto importante de hacerle ver al oponente es la responsabilidad que tiene esta Autoridad de velar porque se cumpla el principio de "servicio al costo" y, por consiguiente, excluir gastos desproporcionados y gastos que no estén relacionados con la prestación del servicio público.*

Como resultado de la nueva audiencia pública celebrada el día 8 de noviembre del 2018, de conformidad con el artículo 36 de la Ley de la Autoridad Reguladora

de los Servicios Públicos (Ley Nº 7593) y los artículos 45 y 49 del Reglamento de la cita Ley (Decreto Nº 29732-MP).

De acuerdo con el informe IN-0074-DGAU-2018 correspondiente al informe de oposiciones y coadyuvancias de la Dirección General de Atención al Usuario, se recibieron las siguientes oposiciones y coadyuvancias adicionales a los estudios tarifarios propuestos por Coopeguanacaste para los sistemas de generación y distribución, las cuales se analizan de seguido.

1. Gerardo Martín Araya Naranjo, cédula de identidad No. 5-0290-0356:

Indica el oponente que se refiere al expediente de distribución en modalidad de coadyuvante e indica que tiene un terreno en Magencio que suplido por el ICE y hace una comparación entre precios y calidad del servicio de Coopeguanacaste y el ICE. Indica, además, que en la información que brinda la Aresep se puede ver que la tarifa de Coopeguanacaste es la más baja de todas las distribuidoras.

Indica el oponente que cuando se compara la tarifas a nivel Centroamericano hay que tomar en cuenta que existe un fuerte subsidio, por lo que no se vale decir que a nivel centroamericano la tarifa es más competitiva que en Costa Rica, pues si nos ponen a todos igual, Costa Rica es mucho más competitivo. Agrega, que la inflación acumulada del 2013, 2012 hasta la fecha es del 18% y Coopeguanacaste acaba de recibir un 2,67% de ajuste, o sea tiene un rezago de un 14% y que le agradó lo expuesto por el defensor del usuario cuando habla de hacer una revisión tarifaria justa.

Explica el oponente sobre el proceso de reconocimiento de las inversiones por parte de la Aresep y que no necesariamente por que se haya presupuestado, o estén los materiales es todo y ya, si no que hasta que empiece a funcionar se reconoce la inversión o de ese servicio de la deuda debe ser considerada en la tarifa.

Aclara el oponente que los aumentos no son una suma en cascada, que el aumento final es del 5,40% y del 16,45% para el sistema propio de generación, y hace una explicación del por qué la tarifa de acceso, y que es para la generación distribuida. Considera importante que retrotraer la audiencia provoca un reconocimiento por parte de la Aresep de lo que está sucediendo con el tipo de cambio ya que muchas de las compras son hechas en el extranjero y hay que pagarlos en dólares.

Indica el oponente que gracias a Dios Coopeguanacaste pudo hacer inversión en generación, ya que en los próximos cinco años no van a haber más proyectos

de generación por la directriz que hay, y con estas inversiones generan con un costo más bajo que si todo lo comprara al ICE y eso gracias al esfuerzo de todo un equipo, aún con gente que cuestionó en su momento esas inversiones.

A continuación, se procede a dar respuestas a cada uno de los aspectos señalados por el Señor Araya:

a. *Se le agradece al Sr. Araya sus observaciones, las cuales fueron tomadas en cuenta en el presente análisis tarifario.*

2. Gerardo Gutiérrez García, cédula de identidad No. 1-0862-0699:

Indica el oponente que todo está muy caro, pero efectivamente Coopeguanacaste tiene una tarifa residencial la más baja. Indica, además, que nadie puede cuestionar el sentido social de la Cooperativa, pero hay un tema de proporcionalidad de los costos y es que del 2012 a la fecha el costo de la vida anda un poco más del 18%, los aumentos de la tarifa eléctrica llegaban al cuatro punto y resto, digamos que autoriza el 5,4 no llega ni a la mitad de lo que ha incrementado el costo de vida en los últimos años, eso es objetivo.

A continuación, se procede a dar respuestas a cada uno de los aspectos señalados por el Señor Gutiérrez:

a. *Se le agradece al Sr. Gutiérrez sus observaciones, las cuales fueron tomadas en cuenta en el presente análisis tarifario.*

[…]

III. Que de conformidad con lo señalado en los resultandos y considerandos precedentes y en el mérito de los autos, lo procedente es fijar las tarifas del sistema de generación que presta Coopeguanacaste a partir del 1 de enero de 2019, tal y como se dispone;

POR TANTO
El INTENDENTE DE ENERGÍA
RESUELVE:

I. Fijar las tarifas del sistema de generación que presta Coopeguanacaste a partir del 1 de enero de 2019, de la siguiente manera:

COOPEGUANACASTE **Sistema de generación**		**Rige a partir del 1/ene/2019**
► Tarifa T-SD Ventas al servicio de distribución		
Por consumo de energía (kWh)		
Periodo Punta	cada kWh	61,41
Periodo Valle	cada kWh	50,26
Periodo Noche	cada kWh	42,97

II. Tener como respuesta a las oposiciones lo externado en el Considerando II de esta resolución.

En cumplimiento de lo que ordenan los artículos 245 y 345 de la Ley General de la Administración Pública *(LGAP)* se informa que contra esta resolución pueden interponerse los recursos ordinarios de revocatoria y de apelación y el extraordinario de revisión. El de revocatoria podrá interponerse ante el Intendente de Energía, a quien corresponde resolverlo y los de apelación y de revisión podrán interponerse ante la Junta Directiva, a la que corresponde resolverlos.

De conformidad con el artículo 346 de la LGAP, los recursos de revocatoria y de apelación deberán interponerse en el plazo de tres días hábiles contado a partir del día hábil siguiente al de la notificación y, el extraordinario de revisión, dentro de los plazos señalados en el artículo 354 de dicha ley.

NOTIFÍQUESE Y PUBLÍQUESE

Mario Mora Quirós, Intendente de Energía.—1 vez.—O.C. N° 9006-2018.—Solicitud N° 264-2018.—(IN2018304290).

INTENDENCIA DE AGUA
RESOLUCIÓN RE-0008-IA-2018 del 11 de diciembre de 2018

AJUSTE TARIFARIO POR REBAJA EN LOS CÁNONES PARA EL AÑO 2018, PARA LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO E HIDRANTES PRESTADOS POR EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA, S.A. (ESPH, S.A.)

EXPEDIENTE ET-051-2018

RESULTANDO

I- La Contraloría General de la República, en su oficio DFOE-EC-0393 del 27 de julio del 2012 indicó en cuanto a la figura del canon:

> "(…) *Esta Contraloría General advierte a la ARESEP, la obligación de que, previo a realizar el cobro, éste se encuentre incorporado efectivamente en la tarifa que cobran las empresas que brindan el servicio regulado a sus usuarios finales, considerando que esas entidades autorizadas para prestar el servicio no son más que recaudadores del canon, por lo que este debe ser neutro respecto de su situación financiera* (…)"*.*

II- Mediante el oficio OF-0666-IA-2018 del 25 de septiembre del 2018, la Intendencia de Agua recomendó la apertura de un expediente administrativo para la aplicar de oficio, un ajuste en el monto de los cánones de regulación para el año 2018, a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, S.A. (ESPH, S.A) y al Instituto Costarricense de Acueducto y Alcantarillado (AyA) y correspondiente a los servicios de acueductos, alcantarillados e hidrantes. (Folio 01).

III- Mediante el oficio OF-0667-IA-2018 del 25 de septiembre del 2018, la Intendencia de Agua solicitó a la Dirección General de Atención al Usuario (DGAU), la convocatoria a audiencia pública para exponer el estudio tarifario de oficio de referencia. (Folio 03).

IV- La Autoridad Reguladora publicó la convocatoria a audiencia pública en los siguientes periódicos: La Extra y La Teja del 11 de octubre del 2018 (folio 21) y el Diario Oficial La Gaceta Nº188 del 11 de octubre del 2018. (Folio 21).

V- La audiencia pública se realizó el día 13 de noviembre del 2018 a las 17:30 horas, en el Auditorio de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ubicado en Guachipelín de Escazú, Oficentro Multipark, edificio Turrubares; por medio del sistema de videoconferencia interconectado con los Tribunales de Justicia ubicados en los centros de Limón, Heredia, Alajuela, Liberia, Puntarenas, Pérez Zeledón y Cartago, y también en forma presencial en el Salón de la Cruz Roja de San Ignacio de Acosta, ubicado 25 metros al sur del costado oeste del parque Monseñor Sanabria, San Ignacio, Acosta, San José. para conocer la propuesta de "Estudio tarifario de oficio para aplicar ajuste de cánones para el periodo 2018 en los servicios de acueducto, alcantarillado e hidrantes del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y de los servicios de acueducto y alcantarillado de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A. (ESPH S.A.)", tramitada en el expediente ET-051-2018. Según el informe N° IN-0072-DGAU-2018 no se recibieron oposiciones ni coadyuvancias.

VI- Mediante el oficio OF-0861-IA-2018 del 04 de diciembre de 2018, la Intendencia de Agua emitió el informe denominado "*Ajuste por rebaja en los cánones para el año 2018 para los servicios de acueducto, alcantarillado, hidrantes y riego. Expediente ET-051-2018"*. (Mismo que corre agregado a los autos).

VII- En los plazos y procedimientos se han cumplido las prescripciones de Ley.

CONSIDERANDO

I- Del oficio OF-0861-IA-2018 del 04 de diciembre de 2018, que sirve de base a esta resolución, conviene extraer lo siguiente:

"(…)

I. Servicios de Acueductos, Alcantarillado Sanitario, Hidrantes

a) Introducción

El presente estudio surge ante la necesidad de efectuar ajustes en las tarifas al actualizarse el monto del canon de regulación aprobado por la Contraloría General de la República para el año 2018, con el fin de cumplir con la recomendación de esa entidad en el sentido de que el canon "debe ser neutro a su situación financiera"; la cual debe ser acatada por la Autoridad Reguladora.

Para cumplir con la directriz anteriormente mencionada y en vista de que el canon de regulación es parte de la tarifa del servicio que pagan los abonados, la Autoridad Reguladora debe ajustar este cargo en la proporción que corresponda.

El mecanismo con el cual la Autoridad Reguladora puede lograr que el ajuste del canon llegue a los abonados, es mediante la modificación de las tarifas y por la vía ordinaria; excepto en las tarifas de riego y avenamiento ya que el modelo tarifario establecido mediante resolución RIA-009-2015 del 08 de septiembre del 2015 indica que se debe realizar el ajuste por la vía extraordinaria (…).

c) Cálculo del Impacto del Canon en los ingresos estimados

Se calculó el impacto sobre los ingresos de la diferencia entre el canon incorporado por la Autoridad Reguladora en los estudios tarifarios elaborados para los servicios de acueducto, alcantarillado e hidrantes para el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA); servicio de acueducto, alcantarillado e hidrantes de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH, S.A.) y en el servicio de riego para el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara) para el año 2018, con respecto al canon aprobado por la Contraloría General de la República para cada servicio.

Producto de la Evaluación realizada se determinó lo siguiente:

Para el servicio de hidrantes de la ESPH, S.A. y Riego y Piscicultura de SENARA los montos a ajustar resultaron insignificantes en las tarifas fijadas, por lo que no se consideran en el cambio tarifario (…).

Se determinó que para el AyA se debe hacer el ajuste del año 2018; por lo que procede hacer una disminución en el costo, el cual se relaciona con los ingresos estimados, determinándose los porcentajes de rebaja que se aplicarían a los servicios de acueducto, alcantarillado e hidrantes, lo cual se detalla en el cuadro 2 y con respecto a ESPH, S.A, se determinó que se requiere de una disminución en los ingresos para los servicios de acueducto y alcantarillado para el año 2018 como se muestra en el cuadro 2.

Cuadro 2

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
IMPACTO EN LOS INGRESOS POR AJUSTE DE LOS CÁNONES DE REGULACIÓN PARA EL AÑO 2018
en colones

Rubro	Canon incorporado en las tarifas vigentes para el año 2018	Canon autorizado por la Contraloría General de la República para el año 2018	Ajuste de cánones que habría que realizar mediante nuevo estudio tarifario para 2018	Ingresos esperados con tarifas vigentes para el año 2018	Porcentaje de disminución en ingresos por ajuste en cánones autorizados para 2018
Acueducto	2.514.447.206	1.979.466.157	(534.981.049)	112.365.446.394	**-0,48%**
Alcantarillado	836.031.123	677.899.369	(158.131.754)	17.561.185.548	**-0,90%**
Hidrantes	74.249.427	54.231.950	(20.017.477)	3.204.952.405	**-0,62%**
Totales	3.424.727.756	2.711.597.476	(713.130.280)	133.131.584.346	**-0,54%**

Nota 1: Dentro de los datos del AyA se encuentran incluidos los datos de las ASADAS.

EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS DE HEREDIA S.A.
IMPACTO EN LOS INGRESOS POR AJUSTE DE LOS CÁNONES DE REGULACIÓN PARA EL AÑO 2018
en colones

Rubro	Canon incorporado en las tarifas vigentes para el año 2018	Canon autorizado por la Contraloría General de la República para el año 2018	Ajuste de cánones que habría que realizar mediante nuevo estudio tarifario para 2018	Ingresos esperados con tarifas vigentes para el año 2018	Porcentaje de disminución en ingresos por ajuste en cánones autorizados para 2018
Acueducto	163.878.880	127.488.944	(36.389.936)	10.410.513.474	**-0,35%**
Alcantarillado	32.255.713	25.093.208	(7.162.505)	2.040.236.923	**-0,35%**
Hidrantes	8.901.705	6.925.047	(1.976.658)	491.848.164	**-0,40%**
Totales	205.036.298	159.507.199	(45.529.099)	12.942.598.562	**-0,35%**

Como se observa, los ajustes que deben realizarse en los ingresos del año 2018 para el AyA corresponden a una disminución para acueducto de 0,48%, para alcantarillado de 0,90%; en ESPH también resulta una disminución de 0,35% para acueducto y 0,35% para alcantarillado.

II. Impacto Tarifario

a) Ajustes en las tarifas vigentes: Con el fin de considerar las rebajas en el canon de regulación en AyA, se recomienda disminuir las tarifas de acueducto y alcantarillado en un periodo de dos meses. Dadas las razones que llevan a la rebaja, esta se aplicará sólo a aquellos bloques y categorías tarifarias que no se encuentran subsidiadas. Las tarifas que se ajustarán son las que corresponden a las categorías empresarial, gubernamental y domiciliaria a partir de los bloques de consumo de 61 m3. Para la categoría preferencial y los bloques menores de 60 m3 de la categoría domiciliar, no se estimó disminución dado que estos ya cuentan con un subsidio por razones de tipo social. En ESPH se recomienda disminuir la tarifa de acueducto y alcantarillado por un periodo de dos meses en las mismas categorías.

En cuanto a los costos y al mercado, se mantienen los datos constantes según lo estimado en el último estudio tarifario para cada servicio. De manera que se toman como válidas las proyecciones de mercado y de ingresos, y solamente se mide cuánto representa el ajuste de los nuevos cánones sobre los ingresos que necesita la Institución para sufragar los costos que ya fueron estimados en estudios tarifarios en que se determinaron las tarifas que aplican actualmente para AyA como ESPH, en los servicios de acueducto y alcantarillado.

Según lo anterior, para AyA aplica una rebaja de 6,36% en las tarifas de acueducto y de un 7,96% en las de alcantarillado, mientras en ESPH aplica una disminución de 4,60% en el servicio de acueducto y de un 3,45% en el servicio de alcantarillado.

b) Hidrantes: Es necesario indicar que el monto a devolver en la tarifa de hidrantes para AyA solicitado es de 20.017.477 colones, los cuales se van a rebajar en el mes de enero, para todos los servicios y categorías. Las tarifas de hidrantes para el servicio medido pasan de 24 a 22 colones por metro cúbico y en servicio fijo de 510 a 478 (…).

IV. Conclusiones

(…)

2- Al revisar el monto autorizado por la Contraloría General de la República en las estimaciones del canon por regulación para el año 2018, se determinó que los ingresos del AyA requerirían una disminución para el servicio de acueducto de un 0,48% y para el servicio de alcantarillado un 0,90%; con respecto a ESPH las necesidades de ingresos disminuirían en un 0,35% para el servicio de acueducto y un 0.35% para el servicio de alcantarillado.

3- Ante la rebaja en la necesidad del ingreso, es necesario aplicar una disminución en las tarifas de los servicios de acueducto y alcantarillado del AyA y de la ESPH, es conveniente que dichas variaciones rijan durante 2 meses, que corresponden de enero y febrero de 2019.

4- Para el servicio de Hidrantes del AyA se debe rebajar en el mes de enero 2019. La tarifa de hidrantes para el servicio medido pasa de 24 a 22 colones por metro cúbico y en servicio fijo de 510 a 478.

5- Para el servicio de Hidrantes de la ESPH no se recomienda hacer ningún ajuste por poca cuantía.

6- Para el servicio de Riego y Avenamiento no se recomienda hacer ningún ajuste por resultar de poca cuantía (…)".

II- De conformidad con los resultandos y considerandos que preceden y de acuerdo con el mérito de los autos, lo procedente es:

1. Rebajar un 6,36% en la tarifa vigente del servicio de acueducto y un 7,96% en la tarifa vigente del servicio de alcantarillado para las categorías empresarial, de gobierno y para los bloques a partir de 61 m^3 de la categoría domiciliar del AyA.
   Para el servicio de acueducto, las tarifas rigen a partir del 01 de enero de 2019 al 28 de febrero 2019. A partir del 1º de marzo 2019, aplicarán las tarifas fijadas según resolución RIA-008-2017 del 14 de septiembre del 2017, publicada en la Gaceta N°179 del 21 de septiembre de 2017 para AyA.

   Para el servicio de alcantarillado, las tarifas rigen a partir del 01 de enero de 2019, hasta el 28 de febrero de 2019. A partir del 1º de marzo 2019, aplicarán las tarifas fijadas según resolución RIA-009-2017 del 14 de septiembre del 2017, publicada en la Gaceta N°179 del 21 de septiembre del 2017 para AyA.

2. Rebajar un 4,60% en la tarifa vigente del servicio de acueducto y un 3,35% en la tarifa vigente del servicio de alcantarillado para las categorías empresarial, de gobierno y para los bloques a partir de 61 m^3 de la categoría domiciliar de la ESPH.

   Para el servicio de acueducto, las tarifas rigen a partir del 01 de enero hasta el 28 de febrero del 2019; a partir del ~~a~~l 01 de marzo de 2019 se aplicarán a las tarifas fijadas, según la resolución RIA-006-2015 del 09 de julio del 2015, publicada en La Gaceta Nº135, del 14 de julio del 2015 para ESPH.

   Para el servicio de alcantarillado, las tarifas rigen a partir del 01 de enero hasta el 28 de febrero del 2019; a partir del 01 de marzo de 2019 se aplicarán a las tarifas fijadas, según la y la resolución RIA-003-2015 del 19 de marzo del 2015, publicada en La Gaceta Nº 61, del 27 de marzo del 2015 para ESPH.

3. Para el servicio de Hidrantes que suministra el AyA, la tarifa del servicio medido pasa de 24 a 22 colones por metro cúbico y del servicio fijo de 510 a 478, rebajas aplicables para el mes de enero 2019. Al 01 de febrero de 2019 se aplicarán a las tarifas fijadas, según la resolución RIA-002-2016 del 03 de febrero del 2016, publicada en la Gaceta N°28 del 10 de febrero del 2016.

4. Para los servicios de Hidrantes en ESPH, Riego y Piscicultura de SENARA no se recomienda hacer ningún ajuste por resultar las diferencias tarifarias de poca cuantía.

POR TANTO

Con fundamento en las facultades conferidas en la Ley N° 7593 y sus reformas, en la Ley General de la Administración Pública N° 6227, en el Decreto Ejecutivo 29732-MP, que es el Reglamento a la Ley N° 7593, y en el Reglamento Interno de Organización y Funciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y sus Órganos Desconcentrados,

El INTENDENTE DE AGUA
RESUELVE

I. Fijar para los servicios de acueducto y de alcantarillado que brinda el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), las siguientes tarifas:

Servicio Acueducto AyA
Enero-Febrero 2019
en colones

Bloque de consumo/categoria	Domiciliar	Empresarial	Preferencial	Gobierno
Servicio medido				
de 0 a 15 m³	355	1.320	355	1.320
de 16 a 25 m³	712	1.602	712	1.602
de 26 a 40 m³	783	1.602	712	1.602
de 41 a 60 m³	927	1.602	712	1.602
de 61 a 80 m³	1.602	1.602	783	1.602
de 81 a 100 m³	1.602	1.602	783	1.602
de 101 a 120 m³	1.602	1.602	783	1.602
Más de 120 m³	1.684	1.684	783	1.684
Servicio fijo				
Tarifa fija	9.724	31.025	28.552	116.882
Cargo fijo 1/	2.000	2.000	2.000	2.000

Nota: 1/El cargo fijo se debe incluir a la facturación tanto en los servicios medidos como en los servicios fijos.

Servicio Alcantarillado AyA
Enero-Febrero 2019
en colones

Bloque de consumo/categoria	Domiciliar	Empresarial	Preferencial	Gobierno
Servicio medido				
de 0 a 15 m³	273	1.014	273	1.014
de 16 a 25 m³	545	1.225	545	1.225
de 26 a 40 m³	594	1.225	545	1.225
de 41 a 60 m³	707	1.225	545	1.225
de 61 a 80 m³	1.225	1.225	594	1.225
de 81 a 100 m³	1.225	1.225	594	1.225
de 101 a 120 m³	1.225	1.225	594	1.225
Más de 120 m³	1.290	1.290	594	1.290
Servicio fijo				
Tarifa fija	6.841	23.059	27.839	108.403
Cargo fijo 1/	1.200	1.200	1.200	1.200

Nota: 1/El cargo fijo se debe incluir a la facturación tanto en los servicios medidos como en los servicios fijos.

Estas tarifas rigen a partir del 01 de enero de 2019, hasta el 28 de febrero de 2019. A partir del 01 de marzo 2019, aplicarán las tarifas fijadas según resolución RIA-008-2017 y RIA-009-2017 del 14 de septiembre del 2017, publicada en la Gaceta N°179 del 21 de septiembre del 2017 para AyA.

II. Fijar para los servicios de acueducto y de alcantarillado que brinda la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, S.A., las siguientes tarifas:

Servicio Acueducto ESPH
Enero-Febrero 2019
en colones

Bloque de consumo/categoria	Domiciliar	Empresarial	Preferencial	Gobierno
Servicio medido				
de 0 a 15 m³	298	680	298	680
de 16 a 25 m³	496	1.132	496	1.132
de 26 a 40 m³	496	1.132	545	1.132
de 41 a 60 m³	645	1.132	545	1.132
de 61 a 80 m³	1.132	1.132	595	1.132
de 81 a 100 m³	1.132	1.132	595	1.132
de 101 a 120 m³	1.132	1.132	595	1.132
Más de 120 m³	1.189	1.189	595	1.189
Servicio fijo				
Tarifa fija	9.236	18.392	31.708	18.392
Cargo fijo 1/	1.200	1.200	1.200	1.200

Nota: 1/El cargo fijo se debe incluir a la facturación tanto en los servicios medidos como en los servicios fijos.

Servicio Alcantarillado ESPH
Enero-Febrero 2019
en colones

Bloque de consumo/categoria	Domiciliar	Empresarial	Preferencial	Gobierno
Servicio medido				
de 0 a 15 m³	190	385	190	385
de 16 a 25 m³	317	643	317	643
de 26 a 40 m³	349	643	349	643
de 41 a 60 m³	412	643	349	643
de 61 a 80 m³	643	643	380	643
de 81 a 100 m³	643	643	380	643
de 101 a 120 m³	643	643	380	643
Más de 120 m³	673	673	380	673
Servicio fijo				
Tarifa fija	5.705	8.188	17.227	23.625
Cargo fijo 1/	600	600	600	600

Nota: 1/El cargo fijo se debe incluir a la facturación tanto en los servicios medidos como en los servicios fijos.

Estas tarifas rigen a partir del 01 de enero de 2019, hasta el 28 de febrero de 2019. A partir del 01 de marzo 2019, aplicarán las tarifas fijadas según resolución RIA-006-2015 del 9 de julio del 2015, publicada en el diario oficial La Gaceta N°135 del 14 de julio de 2015 y RIA-003-2015 del 19 de marzo del 2015, publicada en la Gaceta N°61 del 27 de marzo del 2015 para ESPH.

En cumplimiento de lo que ordena el artículo 245 en relación con el 345 de la Ley General de la Administración Pública, se informa que contra esta resolución caben los recursos ordinarios de revocatoria y de apelación y el extraordinario de revisión. El de revocatoria podrá interponerse ante el Intendente de Agua, a quien corresponde resolverlo; el de apelación y el de revisión podrán interponerse ante la Junta Directiva, a la que corresponde resolverlos.

De conformidad con el artículo 346 de la Ley General de Administración Pública, los recursos de revocatoria y el de apelación deberán interponerse en el plazo de tres días contados a partir del día hábil siguiente al de notificación, y el extraordinario de revisión, dentro de los plazos señalados en el artículo 354 de la citada Ley.

NOTIFÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

Carlos Herrera Amighetti, Intendente.—1 vez.—O.C. N° 9006-2018.—Solicitud N° 269-2018.—(IN2018305847).

RESOLUCIÓN RE-0215-JD-2018

ESCAZÚ, A LAS NUEVE HORAS Y DIEZ MINUTOS DEL ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO

MODIFICACIÓN PARCIAL A LA *"METODOLOGÍA PARA FIJACIÓN ORDINARIA DE TARIFAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE REMUNERADO DE PERSONAS, MODALIDAD AUTOBÚS*", DICTADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN RJD-035-2016 Y MODIFICADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN RJD-060-2018.

EXPEDIENTE OT-586-2018

RESULTANDO

I. Que el 25 de febrero de 2016, la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), mediante la resolución RJD-035-2016, dictó la *"Metodología para fijación ordinaria de tarifas para el servicio remunerado de personas, modalidad autobús"*, publicada en el Alcance 35 a La Gaceta 46, del 7 de marzo del 2016.

II. Que el 22 de marzo de 2017, el Regulador General, mediante el oficio 255-RG-2017, conformó varias Fuerzas de Tarea, con el objetivo de que analizaran varias metodologías tarifarias, entre ellas se conformó la Fuerza de Tarea Metodología de Buses (Fuerza de Tarea), para analizar la *"Metodología para fijación ordinaria de tarifas para el servicio remunerado de personas, modalidad autobús"*, dictada mediante la resolución RJD-035-2016.

III. Que el 13 de abril de 2018, la Junta Directiva de Aresep, mediante la resolución RJD-060-2018, dictó la "*Modificación parcial a la Metodología para la fijación ordinaria de tarifas para el servicio remunerado de personas, modalidad autobús, dictada mediante la resolución RJD-035-2016",* publicada en el Alcance N° 88 a La Gaceta del 3 de mayo del 2018 y el Alcance N°90 a La Gaceta del 4 de mayo del 2018.

IV. Que el 29 de agosto de 2018, la Dirección General Centro Desarrollo de la Regulación (CDR), mediante el oficio OF-399-CDR-2018, remitió a la Secretaría de la Junta Directiva de Aresep, la documentación de fecha 29 de agosto de 2018, elaborada por la Fuerza de Tarea, que contiene informes técnicos que

motivan y justifican la propuesta de modificación parcial a la metodología establecida en la resolución RJD-035-2016 y su reforma RJD-060-2018, en temas relativos a: 1-Costos de los estudios de calidad del servicio, 2-Eliminación del valor tope máximo por tipo de unidad de transporte, 3-Valor tarifario de unidades de autobús tipo 2 con información incompleta, 4-Sistema automatizado de conteo de pasajeros, 5-Volumen de pasajeros movilizados, carreras y tarifas de fraccionamientos, 6-Tipo de cambio a utilizar en los contratos de arrendamiento en los casos que el monto esté en monedas distintas al colón o al dólar estadounidense. En dichos informes se consideraron las observaciones señaladas por los miembros de la Junta Directiva de Aresep, en la sesión extraordinaria 51-2018 del 24 de agosto y la sesión ordinaria 52-2018 del 28 de agosto, ambas del 2018.

En dicho oficio el CDR, avaló y recomendó que se sometiera a conocimiento de la Junta Directiva de Aresep, los informes técnicos citados, así como que se sometieran tales informes al procedimiento de audiencia pública, previsto en el artículo 36 de la Ley 7593. (Folios 48 al 120).

V. Que el 4 de setiembre de 2018, la Junta Directiva de Aresep, en la sesión ordinaria 53-2018, tomó los acuerdos 05-53-2018, 06-53-2018, 07-53-2018, 08-53-2018, 09-53-2018 y 10-53-2018, mediante los cuales dispuso que sometiera al procedimiento de audiencia pública previsto en el artículo 36 de la Ley 7593, la propuesta de modificación parcial a la *"Metodología para fijación ordinaria de tarifas para el servicio de transporte remunerado de personas, modalidad autobús",* dictada mediante la resolución RJD-035-2016 y modificada mediante la resolución RJD-060-2018; en lo relativo a los costos de los estudios de calidad del servicio, eliminación del valor tope máximo por tipo de unidad de transporte, valor tarifario de unidades de autobús tipo 2 con información incompleta, sistema automatizado conteo de pasajeros, volumen mensual de pasajeros, carreras y tarifas de fraccionamientos y tipo de cambio a utilizar en los contratos de arrendamiento en los casos que el monto esté en monedas distintas al colón o al dólar estadounidense, con fundamento en el oficio OF-399-CDR-2018 del CDR. (Folios 02 al 47).

VI. Que el 3 de octubre de 2018, mediante La Gaceta 182, se publicó en el diario oficial La Gaceta y los diarios de circulación nacional La Teja y Extra, la convocatoria a audiencia pública a fin de conocer las propuestas de modificación parcial a la "*Metodología para fijación ordinaria de tarifas para el servicio de transporte remunerado de personas, modalidad autobús",* dictada mediante la resolución RJD-035-2016 y modificada mediante la resolución RJD-060-2018. (Folio 139).

VII. Que el 30 de octubre de 2018, de conformidad con el acta 52-2018, se llevó a cabo la audiencia pública de forma presencial en el auditorio de la Aresep y por medio del sistema de videoconferencia en los Tribunales de Justicia de los centros de Limón, Heredia, Ciudad Quesada, Liberia, Puntarenas, Pérez Zeledón y Cartago. (Folios 448 al 465).

VIII. Que el 1 de noviembre de 2018, la Dirección General de Atención al Usuario (DGAU), mediante el oficio OF-0058-DGAU-2018 rindió el *"Informe de oposiciones y coadyuvancias".* (Folios 469 al 471).

IX. Que el 29 de noviembre de 2018*,* la Fuerza de Tarea, le remitió al CDR el informe de respuesta a las posiciones planteadas en la audiencia pública así como la propuesta técnica final de modificación parcial a la *"Metodología para fijación ordinaria de tarifas para el servicio de transporte remunerado de personas, modalidad autobús",* dictada mediante la resolución RJD-035-2016 y modificada mediante la resolución RJD-060-2018; para su trámite respectivo ante la Junta Directiva de Aresep.

X. Que el 30 de noviembre de 2018, el CDR, mediante el oficio OF-0597-CDR-2018, remitió al Regulador General en su condición de presidente de la Junta Directiva de Aresep , el informe del análisis de posiciones de la "*Propuesta de Modificación Parcial Metodología para Fijación Ordinaria de Tarifas para el Servicio de Transporte Remunerado de Personas Modalidad Autobús- RJD-035-2016 y RJD-060-2018)*" y el informe Técnico final de la "*Propuesta de Modificación Parcial a la Metodología para Fijación Ordinaria de Tarifas para el Servicio de Transporte Remunerado de Personas Modalidad Autobús- RJD-035-2016 y RJD-060-2018*", para continuar con el procedimiento interno post audiencia pública.

XI. Que el 3 de diciembre de 2018, la Secretaría de Junta Directiva (SJD), mediante el memorando ME-0166-SJD-2018, remitió a la Dirección General de Asesoría Jurídica y Regulatoria (DGAJR) para su análisis, el informe final de propuesta de modificación parcial de la: "*Metodología para Fijación Ordinaria de Tarifas para el Servicio de Transporte Remunerado de Personas Modalidad Autobús- RJD-035-2016 y RJD-060-2018*".

XII. Que el 4 de diciembre de 2018, la DGAJR, mediante el oficio OF-1518-DGAJR-2018, remitió a la SJD el criterio sobre la modificación parcial a la "*Metodología para Fijación Ordinaria de Tarifas para el Servicio de Transporte Remunerado de Personas Modalidad Autobús- RJD-035-2016 y RJD-060-2018*", después de realizada la audiencia pública.

XIII. Que el 7 de diciembre de 2018, la Junta Directiva de Aresep, mediante el acuerdo 04-71-2018, de la sesión extraordinaria 71-2018, acordó entre otras cosas: "(…) *2- Solicitar al Centro de Desarrollo de la Regulación incorporar las observaciones planteadas por la Junta Directiva en esta oportunidad, al informe de respuestas a las personas físicas y jurídicas que presentaron posiciones en la audiencia pública, remitido mediante el oficio OF-597-CDR-2018 del 30 de noviembre de 2018."*

XIV. Que el 7 de diciembre de 2018, la SJD, mediante el memorando OF-0923-SJD-2018, trasladó al CDR el acuerdo 04-71-2018, tomado por la Junta Directiva de Aresep.

XV. Que el 10 de diciembre de 2018, el CDR, mediante el oficio OF-0612-CDR-2018, remitió al Regulador General en su condición de presidente de la Junta Directiva de Aresep, el informe del análisis de posiciones de la "*Propuesta de Modificación Parcial Metodología para Fijación Ordinaria de Tarifas para el Servicio de Transporte Remunerado de Personas Modalidad Autobús- RJD-035-2016 y RJD-060-2018)*", que incorporó las observaciones realizadas por los miembros de la Junta Directiva de Aresep mediante el acuerdo 04-71-2018, de la sesión extraordinaria 71-2018.

XVI. Que se han realizado las diligencias útiles y necesarias para el dictado de la presente resolución.

CONSIDERANDO:

I. Que la Ley 7593, en su artículo 5 dispone que la Aresep es el ente competente para fijar los precios y tarifas de los servicios públicos, de conformidad con las metodologías que ella misma determine y debe velar por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima de tales servicios públicos, dentro de los cuales se encuentra en su inciso f), el transporte público remunerado de personas modalidad autobús.

II. Que de acuerdo con los artículos 45 de la Ley 7593 y, 6, inciso 16) del Reglamento Interno de Organización y Funciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y su Órgano Desconcentrado (RIOF), corresponde a la Junta Directiva dictar y modificar las metodologías regulatorias que se aplican en los diversos sectores regulados bajo su competencia; cumpliendo el procedimiento de audiencia pública establecido en el artículo 36 de la Ley 7593.

III. Que el desarrollo de los instrumentos regulatorios para el ejercicio de la potestad tarifaria, se encuentra condicionado por el desarrollo de los conocimientos científicos y tecnológicos, los cambios en las políticas públicas regulatorias y distributivas, los requerimientos ambientales, de conservación de energía y eficiencia económica, entre otros aspectos.

IV. Que la Aresep tiene dentro de sus tareas, una revisión de los instrumentos regulatorios, para adaptarlos, en primer lugar, a las cambiantes valoraciones, fines e intereses de la sociedad, generalmente expresados en políticas al amparo de la Ley.

V. Que desde el punto de vista de la regulación, los conocimientos, modelos e información disponible sufren constantes cambios, lo que obliga a adaptar los instrumentos regulatorios a esos nuevos conocimientos, a las experiencias de otras latitudes y los cambios al ordenamiento jurídico.

VI. Que la mejora continua regulatoria demanda la investigación, desarrollo e innovación en regulación y el perfeccionamiento de los instrumentos regulatorios y de la reglamentación vigente.

VII. Que en consonancia con lo anterior, la *"Metodología para fijación ordinaria de tarifas para el servicio de transporte remunerado de personas, modalidad autobús",* dictada mediante la resolución RJD-035-2016 y modificada mediante la resolución RJD-060-2018, requiere ajustes y modificaciones en relación con los costos de los estudios de calidad del servicio, eliminación del valor tope máximo por tipo de unidad de transporte, valor tarifario de unidades de autobús tipo 2 con información incompleta, sistema automatizado conteo de pasajeros, volumen mensual de pasajeros, carreras y tarifas de fraccionamientos y tipo de cambio a utilizar en los contratos de arrendamiento en los casos que el monto esté en monedas distintas al colón o al dólar estadounidense.

Dichas modificaciones se justifican en lo siguiente:

Costos de los estudios de calidad del servicio:

"La metodología vigente establece en la sección 4.4.8 el costo mensual de los estudios de calidad del servicio, en concordancia con el artículo 21 del Decreto Ejecutivo N° 28833-MOPT del 26 de julio del 2000, "Reglamento para la Evaluación y Calificación de la Calidad del Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas" y sus reformas, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 158 del 18 de agosto de 2000.

Analizando esta sección en el marco de la mejora continua, la Fuerza de Tarea detectó las siguientes oportunidades de mejora:

1. *Es necesario prever la normativa aplicable en caso de que se modifique o elimine el Decreto Ejecutivo N° 28833-MOPT del 26 de julio del 2000.*

2. *Se condiciona el reconocimiento tarifario de los estudios de calidad a que se encuentren establecidos como requisitos de admisibilidad.*

3. *Se requiere especificar el tipo de cambio a utilizar en aquellos contratos que pueden estar en dólares estadounidenses o en otra moneda.*

4. *Se requiere precisar cuál estudio de calidad se debe reconocer tarifariamente en caso de que exista más de uno.*

En virtud de lo anterior, se señala lo siguiente:

Sobre la previsión de la normativa aplicable, se agrega la frase "o la norma que lo sustituya", con la intención de prever cualquier modificación de esta.

Sobre lo que la metodología señala del reconocimiento tarifario de los estudios de calidad, éste se dará una vez que dichos estudios sean establecidos como parte de los requisitos de admisibilidad de las solicitudes de fijación tarifaria, resulta necesario citar en lo que interesa lo resuelto por la Junta Directiva por medio de la resolución RJD-228-2017 del 28 de noviembre del 2017:

> *"(…)*
>
> *de conformidad con el artículo 19 del Decreto Ejecutivo N° 28833-MOPT, el estudio de calidad ya se encuentra establecido como un costo a reconocer en las fijaciones tarifarias, razón por la cual resulta indiferente que dicho costo se encuentre contemplado o no, como requisito de admisibilidad, tal y como lo exige la metodología tarifaria vigente. Lo anterior, en aplicación del principio de jerarquía normativa, establecido en el artículo 6 de la LGAP.*
>
> *(…)"*

En virtud de lo anterior, se propone excluir de la metodología tarifaria vigente la condición suspensiva de establecer los estudios de calidad como requisito de admisibilidad para que sean reconocidos tarifariamente.

Sobre el tipo de cambio, para aquellos contratos que se encuentren en dólares estadounidenses u otra moneda, se establece el tipo de cambio a utilizar para realizar esta conversión. Se precisa también, la fecha del tipo de cambio a utilizar, considerando que la fecha de la factura del estudio es puntual y por lo tanto se conoce el tipo de cambio de ese día en particular, por lo tanto se utilizará el tipo de cambio a esa fecha, para convertir el monto de dólares a colones.

Sobre la precisión al estudio de calidad que se debe reconocer tarifariamente, se considera que para el caso de que exista más de un estudio de calidad para la fijación tarifaria, se precisa que se utilizará aquel estudio de calidad vigente al momento de la celebración de la audiencia pública respectiva de cada fijación tarifaria.

Adicionalmente, se aclara dentro de la redacción del apartado 4.4.8 Costos de los estudios de calidad del servicio, que el valor del estudio de calidad a reconocer será el que establezca el Consejo de Transporte Público (CTP)".

Eliminación del valor tope máximo por tipo de unidad de transporte:

"La metodología vigente establece en la sección 4.9.2 Valoración de vehículos con reglas de cálculo tarifario tipo 2, que el valor tarifario de un autobús con reglas de cálculo tarifario tipo 2 corresponderá al mínimo entre el valor de mercado definido por el Ministerio de Hacienda y el valor tope de ese tipo de unidad de

acuerdo con la clasificación que haya determinado el Consejo de Transporte Público (CTP), incluyendo las unidades con tecnologías limpias.

Analizando esta sección en el marco de la mejora continua, la Fuerza de Tarea detectó las siguientes oportunidades de mejora:

1. *El valor tope no es una medida adecuada para determinar la razonabilidad de la inversión, dado el procedimiento establecido mediante la resolución RJD-035-2016, del 25 de febrero de 2016 y los hallazgos en su aplicación.*

2. *El valor tope eventualmente se convertiría en una limitante para la incorporación de nuevas tecnologías en el transporte público, que por su naturaleza actualmente son más costosas y son exigibles por la Ley 9518, vigente desde febrero del 2018.*

En virtud de lo anterior, se señala lo siguiente:

De acuerdo con el procedimiento establecido, los valores tope dependen de la información de los autobuses nuevos que estén autorizados por el CTP a una fecha determinada.

Los valores tope que se obtengan dependerán de cuántos autobuses nuevos estén autorizados por el CTP a esa fecha, la tipología que les asigna dicho Consejo de conformidad con sus competencias y las clases tributarias que les asigna el Ministerio de Hacienda a esas unidades.

De acuerdo con la aplicación de la metodología tarifaria vigente, se calcularon los valores topes por medio de las resoluciones RIT-017-2017 del 3 de marzo del 2017 y RIT-016-2018 del 6 de marzo del 2018, en donde se encontraron los siguientes hallazgos:

1. *El valor tope puede presentar variaciones significativas de un año a otro. Por ejemplo, para el año 2018, el valor tope de las unidades montanas se redujo un 35%. Por su parte, del valor tope de las unidades interurbanas cortas/medias (TI), aumentaron un 44%.*

2. *Para las unidades 2016, todas las unidades tipo TI pertenecían a la misma clase tributaria, por lo que poseían el mismo valor de mercado, haciendo que la desviación estándar para esa categoría fuera cero, de modo que el valor tope fuera igual al valor promedio.*

3. *Dado que los valores tope se deben de determinar con la información de la flota autorizada al 30 de agosto de cada año, cualquier unidad nueva autorizada por el CTP posterior a esa fecha, no podrá ser considerada para la determinación de dicho valor.*

Con respecto a que el valor tope eventualmente se convertiría en una limitante para la incorporación de nuevas tecnologías en el transporte público, conviene indicar que el Plan Nacional de Energía 2015-2030 establece en el eje 6.3, mejorar la tecnología del transporte público, con el objetivo específico de facilitar las condiciones para la migración paulatina de Euro III – hacia Euro VI en las unidades de transporte público y la incorporación de nuevas tecnologías.

Por otra parte, en enero de 2018 se aprobó la Ley 9518 -Incentivos y promoción para el transporte eléctrico- (vigente desde febrero de 2018), en la cual se establece:

> *"(…)*
>
> *ARTÍCULO 26-Servicio público de transporte eléctrico. Se establece, como prioridad nacional, la utilización de la energía eléctrica renovable en el transporte público nacional, tanto en las modalidades de ferrocarril, trenes, buses, taxis, como cualquier otro medio público de movilización, el cual se ajustará a las posibilidades del país, acorde al Plan Nacional de Transporte Eléctrico. Se promoverá la importación y la producción local de tecnologías tendentes al desarrollo de este tipo de transporte.*
>
> *(…)*
>
> *ARTÍCULO 28-Concesiones de autobuses. El Plan Nacional de Transporte Eléctrico establecerá el programa para que la flota vehicular de autobuses concesionado en el país realice, de forma paulatina, la sustitución a vehículos eléctricos, con previa autorización técnica y legal del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), de conformidad con viabilidad financiera y cuando las condiciones de las rutas de autobuses lo permitan.*
>
> *Para ello, el Plan Nacional de Transporte Eléctrico deberá proyectar el reemplazo de la flota de autobuses, al menos cada dos años, con una meta dentro de este período no menor del cinco por ciento (5%).*
>
> *(…)"*

En apego a lo anterior es que se plantea eliminar el cálculo de los valores tope con el objetivo de reconocer tarifariamente el valor de mercado determinado por el Ministerio de Hacienda para cada unidad e incentivar la incorporación de unidades con nuevas tecnologías amigables con el ambiente, ya que es posible que cuando estas sean introducidas en los esquemas operativos autorizados por el CTP, su cantidad y valor de mercado en relación con las demás unidades incidan en que estas sobrepasen el valor tope máximo según su tipología, con lo que no se podría reconocer tarifariamente la totalidad de su valor".

Valor tarifario de unidades de autobús tipo 2 con información incompleta:

"La metodología vigente establece en la sección 4.13.2.a Aplicación de la metodología en casos de información incompleta o no existente, que en caso de que no se cuente con el valor del autobús nuevo determinado por el Ministerio de Hacienda para una unidad con reglas de cálculo tarifario tipo 2, se aplicará única y exclusivamente para asignarle su valor tarifario, el último valor promedio vigente correspondiente para el tipo de autobús según las reglas tipo 1. Así mismo, se establece el valor en dólares para este tipo de unidades, de acuerdo con la resolución RJD-060-2018 del 13 de abril del 2018.

Analizando esta sección en el marco de la mejora continua, la Fuerza de Tarea detectó la siguiente oportunidad de mejora:

1. *Se está asignando el valor tarifario tipo 1 a unidades tipo 2, lo que no permite uniformar la base tarifaria en cuanto al año de fabricación y moneda en que se fija el valor de las unidades con reglas de cálculo tarifario tipo 2.*

En virtud de lo anterior, se señala lo siguiente:

Sobre la asignación de valor tipo 1 a unidades del tipo 2, se propone uniformar la base tarifaria para las unidades con reglas de cálculo tarifario tipo 2, ya que con la metodología vigente en algunos casos esta estaría en colones y en otros casos en dólares.

Adicionalmente, la inversión realizada podría valorarse con mayor precisión al disponerse de valores para el respectivo año modelo de la unidad, al contar la Aresep con información actualizada del valor de las unidades".

Sistema automatizado conteo de pasajeros:

"En la metodología vigente se incorporó el reconocimiento tarifario del precio del sistema automatizado de conteo de pasajeros (SCP), y se establecieron una serie de características mínimas que deben cumplir los prestadores para la remisión de la información a la plataforma que se habilite para tal efecto. De acuerdo con el conocimiento adquirido en lo que corresponde al SCP, desde su incorporación en la resolución RJD-035-2016 del 25 de febrero de 2016, en especial sobre los datos que efectivamente pueden proporcionar este tipo de sistemas y su funcionamiento, se busca garantizar que la información capturada pueda ser utilizada para la determinación del volumen de pasajeros movilizados, de acuerdo con lo modificado en la sección 4.7.1. Procedimiento para el cálculo del volumen mensual de pasajeros mediante la resolución RJD-060-2018 del 13 de abril del 2018.

De acuerdo con lo anterior se presentan las siguientes modificaciones:

a) Eliminación de la justificación del plazo para estudio y resolución

En la metodología vigente en la sección 4.11.2 Precio del sistema automatizado de conteo de pasajeros se incorpora la justificación por la cual es razonable el plazo entre agosto y octubre para el estudio anual que permita la determinación del precio del SCP, así como el plazo de diciembre de cada año para la publicación de la resolución. En principio, no corresponde incorporar en el cuerpo del documento metodológico las justificaciones al tratarse de una metodología tarifaria compuesta fundamentalmente por reglas de aplicación, razón por lo que se excluye ese detalle, y se incorpora como parte de esta justificación, según se presenta en adelante en este punto.

El plazo entre agosto y octubre para el estudio anual que permita la determinación del precio del SCP, se considera suficiente para poder realizar el estudio para la determinación del precio de este sistema, en sus etapas de diseño, búsqueda y recolección de información, procesamiento y análisis de datos, así como la obtención de los resultados finales, de conformidad con la práctica estadística de recopilación de información.

Por otra parte, el plazo para la publicación de la resolución se considera adecuado dado que se habrían obtenido previamente los valores de los precios y costos, quedando entonces un tiempo prudencial para que sea sometido al mecanismo de participación ciudadana aplicable y publicación de resultados finales.

b) Establecimiento expreso del mecanismo de participación ciudadana

En la sección 4.11.2 Precio del sistema automatizado de conteo de pasajeros de la metodología vigente no se estableció expresamente el mecanismo de participación ciudadana aplicable para la determinación del precio del SCP, lo que puede generar discrecionalidad e interpretaciones distintas al momento de aplicarlo. En esta modificación se busca establecer expresamente el mecanismo de participación ciudadana de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 7593 "Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos" y en el artículo 361 de la Ley 6227 "Ley General de la Administración Pública".

De acuerdo con la modificación metodológica aprobada mediante la resolución RJD-060-2018 del 13 de abril del 2018, para la correcta aplicación del principio de participación ciudadana y la normativa constitucional y legal, se consideran los siguientes criterios que determinan en cada caso el mecanismo de participación aplicable:

- *Tratándose de inclusión o exclusión de coeficientes, parámetros o variables y modificación de las reglas contenidas en la metodología para definirlos,*

deberán ser sometidos previamente al proceso de audiencia pública previsto en el artículo 36 de la Ley N°7593.

- *Tratándose de actualizaciones de valores de coeficientes o variables, deberán ser sometidas previamente al trámite de consulta pública establecido en el artículo 361 de la Ley N°6227.*

De acuerdo con lo anterior en el caso de la determinación del precio del SCP, lo que corresponde aplicar es la consulta pública estipulada en el artículo 361 de la Ley N°6227.

c) Requerimientos de información

En la metodología vigente se definieron una serie de características mínimas de información para la captura de los datos de pasajeros movilizados. El espíritu con el que fue dictada la metodología en un inicio fue establecer dichos requerimientos a un nivel significativo de desagregación de la información (por pasajero, parada y tarifa específica), que permitiera luego ser agrupada para los análisis regulatorios que correspondan. Sin embargo, el conocimiento adquirido por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) sobre este tipo de sistemas permitió determinar que no es posible generar los datos a tal nivel de desagregación y especificidad de acuerdo con los oficios 628-IT-2018, 643-IT-2018 y 148-CDR-2018, adjuntos a este informe.
Por otro lado, mediante la resolución RJD-060-2018 del 13 de abril de 2018 se incorpora el estudio técnico de validación de los registros del SCP como la fuente de información prioritaria para la estimación del volumen mensual de pasajeros movilizados. Por esta razón, se hace necesario un replanteamiento de estos requerimientos de información, de manera que correspondan a lo que efectivamente pueden brindar este tipo de sistemas, así como que genere la información necesaria para que pueda ser utilizada como el mecanismo principal para la determinación del volumen mensual de pasajeros.

De acuerdo con lo anterior, en la modificación planteada se especifica que el elemento base para la presentación de la información es el viaje, para el cual se requiere que se indiquen los datos de la ruta y ramal, placa del autobús, sentido del viaje, la fecha, hora de inicio y fin de viaje. En cuanto a la movilización de pasajeros, la información podrá ser presentada a nivel de paradas o conjunto de paradas, según las posibilidades técnicas de los SCP utilizados y los requerimientos de información para la aplicación de la sección 4.7.1 Procedimiento para el cálculo del volumen mensual de pasajeros, en especial cuando se trate de rutas con ramales con fraccionamientos tarifarios. Es así como para cada parada o conjunto de paradas se requiere la información de los ascensos de pasajeros regulares y adultos mayores por separado, así como el descenso de los pasajeros totales, debido a la imposibilidad material de los SCP para identificar el tipo de pasajero al momento del descenso.

d) Plazos de remisión de la información

En la metodología vigente se establecen plazos para la remisión de la información sin depurar y depurada. Si bien, el espíritu de lo establecido en la resolución RJD-035-2016 del 25 de febrero del 2016 era contar con la información de pasajeros movilizados lo antes posible en la plataforma digital que para tal efecto habilite la Aresep, la realidad es que la operación de este tipo de sistemas es compleja y no resulta posible que la remisión de la información pueda ser completada en los plazos establecidos originalmente, según los hallazgos señalados en los oficios 628-IT-2018, 643-IT-2018 y 148-CDR-2018.

De acuerdo con el conocimiento adquirido sobre la captura, procesamiento y depuración de los datos generados en los sistemas SCP, resulta razonable que la información sin depurar pueda ser remitida a dicha plataforma en un plazo máximo de dos días hábiles para rutas urbanas y tres días hábiles para rutas interurbanas. La diferencia se justifica técnicamente en la complejidad operativa asociada a la descarga de los datos en el caso de las rutas interurbanas, ya que no en todas las terminales se cuenta con los equipos para realizar esta tarea al finalizar cada viaje.

Por otra parte, en cuanto a la remisión de los datos depurados a la Aresep, se establece un plazo máximo de diez hábiles desde la prestación del servicio para todas las rutas, para que sea remitida la información de movilización de pasajeros regulares y adultos mayores. Esta información es la que podrá ser utilizada para la determinación del volumen mensual de pasajeros movilizados, de acuerdo con lo establecido en la sección 4.7.1 Procedimiento para el cálculo del volumen mensual de pasajeros de la metodología tarifaria.

e) Plazo para el inicio de remisión de la información del SCP

En la metodología vigente se establecen una serie de características mínimas para la remisión de la información y los plazos de envío de los datos de cada día de servicio, pero no se especifica el plazo a partir del cual se hace obligatoria para los prestadores la remisión de información. Por esta razón, para evitar la discrecionalidad en este aspecto y de acuerdo con las competencias con que cuenta la Aresep para solicitar la información que requiera para sus funciones regulatorias según los artículos 14 y 24 de la Ley 7593, es que se establece como plazo máximo para el inicio de la remisión de la información del SCP según los requerimientos de esta sección, un año posterior al día de la publicación de la resolución que aprueba esta modificación metodológica en el Diario Oficial La Gaceta.

El establecimiento de un año permite que durante ese plazo los prestadores puedan realizar las adecuaciones a sus equipos y sistemas de manera que les permita registrar y remitir la información según los requerimientos establecidos en esta sección. Además, este plazo también es necesario para que la Aresep

establezca los procedimientos que permitan verificar la consistencia lógica y técnica de la información remitida.

Por otro lado, de acuerdo con el artículo 30 de la Ley 7593, los prestadores deberán presentar por lo menos una vez al año un estudio ordinario, por lo que en acatamiento a esta obligación legal podrán presentar la solicitud de estudio tarifario ordinario para que les sea reconocido tarifariamente el precio vigente del SCP".

Volumen mensual de pasajeros, carreras y tarifas de fraccionamientos:

Volumen mensual de pasajeros:

"La metodología vigente establece en la sección 4.7.1 Procedimiento para el cálculo del volumen mensual de pasajeros las fuentes de información y los criterios para la determinación del volumen mensual de pasajeros a ser utilizado en los estudios tarifarios ordinarios.
En el marco de la mejora continua, la Fuerza de Tarea detectó las siguientes oportunidades de mejora:

1. *Es necesario definir un conjunto de criterios generales para asegurar la consistencia lógica y técnica de las estadísticas mensuales presentadas por los prestadores, como paso previo a la aplicación de los mecanismos de validación de esa información.*

2. *Se requiere asegurar que en los casos cuando el dato de cantidad de pasajeros por carrera presentado por el prestador no sea validado, se seleccione el dato de referencia utilizado en la validación, procedente de un estudio técnico o de trabajo de campo.*

3. *Es necesario agregar los criterios de temporalidad y de vigencia del esquema operativo autorizado para determinar si se selecciona un estudio vigente aceptado por Aresep o aprobado por el CTP, en el caso que existan simultáneamente.*

En virtud de lo anterior, se señala lo siguiente:

Sobre la verificación de la consistencia lógica y técnica de la información presentada por los prestadores, se señala que en el marco de las competencias de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) para verificar la información de carreras y pasajeros movilizados aportada por los operadores, resulta necesario que se apliquen un conjunto de criterios generales, para que una vez superada esa verificación se proceda con los mecanismos de validación establecidos en la sección 4.7.1 Procedimiento para el cálculo del volumen mensual de pasajeros. De acuerdo con esto, se establecen una serie de criterios generales aplicables a las estadísticas mensuales de movilización de pasajeros

presentadas por los operadores, los cuales podrán ser detallados en el documento que la Administración Superior determine conveniente.

Sobre la regla aplicable cuando el dato de cantidad de pasajeros por carrera presentado por el operador no es validado según los mecanismos establecidos en la sección 4.7.1 Procedimiento para el cálculo del volumen mensual de pasajeros, se modifica para que, en lugar de utilizar el dato mayor, sea utilizado el dato de referencia empleado en la validación, ya sea el obtenido en el estudio técnico de referencia o en el trabajo de campo. Según la regla vigente, se podía utilizar la cantidad de pasajeros por carrera procedente de los datos del operador sin haber sido validada cuando era mayor al dato de referencia.

Sobre la selección del estudio aceptado por Aresep o aprobado por el CTP cuando se cuente con ambos (dentro del plazo de tres años establecido en la metodología vigente), para asegurar la consistencia de los criterios utilizados en esta sección de la metodología tarifaria, se modifica la regla en la cual se da prioridad a los estudios de cantidad de pasajeros movilizados que hayan sido aceptados por la Aresep sobre los aprobados por la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público (CTP), para que en caso que existan simultáneamente estudios de ambas instituciones, se seleccione el que corresponda al acto administrativo más reciente, que responda al esquema de horarios vigente, tal y como fue establecido en la resolución RJD-060-2018 para el caso de la validación de la información de las estadísticas mensuales del SIR, de manera que se garantiza utilizar la información oficial más actualizada que esté disponible.

Carreras:

En la metodología vigente se utiliza la cantidad de carreras para la estimación de los costos variables y la determinación del volumen mensual de pasajeros, pero la regla que aplica en cada caso es distinta, lo que puede generar distorsiones al alza o baja en los resultados tarifarios. De acuerdo con lo anterior, para asegurar la consistencia con la fórmula original del cálculo de una tarifa, que divide los costos por kilómetro entre el índice de pasajeros por kilómetro (IPK) se plantea la utilización de una regla única tanto para costos como para el volumen de pasajeros.

La metodología vigente establece en la sección 4.12.1 Datos de las variables de operación que la cantidad de carreras mensuales a utilizarse para los costos variables corresponde al mínimo entre las carreras reportadas por los operadores y las carreras autorizadas por el Consejo de Transporte Público (CTP). Por otro lado, en los mecanismos establecidos en la sección 4.7.1 Procedimiento para el cálculo de volumen mensual de pasajeros, se utiliza el máximo entre las carreras reportadas por los operadores y las carreras autorizadas por el CTP.

Estas reglas se modifican para que en ambos casos se utilicen las carreras autorizadas por el CTP, de manera que a los operadores les sean reconocidos

los recursos que permitan cubrir los costos variables asociados al esquema operativo autorizado, en el entendido de que la Aresep puede ejercer en cualquier momento sus competencias de fiscalización técnica asociada a la calidad del servicio y el cumplimiento de dicho esquema operativo.

Es así como con el fin de mantener la consistencia en los criterios o reglas de la metodología tarifaria, se modifican de igual manera los apartados relacionados con el volumen mensual de pasajeros cuando para su determinación se requiere la cantidad de carreras, de manera que sean utilizadas las carreras autorizadas por el CTP, en lugar de la regla de utilizar el dato mayor entre las carreras reportadas y las autorizadas.

Cálculo de tarifas para fraccionamientos:

La metodología vigente establece en la sección 4.8.2.c Cálculo de índice de pasajeros para un conjunto de rutas o ramales, el mecanismo para determinar las tarifas en caso de esquemas operativos con fraccionamientos tarifarios, en el caso que la información disponible de volumen de pasajeros movilizados se encuentre a nivel de ramal. En dicha sección, se indica que la tarifa vigente de referencia para el cálculo tarifario de cada ramal corresponderá a la media aritmética de las tarifas vigentes de ese ramal. Dicha regla se modifica en función de la disponibilidad de la información, por lo que con el fin de conceder mayor precisión al cálculo tarifario, se establece que sea un promedio ponderado de las tarifas del ramal según los pasajeros que pagan cada tarifa".

Tipo de cambio a utilizar en los contratos de arrendamiento en los casos que el monto esté en monedas distintas al colón o al dólar estadounidense:

"La metodología vigente establece en la sección 4.12.2 Datos de variables de inversión, punto c. Arriendo de las unidades autorizadas, lo siguiente:

"(…)

4.12.2 Datos de variables de inversión

(…)

c. Arriendo de las unidades autorizadas

(…)

En los casos en que el monto de arriendo o concepto equivalente se encuentre expresado en dólares de los Estados Unidos, para obtener el monto en colones se utilizará el promedio simple semestral del tipo de cambio de referencia diario de venta, publicado por el BCCR, y se usará la serie de datos de los últimos seis meses naturales anteriores a la fecha de la audiencia pública de la aplicación del modelo (el mes natural es el tiempo que va desde el primer día natural de un mes hasta el último día natural, incluidos ambos).

(…)"

Analizando esta sección en el marco de la mejora continua, la Fuerza de Tarea detectó las siguientes oportunidades de mejora:

1. *Se requiere especificar el tipo de cambio a utilizar en aquellos contratos que pueden estar en monedas internacionales diferentes al dólar estadounidense.*

En virtud de lo anterior, se señala lo siguiente:

Al no contemplar esta sección el procedimiento para los casos donde el contrato de arriendo se encuentre en otra moneda internacional diferente al dólar estadounidense, propone incluir el procedimiento a seguir por la IT para estos casos particulares".

VIII. Que los ajustes y modificaciones a la *"Metodología para fijación ordinaria de tarifas para el servicio de transporte remunerado de personas, modalidad autobús",* dictada mediante la resolución RJD-035-2016 y modificada mediante la resolución RJD-060-2018, señalados, se fundamentan en el oficio OF-597-CDR-2018, que remitió el oficio de la Fuerza de Tarea del 29 de noviembre de 2018.

IX. Que la DGAJR, mediante el oficio OF-1518-DGAJR-2018, señaló que *"Del análisis comparativo entre la versión de la citada modificación parcial de la metodología sometida a audiencia pública (acuerdos 05-53-2018, 06-53-2018, 07-53-2018, 08-53-2018, 09-53-2018 y 10-53-2018), y la versión remitida por el CDR, mediante el oficio OF-0597-CDR-2018, se identificaron 2 cambios de forma, correspondientes a la incorporación del artículo "la" para referirse a la IT y la sustitución de la frase Intendencia de Transporte por la sigla "IT", ambos cambios en la sección del "Precio del sistema automatizado de conteo de pasajeros", que de conformidad con el lineamiento 353-RG-2017, no son considerados como cambios de fondo sustancial"* y recomendó "*Someter al conocimiento y valoración de la Junta Directiva de la Aresep, la propuesta de modificación parcial de la "Metodología para Fijación Ordinaria de Tarifas para el Servicio de Transporte Remunerado de Personas Modalidad Autobús- RJD-035-2016 y RJD-060-2018", presentada por el Centro de Desarrollo de la Regulación, mediante el oficio OF-0597-CDR-2018".*

X. Que las respuestas a las posiciones presentadas por las personas físicas y jurídicas en la audiencia pública celebrada el 30 de octubre de 2018, se fundamentan en el oficio OF-0612-CDR-2018, que remitió el oficio de la Fuerza de Tarea del 10 de diciembre de 2018.

XI. Que con fundamento en los resultandos y considerandos que preceden, lo procedente es: **1-** Aprobar la modificación parcial de la *"Metodología para fijación ordinaria de tarifas para el servicio de transporte remunerado de personas, modalidad autobús",* dictada mediante la resolución RJD-035-2016 y modificada

mediante la resolución RJD-060-2018, contenida en los oficios de la Fuerza de Tarea del 29 de noviembre de 2018, OF-597-CDR-2018 y OF-1518-DGAJR-2018. **2-**Tener como respuesta a las personas físicas y jurídicas que presentaron su posición en la audiencia pública realizada el 30 de octubre de 2018, lo señalado en el oficio OF-0612-CDR-2018 de la Dirección General Centro de Desarrollo de la Regulación, que remitió el oficio de la Fuerza de Tarea del 10 de diciembre de 2018 y agradecer la valiosa participación de todos en este proceso. **3-** Instruir a la Secretaría de Junta Directiva para que proceda a realizar la notificación a las personas físicas y jurídicas del oficio donde constan las respuestas a las posiciones presentadas en la audiencia pública. **4-** Instruir a la Secretaría de Junta Directiva para que proceda a realizar la respectiva publicación de la modificación parcial de la *"Metodología para fijación ordinaria de tarifas para el servicio de transporte remunerado de personas, modalidad autobús",* dictada mediante la resolución RJD-035-2016 y modificada mediante la resolución RJD-060-2018, en el diario oficial La Gaceta. **5-** Instruir a la Secretaría de Junta Directiva para que proceda a realizar la notificación de la presente resolución a las partes.

XII. Que en la sesión ordinaria 72-2018, celebrada el 11 de diciembre de 2018, la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, sobre la base de los oficios de la Fuerza de Tarea del 29 de noviembre de 2018, del 10 de diciembre de 2018, OF-597-CDR-2018, OF-0612-CDR-2018 y OF-1518-DGAJR-2018, acuerda por mayoría, tres votos a dos, dictar la presente resolución, tal y como se dispone.

POR TANTO:

Con fundamento en las facultades conferidas en la Ley N° 7593 y sus reformas, en la Ley General de la Administración Pública N° 6227, en el Decreto Ejecutivo N° 29732-MP, que es el Reglamento a la Ley N° 7593, y en el Reglamento Interno de Organización y Funciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y su Órgano Desconcentrado.

LA JUNTA DIRECTIVA
DE LA AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

RESUELVE:

I. Aprobar la modificación parcial de la *"Metodología para fijación ordinaria de tarifas para el servicio de transporte remunerado de personas, modalidad autobús",* dictada mediante la resolución RJD-035-2016 y modificada mediante la resolución RJD-060-2018, contenida en los oficios de la Fuerza de Tarea del 29 de noviembre de 2018, OF-597-CDR-2018 y OF-1518-DGAJR-2018, tal y como se detalla a continuación:

Costos de los estudios de calidad del servicio:

"Modifíquese el apartado 4.4.8 Costos de los estudios de calidad del servicio de la Sección 4.4 Costos Fijos, para que se lea de la siguiente manera:

"(…)

4.4.8 Costos de los estudios de calidad del servicio

El costo mensual de los estudios de calidad del servicio ($CECS_r$), será incluido dentro de los costos del servicio, según lo establecido en el Decreto Ejecutivo N° 28833-MOPT del 26 de julio del 2000, "Reglamento para la Evaluación y Calificación de la Calidad del Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas" y sus reformas, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 158 del 18 de agosto de 2000, o la norma que lo sustituya y las reglas que para tal efecto establezca el Consejo de Transporte Público.

Para obtener el costo mensual de los estudios de calidad del servicio se dividirá el monto anual entre doce. Para ello, debe de utilizarse el costo anual que determine el CTP para el conjunto de rutas o ramales con flota unificada, correspondiente al estudio aprobado por el CTP que se encuentre vigente al momento de la audiencia pública del estudio tarifario. Para efectos tarifarios se reconocerá un único estudio de calidad al año.

En los casos en que el costo de los estudios de calidad del servicio se encuentre expresado en dólares de los Estados Unidos, se debe hacer la conversión del costo a colones. Para obtener el monto en colones se utilizará el tipo de cambio de referencia diario de venta, publicado por el BCCR, a la fecha de la factura de dicho estudio.

En los casos en que el costo de los estudios de calidad del servicio se encuentre expresado en una moneda internacional distinta al dólar de los Estados Unidos, se debe convertir la moneda a dólares de los Estados Unidos utilizando el "tipo de cambio del dólar estadounidense para otras monedas", establecido por el BCCR, a la fecha de la factura de dicho estudio. Una vez que se cuente con el monto en dólares estadounidense, se aplica el criterio establecido en el párrafo anterior para convertir el monto de dólares a colones.

(…)"

Eliminación del valor tope máximo por tipo de unidad de transporte:

"Modifíquese el inciso e. del apartado 1.3 de la Sección 4.9.2 Valoración de vehículos con reglas de cálculo tarifario tipo 2, para que se lea de la siguiente manera:

"(…)

e. *Este valor de bus o vehículo nuevo, será la base tarifaria sobre la cual se estimarán los demás rubros asociados.*

(…)"

Modifíquese el Paso III de la Sección 4.9.2 Valoración de vehículos con reglas de cálculo tarifario tipo 2, para que se lea de la siguiente manera:

"(…)

Paso III. Determinación del valor promedio por tipo de unidad de transporte

1.4 Con la información solicitada y revisada, la IT calcula para cada tipo de autobús (k) según la tipología de autobuses utilizada por el CTP (suministrada por esa Institución, la cual podrá ser la indicada en el Cuadro 25 o cualquier otra que le sustituya) el promedio simple de los valores de mercado de las unidades de transporte de tipo "k" y año de fabricación "v".

Este valor promedio se calculará una vez para cada año "v" y regirá a las unidades de tipo "k" de año de fabricación "v" para las fijaciones tarifarias posteriores a la entrada en vigencia de ese valor.

Así mismo, la IT deberá conformar un expediente administrativo con el fin de documentar el proceso de determinación de los valores indicados, de manera que sea auditable y permita la trazabilidad de los mismos. El expediente deberá incluir como mínimo, las hojas de cálculo, la información base y el informe técnico que sustenta los resultados obtenidos. Estos resultados deberán someterse previamente al mecanismo de participación ciudadana de consulta pública de conformidad con el artículo 361 de la Ley General de la Administración Pública. Una vez realizada la consulta pública, los resultados finales serán establecidos en una resolución, que deberá ser publicada en el diario oficial La Gaceta como fecha máxima el último día hábil de marzo de cada año."

Modifíquese el primer párrafo del apartado 1.5 de la Sección 4.9.2 Valoración de vehículos con reglas de cálculo tarifario tipo 2, para que se lea de la siguiente manera:

"(…)

*El valor tarifario de una unidad en particular (**VTA_n^y**), de placa "n" será su valor de mercado de vehículo nuevo determinado por el Ministerio de Hacienda. En los casos donde haya autobuses nuevos que no estén incluidos en el listado remitido por el Ministerio de Hacienda según el punto 1.3.b anterior, la IT solicitará su valor respectivo al Ministerio de Hacienda."*

Elimínese el segundo párrafo del apartado 1.5 de la Sección 4.9.2 (Valoración de vehículos con reglas de cálculo tarifario tipo 2) y la ecuación 87 y sus definiciones".

<u>Valor tarifario de unidades de autobús tipo 2 con información incompleta:</u>

Sustitúyase el inciso a.1 de la Sección 4.13.2 Aplicación de la metodología en casos de información incompleta o no existente, por el siguiente texto:

"(…)

1. Valor tarifario de unidades de autobús: si no se cuenta con el valor del Ministerio de Hacienda de autobús nuevo para una unidad específica con reglas de cálculo tarifario tipo 2 con clasificación "k", su valor tarifario corresponderá al valor promedio del tipo de autobús "k" con año de fabricación igual al de la unidad. Si para el año de fabricación de la unidad no se cuenta con un valor promedio para el tipo "k", se le asignará el valor promedio posterior más cercano al año de fabricación con el que se cuente para el tipo "k". En caso de no contar con valores posteriores, se le asignará el último valor promedio calculado para ese tipo "k"."

<u>Sistema automatizado conteo de pasajeros:</u>

Modifíquese el apartado *4.11.2 Precio del sistema automatizado de conteo de pasajeros*, para que se lea de la siguiente manera:

4.11.2 Precio del sistema automatizado de conteo de pasajeros

La determinación del precio del sistema automatizado de conteo de pasajeros para cada unidad de transporte se realizará una vez al año, entre los meses de agosto a octubre y estará a cargo de la IT, bajo la responsabilidad y dirección de un profesional en estadística. Este profesional tendrá a su cargo el planeamiento, coordinación, ejecución y validación de los resultados, de conformidad con las reglas unívocas de la ciencia y la técnica aplicables.

Así mismo, la IT deberá conformar un expediente administrativo con el fin de documentar el proceso de determinación del precio indicado, de manera que sea auditable y permita la trazabilidad. El expediente deberá incluir, como mínimo, las hojas de cálculo, la información base y el informe técnico que sustenta los resultados obtenidos. Estos resultados deberán someterse previamente al mecanismo de participación ciudadana de consulta pública de conformidad con el artículo 361 de la Ley General de la Administración Pública. La resolución que dispone la determinación del precio deberá estar publicada en el diario oficial La Gaceta como máximo el último día hábil de diciembre de cada año.

El sistema automatizado de conteo de pasajeros se debe componer del software y hardware necesarios para el registro, procesamiento y remisión de la información para cada viaje que cumpla con los siguientes requerimientos:

a) La descripción general del viaje: el código y descripción de la ruta, el código y descripción del ramal; el número de la placa del autobús; el sentido (1-2), (2-1) o anillo; la fecha con hora de inicio y fin del viaje.

b) La cantidad de ascensos de pasajeros regulares y pasajeros adultos mayores por separado, en cada una de las paradas o conjunto de paradas durante el viaje. En caso de que la Aresep lo determine para rutas específicas, la información podrá ser requerida a nivel de ramal y viaje.

c) La cantidad de descensos de pasajeros totales en cada una de las paradas o conjunto de paradas durante el viaje. En caso de que la Aresep lo determine para rutas específicas, la información podrá ser requerida a nivel de ramal y viaje.

En cuanto a los plazos para la remisión de la información a la plataforma digital que habilite la Aresep, se establece lo siguiente:

d) Los datos sin depurar en rutas urbanas deben ser remitidos como máximo dos días hábiles posteriores al final de cada día de servicio para los viajes que hayan concluido durante ese día. En caso de rutas interurbanas los datos sin depurar deben ser remitidos como máximo tres días hábiles posteriores al final de cada día de servicio para los viajes que hayan concluido durante ese día.

e) Los datos depurados de las rutas urbanas e interurbanas, deben ser remitidos como máximo diez días hábiles posteriores al final de cada día de servicio, para los viajes que hayan concluido durante ese día.

Se establece el plazo máximo de un año a partir de la publicación en el Diario Oficial La Gaceta de la resolución que aprueba esta modificación metodológica para que todos los operadores inicien con la remisión de la información según los requerimientos establecidos en esta sección".

Volumen mensual de pasajeros, carreras y tarifas de fraccionamientos:

Volumen mensual de pasajeros movilizados:

"Adiciónese al inciso a del apartado 4.7.1 Procedimiento para el cálculo del volumen mensual de pasajeros, el siguiente párrafo:

"(…)

Los estudios técnicos de validación de las estadísticas mensuales presentadas al SIR o del SCP que no cumplen con los criterios indicados en los puntos d. y e. de la sección 4.11.2 Precio del sistema automatizado de conteo de pasajeros, aplican solamente en los casos donde la Intendencia de Transporte haya verificado la consistencia lógica y técnica de los datos reportados.

Para tales efectos se deben cumplir al menos los siguientes criterios generales:

- *Tipos de datos: los datos deben ser reportados de acuerdo con el tipo de variable correspondiente (número, texto, fecha, moneda).*
- *Información completa: los datos deben ser reportados todos los meses, para todos los ramales autorizados, para todos los días con horarios autorizados y con las unidades autorizadas para la ruta.*
- *Información precisa: los datos deben presentarse según lo que corresponda en cada caso (los pasajeros totales son la cantidad real de personas movilizadas, incluyendo los adultos mayores).*
- *Datos consistentes: los datos numéricos pueden admitir valores decimales o no, según corresponda (por ejemplo los pasajeros totales son un número entero, la cantidad de carreras se presenta en múltiplos de 0,5).*
- *Datos con comportamientos aleatorios: la cantidad de pasajeros por carrera, la cantidad de pasajeros adultos mayores y la cantidad de pasajeros totales, son datos con comportamientos aleatorios, no deberían ser constantes en términos absolutos ni relativos, o tener comportamientos muy similares en el tiempo.*

Los criterios anteriores podrán ser ampliados o detallados por la Administración Superior con la debida justificación técnica y jurídica."

Modifíquese el segundo párrafo del punto 3 de la Validación de campo de la información del SIR, o registros del SCP que no cumplan con las características d) y e) de la sección 4.11.2, en el inciso b.ii del apartado 4.7.1 Procedimiento para el cálculo del volumen mensual de pasajeros, para que se lea de la siguiente manera:

"3. (…)
En caso de que no se rechace la hipótesis nula de esta prueba, se asume la cantidad de pasajeros por carrera proveniente de las estadísticas (SIR) o

registros (SCP) reportados para este cálculo, mientras que si se rechaza se tomará la cantidad de pasajeros por carrera medida en el trabajo de campo (ajustada por estacionalidad).”

Modifíquense los incisos b.iii y b.iv del apartado 4.7.1 Procedimiento para el cálculo del volumen mensual de pasajeros, el siguiente texto:

“iii. En caso que no se cuente con la información procedente de los sistemas SCP o SIR según los puntos i) y ii) de esta sección y que existan simultáneamente estudios técnicos de cantidad de pasajeros movilizados de los últimos tres años (puntos 3 y 4 de la sección a) de este apartado), que hayan sido aceptados por la Aresep o aprobados por la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público (CTP), se seleccionará el dato de volumen mensual de pasajeros proveniente del estudio técnico con fecha del acto administrativo de aceptación o aprobación más reciente entre ambos y que corresponda al esquema de horarios vigente al momento de la apertura del expediente del estudio tarifario ordinario. En caso que no se cumpla esta última condición, se seleccionará el que corresponda al acto administrativo más reciente.

iv. En caso que solamente exista uno de los estudios técnicos de cantidad de pasajeros movilizados de los últimos tres años (puntos 3 y 4 de la sección a) de este apartado) se seleccionará el dato de volumen mensual de pasajeros de ese estudio.”

<u>Carreras:</u>

Modifíquese el inciso a de la Sección 4.12.1 Datos de las variables de operación para que se lea de la siguiente manera:

“(…)

a. Carreras mensuales

Para la estimación de la cantidad de carreras mensuales de la ruta “r” en análisis (CM_r) y/o cantidad de carreras mensuales de los ramales “l” de la ruta “r” (CM_{rl}), se tomarán las carreras autorizadas según el acuerdo de horarios para la ruta “r” (CMA_r) establecido por el CTP.

Para obtener la cantidad de carreras mensuales a partir de los acuerdos de horarios establecidos por el CTP se deberá considerar que mediante el artículo 3.4 de la sesión ordinaria 61-2008 del 28 de agosto del 2008, la Junta Directiva del CTP dispuso para todos los operadores de transporte público en la modalidad autobús (concesionarios o permisionarios), que los servicios de transporte público, no se pueden suspender los días jueves y viernes de la Semana Santa, de acuerdo con el principio de continuidad de los servicios públicos. Por lo tanto, la fórmula de cálculo de las carreras mensuales a partir de los horarios establecidos por el CTP debe incluir todos los días del año, junto con una corrección que incorpora el cálculo del día 366 de cada año bisiesto.

$$CMA_r = \frac{1}{12} * \left(\frac{365,24219879}{7} \right) * [CALV_r * 5 + CAS_r + CAD_r]$$ Ecuación 97

Donde:

CMA$_r$ *=Cantidad de carreras mensuales autorizadas por el CTP en la ruta "r".*

CALV$_r$ *= Cantidad promedio de carreras autorizada por el CTP para los días Lunes a Viernes en la ruta "r".*

CAS$_r$ *=Cantidad de carreras autorizada por el CTP para el día Sábado en la ruta "r".*

CAD$_r$ *=Cantidad de carreras autorizada por el CTP para el día Domingo en la ruta "r".*

r *=Ruta de transporte remunerado de personas.*

(…)*"*

Modifíquense los párrafos cuarto y quinto del inciso b.i del apartado 4.7.1 Procedimiento para el cálculo del volumen mensual de pasajeros, para que se lea de la siguiente manera:

"(…)

En caso que efectivamente esa cantidad de pasajeros por carrera se encuentre en el intervalo de confianza calculado, el volumen mensual de pasajeros se calculará mediante la multiplicación de la cantidad de pasajeros por carrera del SCP o de las estadísticas mensuales del SIR y la cantidad de carreras mensuales autorizadas por el CTP.

En caso contrario, se considerará como la cantidad de pasajeros por carrera el valor medio del intervalo de confianza, multiplicada por la cantidad de carreras mensuales autorizadas por el CTP."

Modifíquese el punto 2 de la "Validación de campo de la información del SCP", en el inciso b.ii del apartado 4.7.1 Procedimiento para el cálculo del volumen mensual de pasajeros, para que se lea de la siguiente manera:

"*2. Para el dato de la cantidad mensual de carreras se tomará la cantidad mensual de carreras autorizadas según el esquema operativo autorizado por el CTP."*

Modifíquese el punto 2 de la "Validación de campo de la información del SIR, o registros del SCP que no cumplan con los requerimientos de la sección 4.11.2", en el inciso b.ii del apartado 4.7.1 Procedimiento para el cálculo del volumen mensual de pasajeros, para que se lea de la siguiente manera:

"*2. Para el dato de la cantidad mensual de carreras se tomará la cantidad de carreras autorizadas según el esquema operativo autorizado por el CTP."*

Cálculo de tarifas para fraccionamientos:

Sustitúyase el siguiente texto del penúltimo párrafo del apartado 4.8.2.c Cálculo de índice de pasajeros para un conjunto de rutas o ramales:

"(…) *En este caso, para obtener la tarifa vigente TV' se considerará como la tarifa vigente del ramal* TV_{rl}*, la media aritmética entre las tarifas vigentes pertenecientes al ramal "l".* (…)"

Por el siguiente:

"(…) *En este caso, para obtener la tarifa vigente TV' se considerará como la tarifa vigente del ramal* TV_{rl}*, el promedio ponderado entre las tarifas del ramal según la cantidad de pasajeros que paga cada tarifa. Si no se cuenta con el dato de cantidad de pasajeros que paga cada tarifa, la tarifa vigente TV' se obtendrá como la media aritmética entre las tarifas vigentes pertenecientes al ramal "l".* (…)*"*

Tipo de cambio a utilizar en los contratos de arrendamiento en los casos que el monto esté en monedas distintas al colón o al dólar estadounidense:

Agréguese después del segundo párrafo del punto c. Arriendo de las unidades autorizadas, del apartado 4.12.2 Datos de variables de inversión, los siguientes dos párrafos:

"(…)

En los casos en que el monto de arriendo o concepto equivalente se encuentre expresado en una moneda internacional distinta al dólar de los Estados Unidos, se debe de convertir la moneda a dólares de los Estados Unidos utilizando el "tipo de cambio del dólar estadounidense para otras monedas", publicado por el BCCR, y se usará la serie de datos de los últimos seis meses naturales anteriores a la fecha de la audiencia pública de la aplicación de la metodología (el mes natural es el tiempo que va desde el primer día natural de un mes hasta el último día natural, incluidos ambos).

Una vez que se cuente con el monto en dólares estadounidense, se aplica el criterio establecido en el párrafo tras anterior para convertir el monto de dólares a colones.

(…)"

II. Tener como respuesta a las personas físicas y jurídicas que presentaron su posición en la audiencia pública realizada el 30 de octubre de 2018, lo señalado en el oficio OF-0612-CDR-2018 de la Dirección General Centro de Desarrollo de la Regulación, que remitió el oficio de la Fuerza de Tarea del 10 de diciembre de 2018, y agradecer la valiosa participación de todos en este proceso.

III. Instruir a la Secretaría de Junta Directiva para que proceda a realizar la notificación a las personas físicas y jurídicas del oficio donde constan las respuestas a las posiciones presentadas en la audiencia pública.

IV. Instruir a la Secretaría de Junta Directiva para que proceda a realizar la respectiva publicación de la modificación parcial de la *"Metodología para fijación ordinaria de tarifas para el servicio de transporte remunerado de personas, modalidad autobús",* dictada mediante la resolución RJD-035-2016 y modificada mediante la resolución RJD-060-2018, en el diario oficial La Gaceta.

V. Instruir a la Secretaría de Junta Directiva para que proceda a realizar la notificación de la presente resolución a las partes.

En cumplimiento de lo que ordena el artículo 245 de la Ley General de la Administración Pública, contra la presente resolución cabe el recurso ordinario de reposición o reconsideración, el cual deberá interponerse en el plazo de tres días contados a partir del día siguiente a la notificación, y el recurso extraordinario de revisión, el cual deberá interponerse dentro de los plazos señalados en el artículo 354 de la citada ley. Ambos recursos deberán interponerse ante la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, a quien corresponde resolverlos.

Rige a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta.

VOTO EN CONTRA DEL DIRECTOR PABLO SAUMA FIATT

*El señor **Pablo Sauma Fiatt** justifica su voto negativo, menciona que la anterior modificación a la metodología que finalizó en la RJD-060-2018, consistió en 10 modificaciones, de las que él se opuso en dos temas. Específicamente el beta=1, ya que para él no hubo ninguna justificación del por qué tenía que ser =1, si más bien los datos que lograron recopilar en ese momento resultaban menores que 1. Recuerda que la señora Adriana Garrido también se manifestó en contra de ese valor.*

El segundo aspecto al que se opuso totalmente y que tuvo el voto negativo, fue el costo de limpieza del autobús, justificando que el mismo se estaba sumando un costo a la tarifa, pero no se estaba reduciendo donde supuestamente estaba contenido.

Recuerda que, de todas maneras, eso se fue a audiencia, pues se votó parte por parte. Sin embargo, luego de la audiencia, se votaron los cambios en su totalidad. Entonces, en el momento de la votación, las señoras Sonia Muñoz y Adriana Garrido votaron negativamente. Aclara que en ese momento, dada la situación del entorno, optó por votar positivamente el "paquete" aun cuando sentía que no se había tomado en cuenta las observaciones hechas por él mismo en ese momento. ¿Qué sentido tenía votar negativamente unas partes si después iba a votar un todo aunque se opusiera?

Señala que eso pasó, pero tiene claro su voto en ese momento e indica que la votación de la metodología quedó 3 a 2. Manifiesta que ahora se tiene una situación similar, donde votó en contra de dos partes. La primera parte, específicamente la eliminación del valor tope de la unidad de transporte, lo cual justificó en que se basaba en presunciones que era para seguir una política que no se estaba atendiendo la realidad de lo que estaba pasando y que debía de sustentarse en eso y estaba más que justificado cuando se opuso.

La segunda parte, en la que votó en contra fue en la de modificación del volumen de pasajeros, que el voto negativo fue por haber considerado el estudio más reciente y advierte que no se va a referir más a ello debido a que ya ha hablado mucho.

El asunto es ahora, nuevamente las modificaciones parciales se fueron a audiencia pública por partes, y ahora se somete a votación el paquete completo. En este momento, no vota positivamente; tanto por esa situación específica, como por el hecho de que se han visto 16 modificaciones parciales a la metodología, pero la administración no ha realizado un análisis integral de la metodología de autobús.

Agrega que simplemente se han ido corrigiendo partes y se han ido sumando costos y se han liberado asuntos, pero no hay un análisis integral, llegaron los brasileños, los de aquí fueron a Brasil, pero ignora si alguien está analizando integralmente la metodología.

Recuerda que hace unos días atrás el director de la Dirección General del Centro de Desarrollo de la Regulación realizó una presentación de lo que llamaron mejora continua en la metodología de autobús y lo que presentó fue el conjunto de estudios parciales específicos que se están haciendo. Advierte que a estas alturas ya alguien debería de tener una valoración integral de la metodología y decir hacia dónde se va y no seguir haciendo ajustes que lo que hacen al final es sumar costos a la tarifa.

Señala que el otro día, el señor regulador general resaltó el tema de los seguros y el de los terrenos, pero dónde está el de la integralidad; indica que, de ahora en adelante, solo va a apoyar cambios en las metodologías que respondan a ese análisis integral y no ir realizando pequeños ajustes que solamente incrementan las tarifas, sin tener claridad de hacia dónde se va.

VOTO EN CONTRA DE LA DIRECTORA SONIA MUÑOZ TUK

La *señora* ***Sonia Muñoz Tuk*** *indica que en el acta 53-2018, consta su voto negativo cuando la junta directiva tomó la decisión de someter al trámite de audiencia pública, en dos aspectos: el de la eliminación del valor tope máximo por tipo de unidad de transporte, en donde adicionalmente a lo que ha mencionado el director Sauma, argumentos que hace suyos, no cuenta este órgano colegiado con una valoración de la propuesta por parte de la Dirección General de Asesoría Jurídica y Regulatoria, órgano que según el Reglamento Interno de Organización y Funciones de la Autoridad Reguladora, es el que asesora a la junta directiva, tanto en el sentido legal como en el sentido técnico. Además de la imposibilidad de poder conocer de antemano las implicaciones que podría tener en el aumento de las tarifas, porque ya no se tendría previamente la información acerca del tope de las unidades a reconocer.*

Continúa describiendo que en la propuesta número 5, también en aquella oportunidad había votado negativamente sobre la modificación al volumen de pasajeros, carreras y tarifas de fraccionamiento; en aquella oportunidad manifestó: "Vota negativamente y comparte todas las justificaciones que planteó el director Pablo Sauma Fiatt en esta oportunidad, las cuales hace suyas. Señala además que la propuesta no toma en cuenta el decreto de políticas públicas de Modernización de transporte público, específicamente en la parte de fraccionamiento. En las políticas de modernización, pese a que se dice por parte de la administración activa que son demasiado generales, son hojas de ruta de hacia dónde se va en esa materia, pero no se va en dirección de tener fraccionamientos ni corredores comunes, vamos hacia la sectorización; es decir hay un enfoque diferente de transporte que no se contempla en la propuesta"

Señala que, adicionalmente, coincide con el director Sauma en que no hay un análisis integral de la metodología de autobuses y una determinación clara y certera de que ésta tarifa todas las obligaciones que impone la administración concedente. Solamente se proponen algunos ajustes y le gustaría tener claro cuáles son – después de un estudio exhaustivo de la metodología – en qué es exactamente en lo que se debe trabajar.

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

Junta Directiva.—Alfredo Cordero Chinchilla, Secretario.—1 vez.—O.C. N° 9006-2018.—Solicitud N° 273-2018.—(IN2018306662).